

6

Biblioteca del Pensamiento Internacionalista del Ecuador

ATALAYA DIPLOMÁTICO



Miguel Vasco

V/V/ERI
06

ATALAYA DIPLOMÁTICO

Miguel A. Vasco

ATALAYA DIPLOMÁTICO



2006

ATALAYA DIPLOMÁTICO

Miguel A. Vasco

1era. edición: Ediciones Abya-Yala
Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson
Casilla: 17-12-719
Teléfonos: 2506-247 / 2506-251
Fax: (593-2) 2506-255 / 2 506-267
e-mail: editorial@abyayala.org
www.abayayala.org
Quito-Ecuador

AFESE
Asociación de Funcionarios y Empleados
del Servicio Exterior Ecuatoriano
Carrión 1183 y Av. 10 de Agosto
Teléfono: 2561-040/ 2561-215
Fax: (593-2) 2507-077
Quito-Ecuador

Diseño y
Diagramación: Ediciones Abya-Yala

ISBN 10 Abya-Yala: 9978-22-644-3
ISBN 13 Abya-Yala: 978-9978-22-644-5

Impresión: Abya-Yala
Quito-Ecuador

Impreso en Quito Ecuador, noviembre 2006

A TERESA, mi mujer, compa era de alboradas y crep sculos

ÍNDICE

Presentación. Miguel Vasco, cultura y diplomacia.....	11
1. Escorzo de una época.....	17
Parábola de la barbarie.- Creación de la ONU.- Ingreso al Servicio Exterior.- Organismos Internacionales.- Una beca en la ONU.- Breve ejercicio periodístico.	
2. Caracas y la X Conferencia de la OEA.....	61
Prolegómenos.- Marco dictatorial.- X Conferencia Interamericana.- Elección de Quito para la XI Conferencia Interamericana.- Guayasamín en Caracas.	
3. Misión en Brasil	69
Suicidio del Presidente Getulio Vargas.- La cuestión territorial.- Actividades en la Embajada.- Visitas de cancilleres.- Algo sobre Itamaraty.- Brasilia, la nueva capital.- Actividades artísticas.- Espacio para la anécdota.	
4. Cuarto Velasquismo	91
Transmisión del mando.- Proclamación de la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro.	
5. Misión en México	99
Caída del régimen del Presidente Velasco Ibarra.- Designación a México.- Primera Reunión Informal sobre Desnuclearización de América Latina.- Visitas presidenciales.	
6. Dictadura portuguesa	107
Régimen de Oliveira Salazar.- Destino de las provincias ultramarinas.- Puente sobre el río Tajo.- El tema del asilo diplomático.- El destino	

de los ex....- Visita a Coimbra.- Algo sobre arte.- Término de la era de Oliveira Salazar.

7. Actividades culturales en Cancillería 121

Departamento Cultural.- Exposición de arte colonial quiteño en Estados Unidos.- Conferencia de plenipotenciarios para la creación de la Organización Mundial de Turismo.- Congreso interamericano de turismo en Quito.- Grupo chileno de música antigua en Cantuña.- Visita del Cuerpo Diplomático a Galápagos.

8. Proceso socialista en Chile..... 129

Prolegómenos.- Visita del Canciller del Ecuador.- Elección del Presidente Salvador Allende y su visita al Ecuador.- Fidel Castro en Chile.- Neruda en un acto cultural.

9. Dirección General de Protocolo 141

Consideraciones generales sobre el tema.- Varias visitas de jefes de estado.- XV Reunión de Cancilleres de la OEA.- La princesa Ana de Inglaterra en Quito.

10. Uruguay y ALALC..... 153

Relaciones con el Gobierno y con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).- Una solicitud de asilo.- Visita a una cárcel repleta de “tupamaros”.- Un dato sobre la “Operación Cóndor”.- La transición de la ALALC a la ALADI.- Despedida del Presidente del Uruguay.

11. Relaciones ecuatoriano-peruanas 165

Prolegómenos.- Diálogo militar.- Visita del Canciller de Chile.- Incidente diplomático chileno-peruano.- Conmemoraciones por la Guerra del Pacífico.- Desarrollo de las relaciones ecuatoriano-peruanas.- Transferencia del poder.- Inauguración del régimen del Presidente Belaunde y presencia de Galo Plaza.- Relato de un conflicto inesperado: Paquisha.- Esfuerzos de distensión.- Muerte del Presidente Roldós.- Invitación sui generis.- Visita a la selva.- El consenso en el Ecuador.- Sendero luminoso.- Un incidente magnificado.

12. La problemática colombiana 213

Gobierno de Belisario Betancur.- Violencia guerrillera y narcotráfico: decreto de amnistía.- El Plan Colombia.- Una reunión inesperada.-

Contadora y el Grupo de Río.- Reunión de presidentes bolivarianos.- Toma de embajadas.- Guayasamín en Bogotá.- Asesinato del Ministro de Justicia.

13. Dirección General de Soberanía Nacional..... 231
Breve relato de actividades institucionales.

14. La Organización de Estados Americanos 237
Rasgos institucionales de la OEA.- Desarrollo de la misión en la OEA.- El tema de la democracia representativa.- El caso de Panamá.- El caso de Haití.- El caso del Perú.- Derechos humanos.- El centenario de Juan Montalvo.- Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos.- Visitas presidenciales.- El Presidente del Ecuador en la Asamblea de la ONU.- Por los Consejos de la OEA.- Programas de desminado.- Fortalecimiento de la OEA.

15. Epílogo..... 297

16. Apéndice 299

MIGUEL VASCO

CULTURA Y DIPLOMACIA

Miguel Vasco, hombre de suave trato personal, de gran amplitud de espíritu, constituye el mejor ejemplo vivo de lo que es un diplomático lleno de fe en la cultura. Durante mis cuarenta y nueve años de permanencia en el Servicio Exterior Ecuatoriano, tuve el privilegio de conocer de cerca de funcionarios que lograban irradiar una acción continua hacia la sociedad, todo ello con una cosmovisión que les habilitaba para ubicar a nuestro país en la dinámica del mundo. Desde mi inicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el nombre de Miguel fue mencionado en una promoción mayor a la mía, junto a sus compañeros que equilibraron sus tareas con la apertura de experiencias que anticipaban lo que ellos irían perfeccionando como acción social impregnada de vocación universitaria y académica.

Miguel nos entrega ahora su libro escrito en una atalaya portátil que viaja con él a todo sitio. Así se entiende que este vigía que nos presta ahora su testimonio hable del Brasil permanente, muchas veces adolorido, que en los años del suicidio de Getulio Vargas, replanteó sus programas y en los actuales pospone su proyecto de civilización propia para años más tarde, los de la refundación de una globalidad de lo soñado con las proyecciones concretas de la enorme colectividad congre-

gada en el primer siglo del nuevo milenio, sobre multitudes provistas del voto, que se convierte en arma al servicio de la comunidad nueva a la vez que profundamente antigua y social.

Portátil y liviana, su torre le acompaña al Portugal de los años de la dictadura, antes de regresar a la cancillería a hacerse cargo del Departamento de Relaciones Culturales. De Quito se va a Chile donde decide quedar en deuda de un informe sobre la política interna en la agitada época de Allende, de Pinochet, sin llegar a los actuales años de la concertación. Una estación importante es Colombia, país en donde, en representación del Ecuador, Miguel se maneja con extremo cuidado. Sus páginas son una importante referencia para ayudarnos a comprender varios años de la acción guerrillera cuyas consecuencias nos duran hasta ahora sin que se divise el final.

En este punto debemos hacer un alto, porque nos falta alguna referencia adicional sobre el autor, visto ya no en sus años de juventud sino en plena madurez. Conocer y tratar a Miguel Vasco en la actualidad es un privilegio, pues permite al interlocutor contagiarse de ese clima de sencillez y sabiduría hallado sin esfuerzo, que se tiende entre quienes necesitan aprender y quien, dotado de respuestas, habla como si pidiera lo que él está dando.

Es que el libro puede llamar a engaño a todos cuanto supongan que se trata de memorias o antimemorias, ya que Miguel, si bien no tiene el afán de esconderse, tampoco es llevado por la tentación de encontrar temas en los cuales él sea el protagonista. Así se entiende el cúmulo de páginas importantes sobre la historia humana, que Miguel trae para situarnos todos (él y nosotros) en acontecimientos de carácter universal en los cuales los habitantes del tercer mundo no pasamos de ser peones de un tablero regido por normas y costumbres que no son las nuestras. El lector encontrará aquí reflexiones útiles, dichas con acento cordial y directo, sobre la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, sobre la creación de las Naciones Unidas y sobre todos los acontecimientos de los diversos pueblos que se desarrollaron con motivo o alrededor de la segunda guerra mundial. Su libro es un incesante resumen sobre las relaciones entre la Gran Bretaña de Churchill y la Unión Soviética de Stalin, sobre los Estados Unidos de Roosevelt, las desavenencias entre aliados, la caída del Muro de Berlín, la Guerra Fría, Palestina y el Medio Oriente.

Es cierto que en el libro resulta visible la abundancia de datos y de temas, como si el autor nos diera a elegir entre épocas, acontecimientos y personajes. Pero de mi parte confieso una atracción por el aparente desorden, si desaparece en cuanto alguien, que bien puede ser el mismo autor, hace un gesto de presencia anunciado con sencillez o con solemnidad, según el personaje de que se trate. En este punto, ruego tanto al escritor como a sus lectores que me perdonen un pequeña irreverencia sacada no de las palabras pero sí de los hechos de “La insostenible levedad del ser” dirigida a “los notables” no de nuestra lugareña sociedad ecuatoriana, sino de todo el mundo. Dicha irreverencia, casi intrascendente, consiste en saberse miembro de la gleba antes o después del día de toda sublevación. Incluidas las fechas en las cuales Milan Kundera presencia el ensayo del ingreso de Giscard de Staigine en el Panteón de París y en la inmortalidad, acompañado en las calles de los hombres distinguidos que no pueden cruzar el umbral. También Mitterrand comparece en su ensayo general durante el que, para ser más digno, ha preferido caminar en soledad.

En cuanto a la enorme variedad de temas, podemos insistir y ampliar la contribución de Miguel para sus reflexiones del hombre en el siglo XXI. Cómo no desear una profundización sobre el famoso pensamiento de Benjamín Franklin, modificado por mi mala memoria, que dice “No existen ni la guerra buena ni la paz injusta”. Al paso viene citado Rodrigo Borja, notable jurista latinoamericano que, con su “Enciclopedia Política” ingresa en el grupo de enciclopedistas del siglo ilustrado de Francia, y a su investidura de ex presidente de la República del Ecuador suma la alta calidad de conductor en consulta abierta para las nuevas generaciones de cualquier país.

Los temas del libro son incesantemente atractivos: las relaciones de Gran Bretaña y China en los primeros años de la década de 1940; el papel de Roosevelt entre Churchill y Stalin. La figura de Roosevelt opuesta al intervencionismo de los Estados Unidos en el ámbito interamericano, las desavenencias entre los aliados de la segunda guerra mundial y, por ese camino, vislumbrar la proyección histórica de la Sociedad de Naciones sobre la carta de la ONU, que necesita ahora abrirse a las novedades científicas y tecnológicas pero sin abandono de las esencias de las palabras de Franklin, de Wodrow Wilson.

Ahora, cuando la ONU se niega a renovarse y los Estados Unidos practican una moral subrepticia a tono con la llamada campaña

antiterrorista, que justifica toda guerra, aun ese engendro llamado “guerra preventiva”, el libro de Miguel Vasco sirve para recaudar la presencia del pasado, incluido el pasado milenario de los problemas de Palestina y del Medio Oriente.

En lo nacional, las reflexiones son extremadamente cautelosas y limpias de preferencias personales. El problema territorial del Ecuador con el Perú tiene una transparencia en el planteamiento y en la narración de los acontecimientos, difícilmente superables por otros textos. A propósito de ese tema vital para los compatriotas, me complace dejar en estas páginas registrado un especial agradecimiento a Miguel Vasco por su actuación impecable durante el conflicto de 1981 en la Cordillera del Cóndor. El silencio en otros testimonios míos se debió a motivos justificados. La instrucción que impartí, como Ministro de Relaciones Exteriores, a los funcionarios con sede en Quito fueron categóricas: que toda gestión difícil en esos días tratase la Cancillería de hacerla través de la Embajada Peruana en Quito para no disminuir al embajador en Lima ni siquiera mínimamente. En efecto, el desgaste del periodo difícil del conflicto impactó en el representante peruano en Quito. Pero ese cuidado del Gobierno habría sido inútil si la misión en Lima no hubiese sabido obrar con sabiduría, capacidad y prudencia, que son tres características típicas de la personalidad del autor del presente libro.

Sin embargo de todo lo dicho, no cabe dejar sin registro otro perfil de Miguel Vasco. Le hemos visto manejarse excelentemente en las entrevistas del Canal 3, Cablevisión, particularmente en el programa “Sobremesas de Entorno”, cuya Directora acaba de fallecer en Quito. La entrevistadora y el entrevistado exploraban conjuntamente el panorama político y social del país con una solvencia profesional que merece pedir a dicho medio de comunicación registrar de alguna manera los encuentros de Miguel y Marianita de Larrea, dos nombres unidos por una tarea llevada a cabo con gran capacidad y pulcritud.

Releo las páginas anteriores y mi insatisfacción es clara. Traté de comunicar a cada lector el alto respeto con que escuché los criterios de Miguel, académicamente siempre bien fundados. Abrigo también la esperanza de haber conseguido lo que está más allá de los razonamientos y tiene que ver con la ética y la dignidad de las personas, tanto más en si se trata de quien ha sabido conducirse con toda lucidez y pulcritud en cada uno de sus actos. Quiero decir, en el presente caso, que espero haber retratado al autor como funcionario ejemplar, como caballero

cabal y como hombre estudioso, que suele compartir con quien depar- te las fuentes de sus afirmaciones bibliográficas o de sus experiencias vitales, pues el hombre y la sociedad están hechos, como todos lo sabe- mos, por esas dos fuentes del comportamiento individual y colectivo.

De tal manera, con estas meditaciones, comienzo a sentirme con mejor disposición para seguir adelante, en el afán de ser cuidadoso y no poner en cabeza ajena lo que puede ser una afirmación o posición personales mías. Sin embargo de sentirme con mayor sosiego, continúa latente buena parte de mi insatisfacción. Y al final del insistente exa- men de mis formulaciones, creo comprenderme un poco mejor a mí mismo al admitir que, en el deseo natural de buscar los argumentos mejor estructurados y más certeros, incurrí en el error de preferir las frías indagaciones cerebrales, con lo cual condené esta vez lo que en mí fuero siempre trato de cuidar, a saber: la vigencia de los sentimientos más nobles, incluida la pasión cuando se trata de una pasión por valo- res probados, entre otros la verdad, la justicia, la belleza, no como mu- letillas de acomodo sino como exigencia de una o de varias vidas tras- cendentales, en plural. La amistad, la auténtica amistad viene en nom- bre de uno o de los tres valores y se confunde quien sostiene que en la vida pública o política no hay lugar para la amistad, cuando es uno de los campos en que el amigo resulta más necesario y urgente que en cualquiera otra actividad.

Lo digo hoy, mientras concurre a la casa de mi querido amigo Miguel Vasco, para entregarle el párrafo final de mis meditaciones, con la esperanza de que ellas, puesto que pueden ser confusas en el mundo de la razón, sean más claras y directas cuando intenten ser llevadas a las comarcas de las mejores pasiones, regidas por una combinación tanto de los sentimientos como de la razón, por esta vez y gracias a Miguel Vasco, expuestas y recibidas a plena luz.

Alfonso Barrera Valverde

ESCORZO DE UNA ÉPOCA

Los miembros de mi generación de diplomáticos ingresamos a la Cancillería al comienzo del período histórico denominado de la “guerra fría”, en 1947, por la confrontación ideológica entre las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y poco antes habíamos cursado nuestros estudios secundarios cuando transcurría la segunda guerra mundial, que culminó con la victoria de las democracias occidentales sobre el eje nazi-fascista y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, como expresión de un nuevo orden internacional. Veamos, a grandes rasgos, las características de esos dos períodos.

La segunda conflagración mundial, como se sabe, se inició en 1939 y concluyó en 1945, pero tuvo una etapa previa de gestación por diversas causas de orden político, entre las cuales destacaron el espíritu revanchista del pueblo alemán, por su derrota en la primera guerra mundial, y las onerosas reparaciones consignadas en el Tratado de paz de Versalles (1919). Los vencedores en la contienda determinaron que los responsables debían pagar por los daños causados y quedar sometidos a unas condiciones de tal naturaleza que impidieran la repetición de un conflicto análogo. Se firmó, en consecuencia, un tratado no negociado e impuesto al Estado ofensor. Los delegados alemanes, a pesar de que representaban a elementos opositores a la política del gobierno derrocado por la guerra, hicieron constar una protesta formal contra

los términos del instrumento. Se expresaron así: “Cediendo a la imposición de una fuerza abrumadora, pero sin abandonar por ello su criterio con respecto a la injusticia de las condiciones, el gobierno de la República Alemana declara que está dispuesto a aceptar y firmar las condiciones de paz impuestas por los gobiernos aliados y asociados”.

Las citadas manifestaciones de los representantes alemanes entrañaban una clara advertencia de que su país aceptaba el Tratado de Versalles sin adquirir ninguna obligación de buena fe para su cumplimiento, una vez superada la presión militar. El canciller Adolfo Hitler solicitó la revisión general del instrumento, el 17 de mayo de 1933, advirtiendo que las decisiones allí consignadas “por su injusticia y falta de lógica llevaban implícitas las semillas de nuevos conflictos”. Ello explica la barbarie bélica que se produciría seis años después. Hay que tener presente que Hitler fue el fundador del nacionalsocialismo (nazismo) y jefe absoluto del Tercer Reich. Austriaco de nacimiento, luchó en las filas del ejército alemán, con el grado de cabo, en la primera guerra mundial. Fanático germanista y antisemita, con facultades oratorias efectistas y carisma político, Hitler alcanzó el favor de las masas, que exaltaban su figura hasta el delirio. Se creyó llamado a establecer la supremacía absoluta de Alemania en el mundo, con base en argumentaciones racistas: su sistema totalitario y su política exterior agresiva y expansiva desencadenaron la segunda guerra mundial.

Conviene advertir, en términos globales, que el Estado nazi o fascista es un fin en sí mismo y alcanza su plena identidad en la Alemania nazi y en la Italia fascista. Según su concepción filosófica, la totalidad de la vida colectiva gira en torno a su servicio, que constituye una mística. El Partido, que es la parte de la colectividad que se consagra exclusivamente al Estado y detenta todos los privilegios, está conformado por una minoría selecta, o sea una elite. Las doctrinas demoliberales y las socialistas cifran su validez en el concepto de la voluntad de la mayoría de la colectividad; el nazifascismo, en cambio, rechaza las concepciones mayoritarias y únicamente reconoce a la minoría como fuente de poder. Desde esa perspectiva, en términos ideológicos, Alemania e Italia entraron en conflicto con las potencias democráticas occidentales. En ese contexto, tuvieron influencia decisiva los factores políticos y económicos derivados de las sanciones impuestas a Alemania en el tratado de Versalles.

En 1936, sirviéndose de la crisis internacional suscitada por la invasión italiana a Etiopía, Hitler ordenó a su ejército ocupar territorios del Rin que estaban bajo custodia de la Sociedad de las Naciones, cuyo Pacto constitutivo representaba el orden mundial de la época y formaba parte del Tratado de Versalles. Esta acción no tuvo oposición alguna. Durante los tres años siguientes la atención de Europa confluyó más bien hacia España, donde el levantamiento del ejército, apoyado por la derecha política, en oposición a un programa de reformas económicas y sociales propugnado por el gobierno republicano, elegido en 1931, desató una fratricida y sangrienta guerra civil. Los regímenes totalitarios de Alemania e Italia apoyaron a los rebeldes, en tanto que la Unión Soviética y grupos izquierdistas europeos y americanos respaldaron al gobierno de Madrid. La guerra civil española, con el triunfo del general Francisco Franco, tuvo repercusiones internas y externas.

En 1938, Alemania se anexó Austria y considerables zonas de Checoslovaquia. Cuando en setiembre de 1938 los primeros ministros de Francia e Inglaterra, Edouard Daladier y Neville Chamberlain, respectivamente, suscribieron el Acuerdo de Munich y aprobaron la anexión de una parte de Checoslovaquia, a cambio de la promesa de los dictadores Hitler y Mussolini de no continuar con su política expansionista, fueron aclamados como héroes nacionales por sus electores. Ello no obstante, en marzo de 1939, Hitler ocupó el resto de Checoslovaquia y Mussolini invadió Albania. Todos estos actos provocaron por cierto el desprestigio de las políticas que condujeron al Acuerdo de Munich.

Francia e Inglaterra, ante la potencial expansión nazi-fascista en Europa, procedieron a prometer ayuda militar a Polonia, Grecia y Rumania, en caso de ser agredidas. Se implantó un programa de gasto militar emergente. Inglaterra inició conversaciones con la Unión Soviética con el propósito de establecer un frente de paz hacia el este de Alemania. Resultaron, empero, gestiones extemporáneas, pues Alemania, a pesar de su clara hostilidad hacia el comunismo, suscribió el 23 de agosto de 1939 un pacto de no agresión con la URSS, por el cual ninguna de las partes atacaría a la otra y se mantendrían neutrales si una de ellas fuere atacada por un tercero. No hay que olvidar que Adolfo Hitler, en su libro autobiográfico “Mi lucha”, escrito en 1923 mientras estuvo en prisión, expresó claramente su odio hacia el comunismo y su deseo de ver destruida a la Unión Soviética. El pacto nazi-soviético fue, por estos antecedentes, uno de los actos políticos más controvertidos

de la época. Con base en esta salvaguardia, Alemania invadió a Polonia el primero de setiembre. Francia e Inglaterra demandaron el retiro de las tropas germanas, sin ningún resultado, razón por la cual ambos países declararon la guerra a Alemania; pero como no estaban en condiciones de atacar a Hitler, éste prosiguió en sus acciones bélicas y el 29 de setiembre Alemania y la URSS se dividieron el territorio de Polonia. En el ámbito anecdótico es oportuno señalar que en un momento dado los alemanes desplegaron una campaña de disuasión dirigida a los franceses en el sentido de que éstos optasen por el camino de la paz y no de la guerra, “porque los ingleses lucharán hasta el último soldado francés”. Hitler no dejó de desarrollar esfuerzos encaminados a dividir, por cierto sin resultados prácticos, a sus enemigos Francia e Inglaterra.

Para acelerar el operativo bélico antes de que sus enemigos occidentales se fortalecieran, Hitler emprendió una “guerra relámpago” (*blitzkrieg*), con miras a culminar con una campaña corta y decisiva. Sus tropas invadieron Noruega y Dinamarca en abril de 1940. El 10 de mayo iniciaron una ofensiva triunfal sobre Bélgica, Holanda y Francia. Los ejércitos británico y francés intentaron liberar a Bélgica, pero su derrota se selló en la desastrosa retirada de Dunquerque. Los alemanes avanzaban de modo incontenible rumbo a París e Italia declaró la guerra a Inglaterra y Francia. El 22 de junio se rindió el gobierno francés. Cuando Hitler celebraba la victoria en Berlín, en julio de 1940, Alemania e Italia se habían convertido en las potencias dominantes en buena parte de Europa. Sin embargo, los sistemáticos y masivos bombardeos sobre Inglaterra no tuvieron el éxito esperado. Ante el fracaso de “la batalla de Inglaterra”, Hitler ordenó la suspensión de la fabricación de aviones para priorizar la construcción de tanques y vehículos blindados, con miras a ejecutar la “Operación Barbarroja” en el frente ruso, programada para el 7 de mayo de 1941 con la intervención de tres millones de soldados. Hitler había sentenciado: “Cuando comience la Operación Barbarroja, el mundo va a quedar estupefacto”. Pero se produjo un retraso de seis semanas en la fecha programada (fatal para sus propósitos) por el apoyo imprevisto que debía prestar a las tropas de Mussolini, que tenían dificultades en los Balcanes. Los problemas para Alemania se acrecentaron ese momento porque, en marzo de 1941, un golpe de estado en Yugoslavia reemplazó al gobierno alemán por otro más proclive a Inglaterra, al tiempo que las fuerzas británicas en Egipto invadieron Libia, que estaba en poder de las fuerzas italianas. Por eso

Hitler se vio precisado a enviar un pequeño ejército de elite, el “afrika-korps”, al mando del mariscal Erwin Rommel, para ejecutar una operación de contraataque en Libia. Por sus dotes estratégicas, Rommel se hizo merecedor del apodo de “el zorro del desierto”, que le dio gran nombradía y acceso a resonantes éxitos bélicos. Su contraparte en África fue el mariscal inglés Montgomery, que derrotó finalmente a Rommel en El Alamein. Todo ello demoró la iniciación de las operaciones en el frente ruso, que le costó a Hitler la victoria, según afirman algunos historiadores. En efecto, si bien alcanzó éxitos espectaculares en la etapa inicial de la campaña en Rusia, habiendo llegado a las puertas de Leningrado y Moscú, el general invierno coadyuvó a su derrota, como lo había hecho con Napoleón Bonaparte en el siglo XIX. El 7 de diciembre de 1941, con temperaturas bajo cero que paralizaron aviones y tanques alemanes, las tropas germánicas fueron doblegadas por los contraataques masivos de las tropas soviéticas, acostumbradas a esos rigores climáticos.

El mismo día 7 de diciembre en que las tropas soviéticas contraatacaron en Moscú, la fuerza aérea de Japón realizó un devastador ataque de sorpresa a la flota naval norteamericana en la base de Pearl Harbour, provocando el ingreso de Estados Unidos en la segunda guerra mundial. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra al imperio del Japón. El Presidente Roosevelt destinó la mayor parte de los efectivos norteamericanos al teatro de guerra en Europa para preparar un ataque aliado a la fortaleza bélica de Adolfo Hitler. A pesar de ello los aliados occidentales no pudieron alcanzar muchos progresos durante 1942. El poderío bélico alemán estaba concentrado en el frente ruso, donde una gigantesca leva de cuatro millones de soldados, que ya había ocupado Ucrania, tenía como objetivo final la toma de la ciudad de Stalingrado. Allí se libró la batalla más grande de la historia, que cobró un millón de vidas en febrero de 1943, en el marco de un invierno despiadado. Los restos de veinte divisiones alemanas que combatieron dramáticamente se rindieron sin apelación.

Entre enero de 1942 y julio de 1944, Alemania había triplicado su arsenal bélico, pero ni por eso tenía ya perspectivas de victoria. En un intento por revertir la dramática derrota de Stalingrado, Hitler resolvió lanzar a partir del 5 de julio de 1943 un ataque masivo contra Kurks, con un millón de hombres y 2.700 tanques. Pero ya los soviéticos les superaban en número de combatientes, en una proporción de

seis a uno, y disponían igualmente de superioridad en equipo blindado, de manera que el resultado final era previsible.

La aviación de los aliados occidentales, entretanto, incursionaba sobre las principales ciudades alemanas, destruyendo fábricas de municiones y ferrocarriles con pertrechos. En setiembre de 1943 las tropas aliadas entraron a territorio italiano y provocaron la caída del régimen de Mussolini, con la consiguiente rendición de Italia. Ello no obstante, las fuerzas alemanas seguían combatiendo tenazmente en la península y causando estragos en las líneas aliadas, al extremo de que Roma sólo fue liberada en junio de 1944, mes en el cual Francia fue invadida mediante los desembarcos aliados del Día D, en Normandía. Pero la resistencia alemana fue tan vigorosa que a finales de 1944 los aliados apenas habían recuperado algunos sectores de Francia y Bélgica, sin poder cruzar todavía el Rhin. De todas maneras el colapso alemán aparecía inevitable. El programa de armas secretas (cohetes V1 y V2) no pudo impedir el avance de los aliados, cuya aviación estaba destruyendo la industria alemana. El pueblo alemán estaba al borde de la desesperación y sus fuerzas armadas próximas a desintegrarse.

El ejército soviético se abría paso rumbo a Berlín, posibilitando así el cruce del Rhin por los aliados occidentales. Ante la derrota inevitable, Hitler se suicidó y los líderes nazis se rindieron incondicionalmente el 7 de mayo de 1945. La firma de la capitulación alemana se produjo en el cuartel general de Dwight Eisenhower, en Reims, quien suscribió el documento histórico en nombre de los aliados, en tanto que el general A. Jodl lo hizo por Alemania. Al día siguiente, los gobernantes aliados expidieron una declaración comunicando el final de la guerra en Europa. Posteriormente los principales dirigentes nazis habrían de ser juzgados por el tribunal internacional de Nüremberg, por crímenes de guerra.

Examinemos grosso modo el desarrollo del conflicto en el escenario asiático, donde Japón tuvo un rol protagónico. Japón, uno de los tres integrantes del denominado “Eje”, junto con Alemania e Italia, había desplegado una política expansionista en la región, antes del estallido de la segunda guerra mundial. Hacia 1938, ocupó el centro y el este de China y proclamó “un nuevo orden”, según el cual las potencias occidentales serían expulsadas del Asia oriental. En junio de 1941, se sirvió del ataque de Alemania a la Unión Soviética para invadir Indochina. En octubre del mismo año los estrategas japoneses prepararon un

plan de ataque simultáneo y sorpresivo a los británicos en Malasia y a los norteamericanos en Pearl Harbour, para imponer la capitulación del sudeste asiático. A raíz del alevé ataque del 7 de diciembre de 1941 a Pearl Harbour, Estados Unidos entró en la conflagración mundial. Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt dieron prioridad a la derrota de Alemania en Europa y por eso Japón, entre diciembre de 1941 y mayo de 1942, ocupó todas las islas británicas, holandesas y estadounidenses en el sudeste asiático, a la par que invadió el territorio continental hasta la frontera con la India. Pero en el mes de junio un solo hecho bélico cambió el rumbo de la guerra. Los japoneses enviaron una poderosa escuadra naval para combatir a los norteamericanos frente a la isla de Midway. Cuatro portaviones japoneses fueron hundidos en el curso de una sola tarde, perdieron la batalla y desde entonces nunca más alcanzaron éxitos en la guerra del Pacífico.

Tras la derrota en el litoral de la isla de Midway y las conquistas aliadas en el Pacífico sudoccidental, entre julio de 1942 y noviembre de 1943, comenzó el repliegue paulatino de los japoneses. Las potencias aliadas anunciaron en El Cairo, en 1943, que combatirían hasta lograr la rendición incondicional del Japón. Pero la resistencia nipona fue crudelísima. En China permanecía todavía un millón de soldados que no habían sido derrotados y más de medio millón en otras áreas. En el archipiélago japonés propiamente dicho los aliados apenas ocupaban unas zonas de Okinawa, invadida en abril de 1945, y la resistencia sólo cesó el 21 de junio. En la última etapa del conflicto jugaron un papel relevante los pilotos nipones conocidos como “kamikase” (hombre del viento divino), que en su fanatismo heroico hacían gala de los ataques suicidas para defender a su patria.

A pesar de los masivos bombardeos sobre las principales ciudades japonesas, los estrategas aliados llegaron a la conclusión de que la única manera de abreviar el desenlace de la guerra, evitando mayores pérdidas de vidas y de recursos materiales, era mediante el empleo de la bomba atómica, cuya producción secreta habían aprobado Roosevelt y Churchill en 1942.

En el verano de 1945 Estados Unidos disponía de tres bombas nucleares listas para ser usadas, cada una de ellas con una potencia equivalente a 20 mil toneladas de TNT. Una de esas bombas se hizo explotar a título experimental en Nuevo México, el 16 de julio de 1945, y las otras dos se enviaron al frente de guerra en el Pacífico. Una comi-

sión especial recomendó al Presidente Truman el empleo de la bomba atómica en el Japón. Ese mismo mes las potencias aliadas, reunidas en Potsdam, emitieron una declaración exhortándole al Japón a rendirse o atenerse a las consecuencias. Ante la negativa del Japón a aceptar las condiciones que se le imponían, Truman ordenó el lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, y tres días después otra sobre Nagasaki, produciendo la destrucción de ambas ciudades y la muerte de 150 mil personas, en un espectáculo dantesco sin precedentes. El “hongo atómico” se fijó en la mente humana como un símbolo de destrucción y muerte. Los japoneses ignoraban que con el empleo de las dos bombas Estados Unidos había agotado su arsenal nuclear. El 14 de agosto de 1945 Japón se rindió incondicionalmente. El 2 de setiembre, a bordo del USS Missouri anclado en la bahía de Tokio, el general Douglas Mac Arthur, en nombre de los Estados Unidos y como comandante supremo de los aliados, aceptó la rendición japonesa. Los altos dirigentes del gobierno japonés fueron juzgados por el tribunal internacional de Tokio, por crímenes de guerra, como lo fueron los líderes nazis en Nürenberg.

Los episodios que escuetamente hemos relatado vimos gráficamente representados en los noticieros cinematográficos de la época, tanto europeos como norteamericanos, en una suerte de convivencia rutinaria con las opacidades del alma humana y sus asombrosas contradicciones, que oscilan entre la civilización y la barbarie. Es que no hay una justificación admisible para la guerra como medio de solución de conflictos. La razón humana está herida en la guerra por acción de los adoradores del poder. Como decía el pensador oriental Mencio, “no existen guerras justas: unas son malas y otras peores”. O en palabras de Benjamín Franklin: “Nunca hubo una buena guerra ni una mala paz”.

No está por demás abundar en las consideraciones atinentes a la naturaleza de la conflagración mundial, porque no sólo se trata de un demencial conflicto bélico, de enormes costos humanos y materiales, sino que estaban en juego valores esenciales de la sociedad. En efecto, se había producido la confrontación entre dos sistemas antitéticos: la democracia y el totalitarismo. Vale decir la colisión entre un sistema de organización política del Estado que privilegia la participación popular en las cuestiones de interés general, con garantías para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona, y un régimen que concentra todos los poderes en un partido para intervenir en todos los

órdenes de la vida nacional, con menoscabo de tales derechos y libertades. Por eso se hablaba de la guerra entre el “mundo libre” y el totalitarismo nazi-fascista.

La democracia es, por cierto, un proceso perfectible de rango idealista. “La democracia es un concepto compuesto de realidades y de ideales. Constituye, por eso, un proceso de continua e interminable construcción. Su condición inacabada es inherente a su propia esencia y no depende de períodos históricos ni de lugares. En cualquier época y en cualquier parte la democracia será siempre, conceptualmente, algo inconcluso” (Rodrigo Borja, “Enciclopedia de la Política”). Hay que convenir, en todo caso, en que el ideal democrático, en su base conceptual, contiene las mejores, más amplias y altas aspiraciones del hombre, como individuo y como integrante del cuerpo social, desde su formulación originaria en la Grecia clásica, sobre todo en el siglo de oro de Pericles (V antes de Cristo), hasta nuestros días. Frente a ello, el totalitarismo, el de las élites o minorías selectas. Con base en la filosofía de Hegel, decía Mussolini: “Todo en el Estado; nada fuera del Estado ni contra el Estado”. O como afirmaba otro de los líderes del fascismo: “El Estado es omnipotente, omnipresente y omnisciente”. El enfrentamiento entre las democracias occidentales y las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) en la segunda guerra mundial le significó a la humanidad más de cincuenta millones de muertos y el imperio de una barbarie atroz.

El término de la segunda guerra mundial dio paso a un nuevo orden internacional, cimentado en la Organización de las Naciones Unidas, que examinaremos brevemente a continuación.

CREACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

La organización jurídica de la comunidad internacional es un fenómeno que surgió en el siglo XX para instaurar un nuevo orden mundial. La experiencia de la primera guerra mundial generó una ideología pacifista, que tuvo en el presidente Woodrow Wilson, de los Estados Unidos, su más conspicuo representante. En efecto, el mandatario norteamericano fue el inspirador de la creación del Pacto de la Sociedad de las Naciones en el Tratado de Versalles (1919). Fue el primer intento de establecer una normativa universal que regulara las relaciones internacionales.

El establecimiento de la Sociedad de las Naciones se vinculó directamente con los conocidos “catorce puntos” del Presidente Wilson, quien los enunció en su mensaje al Congreso de su país, el 8 de enero de 1918. En el punto 14 solicitó la constitución de una Sociedad General de Naciones con garantías mutuas e independencia política y de integridad territorial para todos los Estados, grandes y pequeños. Los citados puntos sirvieron, en buena parte, de normas directrices de las cláusulas de paz de Versalles, en las que no se conservó —es justo decirlo— el espíritu idealista de su autor. Importa señalar que el Congreso norteamericano, partidario de una conducta aislacionista, impidió el ingreso de Estados Unidos a la Sociedad creada por el espíritu visionario de Wilson, con lo cual se la debilitó desde su nacimiento. El Pacto contemplaba, en esencia, el objetivo de “fomentar la cooperación entre las naciones y garantizarles la paz y la seguridad”. Establecía un sistema de seguridad colectiva basado en la reducción de armamentos (art. 8); respeto a la integridad territorial y la independencia política de todos los miembros (art. 10); solución pacífica de controversias (arts. 11-15); sanciones contra el Estado que recurra a la guerra en violación de sus compromisos contraídos en la Sociedad.

La idea de instituir una nueva organización internacional, en reemplazo de la ineficiente Sociedad de las Naciones, que se disolvió en 1946, germinó a través de varias declaraciones y conferencias, realizadas en el curso mismo de la segunda guerra mundial. El primer antecedente del largo proceso de construcción de la ONU fue la Declaración de Londres, suscrita en el Palacio de Saint James, el 12 de junio de 1941, por los representantes de Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, así como por los gobiernos en exilio de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Yugoslavia y el General De Gaulle, de Francia. Contraria a la negociación de paz por separado, esta importante Declaración afirma que “la única base cierta de una paz duradera radica en la cooperación voluntaria de todos los pueblos libres en un mundo exento de la amenaza de la agresión, donde puedan disfrutar de seguridad económica y social”.

Otro antecedente importante para la formulación de la Carta de las Naciones Unidas fue la denominada Carta del Atlántico, declaración conjunta emitida por el Presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y el Primer Ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, el

9 de agosto de 1941, luego de su histórica reunión en aguas del Atlántico. Roosevelt fue a bordo del crucero pesado “Augusta” y Churchill en el “Príncipe de Gales”. La Carta del Atlántico proclamó los principios esenciales que alentarían los dos países en su búsqueda de una paz justa y estable, tras la derrota del nazismo. Entre esos principios pueden citarse: 1) las “cuatro libertades”: libertad del temor y del hambre y libertad de expresión y religión; 2) aplicación del principio de libre determinación en los cambios territoriales; 3) el derecho de todos los pueblos a escoger la clase de gobierno bajo el cual deseen vivir; 4) igual acceso a las materias primas y a los artículos de comercio esenciales para la prosperidad y la cooperación económica entre las naciones; 5) paz con seguridad para todos los países; 6) libertad de los mares; 7) renuncia al empleo de la fuerza, establecimiento de un sistema permanente de seguridad general y desarme de todas las naciones que pongan en peligro la paz.

Churchill fue a pasar la navidad en Washington. El primero de enero de 1942 debía emitirse una Declaración de todos los nuevos aliados firmantes de la Carta del Atlántico. El título permanente de lo que Churchill comenzó a denominar la Gran Alianza se trocó, por iniciativa de Roosevelt, en el de “Naciones Unidas”. Fueron 26 los gobiernos signatarios.

Fue asimismo muy significativa e importante la Conferencia de Moscú, de octubre de 1943, donde Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China declararon “que reconocen la necesidad de establecer en el plazo más corto posible una organización internacional general, basada en el principio de la igualdad soberana de todos los estados amantes de la paz, y abierta a todos esos estados, grandes y pequeños, para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”. El documento fue suscrito por los tres ministros de relaciones exteriores, Cordell Hull (EE. UU.), Vyacheslav Molotov (URSS) y Anthony Eden (Gran Bretaña), así como por el embajador chino en Moscú, Foo Ping-sheung. Para Cordell Hull, la Conferencia de Moscú fue la cuna de las Naciones Unidas.

Al año siguiente se reunieron los representantes de esos mismos países en Dumbarton Oaks (Washington) y adoptaron un plan concreto y detallado de organización internacional. Allí se habló de una próxima reunión entre Roosevelt, Presidente de Estados Unidos;

Churchill, Primer Ministro de Gran Bretaña; y José Stalin, jefe de estado de la URSS.

Los tres personajes se reunieron en Yalta (Crimea, Rusia), el 4 de febrero de 1945. Los tres jefes de estado trataron primero del destino de Alemania y su rendición incondicional. Luego tomaron conocimiento y definieron las propuestas de Dumbarton Oaks. Allí se acordó instituir el voto privilegiado del veto para las cinco potencias vencedoras de la segunda guerra mundial, para las “cuestiones de importancia” en el Consejo de Seguridad, quedando las “cuestiones de procedimiento”, o sea las ordinarias, para la votación normal. En este punto conviene recordar que en la Sociedad de las Naciones hubo también una suerte de veto democrático en la Asamblea General, que era facultativo para todos los Estados miembros, lo que en la práctica generó la inoperancia de la organización. En una de las últimas reuniones de Yalta, Stalin expresó a Roosevelt y Churchill, en la más estricta reserva, que estaba dispuesto a entrar en la guerra contra Japón después de la rendición de Alemania.

Bien se advierte que en el escenario de la segunda guerra mundial y en los proyectos de organización jurídica de la comunidad internacional, como colofón del conflicto, gravitaron de modo relevante las figuras de Churchill, Roosevelt y Stalin. Estimo pertinente, por tanto, enfocar los rasgos más destacables de estos personajes históricos, en ceñida síntesis.

Winston Churchill (1874-1965), estadista, político y escritor, tuvo una dilatada trayectoria en la política de su país, a partir de 1900, y de 1908 a 1929 fue funcionario en diversos ministerios británicos. Entre la primera y la segunda guerras mundiales fue primer lord del almirantazgo. En mayo de 1940, poco antes de la caída de Francia, Churchill asumió la jefatura del gobierno de Gran Bretaña, en pleno conflicto bélico. Acudió al parlamento y pronunció un famoso discurso en el cual declaró que “Sólo puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas”, compartiendo el sacrificio de su pueblo. Su vigoroso liderazgo y su confianza en la victoria de los aliados sustentaron la confianza de los ingleses, durante cinco años, en las horas más dramáticas de su periplo histórico. En el curso de la segunda guerra mundial se opuso a la apertura de un nuevo frente de combate en el oeste para atenuar la presión de la invasión alemana a la URSS, en 1941; los aliados sólo lo hicieron en 1944 con el desembarco de tropas en Normandía, lo cual generó sospechas y ren-

cores en el régimen soviético hacia las potencias occidentales. Cuando se acentuaron las discrepancias entre la URSS y las potencias aliadas, al término de la guerra, Churchill dijo que “una cortina de hierro” había caído en Europa (discurso de Fulton, marzo de 1946). En líneas precedentes señalamos el papel que le cupo desempeñar en la gestación del nuevo orden mundial y en la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Convencido de las bondades del sistema democrático, Churchill sostuvo, con un dejo no exento de ironía, que “la democracia es el peor de los sistemas, a excepción de todos los demás”. Después de la guerra mundial continuó actuando en la vida política y se retiró en 1955. En 1953 se le confirió el Premio Nobel de Literatura.

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). Estadista norteamericano, fue cuatro veces electo presidente de los Estados Unidos, función que ejerció de 1933 a 1945. En 1928 resultó electo gobernador del estado de Nueva York y reelecto en 1930. Como era una época de crisis económica, instrumentó un amplio plan de obras públicas para dar empleo a los desocupados y promulgó una ley que disminuía las horas de trabajo de las mujeres y los niños.

En 1932 fue proclamado candidato del partido demócrata a la presidencia de la república y derrotó a su adversario el presidente Herbert Hoover, quien se postuló a la reelección. Cuando asumió sus funciones en marzo de 1933 la crisis económica nacional se había agravado notablemente y registraba índices alarmantes. Ante el pánico general, Roosevelt dijo en su discurso inaugural que “lo único que debemos temer es el miedo mismo”. Emprendió entonces en la ejecución de un vasto plan de rehabilitación económica conocido con el nombre de “Nuevo trato”, que frenó la crisis y dio trabajo a una enorme leva de desocupados. Como reflejo de su creciente popularidad fue reelecto en 1936. Cuando estalló la segunda guerra mundial, en septiembre de 1939, proclamó la neutralidad de los Estados Unidos. Desafiando la tradición política de su país, se postuló ese mismo año para un tercer período presidencial y alcanzó la victoria. A raíz del ataque japonés a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, Estados Unidos entró en guerra y el presidente Roosevelt en la historia mundial. En noviembre de 1944 fue electo para un cuarto período presidencial pero falleció en abril del año siguiente.

En el ámbito de la política interna, inauguró una nueva etapa en la historia de la administración pública estadounidense. Su política internacional respondió a la crisis mundial, ya que la dominación de Alemania en Europa ponía en riesgo la seguridad en el Atlántico. Roosevelt impulsó la creación de una poderosa fuerza aérea y el incremento de los efectivos del ejército. Estableció el servicio militar obligatorio y logró la cooperación industrial para la producción de armamentos a gran escala. El congreso instituyó en 1941 el sistema de préstamos y arriendos para facilitar la provisión de material de guerra a los aliados de Estados Unidos. En el ámbito interamericano instaló, en 1933, la política del “buen vecino”, dejando de lado el intervencionismo norteamericano y creando una atmósfera de cooperación regional.

José Stalin (1879-1953). Su nombre originario fue José Djughashvili, pero siendo todavía un joven revolucionario adoptó el alias de Stalin, que en ruso significa “hombre de acero” y que a la postre reveló la índole de su carácter. Con el tiempo alcanzó las dignidades de secretario general del partido comunista, primer ministro y dictador de la Unión Soviética. Cuando estalló la revolución de 1917 fue uno de los jefes secundarios del elenco comunista. Lenin y León Trotsky tenían mayor significación y poder en los cuadros políticos. Ello no obstante, gracias a sus atributos de excelente organizador y político astuto, Stalin ganó poder rápidamente y en 1922 fue designado secretario general del partido comunista. A raíz de la muerte de Lenin, en 1924, Trotsky y Stalin se trabaron en enconada lucha por el poder. Stalin salió victorioso y su adversario fue desterrado de la Unión Soviética en 1928.

A medida que Stalin iba concentrando mayor poder en sus manos, algunos revolucionarios de viejo cuño asumían una postura política de oposición, razón por la cual éstos y numerosos de sus partidarios fueron ejecutados o enviados a prisión, en el curso de las tenebrosas “purgas”, en las cuales además el dictador separaba de sus puestos a políticos o militares sospechosos de deslealtad. En ese lapso de consolidación del poder absoluto no dedicó atención a las relaciones de la Unión Soviética con otros miembros de la comunidad internacional. Pero una vez alcanzadas sus metas en el ámbito interno instaló una política de expansión de la URSS. Su país ingresó a la Sociedad de las Naciones en 1934, de la cual fue expulsado en diciembre de 1939 por su guerra contra Finlandia. En esa misma época se produjo la suscripción del bochornoso pacto nazi-soviético, Molotov-Ribbentrop, que le per-

mitió a Adolfo Hitler atacar a Polonia y Europa Occidental. Al propio tiempo la URSS procuraba ayudar y movilizar a los comunistas en todo el mundo. Cuando en junio de 1941 el ejército alemán invadió la Unión Soviética, Stalin, a la sazón primer ministro, asumió el comando del ejército rojo, que gradualmente logró expulsar de su territorio a los invasores nazis. Durante ese período dramático Stalin permaneció en su país y se negó a salir de él para conferenciar con los mandatarios aliados. Sólo cuando hubo la certidumbre de la derrota alemana Stalin consintió en viajar a Teherán, en noviembre de 1943, donde se entrevistó por vez primera con Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt. Los tres jefes de estado volvieron a reunirse en Yalta, en febrero de 1945. En los esfuerzos comunes por instalar un nuevo orden internacional, al término de la conflagración mundial, afloraron las divergencias entre el régimen soviético y las potencias occidentales, que a la postre abrieron cauces a la guerra fría, al reparto de zonas de influencia y a la bipolaridad soviético-norteamericana, que concluyó con la implosión de la URSS.

La convocatoria a la Conferencia de San Francisco, en la cual se suscribió la Carta constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, se acordó en la reunión de Yalta. Esta Conferencia trascendental se inició el 25 de abril de 1945, en dicha ciudad estadounidense, con la participación de 50 delegaciones nacionales, entre ellas la del Ecuador. El texto de la Carta de la ONU se elaboró y discutió con base en las propuestas de Dumbarton Oaks, del acuerdo de Yalta y de enmiendas de diversa procedencia, especialmente de los países pequeños, porque aquellas propuestas eran consideradas como un instrumento de las grandes potencias. Las confrontaciones comenzaron curiosamente a partir de la titularidad de la presidencia de la Conferencia, que por costumbre internacional le correspondía a Estados Unidos. Pero el canciller Molotov, de la Unión Soviética, suscitó una polémica que enardeció los ánimos y sugirió la presidencia rotativa entre las cinco grandes potencias. En todo caso después aparecieron discrepancias de mayor entidad política. Una de ellas se dio con el bloque de países latinoamericanos, a propósito del papel de las organizaciones regionales en materia de seguridad colectiva, por el poder político del Consejo de Seguridad. La redacción del artículo 51 de la Carta de la ONU, que versa sobre la legítima defensa individual o colectiva, fue materia de una delicada y compleja negociación de las grandes potencias con nuestro blo-

que regional, cuya posición se cimentaba en el Acta de Chapultepec, aprobada en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en México en marzo de 1945. Se citan los nombres del senador Vandenberg y de Nelson Rockefeller como factores positivos para la superación del problema.

La Carta de la ONU, suscrita el 26 de junio de 1945, entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, al ser ratificada por China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética, y por la mayoría de los demás Estados signatarios, según lo dispuesto en el artículo 110 del instrumento. Se conmemora desde entonces el 24 de octubre como el día de las Naciones Unidas. El Gobierno de los Estados Unidos es el depositario del texto original de la Carta y de las ratificaciones emitidas por los Estados miembros.

La Carta se compone de un preámbulo –sustantivo y medular en sus términos– y de 111 artículos, distribuidos en 19 capítulos, que contienen las bases esenciales de la Organización, destinada “a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles”. La Carta tuvo aprobación legislativa en el Ecuador el 7 de diciembre de 1945 y el correspondiente instrumento de ratificación fue depositado el 21 de diciembre del mismo año.

Las reformas de la Carta pueden hacerse por la Asamblea General o por una Conferencia General de los Miembros de las Naciones Unidas, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 108 y 109. Ellas entran en vigor cuando son adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de la ONU, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Veamos cuáles son los propósitos y principios esenciales de la Organización mundial.

Los propósitos están contenidos en el artículo 1 de la Carta:

- a) mantener la paz y la seguridad internacionales;
- b) fomentar entre las naciones relaciones de amistad;
- c) realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o hu-

- manitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos;
- d) servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

Según el artículo 2, para la realización de tales propósitos, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios:

- a) la Organización se basa en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros;
- b) los miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos en virtud de la Carta;
- c) los miembros arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia;
- d) los miembros, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra otros Estados;
- e) los miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con la Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva;
- f) la Organización hará que los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales;
- g) ninguna disposición de la Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.

Según el artículo 3 de la Carta, son miembros originarios de la ONU los Estados que habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, celebrada en San Francisco, o que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1º de enero de 1942, suscribieron la Carta y la ratificaron, de conformidad con el artículo 110.

Pueden ser miembros todos los demás Estados amantes de la paz, que acepten las obligaciones consignadas en la Carta y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. La admisión de miembros se realiza por decisión de la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad. Todo miembro que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad. Todo miembro que haya violado repetidamente los principios contenidos en la Carta podrá ser expulsado por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad. Este Consejo tiene facultad para restituir el ejercicio de sus derechos y privilegios a un miembro suspendido. La ONU cuenta actualmente con 192 Estados miembros, entre ellos el Ecuador, signatario originario de la Carta.

La Carta contempla los siguientes órganos principales de la Organización: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General.

La Asamblea General es el principal órgano deliberativo de la ONU, integrado por todos los Estados Miembros, que pueden acreditar hasta cinco representantes, con derecho a un solo voto por país. Se reúne una vez al año, en un período ordinario de sesiones, y cuando las circunstancias lo requieran, en sesiones extraordinarias.

La Asamblea General puede discutir todos los asuntos contemplados en el marco de la Carta de la ONU. Entre los principales: considera los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de armamentos; promueve estudios y formula recomendaciones para fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación; estimula la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayuda a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.

Si el Consejo de Seguridad deja de ejercer la acción que le concierne frente a una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, por el veto de uno de sus cinco miembros permanentes, la Asamblea General puede tomar a su cargo el problema, en vir-

tud de la resolución denominada “Unión pro Paz”, aprobada el 3 de noviembre de 1950. En tal caso, la Asamblea puede reunirse dentro de 24 horas y recomendar a los Estados miembros la adopción de medidas colectivas para mantener o restablecer la paz, incluyendo el empleo de la fuerza armada. Pero la recomendación no tiene carácter obligatorio. Este procedimiento se adoptó porque en el marco de la guerra fría el veto de las grandes potencias tenía un efecto paralizante en el Consejo de Seguridad.

El Consejo de Seguridad es el órgano permanente sobre el cual recae la responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Los poderes que para ello se le confieren quedan definidos en los Capítulos VI (arreglo pacífico de controversias), VII (acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión), VIII (acuerdos regionales) y XII (régimen internacional de administración fiduciaria). Pueden mencionarse entre sus funciones y facultades esenciales: mantener la paz y la seguridad internacionales; instar a las partes en una controversia a su arreglo por uno de los medios de solución pacífica previstos en el derecho internacional; investigar toda controversia o situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia; recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que estime apropiados para la solución de una controversia; determinar la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y decidir la adopción de medidas apropiadas; resolver, en tal caso, qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones e instar a los Miembros de la ONU a aplicar tales medidas; de ser ineficientes tales medidas para impedir o detener la agresión, emprender una acción armada para restablecer la paz y la seguridad internacionales (los Miembros de la ONU se comprometen, por convenio especial, a poner a disposición del Consejo fuerzas armadas, ayuda y facilidades necesarias); recomendar la admisión de nuevos miembros; recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y elegir a los Magistrados de la Corte Internacional de Justicia.

El Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros: 5 permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia) y 10 no permanentes, elegidos por la Asamblea General para un período de dos años. El Consejo está organizado de modo que puede funcionar conti-

nuamente, por lo cual cada uno de sus miembros tiene en todo momento su representante en la sede de la Organización. Puede celebrar reuniones no sólo en su sede sino en cualquier lugar que juzgue apropiado para facilitar sus labores. Las decisiones del Consejo sobre cuestiones de procedimiento se toman por el voto afirmativo de nueve de sus quince miembros. La exigencia de la unanimidad de votos afirmativos de los miembros permanentes en la decisión de cuestiones de fondo conforma el mecanismo del “veto”, privilegio político reservado a las grandes potencias, cuya oposición a una resolución puede paralizar la acción del Consejo.

Un Estado miembro de la ONU, pero no del Consejo de Seguridad, puede participar en sus debates, sin derecho a voto, si el Consejo estima que los intereses de ese país están especialmente afectados. Miembros o no miembros son invitados a tomar parte en los debates, sin derecho a voto, cuando son partes en una controversia sometida al Consejo.

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) está integrado por 54 Estados miembros, electos por la Asamblea General. Cada Estado miembro tiene un representante. El ECOSOC es, en síntesis, el órgano coordinador de las tareas económicas y sociales de la ONU y de los organismos especializados, siempre bajo la autoridad de la Asamblea General.

Las funciones esenciales del ECOSOC pueden resumirse así: desarrollar actividades económicas y sociales, bajo la autoridad de la Asamblea General; realizar estudios e informes sobre asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros conexos; promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos; convocar conferencias internacionales y elaborar proyectos de convenciones en áreas de su competencia para someterlos a la Asamblea General; coordinar las actividades de los organismos especializados, con los cuales negocia las condiciones en que éstos han de vincularse con la ONU; brindar los servicios que le soliciten los miembros de la ONU y los organismos especializados, con aprobación de la Asamblea General; mantener un sistema de consultas con las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los asuntos del Consejo.

Numerosos organismos subsidiarios coadyuvan al desarrollo de la vasta gama de actividades que le corresponden al ECOSOC. Cuenta, básicamente, con las comisiones económicas regionales, las comisiones orgánicas y comités permanentes especiales.

En cuanto al Consejo de Administración Fiduciaria diremos que el objetivo básico del régimen de administración fiduciaria se ha orientado, según la Carta de la ONU, a promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los territorios fideicometidos, y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia. La estructura del Consejo está contemplada en el artículo 86 de la Carta, previendo un equilibrio numérico entre miembros administradores de territorios en fideicomiso y miembros no administradores. Al cumplirse las metas del régimen de administración fiduciaria, ha disminuido gradualmente el número de miembros del Consejo. Cabe destacar que en 1994 el Consejo de Seguridad dio por concluida la aplicación del Acuerdo de administración fiduciaria para el último de los once territorios fideicometidos originarios, el Territorio en Fideicomiso de las islas del Pacífico (Palau), administrado por los Estados Unidos. De ese modo el sistema de administración fiduciaria terminó su tarea, ya que todos los territorios fideicometidos han alcanzado la autonomía o la independencia, como Estados autónomos o uniéndose a países vecinos independientes. En tal virtud, el Consejo de Administración Fiduciaria, por enmienda de su reglamento, sólo se reunirá en lo futuro cuando la ocasión lo demande.

La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funciona de conformidad con su Estatuto, que forma parte integrante de la Carta de la ONU y está basado en la Corte de Justicia Internacional de la fenecida Sociedad de las Naciones. En la Conferencia de San Francisco (1945) se aprobaron la Carta y el Estatuto.

La Corte es un cuerpo de magistrados independientes elegidos, sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas altamente calificadas en el ejercicio de importantes funciones judiciales en sus respectivos países, o entre jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. Según el artículo 93 de la Carta, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Un Estado que no sea miembro de la Organización puede llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte, con arreglo a las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad. La Corte se compone de 15 magistrados, de los cuales no podrá haber dos

de la misma nacionalidad. El mandato de los magistrados de la Corte dura 9 años, con opción a ser reelegidos.

La Corte está abierta a los Estados partes en su Estatuto. Sin embargo, otros Estados pueden acudir también a ella, en condiciones fijadas por el Consejo de Seguridad. Tales condiciones, empero, no podrán en manera alguna colocar a las partes en situación de desigualdad ante la Corte.

La competencia de la Corte Internacional de Justicia se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de la ONU o en los tratados y convenciones vigentes. Los Estados pueden aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte mediante la suscripción de un convenio que estipule que el caso se someta a ese alto tribunal, o mediante la expedición de una declaración especial en ese sentido. Los Estados que acepten la jurisdicción obligatoria pueden hacerlo incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados Estados, o por determinado tiempo. La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. El fallo es definitivo e inapelable.

La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos de las Naciones Unidas están facultados a pedir opiniones consultivas a la Corte sobre asuntos jurídicos que se planteen dentro del ámbito de sus actividades.

La Secretaría General está integrada por el Secretario General y el personal contratado al servicio de la Organización. El Secretario General, nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, es el funcionario administrativo más alto de las Naciones Unidas. Puede señalar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En cumplimiento de sus deberes, ni el Secretario General ni el personal de Secretaría pueden solicitar o recibir instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización.

La ONU tiene personalidad internacional propia y reconocida. La Corte Internacional de Justicia, en opinión consultiva emitida en 1949, declaró que la ONU, a la luz de sus facultades y funciones, es sujeto de derecho internacional capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones.

REFORMAS INSTITUCIONALES

La ONU ha tenido éxitos y fracasos en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que constituye uno de sus propósitos esenciales. A pesar de que se han producido más de 200 conflictos armados desde 1945, año de fundación de la Organización, ésta ha logrado preservar la paz en términos planetarios, ya que los conflictos han sido de dimensión limitada.

Por la importancia crucial del tema, el Consejo de Seguridad se reunió el 31 de enero de 1992, por vez primera a nivel de Jefes de Estado, en una renovada adhesión a los principios de la Carta. Los miembros de la Reunión en la Cumbre solicitaron al Secretario General que recomendase medios para mejorar la capacidad de las Naciones Unidas en materia de diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz. En junio de 1992 el Secretario General emitió un “Programa de Paz”, con miras a dar mayor eficacia a las actividades de la ONU dirigidas a reconocer conflictos potenciales, encontrarles solución y consolidar la paz entre los antiguos adversarios después del conflicto.

Desde hace varios lustros se habla de la necesidad de introducir reformas en el sistema de Naciones Unidas para que alcance sus objetivos prioritarios con mayor idoneidad. En ese empeño se advierten dos tendencias: unos propician un reformismo moderado sobre la base del esquema actual y otros unas reformas estructurales profundas. Varias de las propuestas planteadas ponen énfasis en la reorganización de la Secretaría. En todo caso se percibe que se producirán cambios en la Organización mundial para que pueda enfrentar mejor los retos de una realidad cada vez más delicada y compleja. Es que a los problemas de la paz y la seguridad la ONU tiene que agregar, en ese mismo contexto, la demanda de una cooperación internacional más profunda y dinámica, que concentre sus esfuerzos en reducir la siempre mentada brecha entre pueblos ricos y pobres, en nombre de la dignidad humana y de una justicia internacional bien entendida.

LA GUERRA FRÍA

Al comienzo de este relato habíamos dicho que nuestro ingreso a la Cancillería coincidió con la iniciación de la denominada “guerra

fría”. Es que el término del conflicto bélico internacional y la instauración de un nuevo orden mundial, mediante el funcionamiento de la ONU, no han garantizado una paz estable y permanente, ya que se inició de inmediato la confrontación política en el marco de la bipolaridad. Consignemos un par de consideraciones al respecto. Bernard Baruch, asesor presidencial estadounidense, fue el autor de la expresión “guerra fría”, para caracterizar el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus respectivas esferas de influencia, luego de concluida la segunda guerra mundial. En las postrimerías de esa gigantesca conflagración y cuando se vislumbraba el colapso de las potencias totalitarias (Alemania, Italia y Japón), los aliados occidentales y la URSS negociaron el establecimiento de un nuevo orden internacional, en cuyo contexto emergía ya el conflicto de intereses entre los dos bloques. Winston Churchill describió la situación con una frase que cobró celebridad, cuando dijo que “una cortina de hierro” había caído sobre el continente europeo (discurso de Fulton, 5 de marzo de 1946).

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), establecida en 1949 por las potencias occidentales, y el Pacto de Varsovia, conformada por los países socialistas en 1955, fueron las alianzas militares que simbolizaban la nueva estructura de poder mundial en la confrontación Este-Oeste, la cual concluyó abruptamente en 1989 con la caída del muro de Berlín. En 1991 se produjo la implosión de la Unión Soviética y la desintegración del bloque socialista, para dar paso a la actual unipolaridad y al poder hegemónico de los Estados Unidos de América. Huelga señalar que una de las consecuencias de este hecho histórico fue, por cierto, la disolución del Pacto de Varsovia. La guerra fría constituyó, en todo caso, un período histórico de tensiones políticas y militares, alimentadas por filiaciones ideológicas, que mantuvo al mundo en zozobra por potenciales amenazas apocalípticas cimentadas en el equilibrio del terror nuclear. Se produjeron ciertamente numerosos conflictos bélicos de alcance limitado, pero la hipótesis de una conflagración atómica, con su carga de irracionalidad y perspectivas de destrucción masiva, fue desechada, para consolidar una inquietante paz armada. En la actualidad la comunidad internacional enfrenta, como se sabe, otros desafíos, como la pobreza crítica, las violaciones de derechos humanos, el narcotráfico, el terrorismo, la degradación ambiental, el

crimen internacional organizado, que demandan adecuadas respuestas cimentadas en la cooperación de los Estados, a partir de renovados enfoques de carácter político, económico, social y cultural. Estos son los componentes del nuevo concepto de seguridad, que es multidimensional y trasciende la visión tradicional del tema.

INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR

En abril de 1947 la Cancillería convocó a concurso público para cubrir seis vacantes en el Servicio Exterior Ecuatoriano. Uno de mis compañeros del primer curso de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, ya inscrito en dicho concurso, me dio el dato y me acompañó al Ministerio de Relaciones Exteriores, que yo no conocía, para registrar mi nombre y participar de las pruebas correspondientes. Pocos días después rendimos los exámenes y, una vez seleccionado entre un abigarrado grupo de aspirantes, ingresé a la carrera diplomática, en la cual habría de permanecer 45 años. El cargo inicial no tenía una denominación semántica alentadora, pues la oficial era de “amanuense”, con un tufillo de burocracia desfasada, que después evolucionó a la de “ayudante”, en diversos grados. Alguien decía, con cierto ingenio e ironía, que habíamos ingresado no a una carrera de velocidad sino de obstáculos, aludiendo acaso a las vicisitudes de las promociones jerárquicas que nos esperaban. El servicio profesional comienza en el rango de Tercer Secretario y culmina en el de Embajador, dentro de un escalafón de seis categorías. O sea que comenzábamos una dilatada conscripción administrativa previa al arribo al punto inicial de la carrera. Ahora los jóvenes compiten para acceder directamente a la función de Tercer Secretario, naturalmente con las exigencias y requisitos contemplados en la Academia Diplomática.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Se me asignó al personal del Departamento de Actos y Organismos Internacionales, que centraba su acción básicamente en el amplio espectro de temas del sistema multilateral, vale decir ONU y OEA, además de Tratados. Mi ubicación estaba en la Sección de Naciones Unidas. El título pomposo del Departamento a veces inducía a error mecanográ-

fico de una de las secretarías, a quien en las notas oficiales se le deslizaba ocasionalmente la denominación de “actos y orgasmos internacionales”.

El aprendizaje y las experiencias preliminares desde el estado llano de la Cancillería, en el período de posguerra, fueron realmente interesantes. Como lo habíamos señalado anteriormente, la Organización de las Naciones Unidas se había creado hacía apenas un par de años, al término de la segunda guerra mundial, y comenzaba tempranamente la denominada “guerra fría”, cuando el orden mundial se expresaba en el sistema de la bipolaridad instalado por los Estados Unidos y la Unión Soviética en el reparto de zonas de influencia, con una fuerte carga de confrontación ideológica.

El desarrollo del mayor y más cruento conflicto bélico de la historia lo habíamos seguido durante nuestro ciclo de educación secundaria como un fenómeno dramático distante, sin la percepción política necesaria. Teníamos, por supuesto, una visión global de la lucha de las democracias contra el totalitarismo nazi-fascista, en una conflagración teñida de barbarie y heroísmo, pero fuimos afinando nuestra elaboración conceptual a medida que examinábamos textos analíticos sobre el tema y antecedentes sobre el establecimiento de la ONU. Resulta cruelmente irónico que fuera necesaria una conflagración planetaria, con matices apocalípticos y más de 50 millones de muertos, para arribar a la organización jurídica de la comunidad internacional, cimentada en nuevas perspectivas y una cosmovisión más moderna. En efecto, la Sociedad de las Naciones (1919), fundada después de la primera guerra mundial, había fracasado en su objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales así como de incrementar la cooperación amistosa entre sus Estados miembros. Importa recordar que el colapso de la estructura jurídica de la Sociedad de las Naciones empezó con la invasión de Japón a Manchuria, en 1931, y la de Italia a Etiopía, en 1935, sin que operaran el mecanismo de la seguridad colectiva ni las sanciones económicas impuestas a los infractores.

Se abría ante nosotros un mundo en transición, pleno de expectativas, cuando examinábamos los numerosos ensayos que aparecieron en la época, sobre la problemática internacional, y la correspondencia que llegaba de nuestra Delegación Permanente en Nueva York sobre la marcha del sistema de la ONU.

En 1947 ocurrieron varios hechos importantes en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Uno de ellos fue la creación del Estado de Israel, por resolución de la Asamblea General, que Ecuador respaldó con su voto. La resolución contemplaba la división del mandato británico de Palestina en dos Estados, el judío y el palestino, así como un régimen internacional para Jerusalén. La intencionalidad de la ONU apuntaba a la solución de un antiguo y delicado problema, que no se dio en la práctica, pues permanece todavía como uno de los focos de tensión en el Medio Oriente. Conviene recordar que el día que los ingleses abandonaron Palestina (15 de mayo de 1948) se inició la escalada de violencia entre árabes y judíos, pues aquéllos desconocían la legitimidad de la existencia del Estado de Israel. El conflicto bélico cobró tal intensidad que la ONU se vio precisada a enviar un mediador de alto nivel en un intento de pacificación. Se le acreditó al conde Folke Bernadotte, de Suecia, quien pereció en el ejercicio de su misión al ser asesinado en una calle de Jerusalén, en septiembre de 1948. Años después vendrían las guerras de 1956, 1967 y 1973, que le permitieron a Israel expandir su espacio territorial, pero a costa de mantener latente el problema de fondo. En todo caso el Consejo de Seguridad ha tenido en su agenda este tema, entre los de mayor relevancia y complejidad, hasta nuestros días.

Huelga aclarar, por cierto, que el problema palestino no nació en el ámbito de la ONU. Después de siglos de dispersión por el mundo, por la “diáspora”, el pueblo judío puso en marcha su expectativa soberana mediante la conformación del movimiento sionista (1896), que propugnaba la instalación de un hogar nacional en Palestina. Esta aspiración, planteada por el líder Chaim Wismann al Gobierno británico poco antes de la primera guerra mundial, alcanzó el respaldo de la Declaración Balfour (1917), según la cual la corona británica “ve con agrado el establecimiento de un hogar nacional en Palestina para el pueblo judío....entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina”. Por iniciativa de Gran Bretaña, la ONU creó, en abril de 1947, un Comité Especial para “estudiar la cuestión de Palestina” y resolvió el 29 de noviembre de ese año, por voto mayoritario y con oposición árabe, la partición de ese mandato británico en dos Estados, uno judío y otro palestino, con un régimen internacional para Jerusalén.

Otro asunto de trascendencia y entidad, en 1947, fue el concerniente a la independencia de la India, de Gran Bretaña, y la formación de los Estados de India y Pakistán, que a su vez se disputaban la posesión de Cachemira, con base en factores religiosos y políticos. Un maharajá hindú incorporó a la India el territorio de Cachemira, estado de población musulmana. Las acciones del Consejo de Seguridad no satisficieron a las partes pero lograron evitar lo que habría sido una guerra desastrosa. El plebiscito sugerido por la ONU no se realizó por las reticencias de la India. La independencia de la India y Pakistán fue una de las clarinadas iniciales de la desestabilización del régimen colonial en el mundo contemporáneo.

A guisa de recuerdo histórico vale la pena consignar el dato de que a finales del siglo XV los portugueses, comandados por Vasco da Gama, arribaron a Calcuta y se instalaron en Goa. En el siglo XVI, franceses y holandeses se disputaron con los portugueses el dominio de la India. En el siglo XVIII, los ingleses, que desde el siglo anterior se establecieron en Bombay, Madrás y Calcuta, ocuparon todo el país. El artífice de la independencia fue el célebre Mahatma Gandhi, mediante su singular y denodada política de la no violencia, que logró doblegar al poderío imperial del Reino Unido de Gran Bretaña por medio de un ejemplar ademán de paz.

En la década de los sesenta se desencadenó un proceso incontenible de descolonización, que culminó con el nacimiento de numerosos Estados en diversas latitudes del planeta y el consiguiente incremento de miembros de las Naciones Unidas.

En 1948 se registró un acontecimiento trascendente y simbólico para el mundo de los valores universales. La Asamblea General de la ONU, reunida en París, aprobó el 10 de diciembre de ese año la Declaración Universal de Derechos Humanos, como culminación de los trabajos iniciados en 1946 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Declaración consigna los derechos y libertades fundamentales a partir de la consideración de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Se argumentaba, sin embargo, que este singular instrumento de proyección planetaria tenía un rango idealista sin carácter contractual. Por eso se aprobaron, en 1966, dos importantes instrumentos adicionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permitieron convertir en nor-

mas obligatorias los principios de la Declaración Universal. En todo caso el tema de los derechos humanos ha trascendido la esfera de competencia interna de los Estados para convertirse en asunto de interés prioritario de la comunidad internacional en su conjunto. Conviene señalar asimismo que los derechos humanos comenzaron a ponerse bajo la protección del Derecho Internacional desde mediados del siglo XIX, pero fue la Carta de la ONU la que inició el proceso de su protección universal.

Pocos meses antes se aprobó a nivel regional la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá (abril de 1948). Como en el caso anterior, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que velara por la observancia de tales derechos, ya que figuraban sólo en instrumentos meramente declarativos y no convencionales. Y en 1969 se suscribió, en San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), según la cual la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en dicho instrumento hemisférico.

Si bien la Conferencia de Bogotá cumplió un papel significativo en materia de derechos humanos, marcó un hito importante en la consolidación institucional del sistema interamericano. En efecto, en ella se creó la Organización de los Estados Americanos (OEA) como culminación de un dilatado proceso histórico, que se cimentó en el ideario político de Bolívar y en la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, establecida en la Primera Conferencia Interamericana de Washington (1890). En Bogotá se aprobaron la Carta de la OEA y el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, dos de las tres columnas de sustentación del sistema. La tercera es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), suscrito en Río de Janeiro en setiembre de 1947, en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente. A título anecdótico importa recordar que el Canciller ecuatoriano y jefe de la delegación a la citada reunión de Río, doctor José Vicente Trujillo, tuvo que retirarse sin firmar el instrumento, a causa de un rocambolesco golpe de estado en nuestro país, promovido por un coronel del Ejército. De regreso a Quito formuló una breve declaración a la prensa y, apelando a una frase efectista, explicó

metafóricamente el desaguizado manifestando que le habían cortado las piernas cuando iba a correr una maratón.

Respecto a la Novena Conferencia Interamericana de Bogotá cabe citar de paso el hecho histórico de que en el curso de la reunión se produjo, el 9 de abril de 1948, el tristemente célebre “bogatazo”, dramática y sangrienta conmoción política provocada por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.

Los antecedentes y desarrollo de los temas que hemos citado escuetamente convergían, en razón de la materia, al Departamento de Actos y Organismos Internacionales.

UNA BECA EN LA ONU

La Secretaría General de las Naciones Unidas, en su afán de promover la difusión de conocimientos sobre la organización y funcionamiento de la institución mundial, desarrolló anualmente un “Programa de Internos” para funcionarios de jerarquías intermedias de las cancillerías de los Estados miembros. Fui seleccionado para uno de esos seminarios. Al presentarme en la antigua sede de la ONU, en Nueva York, se me destinó a la División de Derechos Humanos, donde me cupo la grata oportunidad de alternar con el profesor Luis Recasens Siches, prestigioso tratadista de filosofía del derecho, quien asesoraba a la ONU en temas de su especialidad. Integrante de la diáspora republicana en la guerra civil española por la implantación del régimen fascista del Generalísimo Franco, emigró de su país y adoptó la nacionalidad guatemalteca. Yo tenía referencias académicas del profesor español por mis estudios de derecho y fue gratificante este contacto personal. Gracias a su amabilidad y condescendencia pude revisar los originales de varios de sus trabajos en materia de derechos humanos.

Los cursantes asistíamos a charlas teóricas y a sesiones de organismos de la ONU. A veces contábamos con conferenciantes de trayectoria relevante, como fue el caso de Ralph Bunch, mediador de la ONU en el problema palestino, en reemplazo del Conde Folke Bernadotte, asesinado en una calle de Jerusalén, como lo habíamos mencionado anteriormente. Las sesiones del Consejo de Seguridad suscitaban especiales expectativas porque se trataba del escenario político en que gravitaban las aristas retóricas de la “guerra fría”, con enfrentamientos verba-

les, a veces ríspidos, entre las delegaciones de los Estados Unidos de América y de la Unión Soviética, en el marco de la bipolaridad instalada por la confrontación ideológica de las superpotencias. Uno de los ademanes políticos de la delegación soviética, con efectos teatrales, consistía en el abandono de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad por la presencia de la representación de la China Nacionalista entre los 5 miembros permanentes, cuya legitimidad había cuestionado formalmente en enero de 1950.

A propósito de los enfrentamientos verbales entre los jefes de las delegaciones de Estados Unidos y la Unión Soviética, en esos tiempos de tensión y animosidad, el embajador Homero Viteri Lafronte me refirió un episodio digno de registro. En el curso de un acalorado debate, en el Consejo de Seguridad, el embajador norteamericano apostrofó a su colega soviético echando mano de unos versos del afamado poeta Pushkin, con la afirmación de que no hay lengua más venenosa que la de la serpiente, cualidad que le atribuyó a su contrincante. El embajador soviético elogió ese gesto de erudición del representante estadounidense y agradeció la mención de uno de los grandes vates de su país. Aclaró, sin embargo, que la cita era incompleta, porque la parte final de esos versos advierte que sólo hay una lengua peor que la de la serpiente, y es la del hombre; sobre todo si es americano, subrayó el aludido. En el marco del rico anecdotario de la ONU vale la pena citar otro curioso episodio ocurrido en la misma época en el Consejo Económico y Social. En una sesión en que se discutían temas de la agenda social, el delegado argentino, luego de hacer reiteradas referencias a Eva Perón y a su libro “La razón de mi vida”, presentó un proyecto de resolución, que fue derrotado en la votación. En un gesto de cuño teatral aceptó la derrota manifestando que la delegación argentina muere como el cisne, cantando. En la sesión del día siguiente, su asiento estaba vacío. El delegado checo, que había sido su contrincante en el debate de la víspera, pidió la palabra a la presidencia para dejar constancia de su pesar por la muerte del cisne. Pero poco después se incorporó a la sala, con inusual retraso, el representante argentino. El delegado checo tomó entonces la palabra y dijo: cuestión de orden, señor presidente; la delegación de mi país desea expresar su complacencia porque el cisne ha resucitado. Esto prueba que un lance de buen humor atenúa los rigores del debate parlamentario.

Recuerdo que en una de las sesiones del Consejo de Seguridad estuvo presente un grupo de oficiales de la aviación norteamericana, heridos en la segunda guerra mundial. Era un impresionante elenco de veteranos de aspecto espectral por las mutilaciones o lacras deformantes que habían sufrido, algunos de ellos en sus rostros. No creo que los llevaran solamente para una visita ocasional a la sede de la ONU sino para mostrar algunos de los efectos patéticos de la barbarie bélica, en una suerte de llamado de atención, precisamente ante el órgano político encargado de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Si ése fue el propósito, la realidad internacional, con sus complejidades y contradicciones, se encargó de frustrarlo, pues bien se conoce que en lugar de la deseada armonía universal se han producido hasta ahora, desde la fundación de la ONU en 1945, más de 200 conflictos armados de alcance limitado.

Concurrí también, como era obvio, a varias sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, establecida en febrero de 1946 por el Consejo Económico y Social a requerimiento de la Asamblea General. La Comisión estaba presidida por la señora Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin D. Roosevelt, uno de los grandes líderes democráticos en la Segunda Guerra Mundial. Mujer de carácter y talento, cumplió un papel importante en el ejercicio de sus funciones, especialmente en la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). La señora Roosevelt solía dirigir las sesiones de la Comisión con firmeza y sobriedad.

En mis visitas intermitentes a la Delegación Permanente del Ecuador, en su sede del Empire State Building, podía conocer noticias de nuestro país y, sobre todo, cruzar impresiones con amigos como Gonzalo Apunte, uno de mis primeros jefes en la Cancillería y a quien años después habría de sucederle en la función de Embajador en Uruguay. Ocasionalmente pude intercambiar frases de circunstancia con el Embajador Antonio J. Quevedo, jefe de la delegación, personaje nacional que anteriormente representara al país en la Sociedad de las Naciones y ejerciera la función de Canciller de la República. A comienzos de la década de los sesenta traté cercanamente al doctor Quevedo cuando él presidió la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores de la Cancillería y yo desempeñé la función de Secretario de ese importante organismo. En años recientes, cuando he ido a dictar cursos

en la Academia Diplomática, que lleva su nombre, lo he recordado en varias de sus facetas.

El ciclo teórico de charlas y el pragmatismo de la observación directa del funcionamiento de los diversos órganos del sistema de Naciones Unidas se orientaban a generar en los cursantes una suerte de mística o convicción sobre las bondades de la diplomacia multilateral, concretamente de la ONU, como instrumento idóneo para articular los esfuerzos conducentes a la preservación de la paz y la seguridad internacionales, así como a impulsar la cooperación al servicio del desarrollo. La ONU tenía entonces apenas un lustro de actividades con algunos logros y un amplio espectro de expectativas. Como irónico colofón del seminario y de sus enfoques idealistas se produjo, en junio de 1950, el estallido de la guerra de Corea, por la partición de la península en el contexto de la pugna ideológica entre las superpotencias.

La división de Corea se dio como resultado de la entrada en guerra de la Unión Soviética contra Japón, en agosto de 1945, y el acuerdo entre Estados Unidos y la URSS, por el cual las tropas japonesas se rendirían a las soviéticas al norte del paralelo 38 y a las americanas al sur de ese mismo paralelo. El gobierno de Corea del Norte era pro-soviético y el de Corea del Sur pro-americano. Varios incidentes fronterizos ocurridos a comienzos de 1950 y el ataque procedente de Corea del Norte, el 25 de junio, abrieron cauces al conflicto bélico general. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución exhortando al cese de fuego y al retiro de las tropas del escenario del conflicto. Contingentes de varios Estados se unieron a las tropas americanas para repeler la agresión y por eso el Consejo de Seguridad autorizó, el 7 de julio, el uso de la bandera de la ONU bajo la conducción de un comando unificado. La intervención de China en apoyo de Corea del Norte complicó la situación y, en ese contexto, una imprudente actitud personal del comandante en jefe, general Douglas Mac Arthur, anunciando una potencial acción contra China, determinó su destitución por parte del presidente Harry Truman. Las potencias occidentales utilizaron a la ONU en el marco de la guerra fría y, por cierto, en el caso de Corea. El armisticio se suscribió el 27 de julio de 1953.

En este punto puede ser pertinente una digresión. La ecuación paz-guerra ha caracterizado al periplo humano desde tiempos inmemoriales y apenas a partir de la adopción de la Carta de la ONU, en 1945, es ilícito el uso de la fuerza para la solución de controversias in-

ternacionales, como culminación de un dilatado proceso evolutivo en el ámbito doctrinario. Convendría mencionar entre los hitos más significativos de ese proceso a las Conferencias de la Paz de La Haya de 1899 y 1907, con sus respectivas convenciones, así como al Pacto de la Sociedad de las Naciones, al término de la primera guerra mundial. En efecto, el derecho internacional clásico reconocía el derecho de un Estado a recurrir al recurso de la guerra, como atributo de su soberanía, para alcanzar una reparación por ofensas alegadas y ponía énfasis en la figura de la “guerra justa” para el arreglo de conflictos. La prohibición del uso de la fuerza se consigna, pues, en la Carta de la ONU, con ciertas excepciones específicas, y es el Consejo de Seguridad el órgano que lo legitima y autoriza “en servicio del interés común”. La Carta lo admite en dos casos: en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva (Art. 51), o como medida coercitiva propiciada por el Consejo de Seguridad para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, a la luz del Capítulo VII de dicho instrumento.

Una vez concluido el programa de internos en Nueva York regresé a mis actividades habituales en el Departamento de Actos y Organismos Internacionales de la Cancillería.

BREVE EJERCICIO PERIODÍSTICO

Un día cualquiera, después de la clase de Derecho Internacional en la Universidad Central, el doctor Benjamín Carrión, mi profesor de la materia, me invitó a incorporarme al personal del periódico “El Sol”, que acababa de fundar. Era un diario que congregaba a un valioso grupo de intelectuales, con la orientación de Benjamín Carrión, su director, y de Alfredo Pareja Diezcanseco, subdirector. Acepté la amable propuesta, previa autorización de la Cancillería. Mi discreta función consistía en redactar crónicas diplomáticas y entrevistar a personajes relevantes vinculados especialmente con esa actividad. Fue una experiencia gratificante, entre otras razones porque el ejercicio periodístico me atrajo siempre. La fundación de “El Sol” coincidió con la proximidad de la campaña política para elegir al sucesor del Presidente Galo Plaza Lasso, quien instaló en su mandato un saludable período de estabilidad democrática en el Ecuador, de 1948 a 1952.

En el periódico prevalecía una atmósfera de fluida comunicación humana y el personal alternaba con prescindencia de nociones jerárquicas. Entre diálogos, rumores, ecos y tecleado de máquinas de escribir se consumían las jornadas nocturnas, que son las más interesantes en el tráfigo periodístico. Cuando diariamente iba a entregar mis crónicas disfrutaba de la amena charla del jefe de redacción, Gustavo Vallejo Larrea, con quien comentábamos asuntos de diversa naturaleza. Teníamos la sensación de ser poseedores de primicias informativas anticipadas, de las cuales el público sólo se enteraría al día siguiente, ya que entonces no se conocía todavía el prodigio tecnológico de los medios actuales de información instantánea. Para contrarrestar los rigores de las frías noches capitalinas se instaló en un local cercano al periódico una cantina criolla con el sugestivo nombre de “El Sol”. No podía faltar por cierto un donaire de la sal quiteña y, entre bromas y veras, se decía que buena parte del personal del diario trabajaba “de sol a sol”. Yo no podía compartir las bondades de la amable bohemia porque al día siguiente, muy tempranamente, debía someterme al flagelo académico de las lecciones universitarias. Por eso entregaba mis crónicas en las primeras horas de la noche y me retiraba con el ánimo dispuesto a enfrentar las venideras jornadas en la Universidad y en la Cancillería.

En las principales páginas del periódico lucía su ingenio e idoneidad un elenco de muy buenas plumas. Sobre todo en los temas políticos había un despliegue de agudezas y no escasa causticidad, especialmente cuando tomó impulso la campaña presidencial. Los comentarios de Alejandro Carrión, bajo el urticante seudónimo de “El alacrán”, eran buenos ejemplos de periodismo combativo y bien escrito, para no citar sino un caso entre varios. La caricatura política en la página editorial era aguda y a veces provista de una mordacidad punzante, en la cual desfilaban los actores relevantes del escenario electoral. Esa caricatura estaba a cargo de Galo Galecio y, la deportiva, la diseñaba con maestría Asdrúbal de la Torre. Como se sabe, Asdrúbal es actualmente figura nacional en el campo de la caricatura política. Me viene a la memoria la caricatura del número inaugural del periódico, dedicada al servicio exterior y al canciller Neptalí Ponce Miranda, ajedrecista de estimables méritos. Bajo la leyenda de “tablero diplomático” aparecía el canciller proyectando su próxima jugada, con una pieza en

la mano. Inmerso en sus cavilaciones, se interrogaba: “¿y ahora dónde le pongo a éste?”, al tiempo que agitaba la figura de un caballo.

Mi incursión periodística tuvo un solo tropiezo cuando el Subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Carlos Tobar Zaldumbide, me convocó a su despacho para solicitarme, muy cortésmente, la renuncia a mi cargo, porque en la primera página de “El Sol” apareció una importante información sobre política internacional, que no figuraba en el diario “El Comercio”. En el apresurado juicio de la autoridad se me atribuía la entrega del documento oficial respectivo al periódico en el cual colaboraba. La decisión me tomó de sorpresa porque yo no había tenido tiempo todavía de revisar la prensa de ese día por mis ocupaciones universitarias. Le respondí al Subsecretario, con cortesía no exenta de firmeza, que no presentaría mi renuncia porque nada tenía que ver en el asunto. Me dijo que probara mi inocencia en el caso acudiendo al testimonio de Benjamín Carrión. Le hice notar que el principio jurídico universal de la presunción de inocencia me eximía de esa gestión, pero que no tenía ningún inconveniente en entrevistarme con el director del diario “El Sol”. Cuando personalmente le referí el extraño episodio al doctor Carrión, no pudo reprimir una sonora carcajada y tomó el teléfono para hablar con el embajador Tobar. Mi querido Carlos, le dijo en tono cordial, acabo de enterarme del lamentable equívoco del que ha sido víctima Miguel Vasco. El que tuvo la gentileza de proporcionarnos el texto de una nota procedente de Washington fue el embajador... Se trataba del director del departamento de la Cancillería donde yo trabajaba. Retorné al despacho del Subsecretario y recibí sus excusas, junto con las del Canciller, embajador Neptalí Ponce Miranda, en cuyo nombre me había solicitado la renuncia. Tiempo después colaboré, por varios años, con Neptalí Ponce en la misión diplomática en Río de Janeiro. En todo caso ambos embajadores me distinguieron con su amistad y alguna vez recordamos, de buen talante, este pintoresco incidente institucional. En 1987 el embajador Carlos Tobar Zaldumbide ejercía la función de Representante Permanente del Ecuador ante la ONU y yo la función análoga ante la Organización de Estados Americanos: ambos le acompañamos al Canciller de la República, Rafael García Velasco, en la Asamblea General de la ONU de ese año.

Al concluir los cursos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central emprendimos una gira de fin de estudios, en julio de 1952, por Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile, bajo la dirección

de dos destacados profesores, los doctores Andrés F. Córdova y Juan Isaac Lovato. Participamos de actos académicos en universidades oficiales de dichos países. Como vocal de asuntos culturales del curso me correspondía coordinar el programa de esas actividades y a veces asumir la representación en intervenciones orales. Los diálogos universitarios fueron gratificantes y provechosos. Las misiones diplomáticas ecuatorianas en cada una de las capitales no sólo nos brindaron las atenciones y cortesías usuales sino que nos facilitaron la toma de contactos institucionales.

Permanecemos pocos días en Lima, donde tomamos contacto con colegas universitarios y con los miembros de nuestra misión diplomática, quienes fueron pródigos en atenciones sociales. Fuimos atendidos por el embajador Gustavo Pérez Chiriboga y sus colaboradores Jaime Suárez Morales y Ernesto Valdivieso Chiriboga. Entre las curiosidades urbanas nos mostraron la sede de la embajada de Colombia, donde se alojaba desde 1949 Víctor Raúl Haya de la Torre, el famoso líder aprista que protagonizó uno de los casos más comentados en los anales de la historia del asilo diplomático latinoamericano. El edificio estaba rodeado de una profunda zanja, que dificultaba el acceso y revelaba el celo del gobierno peruano en materia de seguridad. La ambigua solución de este caso por la Corte Internacional de Justicia demandó algo más de 5 años y sigue siendo un referente histórico del valor jurídico y humanitario que los países de la región asignan a la institución del asilo, a diferencia de la posición de Estados Unidos y de Europa que sólo le reconocen un carácter humanitario pero no jurídico. De Lima continuamos por tierra nuestro periplo hacia La Paz, en un recorrido fatigoso pero muy pintoresco. Los contactos con los colegas bolivianos fueron igualmente interesantes y provechosos. Era perceptible el fervor político reinante en torno a la figura de Víctor Paz Estenssoro, líder que concitaba una amplia adhesión popular. El conocido poeta y diplomático, embajador Hugo Moncayo, nos guió durante nuestra estancia en la Paz, grata por cierto.

Tras un extenso recorrido por el mar vegetal de la pampa, llegamos a la capital argentina. Esa visita tuvo connotaciones especiales porque nuestro arribo a Buenos Aires, el día 26 de julio, coincidió con la muerte de Eva Perón, personaje mítico en el imaginario popular. Las manifestaciones de pesar por este hecho luctuoso alcanzaron dimensiones y características inusitadas. En varias esquinas de la gran ciudad

las gentes sencillas del pueblo se congregaban a lamentar la muerte de su conductora carismática y benefactora, en una extraña simbiosis de política y religión, velando la efigie de Evita, mito mediático de los pobres, de los “descamisados”. Una abigarrada multitud formaba columnas interminables para acceder al edificio oficial donde reposaba el féretro, colocado en un solemne escenario funeral. La urbe exhibía una atmósfera sombría y los servicios esenciales públicos y privados funcionaban con muchas restricciones. Por la brevedad de nuestra proyectada estancia desistimos del propósito de incorporarnos al masivo cortejo y optamos por trasladarnos a Montevideo, dejando para pocos días después la visita a Buenos Aires y La Plata. Importa recordar que, por disposición de Perón, el cadáver de Evita fue embalsamado y que, en 1955, cuando el dictador fue depuesto, desapareció misteriosamente y llevado en secreto a Italia, por razones políticas. Los restos mortales de la ex primera dama argentina le fueron entregados a Juan Domingo Perón en setiembre de 1971, en su exilio de Madrid.

En Uruguay fuimos recibidos por las facultades de derecho y notariado, en una ceremonia académica conjunta, con galas retóricas y gestos de confraternidad universitaria. Asistimos al día siguiente a una ilustrativa clase de procedimiento civil, a cargo del conocido catedrático Eduardo Couture. Por la noche, dentro de un prolijo programa de actividades culturales, se nos invitó a un concierto sinfónico en el Teatro Solís, donde nuestra delegación protagonizó un involuntario equívoco. Como habíamos viajado varios miles de kilómetros por vía terrestre, sin un breve descanso reparador, nos acosó un agotamiento físico insuperable: los integrantes del grupo, entiendo que sin ninguna honorable excepción, caímos abatidos por una ráfaga de sueño inclemente de caracteres hipnóticos. Al recobrar nuestra compostura escuchamos el tramo final de “Capricho Español”, de Rimsky Korsakov, y nos percatamos entonces que nos habíamos perdido un buen concierto. En diálogos ulteriores con nuestros colegas uruguayos tuvimos que ponderar nuestras preferencias en el repertorio de música clásica, incitados por la resurrección de nuestra autoestima.

El país estaba contagiado del pasajero entusiasmo por el sistema colegiado de gobierno, inspirado en el modelo suizo. Tuvimos oportunidad de ser recibidos y de dialogar con el Presidente del Consejo de Gobierno, gracias a la amable gestión del embajador Leopoldo Benites Vinuesa, nuestro representante diplomático. En determinado momen-

to, el Presidente hizo alusión a las mermas territoriales que habían sufrido nuestros dos países y a la inevitable necesidad de pensar, con grandeza histórica, menos en las frustraciones del pasado y más en las expectativas del futuro, con base en el actual patrimonio territorial.

Cuando retornamos a Argentina fuimos recibidos por las universidades de Buenos Aires y La Plata. Los diálogos académicos que mantuvimos fueron interesantes y la tónica de las intervenciones de los estudiantes argentinos revelaba una fuerte carga ideológica justicialista, con un discurso entre el capitalismo y el socialismo, tomado del corporativismo fascista italiano. Las autoridades fueron pródigas en el reparto de publicaciones con mensajes políticos de corte justicialista. Importa consignar el dato de que en los vocativos de los discursos argentinos generalmente figuraba esta expresión dirigida a nosotros: “dignos representantes de la tierra de Juan Montalvo y Velasco Ibarra”, con clara indicación de un elevado aprecio por el ex presidente ecuatoriano, quien ejerciera la cátedra en universidades del cono sur.

La última etapa de nuestro periplo universitario fue Santiago de Chile, a donde llegamos procedentes de Buenos Aires. Disfrutamos de la cálida hospitalidad chilena y pudimos apreciar el conocido rango académico de sus universidades. Días antes de nuestro arribo, el Encargado de Negocios, Jorge Fernández, había suscrito la bien conocida Declaración de Santiago sobre Zona Marítima, en la Primera Conferencia sobre Conservación y Explotación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur. Como se sabe, allí se constituyó el Sistema del Pacífico Sur, formado por Chile, Ecuador y Perú, que habrían de desempeñar papel importante en la formulación del nuevo derecho del mar, en el marco de las conferencias auspiciadas por las Naciones Unidas.

Como la citada Declaración de Santiago es un referente muy importante en el contexto del nuevo derecho del mar, creo que vale la pena parar mientes en sus aspectos esenciales, para conocimiento de quienes no están familiarizados con este asunto. Los Gobiernos suscriptores fundamentaron su decisión política en estas consideraciones: “1) Los Gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico.— 2) En consecuencia, es su deber cuidar de la conservación y protección de sus recursos naturales y reglamentar el aprovechamiento de ellos, a fin de obtener las mejores ventajas para sus respectivos países.— 3) Por lo tanto, es también su deber

impedir que una explotación de dichos bienes, fuera del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y conservación de esas riquezas en perjuicio de los pueblos que, por su posición geográfica, poseen en sus mares fuentes insustituibles de subsistencia y de recursos económicos que les son vitales”. Con base en estas consideraciones, plantearon en la parte declarativa del documento la necesidad de ampliar la extensión del mar territorial y de la zona contigua, en estos términos: “I) Los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan las costas de los países declarantes, hacen que la antigua extensión del mar territorial y de la zona contigua sean insuficientes para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas a que tienen derecho los países costeros.– II) Como consecuencia de estos hechos, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas.– III) La jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zona marítima indicada, incluye también la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde”. Los tres numerales restantes de la Declaración contienen aspectos complementarios del tema. En la actualidad, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, suscrita en Jamaica en 1982, contiene disposiciones de aplicación universal sobre la materia. Ecuador todavía no ha adherido a ese instrumento internacional.

Las peripecias y aspectos relevantes de la gira estudiantil fueron relatados gradualmente en las crónicas que yo remitía al periódico “El Sol”, para conocimiento de la opinión pública en general y, particularmente, de los familiares de los estudiantes integrantes del grupo.

Nuestro regreso a Quito coincidió con la reinstalación del velasquismo en el poder, fenómeno sociopolítico que ha gravitado en la política nacional durante cuatro décadas gracias al magnetismo personal y los singulares atributos de su líder, el doctor José María Velasco Ibarra. En el período inicial del nuevo gobierno le acompañé como jefe de gabinete al Subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador José Joaquín Silva, diplomático y literato, hombre de estimables prendas humanas y amigo cordial. Fue una experiencia sin duda interesante, porque

desde ese nivel institucional podía observar los pasos de la administración recién inaugurada en materia de política internacional y de movilización del personal diplomático.

Un día cualquiera y muy tempranamente le llamó por teléfono el Presidente Velasco Ibarra al Subsecretario Silva, quien no había llegado todavía a su despacho. Cuando me acerqué a contestar la llamada telefónica esperaba tener por interlocutor a un funcionario de la presidencia, pero para sorpresa mía quien hablaba era el propio jefe de Estado. Utilicé una excusa diplomática para justificar la ausencia de mi superior jerárquico y le expresé al presidente que me ponía a su disposición por si podía serle útil o al menos transmitirle al embajador Silva algún mensaje suyo. En su conocido estilo tonante e imperativo, me espetó esta prosaica pregunta: “Señor, ¿sabe usted a cómo está el kilo de plátanos en Nueva Orleans?”. Ante esta inesperada petición me limité a responderle que averiguaría enseguida el dato en la sección comercial y que se lo transmitiría por conducto de un funcionario de su despacho. Señor –me expresó– le espero al teléfono para conocer la información que le he solicitado. Tuve que descender al piso siguiente por la escalera, con una celeridad de atleta frustrado. Cuando irrumpí en la sección comercial y relaté el episodio, en estilo telegráfico, alguien me proporcionó el dato requerido. Retorné a mi despacho y el presidente seguía junto al teléfono. Le di la información, me agradeció lacónicamente y cerró la comunicación. Me imagino que esta inusual llamada telefónica debe haberse producido por la presencia de algún rico exportador en el despacho presidencial, que motivó esta extremada y anecdótica gestión. Poco después llegó el Subsecretario, con pausado ritmo diplomático, y le relaté lo ocurrido. Me escuchó con sensación de alivio y emitió un comentario de buen talante.

Ya había concluido el generoso reparto inicial de favores políticos en el servicio exterior cuando me convocó a su despacho el Subsecretario Silva. Inició la conversación con una ironía de corte volteriano sobre las presiones políticas y me mostró el último nombramiento de Tercer Secretario de la Embajada en Caracas, devuelto por un caballero velasquista inconforme, quien sin duda consideraba tal designación incompatible con sus méritos personales o con su aporte económico a la campaña electoral. José Joaquín, en tono coloquial y casi paternalista, me sugirió que aceptara ese remanente del reparto oficial, que es lo que solía quedar para los funcionarios de carrera. Tenía que

optar entre la permanencia en cancillería para la inminente promoción al rango inmediato superior, después de pocos meses, o el amable ostracismo diplomático. Acogí el consejo de mi superior y acepté la nominación a Caracas.

Como esta publicación espero que merezca la atención no sólo de personas vinculadas con el servicio exterior ecuatoriano sino de aquellas que tienen una visión distante del ejercicio diplomático, me permito consignar brevemente algunos aspectos sobre la materia, para que capten mejor las características del periplo profesional que yo iba a iniciar y me acompañen en mi recorrido por varias latitudes. Los agentes diplomáticos son funcionarios acreditados por un Estado para ejercer ante otro la representación y protección de sus derechos e intereses, así como los de sus nacionales. Constituyen uno de los órganos de las relaciones internacionales y, en consecuencia, coadyuvan a la ejecución de la política exterior de su Estado de origen. Por agente diplomático se entiende el Jefe de la Misión o un miembro del personal diplomático de aquélla. Yo iba a integrar el personal de la Embajada en Caracas, con el rango inicial de la carrera. En síntesis, el Jefe de Estado es quien dirige la política exterior y el Canciller es el responsable de su ejecución, mediante la acción del personal diplomático.

El envío o recepción de agentes diplomáticos se funda, según la doctrina tradicional, en el denominado “derecho de legación”, que emana de la soberanía de los Estados. La vigente Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) guarda silencio a este respecto; opta por afirmar que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo. En consecuencia, lo que cuenta para la doctrina contemporánea en materia de apertura de misiones y envío de agentes diplomáticos es dicho consentimiento, o sea la voluntad concordante de los Estados. Corresponde a cada Estado determinar las condiciones y requisitos que deben cumplir sus agentes diplomáticos para su designación en el exterior. En tratándose del nombramiento de un jefe de misión, el Estado acreditante ha de contar con el asentimiento previo del Estado receptor. Los demás miembros del personal de la misión se acreditan mediante notificación al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El agente diplomático tiene obligaciones que cumplir respecto de su Estado de origen y del Estado que lo recibe. Sus deberes, en el pri-

mer caso, pueden sintetizarse en: representación, observación y protección. En virtud de la representación, actúa como mandatario de su Gobierno en el trato de los asuntos de interés común; como observador, aprecia los aspectos esenciales de la vida del país donde se halla acreditado y los refiere a su propio Gobierno; y, la protección, le exige celosa custodia de los intereses y derechos de su Estado y los de sus compatriotas en el exterior. Sus deberes para con el Estado receptor son de índole diversa y comprenden: fiel observancia de las leyes locales, no intervención en actos de política interna, etc. Para responder a las exigencias de los tiempos actuales, el diplomático se ha tornado en uno de los agentes del desarrollo de su país. Por otra parte, los prodigios de la tecnología contemporánea ha modificado el estilo de la comunicación de los agentes diplomáticos con sus respectivas cancillerías en la medida en que los acontecimientos que se producen en un país se conocen casi instantáneamente en las diversas latitudes del planeta por obra del dinamismo de “los medios”. En tales circunstancias, la correspondencia diplomática exige no sólo la narración de hechos sino su interpretación, especialmente en función de los intereses nacionales.

El derecho internacional reconoce privilegios e inmunidades diplomáticos tanto a los agentes diplomáticos, en lo personal, como a las misiones del Estado acreditante en el exterior. Este tema comprende aspectos tales como: la inviolabilidad de la persona del agente diplomático y de su residencia, inmunidad de jurisdicción, exención de impuestos y gravámenes, inviolabilidad de la correspondencia oficial, etc.

Con conocimiento de estos antecedentes, someramente descritos, viajé a Caracas para iniciar el ejercicio de mis funciones.

CARACAS Y LA CONFERENCIA DE LA OEA

Resulta innecesario resaltar, por bien conocidas, las connotaciones de la relación histórica del Ecuador con Venezuela, que se identifican con la gesta libertaria de Bolívar y Sucre, origen de la fundación de nuestra república, presidida en sus años iniciales por el general venezolano Juan José Flores.

El Libertador Simón Bolívar, adalid insigne de la emancipación hispanoamericana y constructor de nobles utopías, luchó toda su vida por la creación de una América integrada, además de haber liberado a sangre y fuego varias naciones y haber constituido la Gran Colombia. En una irónica ponderación de su idealismo hiperbólico Bolívar solía compartir, en frase suya, con Cristo y con el Quijote, la estirpe de los “tres majaderos de la historia”. Por eso su genial intuición política le conduciría a la percepción de que su sueño de que “para nosotros la Patria es América” se trocaría más bien en una fragmentación de pequeños estados con situaciones conflictivas. Y tanto acertó en su pronóstico que alguien dijo, con propiedad, que el Libertador era “un historiador del futuro”, sobre todo a la luz de su famosa Carta de Jamaica (6 de septiembre de 1815). Su conocida frase póstuma de que había “arado en el mar” refleja el desencanto por el colapso de su utopía. Por lo que atañe a la vinculación de Bolívar con el Ecuador baste citar, entre otros episodios, su singular éxito político en la entrevista de Guayaquil con

San Martín, y su relación con Manuelita Sáenz, su admirable compañera de esplendores y ocasos, a quien conociera en Quito luego de la victoria de Sucre en Pichincha. El Mariscal Antonio José de Sucre, por su parte, formó su hogar en Quito, ciudad a la que amó entrañablemente y en la cual reposan sus restos mortales tras su alevé asesinato en Bermeo. En el Panteón Nacional de Caracas hay un cenotafio entreabierto, en espera de los restos del Mariscal, respetable actitud ésta que no trascenderá el ámbito de la simbología cívica.

A la luz de los múltiples nexos históricos ecuatoriano-venezolanos, la misión diplomática en Caracas ha sido siempre importante y grata. El titular de la misión era el embajador Homero Viteri Lafronte, figura destacada del servicio exterior ecuatoriano. Se inició en el servicio público como Ministro de Educación del gobierno de Isidro Ayora (1927) y luego ejerció la jefatura de varias representaciones diplomáticas importantes. Fue uno de los negociadores ecuatorianos de mayor relieve en el tratamiento del centenario problema territorial con el Perú. Se me ofrecía, por tanto, una buena oportunidad para adquirir positivas experiencias profesionales en mi primera salida al exterior.

El embajador Viteri tenía una meticulosidad didáctica para el desarrollo de los trabajos de la misión. Solía escribir a mano los borradores de las notas oficiales, cuyos temas los registraba previamente en orden cronológico, para compartirlos con sus colaboradores. Yo he practicado siempre la puntualidad, pero en la embajada me acosaba la sensación de un atraso rutinario porque cuando llegaba a mi despacho ya el embajador había descendido muy tempranamente de su dormitorio al escritorio, pues la cancillería y la residencia estaban instaladas en la misma casa, espaciosa y funcional.

De espíritu abierto y comunicativo, el embajador Viteri animaba diálogos interesantes e ilustrativos, sobre todo en temas históricos. Un asunto recurrente en sus evocaciones históricas era, por ejemplo, el relativo a la figura de Eugenio Espejo, ya que había realizado investigaciones y tenía manuscritos al respecto. Eran muy animados sus relatos sobre las secuelas de la revolución juliana, o sea la revolución militar del 9 de julio de 1925, y la inserción del doctor Isidro Ayora en el escenario político, a quien acompañó primero integrando una efímera junta de gobierno y después como miembro de su gabinete ministerial. Sus comentarios sobre la política de esa época eran chispeantes y llenos de una fina ironía. Sus recuerdos sobre personajes peruanos y episodios

relativos a las negociaciones del dilatado problema limítrofe eran muy ilustrativos. Hacía referencias amistosas respecto de personajes como Víctor Raúl Haya de la Torre, el famoso líder aprista a quien tuve oportunidad de tratar personalmente en 1979 cuando fue electo Presidente de la Asamblea Constituyente del Perú. Lo visité en mi calidad de Embajador en Lima.

MARCO DICTATORIAL

Venezuela soportaba los rigores de una severa dictadura militar. El general Marcos Pérez Jiménez asumió el poder a raíz del pronunciamiento castrense que se produjo como respuesta a la victoria electoral de los civiles en los comicios presidenciales convocados en 1952 por la Junta Militar, instalada por el derrocamiento del famoso novelista Rómulo Gallegos, quien instauró en 1948 un breve paréntesis democrático en el país.

El general Pérez Jiménez era de baja estatura, bien entrado en carnes, de blancura monacal y un aire de adiposa beatitud que encubría las asperezas de su ejercicio autoritario del poder. En su gobierno hubo persecución a sus adversarios políticos y, obviamente, ausencia de garantías ciudadanas, como en todo régimen de facto. En su administración se concedieron facilidades a las compañías extranjeras, se estimuló la expansión de la economía y se otorgaron incentivos a la inmigración, especialmente europea. Es por eso que se veían tantos obreros españoles, portugueses e italianos en las construcciones modernas de la ciudad capital.

En la Embajada tuvimos varios asilados que solían describirnos el repertorio de refinadas torturas del aparato de seguridad estatal. Eran profesionales modestos que habían incurrido en la riesgosa conducta de la disidencia política. A veces, en momentos de pausa laboral, cruzábamos unas pocas frases para atenuar la angustia de su encierro forzoso. Permanecieron algún tiempo con nosotros hasta que el gobierno venezolano les concedió los respectivos salvoconductos para su salida del país. Recuerdo que, por razones de seguridad, se les condujo en un automóvil de la misión al aeropuerto de Maiquetía, para embarcarlos en un avión comercial. Uno de ellos, dominado por la emoción y en agradecimiento a la hospitalidad recibida, puso en manos del embajador un prendedor de corbata con una pequeña esmeralda engasta-

da en un extremo. Después de varias expresiones circunstanciales, le dijo: “Es lo único que me queda. Me lo regaló mi padre antes de morir”. Pocos días después, el embajador me transfirió el simbólico obsequio en razón de que yo había sido el interlocutor más frecuente de los aislados, por mi función en la embajada. En los citados ajetreos compartí responsabilidades con mi buen amigo y compañero, el doctor Jorge Villacrés Moscoso, Primer Secretario, quien al retornar al Ecuador se dedicó al exitoso ejercicio de la cátedra universitaria en Guayaquil.

El general Pérez Jiménez, como se recordará, fue derrocado en 1958 por un sector del ejército, con apoyo popular.

DÉCIMA CONFERENCIA INTERAMERICANA

El acontecimiento internacional más importante ocurrido en Venezuela en 1954 fue la celebración de la X Conferencia Interamericana, del 1 al 28 de marzo de ese año. Se trataba de la décima reunión de la serie iniciada en Washington en 1889 – 1890 y la primera de acuerdo con la Carta de la OEA (Bogotá, 1948).

La conferencia tenía una nutrida agenda y en ella se aprobaron 3 convenciones y 117 resoluciones sobre temas de diversa naturaleza. Se adoptaron la Convención sobre Asilo Diplomático, la Convención sobre Asilo Territorial y la Convención para el Fomento de las Relaciones Culturales Interamericanas. Los instrumentos relativos al asilo son singularmente importantes por la trascendencia de dicha institución en el derecho internacional americano, debido a los casos cíclicos de inestabilidad política de países de la región y la necesidad de proteger a personas perseguidas por motivos o delitos políticos.

Bien se conoce que los países latinoamericanos han conferido rango jurídico relevante al asilo diplomático. Los europeos y Estados Unidos, en cambio, no reconocen la doctrina del asilo como parte del derecho internacional. En el marco del sistema interamericano hay 4 convenciones que norman las relaciones en la materia: la Convención sobre Asilo (La Habana, 1928); la Convención sobre Asilo Político (Montevideo, 1933); y las dos citadas Convenciones de Caracas. La Convención de La Habana establece que la protección del asilo sólo ampara a los delitos políticos y no a los comunes y que ha de concederse sólo en casos de urgencia, pero nada dice en torno a la calificación del delito. El instrumento de Montevideo introdujo la figura de que la



Entrega de la condecoración "Francisco de Miranda" por el Embajador de Venezuela en Quito al Alcalde de la ciudad, Arquitecto Sixto Durán Ballén; al Embajador Miguel A. Vasco y al Señor Guillermo Borja Enríquez.

calificación de la delincuencia política corresponde exclusivamente al Estado asilante. Las Convenciones de Caracas son las más completas, pues codifican y perfeccionan los elementos constantes en los instrumentos anteriores.

De las numerosas resoluciones sometidas a la aprobación de la conferencia, la que concitó la mayor atención, por su contenido político, fue la titulada “Declaración de Solidaridad para la Preservación de la Integridad Política de los Estados Americanos contra la Intervención del Comunismo Internacional”. El último párrafo de esta extensa resolución señala que “Esta declaración de política exterior hecha por las repúblicas americanas en relación con los peligros de origen extracontinental está destinada a proteger y no a menoscabar el derecho inalienable, de cada Estado americano, de elegir libremente su propia forma de gobierno y sistema económico, y de vivir su propia vida social y cultural”. No hay que olvidar que la reunión interamericana se realizó en el marco de la guerra fría y de la confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con la consiguiente distribución de áreas de influencia.

El Secretario de Estado, Foster Dulles, estuvo pocas horas en Caracas y dio la impresión de haber viajado con el propósito prioritario, acaso único, de impulsar la aprobación de dicha resolución. Hubo intensos cabildeos y presiones norteamericanas en ese sentido. Mediaba la circunstancia de que el régimen guatemalteco del Presidente Jacobo Arbenz, electo en 1950, había implantado un ambicioso proyecto de reforma agraria, que se estrelló contra los intereses de las grandes compañías estadounidenses y de la oligarquía rural, razón por la cual fue calificado de comunista por los Estados Unidos. Guatemala era vista como una especie de Cuba de la época. Por esa causa el Canciller Guillermo Toriello desempeñó un rol protagónico en los debates políticos de la conferencia. Como se recordará, pocos meses después fue defenestrado el gobierno de Arbenz por el coronel Castillo Armas, con apoyo de los Estados Unidos.

La declaración citada, en síntesis, condena las actividades del movimiento comunista internacional, por constituir una intervención en los asuntos americanos; reitera la fe de los pueblos de América en el ejercicio efectivo de la democracia representativa; declara que el control de las instituciones políticas por parte del movimiento internacional comunista representaría una amenaza a la soberanía e independen-

cia política de los Estados americanos y pondría en peligro la paz de América; y consigna, finalmente, unas recomendaciones a los Estados miembros para contrarrestar las actividades subversivas del comunismo internacional

En una de las sesiones plenarias surgió un acalorado debate sobre el problema territorial ecuatoriano – peruano entre el embajador José Ricardo Chiriboga Villagómez, del Ecuador, y el embajador Víctor Andrés Belaúnde, del Perú, con sendas exposiciones sobre las respectivas posiciones nacionales.

Es interesante consignar el dato de que el Gobierno de Venezuela, poseedor de una riqueza petrolera muy significativa, brindó a las delegaciones asistentes una caudalosa hospitalidad. La Cancillería distribuyó generosamente colecciones completas de libros sobre los valores destacados de su país, particularmente sobre la vida y obra del Libertador Simón Bolívar, cuyo pensamiento político abrió cauces a la instauración del Sistema Interamericano.

Al finalizar la reunión se eligió a nuestra capital como sede de la XI Conferencia Interamericana, que a la postre no llegó a celebrarse. Se hicieron por cierto preparativos compatibles con la importancia del compromiso adquirido por el país. Las obras de infraestructura mejoraron la faz de la ciudad, como la modernización del aeropuerto, la construcción del Palacio Legislativo y del hotel Quito, la restauración del Palacio Nacional. Fueron de tal envergadura estas mejoras urbanas que el gracejo criollo acuñó el ingenioso comentario de que la XI Conferencia Interamericana había sido el mejor alcalde de Quito. Conviene consignar también el dato de que con esa oportunidad se editó la importante Biblioteca Ecuatoriana Mínima, que iba a distribuirse entre las delegaciones asistentes y que ha prestado relevantes servicios a la imagen cultural de la nación.

No podría cerrar este breve capítulo sin consignar el dato, en el ámbito cultural, de que Oswaldo Guayasamín presentó en Caracas, en 1954, su extraordinaria colección pictórica titulada “El Camino del Llanto”, que alcanzó un resonante éxito en la crítica artística local y en el numeroso público que visitaba la exposición. La presencia de nuestro pintor emblemático fue cálidamente acogida en los círculos artísticos y culturales de la capital venezolana.

MISIÓN EN BRASIL

La víspera de la clausura de la Décima Conferencia Interamericana, el Canciller Luis Antonio Peñaherrera me convocó al escritorio del Embajador Viteri Lafronte. De muy buen talante me dijo: “Homero me ha referido la holgura de que usted disfruta en Caracas”. El embajador se ha quedado corto en su apreciación, le respondí, siguiéndole la broma. Es que en esa época el costo de vida en la capital venezolana era uno de los más altos del mundo. Se decía, en tono humorístico, que allí había sólo dos cosas baratas: el petróleo y el dólar. El Canciller cerró su amable diálogo con el anuncio de que había decidido disponer mi traslado a otra misión diplomática. Semejante decisión tonificó mi frágil creencia en los milagros cuando días después recibí un cablegrama con la indicación de que Río de Janeiro era mi nuevo destino.

A mediados de 1954, mi señora y yo nos trasladamos a la capital del Brasil, en un vuelo con escalas. Como el primer tramo del vuelo del avión brasileño concluía en Belem do Pará, pudimos contemplar con asombro la gigantesca desembocadura del río Amazonas, simbólico anuncio de que habíamos ingresado en el país – continente. Cuando en 1994 se realizó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en esa ciudad septentrional pude evocar y revivir aquella experiencia inolvidable. Ese momento yo ejercía la representación de la Secretaría General de la OEA en Brasilia, por amable invitación del embajador Joao Baena Soares, quien a la sazón desempeñaba la función de Secretario General de la Organización.

El ejercicio de mis funciones en Brasil estaba animado de entusiasmo y expectativas por las especiales características de la misión diplomática del Ecuador. Además de tratarse de un país emblemático de la región, era sede de la garantía del Protocolo de Río de Janeiro, suscrito entre Ecuador y Perú en enero de 1942, lo cual me permitiría asimilar nuevas experiencias en ese importante campo.

El cuerpo diplomático era numeroso y había un círculo de funcionarios no jefes de misión al cual me incorporé poco tiempo después de mi arribo. En ese grupo, integrado por diplomáticos procedentes de diversas regiones geográficas del mundo, prevalecía una atmósfera de cálida comunicación amistosa y profesional. En ese ámbito conocí, por ejemplo, al entonces consejero de la Embajada del Perú, Javier Pérez de Cuellar, quien fuera electo Secretario General de las Naciones Unidas en 1981, o al secretario de aquella misión, Felipe Valdivieso, quien en la década de los ochenta ejerciera la función de Embajador del Perú en el Ecuador. Recuerdo que una de las primeras invitaciones informales que recibí de mis colegas fue para conocer el famoso estadio Maracaná y presenciar un encuentro de fútbol entre dos equipos locales de postín, episodio que relato porque tuvo un final anecdótico divertido. No hay que olvidar, por cierto, que el fútbol y el carnaval son dos componentes esenciales del imaginario popular brasileño. Fuimos al espectáculo deportivo varios secretarios de embajadas latinoamericanas. Cuando al final del partido comenzó a dispersarse la abigarrada y fanática multitud, entre gritos antagónicos por Flamengo y Vasco da Gama, fue difícil mantener la unidad física de nuestro grupo. Ya casi a la salida del estadio, uno de mis colegas extrañados en la marea humana me dirigió alguna expresión, con voz estridente, que comenzaba así: “Vasco, Vasco, hasta pronto...”. En el acto sentí el peso de numerosas miradas hostiles, porque yo había estado confundido, sin saberlo, en un enjambre de “torcedores” del Flamengo, equipo de gran arraigo popular, que ululantes abandonaban el estadio con alusiones estridentes de rivalidad deportiva.

Este episodio trajo a mi memoria un incidente político registrado en Brasil en la Segunda Guerra Mundial, que yo había leído en alguna publicación. En Brasil y en los países del cono sur había un significativo sector simpatizante del Eje (Alemania, Italia y Japón) y partidario de la neutralidad en el conflicto, en contraposición a los demócratas, que propugnaban la adhesión a la causa de los Estados Unidos y de

los aliados en general. En el grupo antidemocrático, dentro del gobierno de Getulio Vargas, figuraba el jefe de policía de Río de Janeiro, Filinto Müller, quien quiso prohibir una manifestación pública el 4 de julio de 1942, organizada por la Unión Nacional de Estudiantes, en apoyo de los Estados Unidos. Para llevar adelante su decisión, el funcionario demandó el apoyo del Ministro de Justicia, Vasco Leitaó de Acurio, quien no sólo que se lo negó sino que ordenó su arresto. El incidente se tornó público y cuando la multitud desfilaba por las calles de Río de Janeiro gritaba: “Vasco: uno a cero”, en alusión a la prisión de Filinto Müller ordenada por el Ministro, homónimo del equipo carioca Vasco da Gama. Cosas del deporte, de la política o del buen humor de los pueblos.

SUICIDIO DE GETULIO VARGAS

Entre julio y agosto de 1954 se ahondó la crisis política que enfrentaba el gobierno de Getulio Vargas, con una oposición beligerante y muy activa. A mediados de agosto, la presión de los militares, que exigían la renuncia del presidente, parecía insostenible. El atentado contra el periodista de oposición Carlos Lacerda, en la calle Toneleros, por elementos vinculados a la guardia presidencial, que terminó por afectar a la integridad personal del mayor Vaz, agravó la situación. Recuerdo que la intervención del general Juarez Távora en un canal de televisión, planteando la dimisión del mandatario, tuvo matices dramáticos. Fue notable también el discurso del diputado federal Afonso Arinos de Melo Franco, pronunciado el 9 de agosto de 1954, exigiendo la renuncia de Getulio Vargas. El jefe de Estado resistió en palacio la arremetida castrense y de la oposición conservadora; no cedió a la presión y optó por el suicidio, el 24 de agosto. Causó dramático impacto en la opinión pública brasileña este lacónico y vibrante testamento político dirigido a su pueblo, que me permito traducir al español: “Cada gota de mi sangre será una llama inmortal en vuestra conciencia y mantendrá la vibración sagrada para la resistencia. Al odio respondo con el perdón. Y a los que piensan que me derrotaron respondo con mi victoria. Era esclavo del pueblo y hoy me libero para la vida eterna. Pero ese pueblo de quien fui esclavo no será más esclavo de nadie. Mi sacrificio quedará para siempre en su alma y mi sangre será el precio de su rescate.— Lu-

ché contra la explotación del Brasil. Luché contra la explotación del pueblo. He luchado de pecho abierto. El odio, las infamias, la calumnia, no abatieron mi ánimo. Os dí mi vida. Ahora ofrezco mi muerte. Nada recelo. Serenamente doy el primer paso en el camino de la eternidad y salgo de la vida para entrar en la Historia”.

El embajador Arturo Borrero Bustamante acudió al palacio de Catete para presentar sus condolencias al gobierno. Amablemente me invitó a que lo acompañara y por esa razón tuve la oportunidad de ver en el catafalco al famoso personaje, que gravitó durante un cuarto de siglo en la vida política del Brasil. Para emprender su viaje sin retorno, Vargas estaba cuidadosamente vestido; su rostro tenía una expresión serena y un hilo de sangre teñía la comisura de sus labios, señalando el desenlace de la tragedia. El personaje encarnaba la imagen de una muerte con dignidad.

La revolución de octubre de 1930 defenestró al presidente Washington Luis Pereira de Sousa, en beneficio de Getulio Vargas, poniendo fin a la primera república e instalando en el poder a la dictadura varguista hasta 1945. Este acontecimiento político dio término a la fórmula de alternabilidad en el poder de los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, denominada “café con leche”, por la producción característica de ambos estados: cafetalero, el primero, y ganadero el segundo. Estos dos estados configuraban el núcleo hegemónico de poder en Brasil. Getulio Vargas, como se sabe, procedía del estado periférico de Río Grande do Sul. Conviene registrar el hecho de que el régimen constitucional se había mantenido sin interrupciones desde la proclamación de la República Federal (1894) hasta 1930, estabilidad institucional que le permitió al Brasil convertirse en uno de los países más prósperos del continente.

Getulio Vargas fue sin duda la figura dominante en el escenario político de su época. Accedió al poder por la fuerza, en 1930; instauró con apoyo militar el Estado Nuevo, en 1937, inspirándose en el corporativismo fascista de Italia y Portugal; los mismos militares lo echaron del gobierno en 1945; y, en 1951, alcanzó una notable victoria al ser electo por sufragio universal y por primera vez Presidente de la República. Su suicidio, en 1954, cerró un capítulo histórico en la vida política de su país. Tras dos presidentes interinos le sucedió Juscelino Kubitschek (1956), quien estimuló la modernización del país por la vía del desarrollo de la industria pesada y la integración de las regiones interio-

res, mediante la construcción del eje geopolítico de Brasilia, la nueva capital. Es que Brasil, después de su expansión territorial hacia occidente, fue históricamente proyectado hacia el litoral atlántico: Brasilia le dio viabilidad al enlace de las diversas regiones del país.

LA CUESTIÓN TERRITORIAL

Veamos, en ceñida síntesis, la cuestión territorial con el Perú, que era el tema prioritario de la agenda de la Embajada en Río de Janeiro. A partir de la cédula de erección de la Real Audiencia de Quito, de 29 de agosto de 1563, el itinerario histórico del patrimonio territorial del Ecuador ha tenido unos desarrollos que han comprometido el curso de sus relaciones con sus vecinos, fundamentalmente con el Perú. En efecto, ambos países mantuvieron un conflicto territorial desde los albores de su independencia, sobre la base de títulos jurídicos emitidos por el Rey de España en el período colonial. El referente histórico más relevante en ese contexto fue el Tratado de Guayaquil de 1829, suscrito al término de la guerra entre Perú y Colombia, de la cual formaba parte la Presidencia de Quito como Departamento del Sur. Este instrumento fue el principal baluarte de los derechos territoriales del Ecuador, porque reconoció la línea tradicional que dividía la Presidencia de Quito del Virreinato del Perú. El Perú no cumplió con ese tratado.

El centenario debate diplomático-jurídico bilateral y las tensiones fronterizas intermitentes, agravadas por una política peruana que privilegiaba la ocupación territorial de facto, desembocaron en una confrontación armada, en julio de 1941, que terminó con la imposición al Ecuador del Protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. La antigua capital del Brasil fue sede de la garantía de dicho instrumento.

Fueron tan evidentes los aprestos bélicos del Perú que, el 8 de mayo de 1941, los gobiernos de Argentina, Brasil y Estados Unidos cursaron sendos telegramas a ambos países expresándoles su honda preocupación por los peligrosos desarrollos que presentaba la controversia, en momentos en que la solidaridad continental era vital para las repúblicas americanas, “enfrentadas a una crisis en las relaciones mundiales de una magnitud hasta ahora totalmente desconocida...”. Por ésta y otras consideraciones los gobiernos citados ofrecieron al Ecuador y al Perú “sus amistosos servicios para promover la pronta

solución, equitativa y final del diferendo, juntamente con los de aquellos otros gobiernos que ambos desearan invitar en la forma que juzguen más adecuada y ventajosa”. En nuevo cablegrama, de 20 de mayo, dichos gobiernos consignaron su complacencia por las respuestas de Ecuador y Perú, a la par que expresaron su intención de plantearles sugerencias orientadas a promover la celebración de una conferencia entre representantes de las Partes y de los gobiernos oferentes de los amistosos servicios.

Desafortunadamente la iniciativa de los tres gobiernos no fue acompañada de gestiones ulteriores y un incidente fronterizo de poca monta propició la iniciación de enfrentamientos bélicos en varios frentes, a partir del 5 de julio. La Cancillería del Ecuador procedió a informar de inmediato a las demás cancillerías de América sobre estos acontecimientos, que confirmaban la rumoreada agresión peruana.

Los representantes de Argentina, Brasil y Estados Unidos entregaron el 9 de julio a las cancillerías de los dos países un memorando por el cual proponían que ambos gobiernos retirasen sus fuerzas armadas a 15 kilómetros de la línea del denominado *statu quo* (frontera de facto), como medida encaminada a evitar nuevos incidentes. Esta propuesta fue aceptada por ambos gobiernos, pero ante una nueva dilación de los gobiernos oferentes el Perú declaró concluida la mediación y el 22 de julio movilizó su ejército a la zona fronteriza. Al siguiente día inició sin justificación alguna los ataques definitivos a las guarniciones militares de la provincia de El Oro, con una abismal asimetría de fuerzas, al extremo de que el 26 de julio habían sido ya ocupados todos los puestos ecuatorianos.

En adelante gravitó la acción de los tres países mediadores, en procura de un arreglo amistoso del problema sobre la base del retiro de las tropas peruanas de los territorios ocupados; pero entonces ocurrió una emergencia internacional que afectó el curso de la cuestión ecuatoriano-peruana: el ataque japonés a Pearl Harbour, el 7 de diciembre de 1941, que motivó el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y la urgente convocatoria a la III Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos.

La convocatoria y el desarrollo de la citada conferencia interamericana le situaron al Ecuador en un marco histórico de caracteres dramáticos, pues estaba en juego el destino de su patrimonio territorial. Hubo por momentos una duda razonable sobre la participación ecua-

toriana en la reunión de consulta, pero con realismo político se optó por la concurrencia del Canciller Julio Tobar Donoso y de una importante delegación nacional.

Ecuador asistió a la conferencia en el entendido de que no se suscribiría un tratado de límites definitivo sino un convenio previo, conforme a la fórmula propuesta el 27 de diciembre por los mediadores en el sentido de que las Partes tomaran como base de negociación el statu quo de 1936 (posiciones que ambos países ocupaban hasta la suscripción del acta de Lima, el 6 de julio de 1936) y situaran sus fuerzas a 15 kilómetros de esas posiciones. Pero la dinámica de la III Reunión de Consulta de los Cancilleres, con una visión estricta de la solidaridad continental hacia los Estados Unidos frente al ataque japonés de Pearl Harbour, impulsó a los mediadores (que habían observado un espíritu conciliador entre las Partes) a apremiar tenazmente a la delegación ecuatoriana a que aceptara un arreglo definitivo, aduciendo para ello graves razones, como la conclusión de la labor mediadora o la potencial ocupación de Guayaquil por el Perú, según relata el Canciller Tobar Donoso. El hecho cierto es que al margen de la reunión interamericana y en nombre de la solidaridad hemisférica se le impuso al Ecuador el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, de 29 de enero de 1942, con la garantía de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile.

El doctor Julio Tobar Donoso, en su docta relación histórico-jurídica del problema territorial, publicada bajo el título de “La invasión peruana y el Protocolo de Río”, describe el drama lacerante que vivió en su función de Canciller de la República por los desarrollos del problema al margen de la Conferencia de Río, así como por la reacción interna en el Ecuador por la firma del protocolo, que expresaba la respuesta de un pueblo herido en su honor y su patriotismo. Una versión diferente sobre el drama nacional, escrita con erudición y rebeldía por el embajador Gonzalo Escudero Moscoso, miembro de la delegación nacional, figura en su libro “Justicia para el Ecuador”, que contiene posiciones personales del autor y revela los desarrollos de una trama conducente a la imposición de una injusticia internacional. Ello no obstante, vale la pena reproducir dos de los párrafos finales de este libro (publicado en 1968): “Con excepción del diferendo territorial, todo les une y nada les separa al Ecuador y al Perú. Anhelo vivamente, con el más encendido fervor de mi espíritu, que constituya el privilegio de las nue-

vas generaciones de los dos países, en aras de su fraternal reconciliación, la empresa de acometer audazmente la solución del diferendo en términos de equidad y de justicia para fundar sobre ella su amistad imperecedera y su solidaridad constructiva.— Valga apenas esclarecer que mis imputaciones al Perú en la controversia territorial no han sido jamás proferidas contra su pueblo sino contra sus gobernantes y contra la política exterior que asumieron y practicaron en quebranto de los derechos ecuatorianos. Por lo mismo, nada en esta obra ha entrañado ni remotamente la sombría figura del odio ni menos del ánimo vindictivo contra ese pueblo”.

El doctor Tobar Donoso trazó en su citada relación histórica esta síntesis sobre los factores que nos obligaron a suscribir el Protocolo: “Todo concurría, pues, a volver necesario ese último recurso conducente a la solución pacífica de la antigua controversia. Nuestro desvalimiento militar hacía inevitable la ocupación de Guayaquil, puerta de la patria, cuna de los más egregios varones que han honrado el Poder Público, manantial de riqueza para el Fisco y la Nación. La toma de Guayaquil ponía a la República en peligro gravísimo de descomposición y preparaba, acaso, su división. El mantenimiento del problema implicaba la renuncia de los Mediadores o, cuando menos, su indiferencia ante la nueva agresión. Significaba también el encogimiento de hombros de América entera, ante la cual el Perú nos habría presentado como renuentes a todos los deberes de solidaridad derivados de la amenaza extracontinental.... La voz inefable del deber patrio me obligó a cerrar los ojos ante los reclamos de la fama y a seguir la vía dolorosa del Calvario político, a trueque de librar al país de la aterradora expectativa que ensombrecía el horizonte nacional....(pag. 449)”. En todo caso conviene poner de presente que, en un folleto titulado “El Protocolo de Río de Janeiro ante la Historia”, difundido con dicho instrumento, el Gobierno del Perú reconoció haber obtenido por aquel tratado 200.000 kilómetros cuadrados más que el Tratado de Guayaquil, de 22 de setiembre de 1829.

La ejecución del protocolo, como se sabe, tuvo tropiezos desde la fase inicial del proceso demarcatorio porque surgieron problemas que indujeron al Ecuador a invocar la inejecutabilidad del instrumento, con base en la inexistencia de un elemento geográfico esencial previsto en la zona meridional de Zamora-Santiago. El desarrollo del proceso, hasta donde llegó a ejecutarse, se caracterizó por una serie de incidencias

que modificaron en algunos sectores la línea de frontera acordada en Río. En ese contexto jugó un papel importante el árbitro brasileño Braz Dias de Aguiar, cuyo fallo resolvió varios problemas demarcatorios. El más importante de esos problemas surgió, como queda dicho, en la zona comprendida entre los ríos Zamora y Santiago. Para superar los obstáculos de una topografía dificultosa, las Partes solicitaron la cooperación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que elaboró un mapa aerofotogramétrico de la región, en el cual se demostró la inexistencia del divisor de aguas, previsto en el Protocolo, entre el Zamora y el Santiago por la interposición del río Cenepa, que constituye un tercer sistema fluvial, con una extensión superior a los 190 kilómetros. Ello dio asidero al planteamiento ecuatoriano de la inejecutabilidad del Protocolo, por la inexistencia de un elemento geográfico importante, así como a la suspensión de los trabajos demarcatorios.

El Perú ha sostenido la inexistencia de dicho problema, porque éste habría sido resuelto, a su juicio, por el laudo arbitral de Dias de Aguiar, de julio de 1945, relativo a varias discrepancias surgidas en la demarcación de la línea establecida en el Protocolo de Río. La discrepancia surgida en el sector septentrional de esa zona la resolvió el árbitro a favor del Ecuador. Pero el problema en el sector meridional apareció solo en 1947, a raíz de la entrega a las Partes del mapa aerofotogramétrico. El árbitro, no podía, en consecuencia, solucionar en 1945 un problema suscitado en 1947.

Dada la naturaleza de este trabajo omitimos la mención de otros desacuerdos. No dejaremos de señalar, empero, que el planteamiento ecuatoriano de la inejecutabilidad del Protocolo (1951), de la nulidad (1960) y de la transacción honrosa (1968), junto con la rotunda y sistemática negativa peruana a reconocer la existencia del problema territorial con el Ecuador, generaron una atmósfera política propicia a la aparición de incidentes cíclicos. Un diálogo instrumentado entre las Partes en la década de los años setenta, para aproximar posiciones, no logró modificar esa realidad.

Estos breves datos referenciales sobre un tema que ha sido tratado en extensos estudios específicos, tanto en Ecuador como en Perú, apuntan a significar que nuestra Embajada en Río de Janeiro centraba su atención en la cuestión territorial, a la par que impulsaba otros asuntos de interés en el marco de las relaciones bilaterales ecuatoriano-brasileñas.

ACTIVIDADES EN LA EMBAJADA

En los primeros meses del ejercicio de mi función de Secretario de la Embajada, compartí responsabilidades con el Consejero Julio Prado Vallejo, bajo la dirección del Embajador Arturo Borrero Bustamante, quien había desempeñado hacía poco tiempo y por breve lapso el cargo de Canciller de la República. Desde 1955 hasta 1960 permaneció frente a la misión el Embajador Neptalí Ponce Miranda, a quien acompañé hasta las postrimerías de su gestión. Durante ese período tuve por compañeros, sucesivamente, a los Ministros-Consejeros Teodoro Bustamante Muñoz y Armando Pesantes García, así como a mi colega Alfredo Luna Tobar, todos ellos amigos de alta estima.

Entre las diversas tareas concernientes a mi rango tenía la del manejo del esotérico mecanismo de la clave para el intercambio de informaciones reservadas y confidenciales con nuestra Cancillería. Huelga decir que las periódicas reuniones de los representantes diplomáticos de los 4 países garantes entrañaban para mí el ejercicio de un masoquismo cívico y burocrático por la naturaleza y extensión de los mensajes criptográficos que debía despachar. El jefe de misión tomaba contacto con sus colegas en las horas inmediatas al término de la reunión, se procesaba la información obtenida y se afinaba el texto del cablegrama que debía enviarse a Quito, ya iniciada la noche. Venía entonces la tarea de cifrar el mensaje, que demandaba varias horas de tedioso esfuerzo. Ahora la Cancillería y las misiones diplomáticas disponen de sofisticadas máquinas de sencillo manejo y casi imposible violación del secreto de los códigos. Lo que teníamos entonces era casi una tecnología artesanal en comparación con los aparatos actuales. Por la urgencia del despacho y su intrincada extensión, el ministro-consejero compartía a veces conmigo ese entretenimiento atípico.

Como en algunos otros temas, he sido escéptico respecto de la infalibilidad de las claves. Para respaldar mi heterodoxia, el embajador Homero Viteri Lafrontera me contó alguna vez en Caracas, con adornos de buen humor, que un día acudió a nuestra misión diplomática en Lima una persona interesada en venderle un ejemplar de nuestra clave “Espinosa”... Claro que en Río de Janeiro utilizábamos otras claves mejor elaboradas por pacientes colegas diplomáticos: disponíamos de las claves Monteverde y Valdez. En homenaje al esfuerzo de Olmedo



Visita oficial al Ecuador del Ministro de Relaciones Exteriores
del Brasil, Gibson Barbosa.

Monteverde y Rodrigo Valdez lo único que puedo asegurarles es que en Río nunca recibimos una oferta semejante a la de Lima.

VISITAS DE CANCELLERES

El Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Carlos de Macedo Soares, realizó una visita oficial al Ecuador en marzo de 1958. Después de un amplio y cordial intercambio de impresiones y puntos de vista sobre el conjunto de las relaciones ecuatoriano-brasileñas, así como de las cuestiones de interés hemisférico, los Cancilleres Carlos Tobar Zaldumbide y Carlos de Macedo Soares emitieron el 5 de marzo la Declaración de Quito, con expresiones sustantivas de voluntad política concordante sobre las relaciones bilaterales e interamericanas.

Además de este instrumento de carácter principista se procedió a un canje notas por el cual Ecuador y Brasil, recíprocamente, declararon puertos libres a las ciudades de San Lorenzo y Manaos. El Gobierno del Ecuador, con el ánimo de estrechar los lazos que unen a los dos países y tomando en cuenta la ley por la cual el Gobierno del Brasil determinó la creación de una zona libre en la ciudad de Manaos para que sea utilizada por los países de la Hoya Amazónica, resolvió ofrecer al Brasil un puerto libre sobre el Pacífico, otorgándole los derechos necesarios para usarlo como entrada y salida de productos brasileños, lugar de almacenamiento o base de operaciones para el intercambio comercial. Este acuerdo se enmarca en el contexto geopolítico del Brasil referido a su anhelada salida hacia el Océano Pacífico, desde la perspectiva de su singular condición de país-continente, con un amplio elenco de intereses y expectativas.

El Canciller Tobar Zaldumbide correspondió a la visita de su homólogo brasileño y permaneció en Río de Janeiro entre los días 3 y 8 de diciembre de 1959. El Canciller brasileño era entonces el doctor Horacio Lafer. La declaración conjunta que emitieron al final de la visita tomó como marco de referencia los acuerdos de Quito del año anterior, poniendo énfasis en la recíproca concesión de puertos libres en San Lorenzo y Manaos y la creación de una Comisión Mixta para impulsar los proyectos bilaterales.

ALGO SOBRE ITAMARATY

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil tiene un bien ganado prestigio en el escenario diplomático latinoamericano por la observancia de una tradición institucional cimentada en una política exterior coherente, que se nutre del equilibrado manejo de un idealismo pragmático, en manos de un elenco profesional bien capacitado.

Su origen histórico se confunde con la instalación temporal del Rey Juan VI en Brasil, a raíz de la invasión napoleónica a Portugal. El monarca creó el Ministerio de Negocios Extranjeros y de Guerra por decreto de 11 de marzo de 1808. Pocos años después se le desvinculó de los asuntos de la guerra y una vez independizado Brasil de Portugal se dictó el decreto de 13 de noviembre de 1823, por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores alcanzó autonomía. Como este Ministerio está vinculado con la noción de soberanía, está también ligado al hecho histórico de la erección del Estado independiente. Importa recordar que a diferencia de los demás Estados latinoamericanos, que libraron cruentas guerras de independencia con la metrópoli española, Brasil se emancipó de Portugal mediante el pacífico y prudente “grito de Ipiranga”. En 1807, ante la amenaza de la invasión de las tropas napoleónicas, el regente de Portugal decidió trasladarse con su corte a Brasil, donde organizó su gobierno, transformó la colonia en reino y asumió la corona real. Juan VI ejerció la regencia y el reinado entre 1808 y 1821. Resolvió retornar a Lisboa e instituyó a su hijo Pedro como regente de Brasil. Pedro I declaró la independencia el 7 de setiembre de 1822, a orillas del río Ipiranga, y fue proclamado emperador el 12 de octubre. Las peculiaridades de la creación del Brasil independiente han influido en la instalación de una política exterior diferenciada y con características propias.

El personaje emblemático de la diplomacia brasileña ha sido el Barón de Río Branco, quien prestara eminentes servicios al imperio consolidando la unidad nacional y fijando sus fronteras a través de exitosas negociaciones jurídicas y diplomáticas. El Instituto Río Branco, entidad en la cual se forman los profesionales de la diplomacia, se fundó en 1945, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con oportunidad del centenario del nacimiento del ilustre personaje.

La Cancillería tenía su sede en Río de Janeiro en el Palacio de Itamaraty, actualmente convertido en museo. Uno de los elementos dis-

tintivos del noble edificio era un gran espejo de agua, rodeado de palmeras ornamentales, donde deambulaban unos cisnes petulantes de silueta elegante y colorida. Recuerdo haber asistido a una recepción al aire libre en ese escenario, en homenaje a una de las princesas de la corona británica. La sede actual de Itamaraty en Brasilia es uno de los edificios emblemáticos de la nueva capital por sus valores arquitectónicos, de autoría de Oscar Niemayer.

Tal vez valga la pena destacar el hecho de que durante la segunda guerra mundial y los primeros años de la posguerra, Itamaraty jugó un papel significativo en el gobierno de Getulio Vargas para impulsar la industrialización del Brasil. Igualmente asumió un rol relevante en la inserción del tema del desarrollo en la agenda internacional cuando planteó la denominada Operación Panamericana, en el gobierno de Juscelino Kubitschek. Desde entonces su acción en el contexto latinoamericano ha sido importante y dinámica, por los conocidos atributos de Brasil como país-continente.

A título ilustrativo vale la pena recordar, en apretada síntesis, el contenido de la citada Operación Panamericana. El presidente Juscelino Kubitschek, en carta dirigida a su homólogo norteamericano General Dwight D. Eisenhower, con fecha 28 de mayo de 1958, le expresó la conveniencia de revisar el panamericanismo con miras a situarlo sobre bases de una verdadera y más amplia cooperación económica entre los países del hemisferio, para emprender una campaña concertada contra la pobreza y el subdesarrollo. El gobierno brasileño resumió así los objetivos de la Operación Panamericana:

- 1) Ratificación de los principios de solidaridad continental;
- 2) Definición del “subdesarrollo” como un problema de interés común;
- 3) Adaptación de los órganos y de las agencias interamericanas, de ser necesario, a las exigencias de un mayor dinamismo que promoverá la lucha contra el subdesarrollo;
- 4) Asistencia técnica destinada al mejoramiento de la productividad;
- 5) Medidas para estabilizar el mercado de productos básicos;
- 6) Actualización y ampliación de los recursos de los organismos financieros internacionales;
- 7) Reafirmación de la iniciativa privada en la lucha por el desarrollo; y

- 8) Revisión, en lo que fuere necesario por parte de cada país, de la política fiscal y económica, con el objeto de asegurar medidas que promuevan el desenvolvimiento económico.

El 6 de setiembre de 1958, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, invitó a los cancilleres americanos a una reunión informal en Washington, durante los días 23 y 24 de ese mismo mes, para discutir la manera de dar viabilidad a esos propósitos de solidaridad económica continental. Al finalizar la reunión, y para que el proceso se enmarque en el sistema interamericano, Ecuador presentó la moción de que los 21 cancilleres se constituyeran en sesión extraordinaria del Consejo de la OEA, para resolver los pasos que deberían darse. Como los problemas planteados por la Operación Panamericana requerían de la amplia cooperación de los Estados Unidos para poder resolverlos, un paso positivo en tal sentido fue la aquiescencia del país del norte para la creación de una institución financiera interamericana de fomento, que habría de concretarse en el establecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo

LA NUEVA CAPITAL

Durante el gobierno de Kubitschek, a partir de 1956, se inició la construcción de la ciudad de Brasilia, planificada por Lucio Costa en asocio con Oscar Niemayer, arquitecto que alcanzó nombradía mundial por sus proyectos de vanguardia. Se trataba de la concreción de un visionario proyecto geopolítico orientado a movilizar polos de desarrollo hacia el centro del Brasil, ya que por siglos había sido un país volcado a su extenso litoral atlántico. La nueva capital federal está situada a unos 930 kilómetros al oeste de Río de Janeiro, en la altiplanicie del Estado de Goiás. Vale la pena señalar, al menos como un dato histórico, que el presidente Kubitschek se caracterizó por su dinamismo y carisma ante la percepción popular. Dedicó sus mejores esfuerzos a la construcción de Brasilia. Por supuesto que en el marco de un régimen democrático la disidencia y la oposición política son factores normales. Recuerdo que en un periódico de oposición alguna vez se hizo una glosa crítica al atributo de la simpatía personal del mandatario. En ingenioso apotegma, el comentario periodístico decía que “simpatía no go-

bierna”, razón por la cual el país progresaba de noche, mientras el gobierno dormía.

En Río de Janeiro se montaban exposiciones de planos y maquetas de la nueva ciudad y se hacía un cuidadoso seguimiento de los progresos de su construcción. Cuando se inauguró en abril de 1960, con toda la parafernalia protocolar, la prensa destacó como dato curioso que los primeros diplomáticos en afincarse en la naciente urbe fueron, por cierto, los estadounidenses, y un cónsul honorario de Honduras, caballero acaudalado de origen libanés. Inicialmente la propia burocracia brasileña se resistió al traslado y, por supuesto, los legisladores, acostumbrados a las comodidades y encantos de Río de Janeiro, la “ciudad maravillosa”. El gobierno incentivó la gradual instalación del cuerpo diplomático extranjero, en un proceso que tomó algún tiempo.

No tuve ocasión de conocer la Brasilia de los primeros tiempos. Una coyuntura propicia habría sido la concurrencia a las ceremonias inaugurales, pero el ministro consejero, mi recordado amigo Armando Pesantes, quien ya había visitado la ciudad en construcción, me dijo con su buen talante característico que no se iba a perder la histórica visión de los actos fundacionales de una capital sudamericana, y le acompañó al embajador Neptalí Ponce a ese simbólico acontecimiento. Por supuesto que mi compañero de ostracismo diplomático tenía toda la razón. Mi contacto personal con la urbe pionera habría de producirse muchos años después, en 1993, cuando el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, embajador Joao Baena Soares, me invitó a representarlo en su país de origen, al término de mi misión como embajador del Ecuador ante la OEA.

Yo había escuchado impresiones contrapuestas sobre Brasilia, entre la apología y la detracción, entre la hipérbole y el desencanto. En tono personal intimista le pedí a Joao Baena su opinión al respecto. Hombre de ingenio civilizado y agudo, me respondió: “Brasilia es como debe haber sido Washington hace cien años”. Es que históricamente ambas ciudades fueron fundadas para albergar a la burocracia gubernativa. Más allá de la ironía volteriana, a Joao le gusta mucho Brasilia y es un apoloquista de sus excelencias.

La nueva capital tiene ciertamente unas características singulares en su planificación y diseño arquitectónico, que impresionan al primer contacto. Concebida con un sentido humanístico y abierto a la comunicación interpersonal, tiene sectores de actividades afines, como el di-

plomático, el bancario, el oficial, el residencial. Pero curiosamente las arterias urbanas están diseñadas de tal manera que es poco menos que imposible movilizarse a pie. Por eso los propios habitantes de la ciudad se hacen la broma de que el brasiliense se compone de cabeza, tronco y ruedas, para significar que el uso del automóvil es indispensable. Un día llegó en visita oficial el presidente de Polonia, Lech Walessa, famoso líder del Sindicato Solidaridad, quien hizo oposición al régimen comunista de su país y accedió democráticamente al poder. El mandatario polaco sorprendió a la prensa con un comentario que fue glosado negativamente. En respuesta a la pregunta de un periodista local, expresó que encontraba a Brasilia muy parecida a Varsovia. Ante la perplejidad del periodista, añadió: es que en Varsovia, cuando voy a visitar a un amigo, ocurre que a veces confundo la puerta de su apartamento porque todos los edificios son iguales. Entiendo que le hicieron conocer uno de los edificios multifamiliares, que se parecen entre sí. En todo caso el lance humorístico presidencial no fue bien acogido.

Yo me atrevería a decir que a Brasilia, además de sus excelencias arquitectónicas, hay que considerarla como un estilo de vida, por sus características singulares; responde realmente a una óptica futurista en un país de enormes expectativas y posibilidades. En todo caso nuestra estancia personal fue en extremo grata.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

En el mundo de la plástica Brasil ha alcanzado alto prestigio por sus propios valores pictóricos y por la realización de las bienales de arte moderno de Sao Paulo. En conexión con estos eventos artísticos recibíamos obras de autores ecuatorianos, que participaban de esas muestras cíclicas, hasta que algunos de ellos decidieron hacerse presentes en Río de Janeiro.

Oswaldo Guayasamín permaneció algunos meses en Río a finales de la década de los cincuenta. Comenzó por pintar un tríptico móvil, titulado “Los tres majaderos de la historia”, con base en la famosa frase de Bolívar, quien se incluía en esa categoría junto con Jesucristo y el Quijote, en una cosmovisión del idealismo y del desencanto. La obra artística, estupenda en su concepción y realización, fue elaborada a pedido del embajador venezolano Leonardo Altuve Carrillo, en cuya

residencia se alojó el maestro ecuatoriano. Entiendo que a título de cortesía del pintor, le dedicó un retrato de concepción heterodoxa, en el cual figuraba el diplomático de torso desnudo y una barbilla hirsuta, con aire mefistofélico o de sátiro enigmático y con un fondo rojizo que evocaba el paisaje telúrico de Brasilia. Por cierto que el embajador se complacía en mostrar de modo preferente ese retrato a sus invitados.

Según el proyecto originario, Guayasamín debía presentar su exposición en el Museo de Arte Moderno de Río, pero surgió algún imprevisto y por ello utilizó una galería privada en el conocido barrio de Copacabana. La muestra instalada en la galería Barzinski tuvo, por supuesto, un éxito muy significativo. A partir de ahí pintó numerosos retratos de personalidades locales, con su estilo característico. Solía decir que él prescindía del color de la piel de los personajes y que, poniendo en juego su aguda percepción sicológica, los veía de diversos colores y plasmaba en el lienzo sus rasgos de “piel afuera” y de “piel adentro”. A Teresa, mi mujer, le pintó un retrato estupendo.

Conocí a Oswaldo Guayasamín cuando presentó en Caracas, en 1954, su extraordinaria colección “El camino del llanto”, con señalado éxito. Su prolongada estancia en Río de Janeiro, años más tarde, nos brindó la oportunidad de alternar más cercanamente, con sabrosas pláticas y alegres guitarreadas, otra de sus pasiones personales.

En 1959 llegó un grupo de cuatro artistas nacionales que iban a presentar una exposición pictórica bajo el título de “Jóvenes pintores del Ecuador”. Se trataba de Oswaldo Viteri, Aníbal Villacís, Guillermo Muriel y Hugo Cifuentes, quienes con el devenir del tiempo y de sus éxitos habrían de alcanzar justa nombradía en la plástica nacional. Villacís, Muriel y Cifuentes fueron los fundadores del grupo VAN. En especial Oswaldo Viteri ocupa actualmente un lugar relevante en el ámbito internacional y es un referente de alto nivel de la plástica ecuatoriana. Teníamos una serie de afinidades electivas, además de las evocaciones de la patria distante, y por ello se abrieron cauces a una amistad que perdura hasta ahora. Durante el tiempo que permanecieron en Río nos veíamos frecuentemente. Como su estancia coincidió con las celebraciones de fin de año, recuerdo que mi señora y yo nos excusamos de asistir a una reunión de colegas diplomáticos para compartir nuestra intimidad familiar con nuestros amigos y compatriotas. Fuimos juntos a la playa de Copacabana para presenciar, en la noche, los ritos mágicos en homenaje a Iemanjá, la diosa del mar, con el lanzamiento de flo-

res sobre las olas en medio de la euforia popular y exóticas abluciones en los linderos de la playa.

En la misma época viajó también a Río de Janeiro y presentó un equilibrado repertorio de su producción plástica Bolívar Mena Franco, pintor ya consagrado por la crítica de entonces, por su estilo personal de elevada jerarquía artística. Perteneció a la prestigiosa generación de los años treinta y se singularizó con el paso del tiempo en la búsqueda de renovadas modalidades de expresión plástica.

ESPACIO PARA LA ANÉCDOTA

Durante una temporada desempeñé la doble función de secretario de la embajada y encargado del consulado. En esta última tuve interesantes experiencias de tipo humano. Citaré un par de ellas.

Siempre admiré el espíritu emprendedor y rico en iniciativas de los indígenas otavaleños, aptos para la aventura comercial fuera de los linderos nacionales. Actualmente se los encuentra ofertando sus productos textiles por diversas latitudes del planeta, pero verlos en Río de Janeiro en 1959 sí constituía una sorpresa, grata por cierto. En el vuelo inaugural del CAN (servicio gratuito de la Fuerza Aérea Brasileña) llegó un grupo de cinco otavaleños, quienes me fueron a visitar al día siguiente. El portador de la noticia fue el mensajero de la embajada, un tanto desconcertado por la vestimenta de nuestros compatriotas. Me dijo en portugués que unas personas “exquisitas” (raras) preguntaban por el “señor consulado”. Dispuse que les condujera a los visitantes de inmediato a mi escritorio. Les acogí con una cordial bienvenida y les pregunté cuánto tiempo duraría su gira turística. Me respondieron que habían viajado con el propósito de afincarse en Río por tiempo indeterminado y que, aprovechando la gratuidad del vuelo, habían llevado incluso sus telares. Fueron a visitarme, por tanto, para que les ayudara a arrendar “una casita” destinada a residencia y taller. En pocos días logramos felizmente atender tal requerimiento.

Después de un tiempo los compatriotas aparecieron en las puertas de los principales hoteles ofertando sus llamativos textiles. Al cabo de algunos meses volvieron a visitarme para agradecerme por las atenciones recibidas y tuvieron la gentileza de obsequiarme una fina prenda tejida por ellos para mi señora. Les pregunté entonces cómo mar-

chaba su negocio y recibí la consabida respuesta: “regular, señor cónsul”. En el léxico popular ecuatoriano significaba, como sabemos, que el negocio iba bien y no sólo regular. Ante sus expresiones elusivas les interrogué, en tono de broma, cuánto depositaban mensualmente en el banco. El vocero del grupo, ya menos reservado, me mencionó una cantidad superior al sueldo del Cónsul del Ecuador en Río... Posteriormente fueron a visitarme, pero con un integrante menos. Me plantearon la queja de que el desertor, con compromiso familiar en Otavalo, se había enredado en amores encendidos con una joven carioca, razón por la cual solicitaban mis buenos oficios para enmendar el desaguisado. Como prueba gráfica de la denuncia me mostraron una fotografía ampliada de la seductora, que era a su juicio una suerte de “cuerpo del delito”. Al mirarla, pensé para mi propio coleteo, que se trataba de la derrota de la ética frente a las evidentes tentaciones de la estética. Huelga aclarar que los otavaleños y los indígenas ecuatorianos en general, sin abdicar de sus tradiciones, tienen actualmente un rol más amplio y dinámico en el tejido social, pues ocupan espacios políticos antes ignorados y alientan expectativas reveladoras de su progreso.

Un día acudió al consulado un caballero brasileño, afable y comunicativo. Me dijo que había cumplido ochenta años de edad y que deseaba repetir una inolvidable aventura de juventud mientras gozaba todavía de buena salud y mejor ánimo. Me refirió, con no disimulada nostalgia, que hacía varias décadas había realizado un viaje familiar al Ecuador y que, entre las vivencias de ese periplo, conservaba fresca la impresión asombrosa que le había producido el descenso de la sierra a la costa en ferrocarril, particularmente la inesperada y caprichosa maniobra del tren en la Nariz del Diablo. No quiero morir sin repetir el descenso por la Nariz del Diablo, me expresó, con un dejo de “saudade” carioca, el entusiasta y vital caballero. No he olvidado el singular diálogo con ese decidido admirador de las excelencias naturales del Ecuador, que deseaba recoger en nuestro país algunos pasos de su lejana juventud.

Un pintor ecuatoriano, residente en Bolivia desde hacía varios lustros, me visitó para informarme que había decidido presentar algunas de sus obras en una galería de Río de Janeiro. Me solicitó el auspicio oficial y le brindé complacido la colaboración necesaria para el cumplimiento de su propósito. Pocos días después de la inauguración

de la muestra volvió muy contrariado para decirme que no se sentía bien de salud y que se internaría en un hospital local. Ante la eventualidad de un desenlace fatal me entregó un documento manuscrito por el cual me donaba sus pinturas, en reconocimiento a la colaboración que le había prestado. Me resistí a recibir el documento y le dije que lo conservaría hasta el restablecimiento de su salud, pues yo no compartía su percepción pesimista de la situación, a juzgar por los datos que me había revelado. En efecto, retornó el compatriota al cabo de un par de semanas, confirmando mi pronóstico. Le devolví el documento de marras, que le produjo un alivio claramente perceptible. Me alegré por la pronta recuperación del caballero y porque, además, me liberé de la compañía de unas pinturas incompatibles con mi inclinación estética.

Debido a la acumulación de asuntos administrativos en la misión, el Embajador decidió contratar los servicios de una secretaria local. María, una mujer culta, de mediana edad, de nacionalidad húngara, hablaba y escribía perfectamente el idioma español y fue una funcionaria auxiliar muy útil. Había salido de su país porque no simpatizaba con el régimen político imperante y tenía algún tiempo de residencia en Brasil. Su marido había llegado recientemente a Río de Janeiro, poco antes de la visita del presidente de los Estados Unidos, en la cual se produjo un accidente aéreo absurdo y mortal. Un avión comercial despegó del aeropuerto Santos Dumont, situado en el sector urbano, para iniciar un vuelo interno en el país. Cuando el aparato recién tomaba altura se le cruzó el transporte militar que conducía a una banda de músicos norteamericanos. Los dos aviones chocaron estrepitosamente en el espacio aéreo de la bahía de Guanabara y los habitantes del sector contemplaron horrorizados la caída de los cuerpos al mar, arrojados de las entrañas de los aparatos por la violencia de la colisión. No hubo sobrevivientes. Entre los cuerpos rescatados de las aguas estaba el del marido de María. Ella enfrentó con entereza el drama producido por el percance fatal y, con cristiana resignación, enterró el cadáver de su consorte. Pocos días después le informaron que se había producido un error de identificación y que se habían llevado el cuerpo de su esposo a Estados Unidos, entre los músicos norteamericanos. Cuando el cadáver fue devuelto a sus familiares, María tuvo que revivir el drama de su dolor íntimo en un segundo sepelio.

CUARTO VELASQUISMO

Mi regreso al Ministerio de Relaciones Exteriores coincidió con los fervores y los lances ríspidos de la campaña electoral destinada a elegir al sucesor del presidente Camilo Ponce Enríquez, quien concluiría su período gubernativo el 31 de agosto de 1960. Los augures políticos vaticinaban la instalación de un cuarto velasquismo y no se equivocaron en sus cálculos. En efecto, el doctor José María Velasco Ibarra derrotó ampliamente a sus contendores, señor Galo Plaza Lasso, doctor Gonzalo Cordero Crespo y doctor Antonio Parra Velasco.

Horas antes de la ceremonia de transmisión del mando fui testigo casual de un episodio histórico. Por una disposición oficial de carácter reservado acudimos al Palacio de Carondelet el Director de Protocolo y yo, para conducir los aspectos formales de la ceremonia íntima en la cual el doctor Camilo Ponce Enríquez ceñiría la banda presidencial a su Vicepresidente, Juan Vicente Illingworth, para no hacerlo personalmente al doctor Velasco Ibarra. Estuvieron presentes solamente los miembros del gabinete ministerial. Tal actitud se originó, según se dice, en una desafortunada experiencia registrada en 1952, cuando el presidente Galo Plaza Lasso entregó el mando al propio doctor Velasco Ibarra. Al parecer, un intrigante palaciego le llevó al entonces presidente electo la versión de que Galo Plaza pronunciaría un discurso polémico la noche de la transmisión del poder. A pesar de los contactos previos entre las autoridades salientes y entrantes y de las

precisiones usuales en tales casos, el doctor Velasco Ibarra, ya con su ánimo prevenido, se dejó llevar por el rumor inicial y protagonizó una extensa intervención oral, en la cual intercaló alusiones inapropiadas al señor Plaza, quien en cambio pronunció un discurso escueto y medurado. El doctor Camilo Ponce Enríquez, miembro del gabinete ministerial del tercer velasquismo (1952-1956), afirmó al asumir el mando presidencial en 1956: “Pensé que me habían elegido Presidente de la República, pero parece que me han designado síndico de una quiebra”. Con este antecedente y la actitud del doctor Velasco Ibarra frente a Galo Plaza, cobra sentido la citada medida de prudencia del presidente Ponce Enríquez.

A raíz de la inauguración del cuarto velasquismo la atmósfera cívica del Ecuador se convulsionó porque el doctor Velasco Ibarra planteó la tesis de la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro. Lo hizo en un discurso político en la ciudad de Riobamba, el 17 de agosto de 1960, en calidad de Presidente Electo de la República. El tema se convirtió, por cierto, en el eje institucional de las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores, que poco después propició el envío de “misiones culturales” a los países del continente para difundir esta posición oficial e invocar su solidaridad con el Ecuador. Desde entonces la tesis de la nulidad marcó su impronta en la política exterior de nuestro país.

El embajador Alfredo Luna Tobar, en su “Derecho Territorial Ecuatoriano”, nos recuerda, al hablar de la génesis de la tesis de la nulidad, que antes de la suscripción del Protocolo de Río el Canciller ecuatoriano “patentizó ya la incompatibilidad con el Derecho Internacional Americano de un tratado de límites, mientras estuviese ocupada por las fuerzas del agresor una parte cualquiera de nuestro territorio” y publicó al efecto dos volúmenes de “Dictámenes jurídicos”, en los cuales diecisiete notables juristas del continente condenaron unánimemente cualquier hecho que significara consagración de la fuerza, la agresión y la conquista. En conexión con este mismo tema cita los pronunciamientos de dos Cancilleres ecuatorianos, que reproducimos a continuación.

En la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente (Río de Janeiro, agosto de 1947), el Canciller José Vicente Trujillo se manifestó así: “Es necesario meditar profundamente en la Declaración de Principios que vamos a consignar en el prólogo de nuestro Tratado, porque cada uno de ellos debe res-

ponder, de manera precisa y cabal, a una realidad de nuestra convivencia internacional....Si afirmamos que no se reconocen las adquisiciones territoriales realizadas por medio de la violencia, no sancionemos más tarde con el ropaje de un Tratado aquello que consagra la violación de tal Principio...Si declaramos la intangibilidad de los tratados y cerramos la puerta a toda posible revisión, por medio de procedimientos jurídicos, no obstante la convicción de que nuevos factores políticos y económicos imponen la necesidad de un nuevo ajuste jurídico, estamos manteniendo una injusticia, que puede, en un momento dado, ser causa de perturbación de la paz....” En la IX Conferencia Internacional Americana (Bogotá, abril de 1948), el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Antonio Parra Velasco, intervino en los siguientes términos cuando se discutía la Carta de la OEA: “Si se acepta que los Tratados sólo pueden ser revisados mediante acuerdo de las Partes, se suprime toda posibilidad de solucionar por medios jurídicos y cordiales cualquier controversia que pueda suscitarse con motivo de la existencia de un Tratado. Los Tratados tienen diverso origen. No siempre prima la voluntad plena de los Estados firmantes y muchas veces, con el correr del tiempo, las circunstancias llegan a demostrar que son inaplicables. Y, cuando tal cosa se produce, surge necesariamente el litigio. Si no se abre la puerta a una revisión jurídica, cordial y fraterna, no queda ningún camino para que las Partes contiendan dentro del Derecho”. Cuando Ecuador ratificó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en octubre de 1950, lo hizo sin reservas, “porque entiende que otros instrumentos y los principios del Derecho Internacional no obstan a la revisión de los Tratados, sea por acuerdo entre las Partes, sea por los medios pacíficos considerados por el propio Derecho Internacional”.

Recordemos las palabras del Presidente Velasco Ibarra en su intervención en la ciudad de Riobamba:

“¿Es que éste es un Tratado? ¿Cabe que se celebre un contrato con la pistola en el pecho del contratante? El Tratado de Río de Janeiro es un tratado nulo. Nosotros no queremos la guerra. Nosotros no provocamos escándalos en el mundo sudamericano, pero nosotros no reconoceremos jamás el Tratado de Río de Janeiro. Para algo se han creado tantas instituciones jurídicas internacionales, para algo ha adelantado la sensibilidad jurídica de la especie humana, para algo ha adelantado

el derecho internacional. Para algo se habla tanto de fraternidad, de unión, de solidaridad; pues bien, el Ecuador..., que ha cooperado espiritual y militarmente a la grandeza hispanoamericana, exige que Hispanoamérica, exige de la América Latina, exige del Panamericanismo que para que haya justicia en el Continente, el Ecuador tenga un puerto en el gran río Amazonas, tenga un asiento geográfico en el Oriente, base de la nacionalidad futura ecuatoriana”.

El Embajador Rafael García Velasco, en su obra “El territorio del Ecuador en el siglo XX”, explica así los motivos que le llevaron al doctor Velasco Ibarra a plantear la tesis de la nulidad:

“El Protocolo de Río de Janeiro fue arrancado al Ecuador por coacción; no hubo expresión de voluntad ni libertad de opción para el Ecuador; esa coacción no había cesado al tiempo de la aprobación y ratificación del Protocolo, pues el Perú no cumplió totalmente con el compromiso de retirar sus fuerzas militares más allá de los puntos descritos en el artículo octavo de ese instrumento y, al contrario, en algunos puntos amplió sus conquistas; después, por varios años mantuvo el Perú sus amenazas de llevar nuevamente ‘en triunfo sus estandartes de guerra por los campos de batalla’ (Manuel Apolinario Odría, Jefe de Estado del Perú en 1952); numerosas normas del derecho internacional americano y universal establecen que los tratados suscritos bajo el imperio de la fuerza son nulos; la más importante cláusula del Protocolo adolece de error sustancial, imprevisible y no imputable al Ecuador; el tratado no tuvo causa justa porque desconoció sus títulos histórico-jurídicos, le privó al Ecuador de acceso al río Marañón-Amazonas que le corresponde por derecho inmanente y creó graves dificultades para su desarrollo socio-económico; el Protocolo no tuvo objeto lícito y posible, porque contrarió principios de derecho internacional general que condenan la agresión y consideran nulos, sin valor y sin ningún efecto los tratados obtenidos por la guerra; por otro lado, siendo indivisible por su naturaleza un tratado de demarcación, la inejecutabilidad de una de sus disposiciones compromete la nulidad de todo el tratado; el Protocolo, además, es la negación de la buena fe, que debe presidir todo compromiso internacional, y constituye más bien un evidente caso de abuso de derecho. Desde la vigencia del Pacto de París Briand-Kellog, de 25 de agosto de 1928, o ‘Tratado sobre la renuncia de la guerra’, es norma imperativa de derecho internacional general (jus cogens) el de que toda guerra de agresión es y permanece prohibida”.

El Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, doctor José R. Chiriboga V., dirigió sendas notas cablegráficas a los Cancilleres de los países Garantes, el 22 de octubre de 1960, para expresarles, entre otras cosas, que “Gobierno y pueblo ecuatorianos en uso de sus atribuciones soberanas, fundándose en expresas, terminantes disposiciones sistema jurídico interamericano que condena agresión y estatuye el desconocimiento de las adquisiciones territoriales obtenidas por la fuerza, han proclamado digna, serena y elevadamente su rechazo al irritó Protocolo de Río que según consta a conciencia de América fue resultado directo agresión peruana 1941”. El 28 de octubre, el Gobierno del Perú hizo entrega simultánea a los citados Cancilleres de una nota en que solicitaba que se reunieran sus Gobiernos para desautorizar la rebeldía del Ecuador contra el Protocolo de Río de Janeiro, mediante una declaración pública.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los Garantes respondieron el 7 de diciembre al Canciller del Ecuador, consignando su preocupación y argumentando básicamente lo siguiente: “Es un principio básico del Derecho Internacional que la voluntad unilateral de una de las partes no basta para invalidar un tratado de límites, ni para liberarla de las obligaciones que él le impone. Sólo la voluntad concordante de ambas partes podrá modificar sus estipulaciones o dar competencia a un tribunal internacional para que conozca de las cuestiones que el mismo pueda suscitar. – Por estas razones, mientras la voluntad soberana y concordante de Ecuador y Perú no disponga otra cosa, mi país considera que el Protocolo de Río de Janeiro –firmado y ratificado por Ecuador y Perú y ya aplicado en su casi totalidad mediante actos prácticos de demarcación a los cuales las propias partes atribuyeron el carácter de definitivo– es un instrumento válido y debe ser cumplido”.

Respecto del pronunciamiento de los Gobiernos Garantes conviene reproducir un par de comentarios importantes.

El embajador García Velasco, en su citada obra, expresa: “Es evidente que los Garantes carecían de toda competencia para declarar la validez del Protocolo, asumiendo facultades de árbitros o de jueces, que no podían asumirlas porque de acuerdo con el artículo 13 de la Convención de Tratados de La Habana suscrita en 1928, la garantía sólo puede ejercerse en las condiciones previstas en el respectivo convenio y el Protocolo de Río contempla la intervención de los Garantes en los

casos específicos establecidos en los artículos V, VII y IX del referido instrumento, ajenos por entero a la capacidad jurídica de los Garantes para pronunciarse sobre la validez del mismo”. A esto hay que añadir que “Los Garantes conocieron en toda su plenitud los hechos preparatorios y constitutivos de la agresión peruana y de la retención ilegítima de territorios ecuatorianos por el invasor para lograr la suscripción y ratificación del Protocolo por la víctima de la agresión. En su condición peculiarísima de espectadores inmediatos y de actores de ese drama americano, su declaración pública tenía que mentar expresamente esos hechos para derivar de ellos, por autoridad del derecho e imperio de la lógica, la nulidad del Protocolo. – No era moralmente admisible, por tanto, que los Garantes se contrajesen exclusivamente a destacar los aspectos formales de la existencia del Protocolo e ignorasen, al propio tiempo, sus caracteres esenciales que le configuraron como un instrumento impuesto por la violencia.” (Gonzalo Escudero, “Justicia para el Ecuador”).

Recuerdo que en esa época se celebró en Quito un Seminario de Derecho Internacional, bajo el auspicio de las Naciones Unidas y con la participación de numerosos delegados extranjeros. Invitado a pronunciar el discurso inaugural, el presidente Velasco Ibarra comenzó su intervención negando la existencia del Derecho Internacional. La elaboración conceptual, cimentada en un conocimiento erudito del tema, partía de la consideración de que en el marco del actual derecho de gentes la justicia y el derecho no amparan a los países pequeños y débiles y que continúa imperando la política del poder. Sugirió que había que construir un Derecho Internacional con equidad para todos.

En todo caso el planteamiento de la tesis de la nulidad del protocolo abrió cauces a una confrontación diplomática entre Ecuador y Perú en los foros internacionales. Como se sabe, Perú negaba la existencia del problema limítrofe con el Ecuador, solucionado a su juicio por el Protocolo de Río, y negaba competencia a los organismos internacionales para tratar el tema, reconociendo sólo la de los cuatro países garantes, que a la postre habrían de coadyuvar a la concertación de los acuerdos de paz de Brasilia (1998), con los cuales se puso término a la controversia. La tesis de la nulidad fue sustentada por los gobiernos posteriores a 1960 y, por cierto, por los representantes diplomáticos ecuatorianos, en los diversos foros interamericanos. En 1968, el propio Presidente José María Velasco Ibarra planteó, en su última administra-

ción, una solución o transacción honrosa con el Perú para dar término al problema, con base en el acceso del Ecuador al Marañón-Amazonas. Lo hizo dentro del invariable espíritu de conciliación que ha caracterizado a la conducta internacional de nuestro país, que siempre ha propugnado la búsqueda de una solución negociada, justa y equitativa del problema territorial.

MISIÓN EN MÉXICO

El 7 de noviembre de 1961, apenas un año cuatro meses después de su inauguración, colapsó la cuarta administración del doctor Velasco Ibarra, a quien sucedió por mandato constitucional el Vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, depuesto a su vez el 11 de julio de 1963 por una Junta Militar. Designado entonces Canciller de la República, retornó a Quito el embajador Neptalí Ponce Miranda, con quien yo había colaborado varios años en la misión en Río de Janeiro.

El golpe militar produjo varios cambios en el servicio exterior, entre ellos el del embajador en México, doctor Ruperto Alarcón Falconí, dirigente conservador y ex – candidato presidencial. En esas circunstancias se presentó un compromiso internacional que el Ecuador debía atender sin dilación. En agosto de ese año se celebraría en la ciudad de México la Primera Reunión Informal sobre Desnuclearización de América Latina, con base en una iniciativa planteada por Brasil en 1962 y acogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Canciller me convocó a su despacho y tuvo la gentileza de proponerme la designación de Encargado de Negocios del Ecuador en México, con la instrucción de que viajara en el menor tiempo posible para asumir las obligaciones de la misión y la representación en esa importante conferencia internacional.

Las tensiones de la “guerra fría” entre las dos superpotencias alcanzaron su clímax en el preocupante episodio de octubre de 1962 con

la introducción de misiles soviéticos, con cargas nucleares, en Cuba. Se hablaba de la amenaza potencial de un conflicto nuclear, afortunadamente superada por el acuerdo Kennedy-Kruschev, que inició un período de distensión entre las potencias mundiales.

La crisis de los misiles tuvo impacto en el ámbito latinoamericano y allí surgió la iniciativa de una zona libre de armas nucleares, centro y sudamericana. Es que los dilemas de la bipolaridad, o sea de la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, podían eventualmente convertir a nuestra región en espacio de emplazamiento de artefactos nucleares, con los riesgos consiguientes.

Si bien la reacción inicial provino de Brasil, como lo señalamos antes, fue un pronunciamiento conjunto de varios jefes de Estado el que le dio entidad al tema. En efecto, los presidentes Víctor Paz Estenssoro, de Bolivia; Joao Goulart, de Brasil; Jorge Alessandri, de Chile; Carlos Julio Arosemena Monroy, de Ecuador; y Adolfo López Mateos, de México, emitieron el 29 de abril de 1963 su “Declaración sobre Desnuclearización de la América Latina”, acogida por la Asamblea General de la ONU en su resolución 1911 (XVII).

Ese fue el origen de la reunión internacional a la que debía concurrir en México. En ella se produjo una previsible convergencia de posiciones en torno a la conveniencia de adoptar un instrumento multilateral que mantenga a nuestra región al margen de los peligros del empleo bélico de la energía atómica. Una Comisión Preparatoria laboró del 23 de noviembre de 1964 hasta el 14 de febrero de 1967, en que se adoptó el “Tratado de la proscripción de las armas nucleares en América Latina”, denominado también Tratado de Tlatelolco. En virtud de este instrumento el área centro y sudamericana es la primera zona libre de armas nucleares del mundo.

VISITAS PRESIDENCIALES

En México permanecemos apenas un año y en ese breve lapso participamos de los actos protocolares correspondientes a las visitas oficiales de seis jefes de estado. Se trataba de visitas de reciprocidad a las efectuadas por el presidente Adolfo López Mateos, personaje carismático y dinámico que gobernó a su país de 1958 a 1964. Estuvieron en México, sucesivamente, los mandatarios latinoamericanos Víctor Paz



Visita a Méjico de los primeros astronautas del mundo, los soviéticos Yuri Gagarin y Valentina Terechkova.
Dialogan con el Encargado de Negocios del Ecuador y la señora de Vasco.

Estenssoro, de Bolivia, y Juan Bosch, de la República Dominicana; el General Charles De Gaulle, de Francia; el Mariscal Broz Tito, de Yugoslavia; la Reina Juliana, de los Países Bajos; y el actual Emperador del Japón, Aki Hito, a la sazón príncipe heredero a la corona imperial. Las figuras de De Gaulle y Tito fueron las que suscitaron el mayor interés público, como era obvio, por su conocida trayectoria histórica en sus respectivos países durante la segunda guerra mundial y el período de posguerra.

El presidente Juan Bosch, intelectual de prestigio en su país, fue víctima de un golpe militar a su retorno a la República Dominicana. El presidente Víctor Paz Estenssoro, líder paradigmático en Bolivia, gobernó por cuatro ocasiones su país y estuvo en México en su segunda administración. Ambos causaron, por cierto, muy buena impresión en sus visitas de estado.

La visita del General De Gaulle estuvo precedida de una explicable expectativa, por la dimensión histórica del personaje y las especiales connotaciones de las relaciones franco mexicanas. Un par de semanas antes del arribo del mandatario hizo acto de presencia una delegación castrense que venía a devolver los últimos trofeos de guerra capturados en las confrontaciones bélicas ocurridas en el período de la ocupación francesa de México, que instaló en el trono a Maximiliano, Archiduque de Austria. Fernando José Maximiliano I de Habsburgo aceptó la corona durante la ocupación y gobernó entre 1863 y 1867. Las fuerzas republicanas dirigidas por Benito Juárez derrotaron al imperio y el emperador fue ajusticiado. La referida devolución de trofeos bélicos se realizó en una ceremonia austera y solemne, que conmovió la conciencia cívica de la sociedad mexicana.

Conviene recordar que en 1940, siendo Subsecretario de Guerra de Reynaud, De Gaulle se refugió en Londres a raíz de la ocupación nazi y de la firma del armisticio franco alemán. Proclamó de inmediato la continuación de la lucha armada (18 de junio de 1940) y constituyó un comité nacional de resistencia. Reconocido por Gran Bretaña, Estados Unidos, parte de las colonias y el movimiento de resistencia en Francia, combatió en Africa, encabezó un gobierno provisional e ingresó con los aliados a París, tras el desembarco en Normandía en 1944. Fue jefe del gobierno hasta que se dictó una nueva constitución y continuó ejerciendo esa función constitucionalmente. Renunció en 1946 para formar su propio partido. Fue elegido presidente en 1958 y, tras enfrentarse a

rebeliones en Argelia en 1960 y 1961, hizo proclamar su independencia en 1962. Poco tiempo después visitó a México y otros países latinoamericanos, entre ellos el Ecuador.

La presencia del Mariscal Tito concitó igualmente la atención pública. Combatiente y prisionero de los rusos en la primera guerra mundial, adoptó esa nacionalidad después del triunfo de la revolución bolchevique en 1917. Formó parte de las brigadas internacionales que lucharon en la guerra civil española (1936-1939). Cuando los ejércitos nazis invadieron Yugoslavia (1941), retornó a su patria y organizó la resistencia al invasor, con el apoyo de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Al término de la segunda guerra mundial, Tito era reconocido como jefe del pueblo yugoslavo y promotor de la cohesión de las diversas nacionalidades, que décadas después habrían de implosionar y formar varios estados. Dirigió el Presidium, órgano supremo de gobierno. Se alejó de la línea política de Moscú, manteniendo una conducta de neutralidad, y el partido comunista yugoslavo fue expulsado del Cominform. Recibió entonces la cooperación económica de los Estados Unidos. Fue uno de los tres promotores del movimiento de los países no alineados, grupo numeroso que postulaba una tendencia intermedia entre las dos potencias mundiales que implantaron la bipolaridad y la denominada “guerra fría”. Los otros líderes fueron, como se sabe, Nehru y Nasser.

En el desarrollo del programa de atenciones a Tito ocurrió un singular incidente de ribetes políticos. En los programas oficiales destinados a visitantes de alto rango había casi siempre dos números recurrentes: un magnífico ballet folklórico en el Palacio de Bellas Artes y una corrida de toros. Se le ofreció al ilustre huésped un festejo taurino en la plaza “El Toreo”, con la participación de dos matadores, un mexicano y un español. Abrió plaza el matador español y se esperaba que, en observancia de la costumbre taurina, le ofreciera la lidia del primer toro al homenajeado. Para sorpresa general, el maestro se dirigió hacia un personaje que no era el Mariscal Tito y le brindó la faena con los ademanes formales de estilo. Se trataba del agente oficioso del gobierno del Generalísimo Franco. El representante de la República Española, que México simbólicamente reconocía, estaba ubicado en el sector del cuerpo diplomático. Tito permanecía impertérrito y ajeno al espectáculo, con su fría expresión y su mirada inescrutable. Huelga referir que el torero español, a causa del sorpresivo desplante, tuvo que retor-

nar a su país pocas horas después de este episodio. Varios colegas comentaban en la plaza que la actitud de indiferencia de Tito ante el espectáculo taurino obedecía a su desconocimiento del tema, ajeno a su formación cultural. No participé de esa opinión porque hay que recordar que el mariscal, en sus tiempos mozos, combatió en la guerra civil española, al lado de los republicanos, y debió estar enterado de los usos y costumbres del pueblo peninsular. Más aún, no es improbable que entonces haya asistido en España a una corrida de toros.

El entonces príncipe heredero a la corona del Japón y la princesa Michiko fueron recibidos con todas las cortesías protocolares de rigor y con expresiones de viva simpatía. Igual ocurrió con la Reina Juliana, de los Países Bajos, quien fue acompañada de su hija Beatriz, actual monarca

En la misma época visitó a México el famoso astronauta soviético Yuri Gagarin, quien se puso en órbita alrededor de la tierra, a bordo del Vostok I; dio la vuelta a la tierra a través del espacio exterior, en 1961, convirtiéndose en el primer astronauta de la historia en realizar esa proeza. En su visita le acompañó Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta de la historia.

Para recibir en el aeropuerto internacional a las visitas oficiales, el protocolo mexicano solía instalar una amplia tribuna destinada a un abigarrado contingente de mariachis, que daba la bienvenida a los huéspedes con conocidas melodías tradicionales de su país, imprimiendo a la ceremonia un llamativo colorido y un alegre espíritu nacionalista. En el desarrollo de las grandes recepciones, que reflejaban la esplendidez de los anfitriones, eran figuras infaltables Dolores del Río y María Félix, dos íconos de la cinematografía azteca.

Poco tiempo antes de las visitas que he relatado, en ceñida síntesis, estuvo en México el presidente John F. Kennedy, quien fuera asesinado en noviembre de 1963 en su visita a Dallas. El magnicidio del carismático mandatario norteamericano causó impacto en la opinión pública mexicana.

Recibí la instrucción oficial de entrevistarme con Mario Moreno (Cantinflas), el famoso actor cómico mexicano, para invitarlo, en nombre del Gobierno del Ecuador, a que actuase en Quito en un festival taurino de beneficencia, para recaudar fondos destinados a la niñez menesterosa de nuestro país. Es que el celebrado actor cinematográfico, además de alegrar con su arte singular a los pueblos hispano-

hablantes, era un torero de estimables méritos, que trocaba el drama trágico de la lidia por una risueña serie de suertes ejecutadas con mucha gracia y técnica adecuada. Fui a visitarlo en sus oficinas situadas en un edificio de la Avenida Insurgentes. Al ingresar a su escritorio me encontré con un personaje cortés y formal. Ya había escuchado que los humoristas suelen asumir esa actitud, porque su oficio queda reservado sólo para los escenarios, por un recurso psicológico de obvia explicación. Para distender esa atmósfera de forzada circunspección, inicié la conversación manifestándole que nos conocíamos desde hacía varios años. Sorprendido por mi afirmación, me preguntó dónde habíamos trabado conocimiento. Es que he visto casi todas sus películas, le respondí, y admiro su talento artístico, por lo cual se ha establecido una relación de actor a espectador. Le causó gracia mi presentación y pocos minutos después hablamos sin reticencias sobre su actuación taurina en la capital ecuatoriana. Cantinflas contribuyó con su espíritu generoso, cimentado en una arraigada conciencia social, a una causa noble.

México, uno de los países emblemáticos de la región, ostenta un crisol de importantes culturas precolombinas y un itinerario histórico rico en acontecimientos de entidad tanto en el período colonial como en el republicano. Su denodada lucha contra la metrópoli española en el marco de la emancipación hispanoamericana, en el siglo XIX, para constituirse en república federal, y su vecindad con los Estados Unidos, forjaron un vigoroso espíritu nacionalista en el pueblo mexicano como un mecanismo de autodefensa. Las luchas civiles y la debilidad del Estado de la época abrieron cauces a la expansión de su vecino del norte, que le arrebató casi la mitad de su territorio. Benito Juárez, figura paradigmática de su pueblo, desempeñó un papel decisivo en la lucha contra la ocupación francesa. Actualmente México mantiene amplias y dinámicas relaciones de vecindad y cooperación con los Estados Unidos de América y se ha erigido en un prestigioso referente de la comunidad regional, por su grado de desarrollo y la ejecución de políticas de estado en el escenario internacional.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que emergió como una de las secuelas de la hoguera revolucionaria de 1910, a causa de las inequidades de la estructura socioeconómica y política de la nación, ha mantenido el monopolio del poder durante siete décadas, hasta hace muy poco tiempo. El Presidente Vicente Fox y su sucesor, Felipe Cal-

derón, ambos del Partido de Acción Nacional (PAN), representan un punto de inflexión en la marcha institucional contemporánea del país.

México es uno de los países latinoamericanos que transitan con paso firme rumbo a la modernidad, en el contexto de un mundo globalizado e interdependiente.

Dictadura Portuguesa

En México fui ascendido a Consejero y transferido a Lisboa, igualmente en calidad de Encargado de Negocios, con la misión de abrir la Embajada del Ecuador e impulsar las relaciones con Portugal. Recibí al respecto una amable llamada telefónica de mi buen amigo el embajador Teodoro Bustamante Muñoz, quien ejercía la función de Subsecretario de Relaciones Exteriores. Lo hizo a nombre del Canciller, embajador Gonzalo Escudero Moscoso, con quien tuve un contacto telefónico anterior por otro asunto oficial.

No es fácil la tarea de instalar una misión diplomática a partir de cero, o sea desde la elección de una casa para la residencia oficial, pues hay que superar diversos escollos, no pocos de naturaleza prosaica. Sólo contábamos con un cónsul honorario en Lisboa y otro en Oporto. Cuando me recibió el acreditado en Lisboa comprobé algo que ya sabía de antemano, o sea que la pronunciación del idioma portugués es distinta en Brasil que en el país de origen. Pero no pensé que en este caso la diferencia fuera tanta, pues nuestro funcionario consular era originario de la isla de Madeira, cuyos habitantes hablan de modo menos claro que los demás, por momentos casi indescifrable. Fue en todo caso una experiencia interesante para quien había aprendido portugués con acento “carioca”, o sea de Río de Janeiro, que es más abierto y musical cuando lo hablan los oriundos de la “ciudad maravillosa”, y más todavía en labios femeninos. Tanto es así que los portugueses afirman que los cariocas hablan “portugués con azúcar”.

La búsqueda de casa abrió también espacio a la anécdota. Contaba con una partida presupuestaria incompatible con la realidad para el rubro de arrendamiento. La primera casa que me mostró un agente inmobiliario, en un barrio moderno y elegante, que antes había ocupado una misión diplomática, tenía un precio que representaba el doble de la partida contemplada por el departamento financiero de la Cancillería. No me atreví, por tanto, a formular propuesta alguna. Tras un extenuante y dilatado periplo urbano, sin resultados positivos, concerté una entrevista con el propietario de la citada residencia, que pertenecía a un rico comerciante en vinos, desilusionado por su mala experiencia con un diplomático extranjero. Rhodesia del Sur, naciente país vecino de las colonias portuguesas en Africa, que en esa época se independizó del Reino Unido de Gran Bretaña, había abierto por pocos meses su primera misión diplomática en Lisboa, en la casa que entonces permanecía abandonada.

Cuando me entrevisté con el propietario, traumatizado por la clausura abrupta de dicha embajada, tenía cerrada la residencia y en penoso abandono desde hacía varios meses, por su propia decisión. Luego de las frases iniciales de circunstancia, le dije que en Lisboa me había encontrado con la sorpresa de que la Cancillería estaba instalada en el “Palacio de las Necesidades” y que enterraban a los muertos en el “Cementerio de los placeres”. Sin abandonar el tono humorístico le expresé que nuestras cancillerías tenían, desde esa perspectiva, un símil indudable. Al final arribamos a un acuerdo mutuamente satisfactorio y pude solucionar un problema tan prosaico como serio. Tomé una residencia tan confortable y decente, con mi rango de consejero, que después dos embajadores ecuatorianos la habitaron sucesivamente con decoro y amplia comodidad.

He comenzado por citar este par de anécdotas triviales de carácter personal para despojarle al ejercicio diplomático del cariz rígido y formal con que suele presentárselo habitualmente. Pasemos ahora a su práctica ortodoxa.

Fui acreditado en Portugal como Encargado de Negocios con cartas de gabinete, o sea jefe de misión sin rango de embajador, para quienes no están familiarizados con la jerga diplomática. Mi primera visita fue, por supuesto, al Ministro de Negocios Extranjeros, Franco Nogueira. Cuando comenzamos a abordar temas de interés común, el Canciller me dijo que se sentía halagado por el hecho de que un diplo-

mático latinoamericano se expresara en portugués y que era su primera experiencia en tal sentido. Mostró interés por las relaciones de Portugal con los países de nuestra región. Cuando le manifesté que yo había servido varios años en la Embajada del Ecuador en Río de Janeiro, lo cual explica mi manejo del idioma, intercambiamos impresiones sobre el rol del Brasil en el contexto latinoamericano y sus vinculaciones históricas con Portugal. Después tuve audiencia con el Secretario General, embajador Archer, y a continuación con los directores de los diversos departamentos del Ministerio. Nuestros diálogos tenían en alguna medida la impronta de la novedad porque yo había abierto la Embajada del Ecuador. En mis conversaciones ponía de presente, por supuesto, los aspectos relevantes de nuestro país, singularmente en materia de política exterior.

La agenda de la política exterior de Portugal era amplia, pero indudablemente su preocupación prioritaria se dirigía a sus colonias en Africa, Asia y Oceanía, que en el lenguaje oficial se denominaban provincias ultramarinas. Angola y Mozambique eran las de mayor significación, sin dejar de lado a Goa, en la India, tomada en 1510. Importa recordar que hasta el arribo de los portugueses a la India, el Lejano Oriente conocía a los europeos fundamentalmente por los relatos de los misioneros franciscanos del siglo XIII y por los viajes de Marco Polo. No hay que olvidar que en la epopeya de los descubrimientos de los siglos XV y XVI, Portugal dio “nuevos mundos al mundo”, según la metáfora del gran poeta épico Luis de Camoens, autor de “Los lusíadas”. Se dividió con España el dominio de las tierras por descubrirse, primero con la bula pontificia “Inter-caetera” y, luego, mediante el Tratado de Tordesillas. El Papa Alejandro VI promulgó la célebre bula el 4 de mayo de 1493, con el propósito de evitar conflictos entre España y Portugal por las posesiones territoriales derivadas de los descubrimientos geográficos que siguieron al arribo de Colón al nuevo mundo. El documento pontificio reconocía a la corona española todas las tierras descubiertas o por descubrirse al oeste de una línea trazada de polo a polo, cien leguas al occidente de las islas Azores y de Cabo Verde. Tal delimitación no satisfizo a Portugal, que negoció con España el Tratado de Tordesillas (7 de junio de 1494) y consiguió desplazar aquella línea divisoria a 370 leguas de las mencionadas islas, como culminación de un éxito diplomático.

En este punto vale la pena consignar un dato relevante en la historia de ambos países. La lucha por la sucesión en Portugal, desencadenada tras la muerte sin descendencia del rey Sebastián, fue aprovechada por Felipe II, de España, para unir ambos reinos bajo la bandera de su país, en 1580. Portugal obtuvo su independencia en 1640 y ocupó el trono el duque de Braganza, José I. A raíz de la invasión de Napoleón Bonaparte, en 1807, la corte se trasladó a Brasil, donde permaneció hasta 1821. Al año siguiente Brasil se declaró independiente. La revolución de 1910 puso término a la monarquía portuguesa e instauró la República.

A propósito de la repartición de las tierras americanas entre España y Portugal, a la luz de la bula del pontífice español Alejandro VI, se dice que el Rey de Francia, Francisco I, planteó esta protesta: “Que me muestren la cláusula del testamento de Adán en donde se diga que Francia está privada de lo que le corresponde en el Nuevo Mundo”. En consecuencia, envió a Jacques Cartier a colonizar el Canadá.

En la década de los sesenta se desencadenó una eclosión anticolonialista que culminó con la creación de un nutrido número de Estados y la ampliación de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Ese movimiento liberador surgió al término de la segunda guerra mundial a raíz de la independencia de India y Pakistán del Reino Unido de Gran Bretaña (1947) y la formación del Estado de Israel (1948), por resolución de la Asamblea General de la ONU, pero cobró un impulso irrefrenable en los años sesenta. Las potencias coloniales europeas de la época, permeables a las nuevas corrientes de la historia, levantaron los diques de sus dominios de ultramar y abrieron cauces a la tendencia emancipadora. Portugal, por decisión del dictador Antonio de Oliveira Salazar, tomó la determinación de permanecer en sus Provincias Ultramarinas, con un alto costo en vidas humanas y recursos económicos. Es que una de las consecuencias de la segunda guerra mundial fue precisamente la liquidación de los imperios coloniales del siglo XIX, como los de Gran Bretaña, Francia, Holanda y Portugal, con los efectos antes señalados.

Presidente de la República era el Almirante Américo Thomas y, Presidente del Consejo de Ministros, Antonio de Oliveira Salazar; pero no cabía sombra de duda de que el poder estaba en manos de Salazar. En las muy ocasionales ceremonias públicas en que aparecían juntos, algún desinformado podía preguntar por la identidad del venerable

marino que estaba cerca de Salazar, personaje que monopolizaba la atención de los medios de comunicación internacionales.

Oliveira Salazar era el paradigma del poder en la sociedad portuguesa. Condujo férreamente los destinos de su país durante cuatro décadas. Su siempre ponderada austeridad le confería un aire monástico y recoleto, tal vez como pervivencia de sus hábitos de seminarista en su primera juventud. Es que cursó varios años en el seminario de la ciudad de Viseu, al norte de Lisboa. Pero en 1910, año de la proclamación de la República por el colapso de la vieja monarquía, Salazar advirtió que no tenía vocación para el sacerdocio y se matriculó como estudiante de derecho en la Universidad de Coimbra, donde se graduó y fue profesor. Llamado a ejercer el cargo de Ministro de Finanzas en 1926, alcanzó la presidencia del Consejo de Ministros, en julio de 1932, y se preocupó por introducir cambios políticos y mantener un manejo ordenado de la economía del país. El historiador portugués Fernando Rosas traza esta semblanza personal de Salazar: “El dictador tenía aureola de santo, quería parecer casto, porque, por falta de tiempo para ser un buen jefe de familia, se había casado con la Patria. Mantenía con la Patria, tal como lo presentaba la propaganda, una especie de relación incestuosa: era marido y padre al mismo tiempo”. La casa familiar cerca de Santa Comba Dao está ahora en ruinas, pero si sus paredes hablaran a lo mejor se develaría un mito.

Oliveira Salazar estableció el Estado Nuevo sobre bases de un régimen corporativo de corte fascista. Durante la guerra civil española (1936-1939) le brindó todo su apoyo al Generalísimo Francisco Franco, con quien años después mantendría entrevistas periódicas en lugares fronterizos, como signo de una relación política activa y compartida. Ambos personajes tenían afinidades políticas pero personalidades diametralmente opuestas. Franco fue el regente vitalicio de la monarquía y era partidario de la parafernalia del poder, en tanto que Salazar se distinguía por su apego a la sobriedad casi monacal. En el curso de la segunda guerra mundial Salazar optó por una neutralidad que, manejada con hábiles malabarismos, rindió enormes beneficios económicos a su país. Portugal vendía alimentos a Hitler con destino a las tropas nazis; al mismo tiempo Salazar permitió que varios miles de judíos y otros perseguidos políticos pudiesen escapar de las hordas hitlerianas por territorio portugués. Lisboa era el centro de convergencia de espías aliados y nazis para sus operaciones clandestinas. En los momentos del

intenso intercambio comercial con Alemania, Portugal mantuvo abiertos los cauces de comunicación con Inglaterra, su más antigua aliada.

El comienzo de la “guerra fría” entre las dos superpotencias le brindó a Salazar una excelente coyuntura para acceder a la amistad de Estados Unidos. Obtuvo que Portugal fuera admitido como miembro fundador de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), en abril de 1949. Cuando advirtió que en la etapa final de la guerra mundial el resultado se inclinaba a favor de los países aliados, permitió que los británicos hicieran uso, desde 1943, de la base aérea en las Islas Azores. Y ante el interés americano por establecer instalaciones militares en el Atlántico, suscribió en 1951 el Acuerdo de Defensa entre Portugal y Estados Unidos para formalizar la utilización de la Base Aérea de Las Lajes, en las Azores, por la Fuerza Aérea norteamericana.

Pero esta ductilidad en el manejo de la política exterior no funcionó en el caso de las Provincias Ultramarinas, pues el tema de la descolonización se afianzaba en los principales foros internacionales, especialmente en las Naciones Unidas. Era evidente el esfuerzo oficial por conservar las colonias portuguesas, cuyo costo humano se reflejaba en el reclutamiento militar y el retorno de jóvenes heridos en las acciones bélicas en ultramar. La posición latinoamericana era uniforme en el marco de la ONU, de rechazo a la pervivencia del colonialismo. Ello no obstante, o tal vez por esa misma causa, el gobierno solía invitar a los diplomáticos de nuestra región geográfica a visitar Angola y Mozambique, para valorar la obra de la metrópoli. Algunos aceptaron participar de ese periplo. Hubo incluso el caso de un embajador colombiano que, entusiasta, publicó en 1965 un libro en dos volúmenes, titulado “Portugal y la solidaridad de Occidente”. La frase final del segundo tomo dice así: “Terminábamos nuestros diálogos lusitanos convencidos de la importancia de que las Américas cumplan con el deber que les recae en su propio interés para la perduración de su propia civilización, nacida en Europa, de propugnar por todos los medios que el diálogo entre Portugal y el Mundo, que inició el Infante Don Enrique, continúe con la presencia soberana de Portugal en todas sus provincias de Africa, de Asia y de Oceanía”.

Conviene advertir que desde el comienzo de la década de los 60 surgieron reiteradas revueltas contra los portugueses en sus colonias. En Angola, por ejemplo, aparecieron tres movimientos de liberación: el MPLA (Movimiento Popular por la Liberación de Angola); el FNLA

(Frente Nacional para la Liberación de Angola) y la UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola). El MPLA de Agostinho Neto tenía el apoyo de la Unión Soviética y la UNITA, de Savimbi, el respaldo occidental. En 1975 Portugal llegó a un acuerdo con tales movimientos para la celebración de elecciones. Se desencadenó, sin embargo, la guerra civil. Portugal sugirió entonces que interviniera la ONU para asegurar la autoridad y el orden en el país, a la par que proclamó la independencia a finales de ese mismo año. El MPLA tomó el poder con la colaboración de tropas cubanas y soviéticas y se prolongó la guerra civil. Como en la mayoría de movimientos emancipadores de la época se percibió en las colonias portuguesas la gravitación de la pugna ideológica de las grandes potencias, en el marco de la “guerra fría”. En todo caso ese proceso significó para Portugal la pérdida de sus antiguas colonias.

PUENTE SOBRE EL RÍO TAJO

Cuando arribé a Lisboa, la obra pública más relevante era la construcción de un gigantesco puente metálico sobre el río Tajo, réplica del Golden Gate de San Francisco de California. En el año siguiente se realizó la inauguración de la obra con fastuosas ceremonias y la concurrencia de importantes invitados oficiales de Europa. En una vistosa ceremonia matutina las delegaciones fueron atendidas en lujosas carpas de evocación pretérita hasta el momento en que se echaron a volar decenas de palomas blancas, en simbólico ademán de paz. En la noche se desarrolló una elegante velada musical en el Palacio de Queluz, especie de Versalles lusitano. En el sitio de honor del gran salón se ubicaron, en sendas butacas, el Presidente de la República, Almirante Américo Thomas, y el Presidente del Consejo de Ministros, Antonio de Oliveira Salazar. Las delegaciones especiales y el Cuerpo Diplomático residente, de estricta etiqueta y de pie, fueron desplegados en torno al salón, para escuchar un recital de “fados” a cargo de Amalia Rodrigues, la más famosa intérprete de la canción popular portuguesa. Sólo la excelencia interpretativa de la diva nos mantuvo en pie un par de horas, mientras los dos personajes disfrutaban del espectáculo desde su mullida comodidad. La cosa no daba para el enfado, pero habría sido deseable un poco de comodidad para el estado llano. El puente fue bau-

tizado, por cierto, con el nombre de Salazar, hasta que los cambios políticos ulteriores lo sustituyeron por otro.

ASILO DIPLOMÁTICO

El cuerpo diplomático latinoamericano, a nivel de jefes de misión, estaba compuesto mayoritariamente por políticos. Entre once representantes no éramos más de tres o cuatro funcionarios de carrera. Un momento dado circuló, en voz baja, la versión de que se iban a producir solicitudes de asilo a nuestras misiones, lo cual suscitó preocupación, porque se trata de una institución que sólo tiene rango jurídico en América Latina pero no en Europa. El embajador de México, licenciado José Valadés, fue el promotor de una reunión informal y reservada de nuestro grupo, en su residencia, para considerar potenciales problemas en caso de concretarse tal rumor.

Cuando estuvimos presentes todos los representantes, el embajador Valadés planteó el asunto y pidió opiniones al respecto. Dijo que sería útil escuchar a un profesional de la diplomacia en torno a aspectos esenciales del asilo, para conocimiento de quienes no estaban familiarizados con el tema. En un gesto de cortesía, que yo aprecié debidamente, me invitó a asumir esa delicada tarea.

Señalé que si bien el asilo tiene un origen antiguo como instrumento de protección a las personas en peligro, Europa y los Estados Unidos sólo lo reconocen en el orden humanitario pero niegan su carácter de institución de derecho internacional, a diferencia de los latinoamericanos que por su inestabilidad política intermitente han adoptado varias convenciones sobre la materia. Les relaté el famoso episodio ocurrido en la guerra civil española (1936-1939). En ese lapso se refugiaron cerca de 15.000 personas en 22 misiones diplomáticas, de diversa procedencia geográfica, que les concedieron asilo político, bajo protesta del régimen republicano español. Y en el marco de la realidad latinoamericana les cité el caso paradigmático de Haya de la Torre, entre Perú y Colombia, que duró más de 5 años. Después de mi exposición de carácter general habló el embajador de Venezuela, general Rodríguez Landaeta, para contarnos que tenía un asilado desde hacía más de seis años en la cancillería de su misión. Se trataba de un joven estudiante de arquitectura que durante ese tiempo había contraído



Saludo de año nuevo al Presidente de Portugal, Almirante Américo Tomás, por los representantes diplomáticos del Ecuador y Cuba.

matrimonio y había procreado un hijo. Era el único caso concreto, de perspectivas desalentadoras.

El embajador de México, por su parte, nos refirió una desconcertante experiencia suya. Un día había aparecido en la misión diplomática mexicana un peticionario de asilo político, quien fue huésped durante algunos días. El embajador Valadés, supongo que por la renuencia portuguesa a aceptar la consideración de tales casos, persuadió al joven a que abandonara la embajada para reincorporarse a su lucha contra la dictadura, porque de lo contrario le esperaba un encierro prolongado y estéril en la misión. Tiempo después se descubrieron tres cadáveres en un lugar cercano a la frontera luso-española: el de Galvao, oficial de la marina que se tomó un trasatlántico en alta mar como gesto de rebeldía contra el régimen salazarista, y el de su secretaria; el tercer cadáver fue el del joven portugués que abandonó la embajada mexicana para proseguir su lucha idealista. El embajador nos confesó que le atormentaba un secreto sentimiento de culpa por el trágico desenlace del episodio relatado.

En el tema de la oposición política alguien recordó la reciente eliminación del general Humberto Delgado, en febrero de 1965. Se decía que el inspector de la Policía Internacional y de Defensa del Estado (PIDE), Antonio Rosa Casaco, dirigió la emboscada y asesinato del “general sin miedo”, cerca de Badajoz, en el suroeste de España. Se afirma que el general Delgado, candidato de oposición en las elecciones presidenciales de 1958, ganó los comicios, escamoteados por el gobierno.

El ejercicio sobre el tema del asilo fue útil para refrescar conocimientos, pero para sosiego general los rumores no se confirmaron en los hechos, pues como queda dicho la noble institución sólo funciona a plenitud en América Latina.

EL DESTINO DE LOS EX...

Lisboa, ciudad encantadora y de rico abolengo histórico, era lugar de socorrida convergencia de personajes que habían tenido posiciones relevantes en sus respectivos países de origen. Varios de ellos se afincaban en Estoril, elegante polo de desarrollo turístico internacional. Entre las figuras descollantes estaban, por ejemplo, el ex rey Humberto de Italia y el conde de Barcelona, padre del actual Rey de España.

Varias veces apareció, bien custodiado, Fulgencio Batista, el patibulario dictador cubano, quien residía en la isla de Madeira, si no me equivoco. Un hermano del dictador dominicano Trujillo disfrutaba en Lisboa de los sospechosos lucros de la familia reinante.

El gobierno lusitano ofrecía determinados incentivos o privilegios para que embajadores extranjeros se jubilaran y se radicaran en Portugal. Era frecuente, por tanto, alternar con embajadores en retiro de diversa procedencia geográfica. Un día me encontré con el embajador Dryselius, de Suecia, quien meses antes había pasado a situación de retiro. Manteníamos una amistad franca y cordial. Hombre culto, casado con una dama pintora, se radicó en Sintra, pintoresca población cercana a Lisboa. Adquirí una pequeña propiedad fuera del perímetro urbano –me dijo–, colindante con la de un analfabeto portugués. No se imagina usted cuánto he aprendido de mi vecino, añadió. Es que la sabiduría transmitida por tradición oral en las viejas culturas europeas, comenté, le confiere un sentido relativo al analfabetismo. Entre bromas y veras concluyó afirmando que su felicidad era completa porque no tenía teléfono y a veces dejaba de leer los periódicos.

Antes de despedirnos, recordamos el diálogo que mantuviéramos con el canciller Franco Nogueira, en una recepción oficial en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a propósito del tema de la descolonización en los foros internacionales. En determinado momento de la conversación, el embajador Dryselius, de buen talante y en tono amistoso, le preguntó al ministro cómo iban las cosas en el “imperio portugués”. Franco Nogueira, con el mismo temperamento y en un lance de ingenio, le respondió con otra pregunta, inquirendole sobre la marcha del “imperialismo sueco”. Sorprendido por la reacción de su interlocutor, Dryselius le contestó que Suecia no tenía colonias. El “imperialismo tecnológico” es una nueva modalidad vigente en nuestros tiempos, acotó Franco Nogueira, en clara alusión al desarrollo de la tecnología sueca y su proyección planetaria.

El gobierno de la República Dominicana decidió cerrar su misión diplomática en Lisboa, entiendo que por razones presupuestarias. En consecuencia, el embajador Miguel Pardo Marchena, médico de atributos humanos muy estimables y caballero de ejemplar comportamiento en el ejercicio de su representación, retornó a su país. Un día vino a visitarme su secretario, quien corrió la misma suerte, pero en

condiciones distintas. Cuando el doctor Pardo me lo presentó en alguna ceremonia oficial hice el comentario de que su colaborador era un dominicano atípico, porque se expresaba como un español de nacimiento. Es que se trata de un español que recibió la ciudadanía honoraria de mi país, me comentó el embajador. Añadió que el joven profesor de filosofía y luchador romántico tenía la aureola de haber participado del “ajusticiamiento” del dictador Trujillo, por lo cual se le confirió la ciudadanía dominicana. Al recibirlo en mi despacho, con motivo de su visita de despedida, le pregunté sobre su destino inmediato. Me respondió que retornaba a Santo Domingo porque había la prohibición de su reingreso a España por sus actividades antifranquistas. La CIA, que todo lo sabe, ya le había contratado para que prestase servicios informativos desde su patria adoptiva, según me confesó en tono confidencial.

VISITA A COIMBRA

Portugal cuenta con una de las universidades más antiguas de Europa. Fundada en el siglo XIII (1290) la Universidad de Coimbra tiene un valor emblemático en el marco de la cultura nacional y, por cierto, de la enseñanza superior del país. En ella se han formado muchos de los profesionales y dirigentes de la sociedad lusitana. Oliveira Salazar, el dictador que guió los destinos de su país por el lapso de cuarenta años, fue alumno y catedrático de dicha universidad hasta que el presidente Carmona le invitó a asumir la función de Ministro de Finanzas.

La universidad cuenta, por supuesto, con una importante biblioteca. Me pareció oportuno incorporar la Biblioteca Ecuatoriana Mínima a su repertorio de publicaciones, con lo cual yo estaba cumpliendo con uno de los deberes básicos de difusión de los valores relevantes del país en el exterior. Hice la gestión pertinente ante nuestra Cancillería y, una vez recibida la valiosa colección, anuncié mi visita a la universidad, para su entrega en una ceremonia adecuada. Así lo hice, en una fecha previamente acordada, y me fue grato alternar con un grupo de profesores y estudiantes, a quienes expliqué las características de esa importante publicación cultural, además de resaltar algunos temas trascendentes de la realidad ecuatoriana.

ALGO SOBRE ARTE

Portugal celebró por todo lo alto el quinto centenario del nacimiento de Gil Vicente (1465—1536), autor y actor dramático, poeta lírico y satírico, por cuya cuna se disputan Lisboa, Guimaraes y Barcelos. Por la variedad de sus talentos, fue uno de los típicos exponentes del renacimiento europeo. Escribió numerosas obras de carácter diverso. Dejó cuarenta y cuatro obras dramáticas, de las cuales siete están en portugués y la mayoría en dos idiomas o escritas en castellano. Por cierto que su español no era estrictamente castizo, pues tenía muchos lusitanismos, empleados con gracia y elegancia. Era un afortunado cultivador del auto, composición dramática breve y con personajes alegóricos. Tenía un agudo sentido de lo popular, expresado con fino lirismo.

El principal acto de un amplio programa conmemorativo fue una presentación artística en el teatro nacional de la capital, con asistencia del Cuerpo Diplomático. Entre las obras del repertorio constaba el auto de “La fiesta”, pieza escrita en portugués que cuenta con algunos diálogos chispeantes en español entre varias gitanas procedentes de Sevilla. En el intermedio de la función le hice al embajador Archer, Subsecretario de Relaciones Exteriores, la amistosa confidencia de que entendía muy poco el desarrollo de los parlamentos en portugués, a pesar de mis conocimientos del idioma. Lo mismo me ocurre a mí, me respondió, con una sonrisa tranquilizadora, porque la obra está escrita en portugués antiguo, distinto del actual.

Al finalizar el espectáculo me encontré en uno de los pasillos con un conocido arquitecto brasileño, constructor de una ciudadela en un centro turístico de Portugal. Intercambiamos impresiones sobre la pieza teatral que acabábamos de presenciar. El se refirió específicamente al diálogo entre las gitanas y, con mucha gracia, me dijo: creo que los brasileños deberíamos hablar español.... La broma obedecía a que se percibía un agudo contraste entre la musicalidad del idioma español y la dureza del portugués antiguo...

Un día fuimos invitados por el Ministro de la Embajada del Brasil a una simpática guitarreada en su residencia, con asistencia de un pequeño grupo de diplomáticos latinoamericanos y varios caballeros portugueses relacionados con la embajada brasileña. Intervino, en primer término, un joven noble de la Casa de Braganza, de aquellos que no han renunciado a la utopía de reinstalar un régimen monárquico en

el gigante sudamericano. El caballero interpretó, en guitarra portuguesa, varias composiciones de buen gusto. Al escucharme un par de expresiones elogiosas respecto de esas interpretaciones musicales, mi vecino inmediato me dijo que el afortunado ejecutante era su yerno. En tablamus conversación y le formulé una pregunta que a la postre resultó impertinente. Le interrogué sobre su actividad personal. Yo no trabajo, soy un “fidalgo”, me respondió casi ofendido, poniendo al descubierto una aguda alergia laboral. La verdad es que de hidalgo tenía muy poco y mucho de parásito social. En todo caso disfrutamos de la siempre grata hospitalidad brasileña, alegre y cordial.

TÉRMINO DE LA ERA DE SALAZAR

En el verano de 1968 la prensa mundial difundió la noticia de que Oliveira Salazar, con 79 años de edad, había sufrido un accidente. A consecuencia de una caída en un antiguo fuerte cercano a Lisboa fue sometido a una operación quirúrgica en el cráneo, que le dejó incapacitado, aunque conservando cierta lucidez. Se dice que sus allegados palaciegos organizaron la farsa de unas reuniones de gabinete presididas por el dictador, pero Marcelo Caetano, su sucesor, comenzó a ejercer desde entonces el poder real. El 30 de julio de 1970 se realizaron las exequias, encabezadas por Caetano y el ex canciller Franco Nogueira, quien apareció en un momento dado como potencial delfín del régimen.

Marcelo Caetano sólo pudo conservar el poder hasta el 25 de abril de 1974, en que se produjo la Revolución de los Claveles, que puso término a la dictadura.

El Portugal actual, miembro de la Unión Europea, marca por supuesto palmarias diferencias con el que acabo de describir en este breve esbozo.

ACTIVIDADES CULTURALES EN CANCELLERÍA

En marzo de 1967 retorné a Quito para asumir las funciones de Director del Departamento Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Poco tiempo después recibí una grata sorpresa, muy poco común en el servicio exterior. El embajador Gonzalo Ponce Ribadeneira asumió la jefatura de misión en Lisboa, luego de una fugaz permanencia del señor Raúl Andrade Moscoso, quien me sucedió en la función de Encargado de Negocios. El embajador Ponce había realizado ya la ritual visita a sus colegas diplomáticos y a las principales autoridades del gobierno portugués cuando tuvo la gentileza de dirigirme una carta personal. En ella me decía que, en ejercicio de una medida de estricta justicia, había enviado una nota a nuestra Cancillería, bajo el epígrafe de “Para el currículum vitae del Consejero Miguel A. Vasco”, ya que no había encontrado en el archivo una apreciación sobre mi gestión en Lisboa. Tanto en la nota oficial como en la carta privada señalaba un hecho cierto: no habíamos tenido la oportunidad de conocernos personalmente. Después de haber escuchado las manifestaciones verbales de sus interlocutores del mundo diplomático, oficial y social, sobre el período en que tuve a honra representar al Ecuador en Portugal, el embajador Ponce asumió el gesto caballeroso de dejar una constancia escrita sobre el tema. Hombre conocido por sus agudezas, en la parte fi-

nal de su carta consignó esta observación: como las notas de esta naturaleza suelen extraviarse en los archivos oficiales, le remito una copia para su archivo personal...

Fue interesante y productivo el desarrollo de las actividades del Departamento Cultural, a pesar de la carencia de recursos presupuestarios para ejecutar un programa de difusión de los valores nacionales. En coordinación con la Embajada del Ecuador en Washington planeamos una exposición de arte colonial quiteño en los Estados Unidos, bajo el patrocinio del Smithsonian Institute. La agregada cultural en esa ciudad, Piedad Castillo de Suro, funcionaria caracterizada por su dinamismo, impulsó las gestiones orientadas a obtener el auspicio norteamericano mientras en Quito acometíamos las tediosas y complejas tareas de armar la muestra artística. Inicialmente se le confió a Nicolás Delgado, figura conocida en el campo artístico, la misión de hacer la selección de las obras pictóricas y escultóricas provenientes de museos, conventos y colecciones privadas. Luego asumió esa delicada tarea Filoteo Samaniego, quien a la postre presentó la exposición en Estados Unidos, con un artístico catálogo impreso en Quito. Filoteo cumplió su cometido con su reconocida idoneidad.

Cuando creíamos haber coronado los esfuerzos compartidos en el Departamento Cultural surgió un problema inesperado y bastante serio. Varios religiosos acudieron a la Nunciatura Apostólica con el pedido de que el representante del Vaticano impidiera la salida de la exposición, invocando para ello el "Modus Vivendi" vigente entre el Gobierno del Ecuador y la Santa Sede. El Nuncio realizó la gestión solicitada ante la Cancillería con el argumento de que no era conveniente llevar al extranjero piezas religiosas pertenecientes al patrimonio cultural del país. El Canciller de la República, mi buen amigo Julio Prado Vallejo, me comunicó el particular y me dijo que dejaba en mis manos la solución del problema. Poco menos que dependía de mi labor de persuasión al Nuncio el viaje de la exposición a Washington.

Mantuve una extensa y complicada entrevista con el Nuncio Apostólico, quien echó mano de varios argumentos orientados a objetar la salida de la exposición. Me dijo, entre otras cosas, que en Europa los visitantes van a los museos y que a las piezas artísticas no se las moviliza, porque pueden sufrir escoriaciones o deteriorarse. Le respondí que, en efecto, museos como el Louvre, en París; el Prado, en Madrid; el Ermitage, en San Petersburgo, y otros tantos, son sitios de convergen-

cia del turismo internacional y de las gentes interesadas en la cultura y el arte. Le referí que tuve la oportunidad excepcional de contemplar por vez primera, en 1964, en la feria mundial de Nueva York, la célebre Piedad, de Miguel Angel, que fuera después objeto de un demencial atentado en su permanente sitio de la Basílica de San Pedro. Le observé que, sin desconocer la validez de su argumentación, el caso del Ecuador es distinto y que, por razones obvias, necesitamos promocionar en el exterior nuestros valores artísticos y culturales. El Nuncio terminó por aceptar nuestra decisión de llevar adelante el proyecto y presentar en los Estados Unidos el repertorio de arte colonial que habíamos preparado, no sin antes hacernos notar la responsabilidad que estábamos asumiendo, lo cual era obvio.

La exposición alcanzó un éxito extraordinario, al extremo de que el calendario previsto se alteró por su presentación en otras ciudades. Pero la demora en el retorno de las obras al Ecuador, por la razón indicada, nos planteó otro problema: la reacción negativa de algunas personas interesadas. Alguien me comentó, por ejemplo, que un fraile franciscano que organizaba las procesiones del Señor del Gran Poder, de acusada raigambre popular, nos había tildado a los mentores de la exposición de “herejes que estaban entregando las imágenes católicas a los protestantes norteamericanos”, o algo parecido a semejante disparate folklórico. Lo cierto es que comenzamos a recibir no sólo versiones sino reclamos concretos. Para aplacar las protestas por la demora elaboramos unos diplomas suscritos por el presidente Otto Arosemena, consignando el reconocimiento oficial por la cooperación patriótica de los propietarios de las obras artísticas. De Cuenca habíamos recibido la valiosa colaboración de varios conventos y de coleccionistas privados, inquietos también por la tardanza y los rumores tremendistas. Viajé a esa ciudad, visité a los conventos e hice pública entrega de los diplomas oficiales a sus destinatarios en un canal de televisión local, para asegurarme de que tuviéramos un número adecuado de testigos visuales.

El tema de las piezas de arte colonial quiteño a veces da pie a interpretaciones equívocas, según las circunstancias. Recuerdo, por ejemplo, las críticas dirigidas por la prensa al presidente Otto Arosemena Gómez a propósito de un intercambio de obsequios con su homólogo estadounidense, porque se dijo que el mandatario ecuatoriano le había entregado nada menos que un Cristo de Caspicara, emblemático escul-

tor de la Escuela Quiteña. Lo que ocurrió fue que, por recomendación del gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores, tuve que adquirir una pieza escultórica corriente, no catalogada en el patrimonio artístico nacional, que fue la que obsequió nuestro mandatario. Se trataba simplemente de un gesto de oposición política en nombre de Caspicara, que no tenía ninguna participación en ese desaguisado.

En conexión con esta materia vale la pena recordar que en esa misma época se le extendió una invitación al Marqués de Lozoya, experto de alto rango en el conocimiento de arte hispánico, quien desde hacía cuarenta años había escrito sobre las excelencias arquitectónicas de Quito y no conocía nuestra capital. Se celebró un acto público en el Salón de la Ciudad, en el cual el destacado huésped español disertó con brillo sobre aspectos relevantes del arte colonial quiteño. Dijo entonces, entre otras cosas, que la iglesia de la Compañía de Jesús es a su juicio, y sin ánimo de halago circunstancial a los ecuatorianos, el primer templo barroco del mundo. Poco tiempo después vino del Vaticano un Legado Pontificio y manifestó que el viaje de Roma a Quito se justificaba con creces con la sola visita al templo de la Compañía de Jesús.

En otro orden de ideas he de señalar que, por mi función en la Cancillería, yo integraba el directorio de la Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETURIS) y ejercía la presidencia de la entidad, que regulaba y orientaba la actividad turística en el país. Por la importancia creciente de ese sector, se estableció desde hace pocos años el Ministerio de Turismo.

En la primavera de 1969 se realizó una Conferencia de Plenipotenciarios de los Estados miembros de las Naciones Unidas para crear la Organización Mundial de Turismo, en el marco del sistema de la ONU. La sede de la reunión fue la ciudad de Sofía (Bulgaria). El gobierno búlgaro fue un anfitrión hospitalario y eficiente en la atención a las numerosas delegaciones, compuestas de diplomáticos y de representantes de entidades turísticas de los respectivos países. Tuve la grata misión de presidir la delegación nacional a ese certamen.

Las autoridades locales aprovecharon la coyuntura para inaugurar un elegante hotel de corte capitalista. Como suele ocurrir a veces en tales casos, las instalaciones nuevas no siempre responden a las expectativas de los usuarios. Es lo que ocurrió con uno de los vistosos ascensores. Cuando llegué con los integrantes de la delegación ecuatoriana, un empleado de expresión inescrutable tocó un par de botones, pero el



Saludo al Presidente del Ecuador, Dr. José María Velasco Ibarra, con motivo del Congreso Interamericano de Turismo, en el cual pronunció el discurso inaugural.

ascensor permaneció inmóvil. Alguien, con discreta dosis de sal quiteña, comentó en voz baja: “para que vean que no es fácil subir en la vida por la vía del socialismo”. El empleado búlgaro, que hasta entonces nos había dedicado un silencio glacial, replicó en buen español y con una leve carga de ironía: “Señores, este ascensor no funciona porque es suizo...” Entre los miembros de la delegación nos intercambiamos una sonrisa forzada, con la certeza de que el idioma no escapaba a la acuciosidad del sistema.

En el nutrido programa de atenciones figuraron dos visitas dignas de recuerdo. La primera, a la mayor plantación de rosas en el mundo, que sirven de materia prima a los fabricantes de perfumes en las diversas latitudes del planeta. Los tubitos con aceite de rosas que nos obsequiaron confirmaron con su aroma ambiguo que se trata de una materia prima y no de un perfume. La otra visita, al balneario de Varna, fue muy interesante, porque era el punto de encuentro de los alemanes del este y del oeste, antes de la unificación de su país. Además de ese símbolo político, se trata de un balneario localizado a orillas del Mar Negro, con amplias comodidades burguesas. Uno de los colegas quiso nadar en las frías aguas marítimas, pero en su intento casi se le congelaron hasta sus exclamaciones de auxilio.

La mencionada conferencia internacional cumplió satisfactoriamente su cometido y la Organización Mundial de Turismo funciona desde entonces dentro del sistema de las Naciones Unidas.

En el marco del mismo tema vale la pena recordar que en 1969 se reunió en Quito el Congreso Interamericano de Turismo, bajo el patrocinio de la OEA y del Gobierno del Ecuador. Le invitamos al presidente José María Velasco Ibarra a honrar la sesión inaugural con el discurso de apertura. La intervención del mandatario causó notable impacto por su enfoque filosófico del fenómeno turístico, como instrumento de recíproco conocimiento entre los pueblos del orbe, además de su valor actual como fuente económica de ingreso de divisas y de empleo en diversos estamentos de la sociedad. Consigno este dato porque, al término de la sesión, el jefe de la delegación de México vino a expresarme su felicitación por la disertación del presidente Velasco Ibarra. Me dijo que él había participado, como representante de su país, en todos los congresos interamericanos de turismo hasta entonces celebrados y que nunca había escuchado un discurso sobre la materia con una jerarquía conceptual semejante.

Al comienzo de la década de los sesenta vino a Quito para incorporarse como miembro de la Embajada del Brasil, Paulo de Carvalho Neto, antropólogo de prestigio internacional. No tardó en insertarse en la piel de la realidad ecuatoriana y en desarrollar una obra excepcional al servicio de la vinculación cultural de los dos países. Trascendiendo la esfera de su competencia diplomática, ejecutó una labor de investigación folklórica sin paralelo en el Ecuador. Fue de tal dimensión su obra en este campo que constituye un punto de inflexión en la trayectoria histórica de nuestro folclore. Por eso Benjamín Carrión no vaciló en afirmar que “el folclore ecuatoriano tendrá que ser marcado, en sus investigaciones, con estas iniciales: APC, antes de Paulo de Carvalho; o DPC, después de Paulo de Carvalho, como se hace con las iniciales señaladoras de nuestra Era....No hay exageración. Es una verdad sencilla en toda su formidable significación”. Fundó el Instituto Ecuatoriano de Folklore y, entre sus numerosas obras, escribió su Diccionario del Folklore Ecuatoriano, notable prospección de las esencias de nuestra identidad. Conocí a Paulo desde su arribo a Quito y cultivé con él una cordial amistad. El 2 de setiembre de 2003 se inauguró, con su nombre, la biblioteca del Instituto Brasileño de Cultura en nuestra capital. Días antes había fallecido en su país, víctima de una cruel enfermedad que hacia el final de su vida no le permitió recordar ni su propia identidad personal.

Casi al término de mi función de Director del Departamento Cultural recibimos la visita de un estupendo grupo de música antigua de la Universidad Católica de Chile, dirigido por la señora Silvia de Valdés, esposa del entonces Canciller Gabriel Valdés. He sido partidario convencido de que espectáculos de esa naturaleza deberían presentarse, en lo posible, en los deslumbrantes templos de Quito, como un medio de promoción de los invalorable tesoros artísticos de la ciudad. En tal virtud, hicimos todos los arreglos para el concierto barroco del citado grupo en la capilla de Cantuña, con asistencia del cuerpo diplomático. El éxito fue extraordinario y los cultos músicos chilenos fueron en su país los mejores heraldos de las excelencias del arte colonial quiteño. El repertorio musical interpretado en instrumentos de la época causó gran impacto estético entre los asistentes.

Como el Archipiélago de Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, tiene conocida y justa nombradía internacional por sus excelencias de diversa índole, nos pareció oportuno organizar una vi-

sita de los miembros del Cuerpo Diplomático, con el rango de jefes de misión, a ese lugar paradisíaco. La Armada Nacional puso a disposición de la Cancillería uno de sus barcos para llevar a buen término dicho acto de cortesía oficial, que fue muy apreciado por sus beneficiarios. En la noche del día en que zarpó el navío a las islas encantadas hubo una presentación artística en el Teatro Sucre. Al llegar al palco oficial me encontré con la sorpresa de que el Nuncio Apostólico había abandonado a su grey y se había quedado en Quito. Monseñor –le dije– tenía entendido que a esta hora Su Excelencia estaría viajando a las Galápagos, al frente del Cuerpo Diplomático. Esta fue su inesperada respuesta: “Para mí, la buena mesa y la buena cama”. O sea que en aras de la comodidad urbana se estaba perdiendo un viaje apasionante, del cual retornaron satisfechos y asombrados los demás jefes de misión, a pesar de las explicables incomodidades del navío militar. La actitud del ilustre prelado induce a colegir que sí importan las cosas de este mundo....

PROCESO SOCIALISTA EN CHILE

Cuando retorné de la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Sofía para crear la Organización Mundial de Turismo, dentro del sistema de las Naciones Unidas, se me pidió que aceptara un cambio de destino diplomático. Se me había propuesto la función de Encargado de Negocios en Rumania y, por razones administrativas, se me invitó a ocupar el cargo de Ministro en la Embajada en Santiago de Chile. Esto significaba en la práctica que iría como segundo de a bordo a Chile en vez de ser jefe de misión en Rumania. Estaba de por medio mi antigua y cordial amistad con el entonces embajador en Santiago, Teodoro Bustamante Muñoz. Acepté la nueva propuesta en el marco de la disciplina institucional y de mi vinculación personal con el jefe de misión en Chile, país de raigambre democrática y de conocido prestigio en el escenario internacional.

Pocos días después de mi arribo a Santiago, a mediados de 1969, se produjo un acontecimiento de trascendencia mundial. Me refiero a la llegada del hombre a la luna como concreción de un prodigio de la ciencia y la tecnología contemporáneas (20 de julio de 1969). Un astronauta norteamericano colocó en ese astro celeste un pabellón de su país. Cito este singular episodio porque representó un éxito sin precedentes para los Estados Unidos de América en el contexto de la guerra fría y de la competición con la Unión Soviética por la conquista del espacio exterior. Y lo hago porque ambas superpo-

tencias tuvieron, poco después, conexiones de diverso grado y naturaleza con un hecho político trascendente en Chile como fue el proceso socialista del presidente Salvador Allende, en el cual no estuvieron ausentes los matices de la bipolaridad.

Como uno de los números programados para celebrar la Fiesta Nacional del Ecuador, el 10 de Agosto de 1969, nos presentamos en un canal de televisión local el embajador Teodoro Bustamante Muñoz y yo, para abordar escuetamente temas de carácter político y cultural. Estos últimos corrieron a mi cargo. Como nos acompañaba también la esposa del embajador, mi querida amiga María Augusta, el conductor del programa le hizo un par de preguntas y la invitó a interpretar una canción ecuatoriana, ya que es dueña de una voz bien afinada. María Augusta aceptó la invitación de buen talante, a condición de que yo la acompañara en la guitarra. Una improvisación “en vivo y en directo” no es tarea exenta de riesgos, pero no podía negarme a semejante pedido. Para cumplir el inesperado compromiso pusieron en mis manos la guitarra del popular cantante chileno Víctor Jara, quien momentos antes había interpretado unas canciones ecuatorianas típicas que le había enseñado Oswaldo Guayasamín durante su reciente estancia en Santiago, adonde fuera a presentar una de sus comentadas exposiciones de pintura. Víctor Jara, como se sabe, fue una de las víctimas de la represión pinochetista. El maestro Guayasamín pintó en 1973 un cuadro en memoria de Salvador Allende, Pablo Neruda y Víctor Jara.

Transcurrían las postrimerías del régimen demócrata cristiano del presidente Eduardo Frei Montalva. En ese lapso se produjo la visita oficial del Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, licenciado Rogelio Valdivieso Eguiguren, que reforzó los tradicionales lazos de amistad cultivados por ambos países. Luego me cupo presenciar un extenso y dinámico período electoral con la participación de los candidatos Jorge Alessandri, Salvador Allende y Radomiro Tomic. Se decía que, de haberse realizado la votación en la etapa inicial de la campaña, el sufragio mayoritario habría favorecido al candidato derechista y ex – presidente Alessandri, pero una campaña electoral con asperezas de carácter personal y político desgastó gradualmente su imagen. El candidato Salvador Allende, con un discurso sencillo y directo, en que ofrecía “socialismo con empanada y vino tinto”, tocó las fibras populares de la chilenidad y consolidó un respaldo que le conduciría a la victoria. El can-

didato oficialista Radomiro Tomic, con un discurso ideológico cercano al socialista, ocupó el tercer lugar.

Una vez concluido el proceso electoral y proclamado el presidente Allende, lo tuvimos en nuestra Embajada al señor Tomic entre varios importantes invitados a una reunión de carácter social. El embajador Alfredo Correa me había recomendado atender especialmente a este destacado líder de la Democracia Cristiana de Chile. En un determinado momento de la conversación que mantuvimos le dije al señor Tomic que, por mi función en la misión diplomática, yo elaboraba los informes políticos para la Cancillería del Ecuador. Por esa razón había seguido de cerca la reciente campaña electoral. Le expresé que, sin ningún ánimo de elogio circunstancial, me parecía que el mejor expositor de entre los tres candidatos era él. Añadí, sin embargo, con las debidas consideraciones a tan alto personaje, que yo tenía la percepción de que sus discursos, profundos ideológicamente y de corte académico en sus aspectos formales, no llegaban a la comprensión del hombre sencillo del pueblo. Como suele ocurrir con el ego de ciertos actores políticos, no le agradó al señor Tomic mi comentario. Me respondió que las más prestigiosas agencias internacionales de medición de opinión pública señalaban lo contrario, o sea que su discurso tenía la mayor penetración en las esferas populares. De haber tenido fundamento tal apreciación a lo mejor habría sido distinto el resultado de la elección; pero hay que tomar en cuenta que él representaba ese momento una tendencia política afectada por el normal desgaste del ejercicio del poder.

El triunfo de Salvador Allende se produjo por muy estrecho margen. Como la vigente constitución chilena determinaba que en tal caso el Congreso podía escoger entre las dos primeras mayorías relativas, optó por Allende en acatamiento de una tradición democrática bien cimentada. Allende alcanzó el 36.3 por ciento de votos, frente al 34.9 por ciento de Alessandri, y accedió a suscribir un estatuto de garantías democráticas planteado por la Democracia Cristiana, en el marco del apoyo político para su elección en el Congreso. Dicho estatuto instaba a Allende a respetar las libertades políticas y civiles y a garantizar la existencia de partidos políticos, libertad de prensa, libertad de educación, libertad de los sindicatos respecto del control del Estado y libertad de las fuerzas armadas respecto de la injerencia política. Esto reflejaba sin duda una erosión de la confianza política frente al res-

peto que le debía el presidente electo a la Constitución y al orden jurídico establecido.

Mis labores en la Embajada, en un país de las conocidas características de Chile y en un momento histórico expectante, fueron en verdad gratificantes. No deseo incurrir en el lugar común de describir los atributos del pueblo chileno, siempre ponderados en acto de estricta justicia, y por eso centraré de modo escueto mi atención en la atmósfera cívica que rodeó al proceso electoral hasta su culminación. No obstante conocer de antemano los pergaminos institucionales del país, constituyó para mí una experiencia valiosa la indirecta participación de una vivencia democrática que captó el interés internacional y atizó el debate ideológico en la región.

Uno de los rasgos distintivos de la sociedad chilena ha sido históricamente el de su inclinación por la defensa de la institucionalidad democrática, en el ejercicio de una dilatada pedagogía política, con base en una cultura colectiva de estimables dimensiones. El disentimiento ideológico, con apreciables niveles de tolerancia y respeto recíproco, le confería al debate público un significativo rango cualitativo. En los momentos culminantes del proceso se encendieron las pasiones pero sin dar paso a desmesuras. Las diversas posiciones partidarias se expresaban no sólo en las concentraciones públicas, con las arengas de rigor, sino en ilustrativos paneles en la televisión y comentarios en diversos medios de comunicación social.

El hecho cierto es que Salvador Allende alcanzó el favor popular en las urnas, en comicios pulcros, al estilo chileno. Me contó un colega diplomático venezolano, quien alguna vez había sido refugiado político en Chile y tenía por eso contactos locales, que Allende, cuando conoció la noticia de su victoria electoral, se había retirado a un aposento, dominado por la emoción y el íntimo lenguaje de las lágrimas. Al reaparecer, minutos después, le había confiado a José Tohá (su Ministro de Defensa) la enorme presión que sentía frente a los ingentes desafíos del ejercicio del poder. Si damos crédito a las expresiones de mi interlocutor —amigo de Tohá— este episodio revelaría de alguna manera que la izquierda chilena no esperaba ese momento acceder al gobierno de su país, con la responsabilidad histórica consiguiente, pues resultaba más cómodo ocupar el espacio destinado a la oposición.

La legítima victoria de la Unidad Popular generó preocupaciones explícitas en el gobierno de los Estados Unidos de América, que desde

el primer momento no ocultó sus propósitos desestabilizadores, según lo prueban documentos diplomáticos americanos de carácter reservado recientemente divulgados por el Departamento de Estado. Desde la perspectiva estadounidense, podía formarse un eje marxista La Habana – Santiago, con incidencia política en la región.

En los círculos diplomáticos de Santiago había una explicable expectación por el planteamiento y ejecución del proyecto político del nuevo gobierno. El interés en el tema nos llevó a los ministros consejeros de varias misiones diplomáticas a conformar el “Club del Dos”, o sea los segundos en el orden jerárquico, para reunirnos con cierta periodicidad no sólo en función social sino para intercambiar impresiones, útiles en el desarrollo de nuestro trabajo profesional. Poco tiempo después de la instalación del régimen de la Unidad Popular tomamos la costumbre de invitar a los miembros del gabinete a la Asociación de Diplomáticos no Jefes de Misión, para conocer de primera mano los proyectos y programas que se iban a implantar. En mi calidad de Presidente de la Asociación empecé por convidar al Ministro de Economía, Pedro Vuskovich, por tratarse de un área fundamental en un sistema socialista. Sería la primera exposición del Ministro ante miembros del Cuerpo Diplomático y, por ello, concitó el interés general, incluso entre embajadores. Vuskovic inició su presentación con el anuncio de que iba a instrumentar una emisión monetaria inorgánica, con base en la utilización del margen ocioso de la capacidad industrial instalada, lo cual fracasó en la práctica. Pero conocíamos un diagnóstico global de la estrategia económica: “El planteamiento del equipo económico de la UP, en ese entonces, era sencillo: el objetivo de la política de corto plazo debería ser el de servir a la acumulación de fuerzas en el plano político, principalmente a través de la elevación de los niveles de empleo, salario y consumo, a fin de crear condiciones más favorables a la realización de las reformas de estructura, como la nacionalización de la minería y la banca, la estatización de industrias y la reforma agraria. Contando con estos instrumentos, el gobierno estaría en una situación privilegiada para orientar el funcionamiento de la economía, estimaban los dirigentes de la UP”, (“La política económica de la Vía Chilena”).

El tiempo vendría a demostrar que las dificultades para transformar la estructura económica sin provocar la crisis de la misma eran mucho mayores que las previstas. El considerable incremento del poder adquisitivo pronto tropezó con las limitaciones de la oferta y de ahí

derivaron el crecimiento del mercado negro, el acaparamiento y la inflación. El mercado negro cobró importancia a mediados de 1972 y se generalizó a raíz del paro patronal de octubre del mismo año. El agravamiento de la crisis le induciría en determinado momento al presidente Allende a hablar de una “economía de guerra”. En 1972 el gobierno abandonó la estrategia de Vuskovic, quien fue reemplazado por Carlos Matus, socialista allegado a Allende, en tanto que el comunista Orlando Millas pasó a ocupar la cartera de Hacienda. Era perceptible que el gobierno comenzaba a perder su capacidad de planificar a largo plazo y que se instalaba un sistema de sobrevivencia casi diaria.

Dentro de ese ciclo de charlas fue muy esclarecedor el diálogo que mantuviéramos con el Canciller Clodomiro Almeida sobre el rumbo de la política exterior chilena, en el marco de la diplomacia bilateral y multilateral. Fue muy interesante también la intervención de José Tohá en una de esas reuniones, porque sus manifestaciones desbordaron los límites de su función específica y pudimos topar una variedad de temas, incluso el de los rigores de la soledad del poder, que lo ejerció en una breve ausencia del presidente Allende.

Decíamos anteriormente que el boicot norteamericano a la administración de Allende era un secreto a voces. Uno de los signos visibles de tal actitud se reflejaba en el campo económico, básicamente en torno a la colocación del cobre en el mercado internacional. Conviene recordar que el candidato Allende reiteró en su campaña electoral que “el cobre es el sueldo de Chile”, para significar su importancia primordial para la economía nacional en función del ingreso de divisas. Al nacionalizarlo, afectaba intereses foráneos y generaba obvias resistencias. La presión norteamericana, que se expresaba por diversos medios, erosionó el precio del cobre y causó estragos en la economía chilena. En tales circunstancias escuché una opinión preocupante del embajador de la Unión Soviética. Asistí en calidad de Encargado de Negocios del Ecuador a una cena ofrecida en la Embajada de Rumania, con participación de diplomáticos de diversa procedencia. Cuando se abordó el tema de la sensible depresión del precio del cobre chileno en el mercado internacional, le pregunté al representante soviético si su país contemplaría un subsidio análogo al que brindaba al azúcar cubano, como un gesto de cooperación hacia el proceso socialista de Chile. Usted sabe que “los negocios son los negocios” y que mi país pagará por el cobre chileno el precio vigente en el mercado, me respondió. Pensé en-



Saludo al Presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, por parte del personal de la embajada en Santiago. Aparecen el Embajador y la señora de Bustamante Muñoz y el Ministro Consejero y la señora de Vasco.

tonces, para mi propio coleteo, que la acción estadounidense y la omisión soviética concurrirían, entre otros factores, a debilitar al proceso chileno. La acentuación de la crisis y su desenlace final no son, por cierto, imputables sólo a los factores exógenos sino también a las falencias de la estructura del poder. Recordemos que el gobierno de la Unidad Popular consistía en la coalición de cuatro partidos políticos y dos movimientos, que no siempre lograron armonizar acciones coherentes. Lo más relevante eran las discrepancias entre socialistas y comunistas respecto al ritmo de aplicación del programa de reformas y a la necesidad de equilibrar las movilizaciones sociales con la preservación de la confianza en los ámbitos de la clase media. Si bien en 1971 se registró una elevada tasa de crecimiento económico, aparecieron ya atisbos de los problemas que se desencadenaron y multiplicaron con entidad preocupante en 1972 y 1973, poniendo al descubierto la falta de coordinación entre el equipo económico y el elenco político.

En 1971 se anunció la visita del presidente Salvador Allende al Ecuador. Antes del viaje del Mandatario y su comitiva, nuestro embajador, Alfredo Correa, ofreció una cena en la residencia de la misión, en la cual pudimos alternar con el presidente y conocer algunas facetas relevantes de su vida pública. Cuando recorrió los espacios sociales de la Embajada, adquirida hacía poco tiempo atrás por el Gobierno del Ecuador, hizo un elogio de los rasgos arquitectónicos del predio y comentó, en tono socarrón y de amable ironía: “No me dirán los ecuatorianos que no me deben algo por la compra de esta bella residencia”. En efecto, la incertidumbre generada por la naturaleza del régimen incidió en el deterioro de los precios de los inmuebles, sujetos a cálculos aleatorios. Ante esta realidad, cuando el embajador en Tokio, Alfredo Correa, fue designado para la misión en Santiago, que ese momento yo la dirigía en calidad de Encargado de Negocios, le sugerí que pasara por Quito y obtuviera del presidente Velasco Ibarra la autorización y los fondos necesarios para la compra de la sede de la Embajada. La comprensión y el espíritu ejecutivo de nuestro Mandatario posibilitaron la compra del inmueble en pocas semanas. Naturalmente que al embajador Correa le teníamos en carpeta una serie de casas que habíamos visitado, con paciencia bíblica, mi señora y yo, antes de su arribo. Cuando discurríamos con el presidente Allende por los espacios sociales, me permití expresarle que el estilo de la residencia guardaba armonía, en cierta medida, con la concepción originaria de las casas solariegas de

Quito. Para responder a una pregunta suya le dije que, según la tradición, los primeros habitantes españoles de Quito, al tomar posesión de sus solares y disponer la construcción de sus residencias, pedían a los constructores trazar un patio y edificar en torno los aposentos. En el caso de la Embajada, los aposentos están contruidos en torno de un jardín, lo cual me indujo a invocar dicho símil.

Pero volvamos a la cena con el presidente de Chile, de temperamento abierto y comunicativo, quien matizó su conversación con anécdotas amenas de carácter autobiográfico. Expresó, por ejemplo, que de no haber triunfado en los últimos comicios, habría dispuesto que en su epitafio se leyera un día: “Aquí yace el futuro Presidente de Chile”. Esta ironía se basaba, como se conoce, en que alcanzó el poder sólo al cuarto intento. Al hablar de culturas, usos y costumbres, relató la siguiente anécdota a propósito de su visita a China como Presidente del Senado de Chile. Nuestros anfitriones nos ofrecieron una cena elegante con numerosos invitados, dijo el doctor Allende. Pensamos, mi señora y yo, que el primer plato era una especie de aguamanil y por eso sumergimos simultáneamente nuestros dedos en el respectivo recipiente. Todos los convidados automáticamente hicieron lo mismo, en gesto de cortesía oriental. Minutos después de haber sido retirados, volvían a la mesa los mismos platos, que habían sido de sopa y no contenían simplemente agua. Concluyó su relato en actitud hilarante y subrayó: “Tengo la sospecha de que, por la brevedad del tiempo y el número de invitados, retornaron los platos con la misma sopa...”. En síntesis, departimos durante una noche agradable, en la cual el jefe de Estado hizo un explicable paréntesis en el tráfigo de sus serias responsabilidades y preocupaciones, dando paso a su ingenioso talante. Cuando tocaba asuntos de Estado, afloraba el luchador idealista, preocupado por la suerte de su pueblo.

La visita del presidente Allende, enmarcada en la tradición amistosa de Ecuador y Chile, tuvo amplia repercusión y un desarrollo positivo orientado a consolidar los vínculos de diverso orden que cultivan ambos países. Allende estuvo en el Ecuador del 24 al 28 de agosto de 1971, en una gira latinoamericana que comprendía también a Colombia y Perú. Al ser declarado “Huésped Ilustre de Quito”, el Mandatario chileno dijo, entre otras cosas: “Represento a un pueblo hecho gobierno que aspira a construir un socialismo pluralista, democrático y en libertad”, pero que en el ámbito internacional es “profundamente

respetuoso de las naciones que viven y aspiran a una sociedad distinta”. En el intercambio de discursos con el presidente José María Velasco Ibarra ambos mandatarios resaltaron la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana y los organismos de cooperación, particularmente el Pacto Andino.

Uno de los acontecimientos más comentados en los medios internacionales y locales de comunicación social fue la visita de Fidel Castro a Chile, en el período inicial del gobierno de Allende, por razones obviamente comprensibles en función del personaje y del entorno político de la época, matizado por los ingredientes de la bipolaridad ideológica soviético-americana. Fue una visita oficial atípica a la luz de la costumbre internacional, pues se extendió por el lapso de veinticuatro días, si no recuerdo mal, planteando un reto a la imaginación del gobierno anfitrión en el desarrollo de un programa de atenciones a su huésped. Fidel Castro tuvo tiempo hasta para ensayar unas jugadas de baloncesto en la zona minera del norte del país.

El discurso del líder cubano en el estadio nacional de Santiago tuvo sus estridencias habituales y el fuego de su pasión revolucionaria. Comenzó por observarle al presidente Allende las carencias cuantitativas de esa manifestación popular y le dijo que en La Habana él estaba acostumbrado a congregarse un millón de manifestantes en circunstancias análogas. La reacción popular chilena frente a la conocida oratoria de Castro no correspondió a las expectativas que sin duda alentaba el líder caribeño. Personalmente me dejó la impresión de que en esa reacción gravitaban ingredientes culturales y determinados patrones de comportamiento. Es que la oratoria caribeña, cálida y caudalosa, no engrana completamente con la sobriedad europeizante del estilo chileno.

En la mañana de ese mismo día de la concentración popular en el estadio, nos entrevistamos con Fidel Castro en la residencia de su Embajada. Le acompañé al embajador Alfredo Correa en su visita de cortesía para invitarlo a que hiciera una escala técnica en el Ecuador, en su viaje de retorno a La Habana. En efecto, en Guayaquil lo esperaba el presidente Velasco Ibarra. El diálogo que mantuvimos con el líder cubano fue sencillo y parco. Castro estaba con una emisión de voz casi inaudible. Cuando el embajador Correa le preguntó si tenía algún problema en la garganta, le respondió de buen talante que estaba “guardando la voz para el discurso en el estadio....”. Creo que la dimensión

y la intensidad de su intervención oral ameritaban esa cautelosa medida de previsión.

La extensa e inusual permanencia de Fidel Castro en Chile dio paso a diversas interpretaciones y comentarios, pero sobre todo a una amplia difusión informativa en los medios nacionales y foráneos de comunicación. Mi percepción personal vinculó este hecho con la coincidencia de las elecciones presidenciales en Uruguay. Se decía que en esos comicios habría de triunfar la candidatura izquierdista del general retirado Líber Seregni, postulado en 1971 como candidato del Frente Amplio, que era una coalición de los partidos Socialista, Comunista y Demócrata Cristiano, así como de los disidentes de los partidos tradicionales (“rojos” y “blancos”). Fue una movilización sin precedentes de la izquierda uruguaya, pero que no superó el 18 por ciento de la votación global. De haberse producido su victoria, habría tendido un puente de plata a la prolongación del periplo de Castro desde Santiago a Montevideo, con los consiguientes réditos políticos en el ámbito regional.

Casi a finales de 1972 se realizó la visita a Santiago del Canciller del Ecuador, embajador Antonio José Lucio Paredes, en el marco de un periplo diplomático por los países andinos. Dicha visita coincidió con un paro de los transportistas en la ciudad capital, que fue uno de los síntomas de hechos ulteriores de protesta social. Comenzaron a arreciar las confrontaciones entre sectores antagónicos de la sociedad civil, especialmente entre las numerosas organizaciones componentes del “poder popular”, que defendían las conquistas propiciadas por el régimen, y los denominados “gremios”, que eran asociaciones de empleados no manuales y grupos de profesionales liberales, desde médicos, abogados y arquitectos hasta propietarios de camiones, pequeños tenderos y taxistas. El enfrentamiento de mayor significación con el gobierno se produjo en octubre de 1972, cuando el importante sector del transporte estuvo paralizado por un mes. Se declararon en huelga más de cien gremios, con el apoyo político de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional. Las fuerzas armadas fueron incorporadas al gabinete a raíz de la huelga, pero muy tardíamente para impedir el proceso de polarización nacional. Enfrentados gobierno y oposición, con la economía casi a la deriva, con la renuncia del general Carlos Prats (comandante en jefe de las fuerzas armadas) por no haber logrado mediar en la crisis, con la Iglesia sin alcanzar la reconciliación nacional y con la expansión de una violencia cruenta no lucía viable el

acceso al arreglo pacífico de la situación. El sangriento desenlace final se concretó en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 con el bombardeo al palacio presidencial de La Moneda y la muerte del presidente Allende, así como de miles de chilenos asesinados. Por mi retorno al Ecuador, en enero de 1973, ascendido al rango de Embajador, no fui testigo presencial de la asonada militar que condujo al poder al general Augusto Pinochet.

En el período inicial del régimen socialista tuve oportunidad de tratar al general Carlos Prats, comandante en jefe de las fuerzas armadas, y en el curso de una conversación informal le pregunté si, además de la confianza de que gozaba del jefe de estado, tenía una empatía ideológica con el proceso socialista. Me contestó que había aceptado esa elevada función a partir de una perspectiva estrictamente profesional y para evitar precisamente la eventual contaminación política en los sectores castrenses. Por una ironía histórica, el aparato de seguridad de la dictadura pinochetista asesinó al jefe militar y a su esposa, en su exilio en Buenos Aires, mediante la colocación de una bomba en su automóvil particular, según versiones de los medios de comunicación social.

No podría omitir la mención de un acto cultural al que asistimos en el Instituto Cultural de Providencia, en Santiago, por la estatura intelectual del protagonista. Se trataba de la presentación de Pablo Neruda, el laureado poeta chileno. En una atmósfera de general expectación, el ilustre bardo, con su voz cansina y el brillo de su estro poético, leyó varias de sus composiciones más difundidas en el mundo de la cultura, entre ellas “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”, dejando en sus oyentes la impronta de su genio indeleble. Neruda, como se sabe, ejerció la función de embajador del régimen de Allende en París y falleció poco tiempo después del golpe dictatorial encabezado por el general Pinochet, en 1973.

Es digno de nota el hecho de que, una vez producido el retorno al Estado de derecho tras un delicado período de reconciliación nacional, fue electo para conducir los destinos de Chile otro prestigioso líder socialista, el presidente Ricardo Lagos, a quien acaba de suceder, en 2006, su coidearia Michell Bachelet, la primera presidenta en la historia de su país.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO

En enero de 1973 asumí el cargo de Director General de Protocolo, una vez concluida mi estancia en Chile. Vine a reemplazar al embajador José Ricardo Martínez Cobo, quien estuvo por breve lapso en esa delicada función, en el gobierno de facto del General Guillermo Rodríguez Lara.

Puede ser útil recordar que el protocolo, en su sentido prístino y desde la perspectiva de su origen histórico, no ha sido sino una expresión objetiva del poder o un instrumento al servicio de la idea de poder, para establecer un ordenamiento práctico en las relaciones de la autoridad con la sociedad. En nuestro tiempo juega un papel significativo en el ámbito de las relaciones entre Estados y de sus representantes con la sociedad en su conjunto: tiende a facilitar el desarrollo de esas relaciones mediante la observancia de las precedencias en los diversos niveles del poder, cimentados en la valoración jerárquica de sus representantes.

El ejercicio práctico del protocolo tiene sus bemoles porque su aplicación roza a veces la sensibilidad de sus destinatarios. El filósofo alemán Keyserling solía decir que primero se hizo el Verbo y luego la sensibilidad. Yo diría que en cuestiones protocolarias hay que enfrenar no sólo la sensibilidad sino la hipersensibilidad de las gentes. Quienes afirman que el protocolo crea complicaciones innecesarias entre las personas y le niegan valor como instrumento formal de orden son

las que precisamente defienden a ultranza las prerrogativas que el protocolo les concede y crean problemas con sus reclamos cuando se ha alterado su ubicación en la precedencia oficial. Por lo demás todos esperan que las cosas transcurran normalmente en un acto oficial y que culminen con buen éxito, sin que ello sea objeto de ningún comentario específico. Pero para alcanzar ese resultado positivo se requiere siempre de una cuidadosa programación, una adecuada coordinación de factores previstos y una rigurosa puntualidad en el desarrollo de la secuencia proyectada. A manera de ejemplo de lo dicho recuerdo un caso concreto. Después de la cumbre de Washington entre Gorvachov y Bush, en 1988, que ocupó amplios espacios en la prensa americana y mundial, el jefe de protocolo de la Casa Blanca, Joseph Reed, relató a los medios de comunicación todo el proceso previo a la llegada del líder soviético. El señor Reed concluyó su relato con esta ilustrativa expresión: “Todos los detalles fueron pensados, calculados y ejecutados...; lo único que con 250 colaboradores y una asignación anual de 83.000 dólares no se puede controlar es el clima”. O sea que es una labor de equipo, aunque la responsabilidad recae siempre en el jefe, por la naturaleza del principio de autoridad. Se trata, por lo demás, de una actividad cuyo conocimiento resulta indispensable en la formación de un buen diplomático, por mucho que hayan cambiado los usos y costumbres de la diplomacia moderna.

Cuando vine a asumir el cargo de Director General de Protocolo estaba consciente de las peculiaridades de la función y de su importancia por sus nexos directos con el cuerpo diplomático y con las altas esferas del poder político. Mi amigo Hernán Guarderas, a quien yo había reemplazado en la Embajada en Chile, ejercía la función de Subdirector de Protocolo y me puso al tanto de los asuntos oficiales pendientes.

En este punto tal vez convenga una digresión en torno al ejercicio diplomático, sobre todo con destino a quienes no están familiarizados con esta materia. Hay que advertir que el ceremonial o protocolo es la parte formal y adjetiva de la diplomacia, aunque no por ello menos importante. Los agentes diplomáticos son funcionarios acreditados por un Estado para ejercer ante otro Estado la representación y protección de sus derechos e intereses, así como los de sus nacionales. Constituyen uno de los órganos de las relaciones internacionales y, en consecuencia, coadyuvan a la ejecución de la política exterior de su país de origen. Pero en el desempeño de sus funciones el diplomático

debe ceñirse a determinadas normas de comportamiento, propias de su profesión, que necesita conocer antes de iniciar sus actividades. Por eso la utilidad práctica de la normativa protocolar y de su aplicación en el ejercicio diplomático.

- Pocas semanas después teníamos la primera visita de un jefe de Estado en ese año. Se trataba del Presidente de Venezuela, doctor Rafael Caldera. Nos pusimos a trabajar en los preparativos del programa oficial, que luego lo examinamos con los funcionarios del protocolo venezolano que vinieron de Caracas para coordinar con nosotros los detalles usuales. En ese tipo de visitas pueden ocurrir cosas inesperadas, generalmente de carácter prosaico y a veces con atisbos políticos. Como en el programa figuraba la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento al Libertador Bolívar, en el parque de la Alameda, mis colaboradores me previnieron que era necesario pedir la colaboración del cuerpo de bomberos para realizar una limpieza cuidadosa de la base del monumento, ya que los trasnochadores urbanos solían realizar en la madrugada menesteres indelegables en esa zona. Mis asesores no contaban, sin embargo, con el efecto práctico de la operación sugerida. La ceremonia oficial tuvo lugar a las once de la mañana, cuando el espléndido sol de Quito lucía sus mejores galas. La acción del calor solar en el suelo húmedo, por la diligente tarea de los bomberos, levantó unos miasmas penetrantes, que suscitaron la preocupante reacción del jefe del protocolo venezolano. En respuesta a su comedida indagación sobre el origen de las inesperadas emanaciones, aventuré una respuesta de corte humorístico: es el caballo del Libertador; le dije en tono resignado. Ambos compartimos una sonrisa cómplice.

El pintoresco percance nos dio pie para referir después las infaltables anécdotas diplomáticas. Yo recordé, por ejemplo, lo que le ocurrió al jefe de protocolo de Itamaraty cuando el presidente de Estados Unidos visitó a Brasilia, en circunstancias en que no había concluido la construcción de la nueva capital y ella estaba envuelta todavía en su característico polvo rojizo, mientras en ciertos sectores no era infrecuente el barro del mismo color, con las consiguientes molestias que era obvio suponer. Por eso se había previsto que una larga alfombra roja, desplegada en el aeropuerto entre el avión y el hangar, permitiría el tránsito incólume del ilustre huésped. Cuando aterrizó el aparato, un gru-

po de diligentes trabajadores extendió aprisa la alfombra hasta la escalera de la aeronave, que quedó completamente bloqueada por un enorme rollo que impedía la salida del presidente, para angustia del jefe del protocolo brasileño. Puso término al desconcierto general un obrero que apareció con unas tijeras providenciales, para cortar la alfombra y salvar la permanencia del funcionario en el cargo.

- En el período que estuve frente a la Dirección General del Protocolo, además de los variados asuntos inherentes a la relación con el Cuerpo Diplomático y el poder público, organizamos y ejecutamos los programas de atención a varios jefes de Estado y cancilleres de países amigos que visitaron al Ecuador. Para ello conté con la colaboración de un equipo idóneo de funcionarios, casi todos ellos actuales embajadores, como Juan Salazar Sancisi, Edwin Johnson, Gonzalo Salvador Holguín, Roberto Ponce, Diego Stacey, Jorge Maldonado. Me acompañaron sucesivamente como Subdirectores: Hernán Guarderas, Jorge Ramos, Marcelo Fernández de Córdova y Edgar Toral.

- Visitas como las de los presidentes de Bolivia, Colombia, México o Venezuela se desarrollaron con normalidad y buen éxito. Pero la del jefe de Estado de Rumania, Nicolae Ceausescu, en setiembre de 1973, tuvo matices singulares. Antes de su arribo a Quito recibí sucesivamente a varios enviados especiales interesados sobre todo en la seguridad del personaje. El jefe de protocolo no quería el Hotel Quito, sino una residencia particular, para alojar al señor Ceausescu. Concretamente me sugirió la Circasiana, de propiedad del conde Manuel Jijón, para ese propósito. Me dijo que en su país los huéspedes oficiales se alojan en una residencia especial del Estado y no en un hotel. Le expresé que el Gobierno del Ecuador no dispone desafortunadamente de un servicio análogo y que la residencia por él sugerida es privada, por lo cual la delegación rumana se hospedaría en el Hotel Quito. De todos modos, más en broma que en serio, le llamamos por teléfono a nuestro distinguido amigo el conde Jijón para referirle el episodio y plantearle la posibilidad de satisfacer el buen gusto del líder rumano. La propuesta no le ocasionó un derrame hepático a Manuel Jijón, conspicuo personaje conservador, porque tenía un amable sentido del humor y tomó nuestra llamada telefónica de muy buen talante. Poco tiempo después el general Guillermo Rodríguez Lara correspondió a la visita del dicta-



Visita a Quito del Secretario General de la OEA y Ex Presidente del Ecuador,
Sr. Don Galo Plaza Lasso.

dor rumano y pudimos verificar, en efecto, que en Bucarest disponen de una lujosa residencia estatal para huéspedes oficiales extranjeros.

Por otra parte, en el banquete oficial en palacio se nos presentó otro problema inesperado y un tanto delicado. El jefe del protocolo rumano me solicitó que un hijo del jerarca visitante fuera ubicado antes que los miembros del gabinete ministerial del Ecuador y que, para facilitar las cosas, el Primer Ministro de Rumania estaba dispuesto a cederle su precedencia. Semejante propuesta la rechacé cortésmente y le hice notar que los privilegios institucionalizados por razón de parentesco sólo rigen en los sistemas monárquicos. La analogía utilizada en este caso por una dictadura totalitaria únicamente era aplicable en su ámbito interno, no en un país con protocolo republicano y democrático (aunque nuestra democracia estuviera entonces de vacaciones). Tenía que observarse el ceremonial ecuatoriano y así se procedió. Cuando el señor Ceausescu ofreció el banquete de reciprocidad, la familia reinante conservó su precedencia protocolar, con arreglo al ceremonial rumano. En ambas oportunidades, un individuo sombrío y silencioso cumplía discretamente su papel de “probador de alimentos” para evitar un hipotético atentado culinario al dictador. Claro que todas esas previsiones no garantizaron a la postre un final normal a Ceausescu porque, años después, murió en su ley, fusilado sumariamente en medio de un levantamiento popular que cambió el régimen político de Rumania.

Es curiosa la patología del ejercicio dictatorial del poder, como se puede apreciar en la breve anécdota reseñada. En general sus actores hacen tabla rasa del contrato social, acumulan en sus manos todas las facultades y privilegios, al tiempo que extravían la noción de su temporalidad por la embriagadora seducción del poder. Aristóteles sentenció que “el poder excita la ambición y aumenta las pretensiones”.

- En la mañana de un día cualquiera una de mis secretarias me comunicó que teníamos una llamada telefónica del Palacio de Carondelet. Era mi amigo Jaime Sánchez, jefe civil de la Casa Presidencial, para transmitirme el pedido del Jefe de Estado en el sentido de que yo fuera personalmente al aeropuerto Mariscal Sucre a solucionar un delicado problema que se había presentado con un personaje foráneo. El coronel Antonio Noriega, de Panamá, había aterrizado en un avión que

no había observado las normas usuales de la aviación internacional, razón por la cual las autoridades locales no le permitían descender del aparato. Según nos enteramos, venía en representación del general Omar Torrijos a gestionar el respaldo del Gobierno del Ecuador a la causa del Gobierno panameño, empeñado en la convocatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la capital de su país, para examinar el problema del Canal de Panamá con Estados Unidos, que a la postre culminaría con la suscripción del Tratado Torrijos-Carter en 1977. Cuando ingresé a la pista del aeropuerto encontré que el personaje estaba en la puerta del avión visiblemente molesto. Le ofrecí las excusas del caso por el incidente, no sin antes hacerle notar que las causas del desaguisado exoneraban de responsabilidad a las autoridades ecuatorianas. “Vengo en nombre de mi jefe a dialogar con el general Rodríguez Lara”, me dijo escuetamente. Se le condujo al palacio presidencial para que cumpliera su cometido. Semanas después vino el general Omar Torrijos para entrevistarse personalmente con el general Guillermo Rodríguez Lara.

El encuentro tuvo lugar en Guayaquil porque Torrijos, por razones de salud, no podía acceder a la altitud de Quito. El general panameño tenía una personalidad teñida de un populismo desbordante. En un breve recorrido por un sector periférico de la ciudad Torrijos causó un perceptible impacto en las buenas gentes del pueblo. En la entrevista que sostuvieron los dos jefes de estado, Torrijos no aceptó hacerlo de modo convencional sino de pie y en movimiento. Ese curioso estilo peripatético obedecía a que “pensaba mejor de pie”. Dudo que tuviera noticia de que Aristóteles explicara su doctrina filosófica caminando frente a sus discípulos. A la hora del brindis, en el almuerzo, Torrijos pronunció un discurso monocorde encasillado en el tema del canal de Panamá. Estaba consciente de que esa obsesión cívica le aseguraría un espacio en la historia de su país.

- La XV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA se celebró en Quito, en noviembre de 1974, para considerar el levantamiento de las sanciones impuestas a Cuba en la VIII Reunión de Consulta de los Cancilleres (Punta del Este, Uruguay, 1962), que contemplaba la exclusión del Gobierno cubano de su participación en el Sistema Interamericano y otras medidas conexas. No se alcanzó

tal objetivo porque no se logró la necesaria mayoría de dos tercios de la votación, por inesperada defección de algún miembro. Se aprobó la Declaración de Quito con la reiteración de perseverar en dicho propósito, que se concretó en una reunión similar en Costa Rica.

La Dirección General de Protocolo participó activamente, en áreas de su competencia, en la preparación y desarrollo de esa importante reunión continental. Entre los actos organizados en homenaje a las delegaciones asistentes fue muy comentado el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en el templo de la Compañía de Jesús, uno de los escenarios más hermosos del mundo católico, que deslumbra por sus excelencias arquitectónicas. Un dato curioso en ese imponente acto artístico fue el mensaje que recibí del superior de la orden de los jesuitas, en términos coercitivos, para abreviar el tiempo del concierto de modo que no interfiriera con la misa de las ocho de la noche. Para evitar una colisión entre la religión y el arte, le solicité muy discretamente al director de la orquesta obrar ese milagro sin que se percataran las delegaciones extranjeras.

Hacia finales de julio de 1975 había cambiado la posición de los países que se abstuvieron en la votación de la reunión de Quito. Al término de la Conferencia de Plenipotenciarios para la Reforma del TIAR, celebrada ese mismo mes en San José de Costa Rica, se convocó a la XVI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa de México, para examinar, con carácter urgente, el tema: "Libertad de acción de los Estados Partes en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para normalizar o conducir sus relaciones con la República de Cuba al nivel y en la forma que cada Estado estimare conveniente". Ecuador coauspició el proyecto de resolución, junto con otros nueve países. La resolución, sin hacer mención expresa del levantamiento de sanciones, "deja en libertad a los Estados Partes en el TIAR para que de acuerdo con la política e intereses nacionales de cada uno, normalicen o conduzcan sus relaciones con la República de Cuba al nivel y en la forma que cada Estado estimare conveniente". Así terminó un capítulo de la convivencia de los Estados miembros de la OEA, divididos hasta entonces por la marginación del Gobierno de Cuba de las actividades de la Organización regional. El Estado cubano siempre ha permanecido, por cierto, dentro de la OEA como miembro de la entidad regional.

- Una visita protocolar con ciertos matices peculiares fue también la de la princesa Ana de Inglaterra, no tanto para el registro histórico cuanto para la referencia anecdótica. Venía recién casada con el joven capitán Mark Phillips, personaje ajeno a la nobleza de su país. El Jefe de Estado y la señora de Rodríguez Lara ofrecieron a sus huéspedes un banquete de rigurosa etiqueta en el refectorio de San Francisco, que esa noche lucía sus mejores galas. La espléndida arquitectura del templo impresionó a la pareja real, que disfrutó de las excelencias de la reunión social.

El embajador de la época, hombre de buen ánimo y sin engolamientos, había logrado flexibilizar su flema británica sin dejar de ser un digno representante de Su Majestad. Le gustaban las cosas del Ecuador. Por expreso pedido suyo se le brindó a la pareja una cena informal en un restaurante especializado en comida criolla. El capitán elogió particularmente el sabor de las empanadas de morocho, que las teñía de rojo por la abundancia de ají. Desde Bogotá, escala siguiente del periplo, el cable internacional dio noticia de los efectos negativos de ese entusiasmo culinario, riesgoso para quien no estaba acostumbrado a tales excesos.

Al embajador británico le agradaban también las fiestas populares conmemorativas de la fundación española de Quito. Como la visita coincidió con esas fechas, le había provisto a la Princesa de un vistoso poncho criollo para recorrer a pie, en la noche del 5 de diciembre, el trayecto entre la cancillería de la Embajada y la residencia del Alcalde de la Ciudad, Sixto Durán Ballén. Cuando caminábamos entre la multitud, que alegremente celebraba la fiesta capitalina, la Princesa pasaba casi inadvertida, en tanto su esposo concitaba la atención femenina. Cosas que a veces ocurren con los matrimonios morganáticos. El Alcalde los recibió en su departamento y, como era previsible en un melómano incorregible y versado, les hizo escuchar fragmentos de música clásica.

- Una interesante experiencia, tachonada de matices exóticos, constituyó la concurrencia a la primera reunión de Jefes de Estado de la OPEP (cartel de países productores de petróleo), celebrada en Argelia, en 1974. La reunión se efectuó en una suerte de centro de convenciones cercano a la capital, Argel. Como se sabe, Argelia fue colo-

nia francesa hasta el año 1962, en que se independizó como “república popular”. El jefe de estado anfitrión, Boumedienne, era una de las figuras paradigmáticas del autoritarismo en el sistema piramidal del poder; reemplazó al presidente Ben Bella, depuesto en 1965 por un golpe de estado.

La conferencia de Argel fue convocada a raíz de la crisis energética mundial provocada por la OPEP, que revolucionó la escala tradicional de precios de ese recurso esencial. En esa reunión se tomaron decisiones importantes en materia de política petrolera. Quienes acompañamos al General Rodríguez Lara tuvimos la oportunidad de conocer no sólo esa interesante ciudad sino algunos de los escenarios en que se libraron cruentos combates callejeros en la reciente etapa de la independencia nacional. Pudimos apreciar también algunas facetas del estilo de vida árabe. Visitamos, por ejemplo, una casa típica árabe, donde su dueño podía tener hasta cuatro mujeres, a la luz de la normativa del Corán. Recuerdo asimismo que asistimos a un banquete oficial con numerosos invitados de elevado rango. A diferencia del orden protocolar que en tales casos se observa en los países occidentales, cuando ingresamos a un gran salón nos percatamos que los únicos que tenían una ubicación determinada eran los jefes de estado; los demás invitados, incluidos ministros y embajadores, se ubicaban con total informalidad, sin precedencias. Lo curioso es que en la mesa principal, donde estaban los presidentes de Ecuador y Venezuela, prácticamente el único personaje que dialogaba con ellos era el Sha de Irán, que por cierto tenía formación europea. Y ello ocurría no por falta de comunicación idiomática, porque detrás de los mandatarios había sendos traductores. Como la costumbre local proscribía el consumo de licores, en el banquete sólo se servían jugos de frutas. Una vez terminado ese importante acto social retornamos al hotel para animarnos con un whisky. Le invitamos al adjunto del protocolo argelino a compartir el brindis con los miembros de la delegación ecuatoriana, pero se excusó en observancia de su religión. Se trataba de un diplomático que había servido en Cuba y que se expresaba en fluido español. Al día siguiente, cuando le buscamos para entregarle un recuerdo oficial por sus servicios, nos enteramos que la víspera había claudicado ante la seducción escocesa y que se había excedido en la dosis.

Una escala técnica que hiciera en Guayaquil y Salinas el general Alfredo Stroessner, jefe de estado del Paraguay, cuando iba a visitar Taiwan, en 1975, le permitió satisfacer su gusto por la pesca de altura en aguas del Pacífico. Uno de sus acompañantes protagonizó un episodio digno de registro. En el séquito del general venía un par de personajes, vestidos de civiles, de complexión vigorosa y cercana vinculación con el gobernante. Cuando recibimos a la delegación paraguaya en el aeropuerto de Guayaquil, uno de esos personajes me espetó, sin más preámbulos, esta pregunta: “Dígame usted ¿cómo está Durán?”. Dado el talante de la interrogación, le respondí: “¿Se refiere usted al general Guillermo Durán Arcentales, miembro del gabinete ministerial?”. “Sí, bruto como yo”, me comentó. Seguramente mi expresión facial frente a semejante afirmación debe haber sido demasiado explícita, porque de inmediato añadió este comentario: “Quiero decir, profesional como yo”. Ahí me enteré que se trataba de un general en servicio pasivo que había cursado estudios en Estados Unidos junto con mi compatriota.

URUGUAY Y ALALC

A comienzos de 1976 se me propuso la designación de Embajador ante la República Oriental del Uruguay y Representante Permanente ante la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), con sede en Montevideo. Acepté complacido dicha designación tanto por la conocida trayectoria de Uruguay en el contexto hemisférico, que le confiere interés a una misión diplomática, cuanto porque se me ofrecía la oportunidad de incursionar en la diplomacia multilateral. En efecto, había alcanzado amplia experiencia en el ámbito de la diplomacia bilateral, pero requería conocer más de cerca los procesos de integración regional, para ampliar mi formación profesional.

Por tratarse de un nuevo campo para mí, le solicité antecedentes y una información básica a mi antecesor, embajador Gonzalo Apunte, quien fuera uno de mis primeros jefes cuando ingresé a la cancillería y con quien mantuve siempre una relación amistosa muy cercana. Su respuesta fue desalentadora, por no decir algo desconcertante. “Nunca entendí el galimatías de ALALC y por eso dejé la atención de esos asuntos en manos del Ministro Consejero Comercial”, me respondió, con su característico estilo irónico y agudo. La lectura de ese comentario no puede ser literal, porque se trataba de un funcionario de reconocida competencia en materia económica. Interpreté su apreciación como un mensaje orientado a prevenirme sobre la complejidad teórica y técnica del fenómeno de la integración. En Montevideo le referí el episodio al

economista Franklin Buitrón, quien gozaba de la confianza absoluta del embajador Apunte, y le dije: usted va a escuchar aquí por primera y única vez una confesión de corte socrático. De esta materia sólo sé que nada sé, le expresé con aire de inocencia bien administrada, pero en el lapso de tres semanas espero conocer lo suficiente para responder por todo lo alto a la confianza del Gobierno Nacional. Por lo pronto usted pone la letra y yo la música en las sesiones del Comité Permanente, le manifesté de buen talante. Me dediqué a examinar los textos necesarios como en mis mejores años de estudiante y al cabo de pocas semanas estuve listo para asumir la vocería del Grupo Andino en ALALC, que le correspondía al Ecuador en fecha cercana. Actuamos a la altura de las circunstancias, con mi asesor técnico, cuando entramos a considerar temas de entidad como el de la separación de Chile del Grupo Andino y otros debates que mantuvimos en el marco de la ALALC.

Cuando viajé a Montevideo, en abril de 1976, para asumir mis nuevas funciones, tuve que permanecer algunos días en Buenos Aires porque el feriado de semana santa se interpuso en mis planes originales. Ahí me enteré, por Ramiro Silva del Pozo, nuestro Encargado de Negocios en Montevideo, que en Uruguay ese símbolo católico tiene la denominación oficial de “semana del turismo” y está dedicada a esa actividad recreativa y rentable para los sectores interesados. Durante ese lapso disfruté de las excelencias culturales de esa gran capital y de la hospitalidad del embajador Alfonso Barrera Valverde, amigo y colega de muchas jornadas.

Presenté mis cartas credenciales al Presidente Juan María Bordaberry, quien poco tiempo después concluyó su mandato. En esa época, el régimen se autocalificaba de cívico militar. Los civiles ejercían determinadas funciones de gobierno, pero el poder real estaba en manos de los militares. Esta situación se inició en 1972 y se prolongó hasta 1985. El elenco de presidentes civiles que se sucedieron en la simbólica función, cumpliendo un papel meramente decorativo, comenzó con Bordaberry y prosiguió con Alberto Demichelli y Aparicio Méndez, hasta que en 1981 el general Gregorio Alvarez fue nombrado para completar los últimos años de ese régimen singular. Las expectativas políticas que abrigaba el general Alvarez no se concretaron porque para entonces ya se había iniciado la transición hacia un gobierno civil y democrático.

Puede ser útil parar mientes en los orígenes de la citada modalidad del ejercicio del poder en Uruguay. En noviembre de 1971 se reali-

zaron los comicios presidenciales para elegir al sucesor de Jorge Pacheco Areco, cuya gestión se había caracterizado por el reiterado ejercicio del derecho del ejecutivo de asumir poderes de excepción, previsto en la Constitución de 1966, frente a las incursiones subversivas de los tupamaros (Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros), que abrieron espacio a una espiral de violencia generada tanto por los guerrilleros como por la represión oficial. Una Comisión del Senado encargada de investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos comprobó en 1970 que el uso de la tortura era “normal, frecuente y habitual”, lo cual motivó una operación de los tupamaros contra los responsables de practicar la tortura. La represión militar fue tan severa que se decía que a mediados de los setenta había alrededor de siete mil presos políticos en las cárceles uruguayas. Los éxitos de los tupamaros frente a la policía determinaron que ésta fuera reemplazada por las fuerzas armadas, en materia de seguridad. Las operaciones guerrilleras cesaron temporalmente para permitir que el Frente Amplio (coalición de grupos políticos de izquierda) pudiera intervenir en las elecciones de noviembre de 1971, en torno de la figura del general retirado Líber Seregni, quien alcanzó el 18 por ciento de la votación. Hubo varias denuncias de fraude electoral, pero la víctima directa fue Wilson Ferreira Aldunate, candidato de los “blancos”, quien logró el mayor número de votos. Lo que ocurrió fue que la ley electoral establecía que el triunfo correspondía al lema más votado y por eso la presidencia fue a manos de Juan María Bordaberry, por cuanto su lema “colorado” logró trece mil sufragios más que los “blancos”. La proyectada reelección de Pacheco Areco fue también derrotada.

Conviene señalar que, a diferencia de la mayoría de las fuerzas armadas de nuestra región, las de Uruguay tradicionalmente evitaron involucrarse en la política contingente. Pero en la década de los sesenta se generalizó la intervención militar en la lucha contra la subversión, por inspiración estadounidense y la instalación de la doctrina de la seguridad nacional. Se instituyó el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), controlado por los militares, para asesorar al Presidente. Bordaberry perdió entonces apoyo político en la medida en que los militares incrementaban y consolidaban su influencia. Se disolvió la Legislatura y se la reemplazó por un Consejo de Estado.

En cuanto comencé a desarrollar las actividades atinentes a mi función, hice las visitas de rigor a los embajadores acreditados en Mon-

tevideo. Este procedimiento, que se enmarca en la práctica diplomática usual, es muy útil no sólo para trabar conocimiento personal con los colegas sino para intercambiar impresiones y obtener informaciones que faciliten las labores de la misión. Al visitarle al embajador de Suiza me encontré con una reacción inesperada. Este caballero estaba por concluir sus funciones y se aprestaba a retornar a su país en breve lapso. En el curso de nuestra conversación le dije que, en los buenos tiempos de la institucionalidad democrática de Uruguay, se afirmaba, casi como lugar común, que ese país era la Suiza de América, pues había ensayado incluso el sistema colegiado de gobierno, con base en el modelo suizo. El embajador rechazó la analogía, casi con atisbos de desagrado, en actitud poco diplomática e inelegante.

Durante nuestra permanencia de dos años en Uruguay prevalecía una atmósfera de tranquilidad política, pues el movimiento tupamaro había sido prácticamente liquidado y sus militantes estaban reclusos en los establecimientos carcelarios de Montevideo. En voz baja se comentaba, sin embargo, que la represión oficial continuaba latente y operaba en casos esporádicos. Tuve una sola petición de asilo político, en 1977. Un día, al retornar de una sesión de ALALC, se me informó que estaba en el escritorio del Consejero Comercial una mujer que solicitaba asilo. Se trataba de una joven profesora, casada con un contador. Me pidió que le concediera asilo político porque era objeto de persecución por elementos de la seguridad estatal. Si me niega su protección me torturarán y me matarán, me expresó en tono dramático. La interrogué sobre su filiación ideológica y me respondió que era simpatizante del movimiento tupamaro, al igual que varias compañeras suyas que estaban en la clandestinidad, pero que ella no había realizado ninguna acción política punible. Era mujer de firmes convicciones ideológicas, en tanto que su marido no se interesaba por la acción política. No hay que olvidar que la sola sospecha de simpatía hacia la izquierda generaba la pérdida de empleo en la burocracia oficial y en el sector educativo. Le aclaré que no podía concederle asilo sin la calificación del delito político y la consulta previa a la Cancillería del Ecuador. Hasta tanto, se constituía en huésped de la Embajada del Ecuador.

Los procesos de asilo político, a partir de la calificación por parte del Estado asilante hasta la concesión del salvoconducto por el Estado territorial, a veces suelen ser engorrosos y no exentos de incomodi-

dades de diversa naturaleza. Por eso tomé la decisión de intentar un arreglo amistoso con la Cancillería del Uruguay, sin menoscabo de la información preliminar al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Me entrevisté con el Canciller Rivero y le expuse el caso en términos generales. Le manifesté que, como expresión de buena voluntad y para evitarle a su gobierno las repercusiones políticas negativas que generan estos episodios, me inclinaría por no calificar ni formalizar la concesión del asilo a condición de que se me ofrecieran las garantías necesarias para la salida del país de la profesora uruguaya, en seguridad y en el menor tiempo posible. El Ministro agradeció mi actitud amistosa y me ofreció las garantías requeridas, pues de lo contrario la formalización del asilo político implicaría la revelación de la inseguridad jurídica respecto del respeto a los derechos y libertades fundamentales en Uruguay. A los pocos días salió con destino al Ecuador la peticionaria de asilo y se resolvió satisfactoriamente el caso referido.

Un día recibimos la invitación del Gobierno uruguayo para visitar dos cárceles en Montevideo. Me imagino que el propósito no era otro que el de demostrar al Cuerpo Diplomático que los tupamaros, en su enclaustramiento, no eran víctimas de violaciones de derechos humanos, como suponían algunos críticos. Fuimos a la cárcel de mujeres, guiados por un coronel del ejército, que nos hacía una minuciosa descripción de las comodidades del establecimiento carcelario, pero no nos permitía dialogar con las detenidas. Nos explicaba que los dirigentes de los insurrectos se preocuparon oportunamente de dotar de instalaciones cómodas y modernas a las cárceles, porque sabían que vendrían un día a purgar sus delitos, según la fría visión del coronel de marras. Nos condujo expresamente a la cocina, equipada como para una instalación industrial. No pudo contener su indignación y pidió permiso al Nuncio, así como a los demás embajadores, para expresar que semejante lujo “no se merecían estas hijas de puta”. Recorrimos, luego, algunos espacios donde en pequeños grupos estaban las detenidas. En un momento propicio nos acercamos, el embajador de Israel y yo, a una mujer solitaria de aspecto áspero, cubierta con un pesado poncho, quien nos dijo: “tengo a honra ser tupamara”. Le preguntamos al coronel la identidad y la causa de la detención de esa reclusa. Es una profesora de escuela rural y está aquí porque intentó matar a un oficial en una refriega, cuando ella fue sorprendida colocando una

bomba con otro compañero de lucha. Al escapar, ambos tomaron rutas distintas, nos explicó el coronel, pero esta mujer fue capturada a bordo de un taxi. Cuando se le intimó rendición, hizo dos disparos al cuerpo del oficial que la perseguía, con la circunstancia milagrosa de que una bala impactó en la placa insignia y la otra en la hebilla del cinturón. Está purgando una larga sentencia por intento de homicidio, concluyó el coronel. Poco después pudimos dialogar brevemente con dos estudiantes universitarias. Nos manifestaron que estaban recluidas desde hacía cuatro años, sin fórmula de juicio. Era realmente un cuadro humano penoso y sombrío, conformado básicamente por profesionales y estudiantes.

Las medidas de represión se generalizaron en los países del cono sur, en el marco de la virulenta confrontación con la guerrilla, pero no hay duda de que se constituyó una suerte de internacional de las espadas a la luz de la doctrina de la seguridad nacional, en el escenario de la guerra fría. Un día recibí a un distinguido general ecuatoriano, ex ministro de estado, quien iba a dialogar con el general Gregorio Alvarez, por invitación de este alto oficial. Me dijo que iría a verlo un oficial de enlace, pero me pidió que el encuentro no se efectuase en la Embajada. Le invité entonces a un club social del cual yo era miembro. A la hora que habían convenido, apareció un caballero vestido de estricto civil y de maneras estrictamente castrenses. Hizo sonar los tacos de sus zapatos, saludó a mi compatriota y le dijo: “Mi general, Operación Cóndor”. Mi amigo y compatriota me explicó que ése era el santo y seña y se marcharon ambos de inmediato. Años después me enteré del sentido y alcance del “santo y seña”, cuando comenzaron a circular las estremecedoras versiones sobre los horrendos dramas humanos de las dictaduras del cono sur, donde se practicó un sangriento terrorismo de estado a la sombra de la Operación Cóndor, para responder a la violencia guerrillera. Ecuador no participó de ese operativo genocida.

Las relaciones bilaterales ecuatoriano-uruguayas se desarrollaron bajo la óptica tradicional de una elevada cordialidad, cooperación y buen entendimiento. En 1977 se produjo la visita del Canciller Jorge Salvador Lara, dentro de una gira por varios países sudamericanos, y con esa oportunidad se reiteraron las coincidencias de principios de la política exterior de ambos países en la órbita regional y mundial.



Presentación de cartas credenciales al Presidente del Uruguay, José María Bordaberry

En términos de actividad rutinaria era más exigente la labor en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que en la Embajada. Para aproximarnos al tema conviene recordar de modo general el origen, organización y funcionamiento de la ALALC. En 1957 se creó la Comunidad Económica Europea, cuyo tratado constitutivo contemplaba medidas proteccionistas para sus productos, entre ellos los de las ex colonias africanas, que amenazarían a las exportaciones de productos primarios latinoamericanos. Para defenderse de las consecuencias económicas de la nueva agrupación europea, los países de nuestra región tomaron la decisión política de armonizar posiciones y acciones de interés común. Junto con ese antecedente hay que advertir que en la misma época se planteó el tema de la renovación y ampliación de los acuerdos preferenciales entre los Estados sudamericanos, o sea que había que resolver los problemas derivados del mantenimiento o la ampliación de las preferencias bilaterales otorgadas en cadena entre varios países de la subregión. Por otra parte, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina-ONU) había realizado varios estudios sobre las ventajas de la integración continental. Todas esas consideraciones condujeron a la decisión de crear la ALALC, en 1960.

La ALALC se instituyó con base en los siguientes mecanismos: las listas nacionales de productos, la lista común, la supresión de restricciones cuantitativas y acuerdos de complementación, el tratamiento más favorable a los países de menor desarrollo relativo, y los problemas y mecanismos monetarios. El sistema de las listas nacionales se inspiró en el viejo modelo de negociar producto por producto; actualmente recibe el nombre de “micronegociaciones”, por la complejidad del procedimiento, que por lo demás no ha facilitado la construcción de la Zona de Libre Comercio, mediante la supresión escalonada de las barreras arancelarias. La idea de la lista común consiste en que todo producto incluido en ella queda exento de cualquier tipo de barrera arancelaria en un período determinado. Pero la aplicación práctica de estos conceptos nunca resultó fácil por los conflictos de intereses de los respectivos países. Los demás mecanismos también dieron resultados muy relativos y no colmaron las expectativas de las Partes, razón por la cual la ALALC se estancó y abrió paso a un replanteamiento estructural para dinamizar la marcha institucional, a partir de 1980, mediante la negociación de un nuevo instrumento.

Las limitaciones del Tratado de Montevideo (1960) en su aplicación práctica indujeron a los países andinos a anunciar en la “Declaración de Bogotá”, de agosto de 1966, su propósito de crear un mercado subregional en el marco de la ALALC, para acelerar y profundizar el proceso de integración. Con esa finalidad se realizaron varias conferencias preparatorias y, en la última de ellas, celebrada en Cartagena de Indias (mayo de 1969), se suscribió el acuerdo constitutivo del Grupo Andino, compuesto por Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela (esta última ingresó en 1973). Por sus diferencias estructurales se aludía a dos clases de países suscriptores: los de menor desarrollo económico relativo (Ecuador y Bolivia) y los de mercado insuficiente, los restantes. Chile se separó del Grupo en 1976. A partir de la firma del Protocolo de Trujillo, Perú, en marzo de 1996, con ocasión del VIII Consejo Presidencial, se creó la Comunidad Andina y se estableció el Sistema Andino de Integración, a la par que se dispuso una nueva codificación del Acuerdo de Cartagena, con base en su texto original y sus respectivos instrumentos modificatorios.

El 12 de agosto de 1980 se suscribió el nuevo Tratado de Montevideo, constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en la Reunión del Consejo de Ministros de ALALC. Dicho instrumento reemplaza al Tratado de Montevideo de 1960, que creó la ALALC, pero representa la continuación del proceso de integración iniciado entonces y el aprovechamiento de la experiencia positiva obtenida en su aplicación. Los once Estados miembros han negociado el Tratado en la convicción de que la integración económica regional constituye uno de los principales medios para que los países de América Latina puedan acelerar su proceso de desarrollo integral y asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos. Los Estados miembros son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En ese contexto, los países de menor desarrollo económico relativo son: Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Los órganos políticos de ALADI son: el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores (Consejo); la Conferencia de Evaluación y Convergencia (Conferencia); y el Comité de Representantes (Comité). El órgano técnico es la Secretaría General.

Los países miembros de ALADI realizan acciones necesarias para establecer y desarrollar vínculos de solidaridad y cooperación con

otras áreas de integración fuera de América Latina, mediante la participación de la Asociación en los programas que se ejecuten a nivel internacional en materia de cooperación horizontal, en aplicación de los principios normativos y compromisos asumidos en el marco de la Declaración y Plan de Acción para la obtención de un Nuevo Orden Económico Internacional, así como de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

Las sesiones rutinarias de ALALC, que a veces tenían dimensiones maratónicas, se veían matizadas de tiempo en tiempo con las visitas oficiales que solían realizar personajes procedentes de los Estados miembros, como jefes de estado o cancilleres. Los once embajadores teníamos, por cierto, una fluida relación personal, más allá de la defensa de los respectivos intereses nacionales, como es lo usual en los ámbitos de la diplomacia multilateral. La naturaleza de los asuntos en debate no era propicia a la retórica estridente ni a la termocefalia de algún delegado. Sin embargo, cuando yo había salido ya a otro destino diplomático se había producido una discusión algo acalorada entre dos amigos especialmente cercanos como eran los embajadores de Brasil y Perú, Gurguel Valente y Fernán Cisneros, respectivamente. Lo doloroso del caso fue que a causa de la confrontación verbal falleció, en el curso del debate, por un infarto fulminante, el embajador Cisneros, en cuya memoria se puso su nombre a uno de los salones de ALADI. Recuerdo que los debates que mantuvimos en la época del retiro de Chile del Pacto Andino, en octubre de 1976, tuvieron un cariz delicado y complejo. Huelga señalar, por lo demás, que esa decisión, cimentada en discrepancias conceptuales sobre la inversión extranjera, debilitó al Grupo Andino.

En uno de los primeros días de marzo de 1978 yo estaba en una sesión del Comité Permanente de la ALALC cuando recibí una llamada urgente de la Embajada para decirme que había llegado un cablegrama cifrado de la Cancillería, cuya parte inicial se refería a mi traslado al Perú. Acudí con presteza a mi despacho y tomé conocimiento de los hechos. Por algunas circunstancias, que por lo demás tenían carácter cíclico en el ámbito de las relaciones bilaterales ecuatoriano-peruanas, se produjo el traslado del embajador Luis Valencia Rodríguez a Venezuela y se me designó para reemplazarlo, con la instrucción de viajar a la mayor brevedad posible para asumir mis nuevas funciones. Tenía que

trasladarme directamente de Montevideo a Lima. Sin menoscabo del acatamiento de las disposiciones oficiales, me tomé la libertad de pasar previamente por Quito para armonizar ciertas precisiones.

Notifiqué el particular al Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay y, una vez cumplidas las gestiones y atenciones de rigor, me entrevisté con el Presidente Aparicio Méndez, para despedirme de él oficialmente. Cito la conversación que mantuvimos sobre todo por su cariz amistoso y humano más que por su connotación oficial. Jurista y catedrático de larga data, el Presidente uruguayo era hombre sencillo y cordial, sin los engolamientos ni fruslerías en que suelen incurrir algunos personajes en el ejercicio del poder. Casi al término de nuestro diálogo tuvo dos expresiones de rango intimista. Mi padre me dijo, más de una vez, “En casa ajena pórtate de modo tal que puedas volver a ella nuevamente”, subrayó el doctor Aparicio Méndez. Su desempeño entre nosotros ha sido de tal naturaleza, embajador Vasco, que las puertas del Uruguay estarán siempre abiertas para usted, añadió con desbordante amabilidad. Le agradecí por estas manifestaciones, propias de un hombre de bien. Pero para sorpresa mía, el Presidente agregó esta inesperada confesión: me han dicho que es usted un afortunado intérprete de la guitarra; cómo me habría agradado que alguna vez hubiéramos podido tocar juntos ese instrumento, que merece mi predilección. Señor Presidente –le respondí–: es una de las calumnias que me endilgan, pero créame que para mí habría sido singularmente satisfactorio compartir con usted una guitarreada, sobre todo con interpretaciones de música gauchesca. Conservo, por supuesto, un grato recuerdo de este diálogo infrecuente.

Como partíamos rumbo al Perú, mi colega y excelente amigo, embajador Fernán Cisneros, nos ofreció una espléndida despedida, en la cual nos dedicó unas palabras entrañables. Solía ser hombre parco en el hablar, pero profundo en el enfoque conceptual de las cosas. Nos dedicó, a Teresa y a mí, una viñeta escueta y sentida, con dejos de nostalgia, como si no volveríamos a vernos nunca. Desafortunadamente acertó en su presagio, pues falleció tiempo después mientras debatía con su amigo el embajador del Brasil en una sesión del Comité Permanente de ALALC.

Antes de concluir este capítulo relativo a mi misión en el Uruguay no desearía omitir la mención de un acto simbólico que se reali-

zó al comienzo del ejercicio de mis funciones diplomáticas. El 18 de mayo de 1976, aniversario de la Batalla de las Piedras y Día del Ejército Uruguayo, hice entrega de un busto del héroe ecuatoriano Capitán Abdón Calderón en el Salón América de la Escuela de Armas y Servicios, en la ciudad de Montevideo. Con esta oportunidad sustenté una breve charla sobre la Batalla de Pichincha, en el marco de la gesta libertaria sudamericana, y me serví de la coyuntura para citar la participación del uruguayo Eugenio Garzón en ese hecho histórico. En el acto estuvo presente toda la oficialidad de esa institución militar. Fue por cierto una ocasión propicia para evocar los lazos históricos que vinculan a los dos países.

RELACIONES ECUATORIANO-PERUANAS

La representación diplomática en Lima ha sido siempre un reto profesional para un funcionario ecuatoriano, por razones que huelga ponderar. Viajé a Quito para recibir instrucciones de primera mano antes de asumir funciones. Me entrevisté primero con el Jefe de la Junta Militar, Almirante Alfredo Poveda, a quien conocía desde hacía muchos años. Me explicó en términos coloquiales las circunstancias de mi designación y, en síntesis, me dijo que pesaba sobre mis hombros la delicada tarea de “provocar la distensión con el Perú”. El diálogo posterior con el Canciller José Ayala Lasso, mi buen amigo, se produjo en términos análogos y comprendí que, por la naturaleza de las cosas, no podía esperar instrucciones escritas. Es que en materia tan compleja huelgan las precisiones. Fui a cumplir, pues, una tarea que no figuraba en los libretos usuales. Reemplacé en la jefatura de misión al embajador Luis Valencia Rodríguez y la recibí de manos del entonces ministro César Valdivieso Chiriboga, quien se desempeñaba temporalmente como encargado de negocios ad-interim.

Presenté mis cartas credenciales al Jefe del Estado, general Francisco Morales Bermúdez, en audiencia en la cual estuvo acompañado del general Luis Cisneros Vizquerra, Ministro del Interior y hermano de mi ex – colega en ALALC, embajador Fernán Cisneros. Mantuvimos un diálogo abierto y franco, con contenidos positivos respecto a las ex-

pectativas de nuestras relaciones bilaterales. Importa recordar que eran las postrimerías de la denominada “segunda fase” de la revolución peruana, pues en la primera fue el general de división Juan Velasco Alvarado quien encabezó la junta militar que depuso al presidente Fernando Belaunde, en el golpe del 3 de octubre de 1968. Ese momento la junta revolucionaria estuvo integrada por los comandantes generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Se promulgó entonces el estatuto del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que justificaba el golpe por la “impostergable necesidad de poner fin al caos económico, a la inmoralidad administrativa, a la improvisación, al entreguismo respecto a las fuentes naturales de riqueza y a su explotación en beneficio de grupos privilegiados, así como a la pérdida del principio de autoridad y a la incapacidad en la dirección del Estado”. El gobierno revolucionario implantó reformas estructurales en varios campos, como el bancario y financiero, agrícola, educativo, minero, industrial, etc. Pero a comienzos de 1975, como culminación de un proceso de discrepancias al interior del gobierno, se ahondó la crisis política y se produjo el relevo del general Velasco Alvarado, cuyo precario estado de salud coadyuvó al desenlace de los acontecimientos. El general Francisco Morales Bermúdez, quien le seguía en el orden jerárquico, apareció como figura de consenso y se sublevó con apoyo de varias regiones militares. Fue él quien anunció desde Tacna, el 29 de agosto de 1975, el relevo de Velasco Alvarado.

Inicié mis funciones con sendas manifestaciones amistosas de quienes fueran mis compañeros en Montevideo, los embajadores René Hooper y Fernán Cisneros, representantes del Perú ante el Gobierno del Uruguay y ante la ALALC, respectivamente. A los pocos días de mi arribo a Lima, René Hooper me invitó a sustentar una charla en la Academia Diplomática, que él dirigía, sobre el tema: “Ordenamiento jurídico de la comunidad internacional”. Abordé en términos generales los aspectos relevantes de la problemática mundial y regional de esa época. Fue una experiencia muy útil para mí, porque no sólo estuvieron presentes los estudiantes de planta sino los funcionarios de rangos superiores que realizaban entonces un seminario de actualización de conocimientos. Era una conferencia con foro abierto, lo cual me permitió debatir algunos aspectos de mi charla con varios de los participantes. Lo importante es que pude conocer a una generación de jóvenes diplomáticos peruanos y a quienes tenían algún tiempo en el servicio exte-

rior. Fernán Cisneros, por su parte, hizo posible que a mi llegada a Lima fuera ya considerado miembro del Club Nacional, centro social elitista de amplia trayectoria y justo prestigio, donde confluyen los representantes más conspicuos del poder político y de las diversas actividades relevantes del país. Fui acogido con gentileza y allí pude alternar con algunos personajes importantes. Recuerdo que en una de mis primeras visitas al Club Nacional un amigo peruano me presentó a varios contertulios, con la indicación de que eran miembros de la “cofradía del tuvo”. Ante mi reacción de curiosidad por saber el sentido de esa expresión, me explicó, de buen talante: “éste tuvo una hacienda, éste tuvo una empresa, éste tuvo una casa”. Se trataba de perjudicados por el régimen del general Velasco Alvarado.

En ese período de iniciación de funciones realicé las visitas usuales a los jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en Lima, con énfasis en los latinoamericanos y los cuatro garantes del Protocolo de Río de Janeiro, por razones obvias. Como había régimen militar, al igual que en el Ecuador, mis visitas protocolares a los miembros del gabinete ministerial discurrían en una constelación de estrellas castrenses. La Cancillería prácticamente no había sido tocada en su estructura profesional. En cumplimiento del objetivo que me llevó a Lima, realicé una cuidadosa labor de aproximación a los diversos estamentos de la sociedad peruana. Conservo, por ejemplo, un diploma que me entregó el titular de la Cartera de Educación, que dice: “Diploma de honor.— Que testimonia y expresa el reconocimiento del Ministerio de Educación, por su nobilísima labor realizada a favor de la educación y de la cultura.— Lima, 16 de junio de 1980”. Huelga señalar que mis relaciones con las principales autoridades y personal diplomático de Torre Tagle se desarrollaron con una tónica de respeto mutuo y elevada cordialidad.

En 1978, con oportunidad del campeonato mundial de fútbol en Buenos Aires, pasó por Lima el General Raúl Cabrera, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Ecuador. Fue recibido por el General Pedro Richter Prada y mantuvo con él una entrevista reservada, que dio paso a un interesante período de “diálogo militar” entre altos oficiales de ambos ejércitos, para evitar o resolver incidentes esporádicos en la frontera. Con el General Richter Prada, a la sazón Primer Ministro del régimen, cultivé una relación personal y oficial franca y cordial.

A mediados del mismo año se realizó la visita oficial del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Almirante Carvajal, quien al pa-

recer iba con una propuesta trascendente en el contexto de las relaciones chileno – peruanas. En el banquete que le ofreciera su homólogo peruano, en el palacio de Torre Tagle, el Canciller Carvajal planteó en su discurso protocolar que, ante la cercanía del centenario de la guerra del Pacífico (1879), ambos países se abstuvieran de recordar el hecho bélico y armonizaran conductas orientadas a construir un futuro compartido. La respuesta del Canciller José de la Puente Rabdil tuvo un tono tinoso y mesurado. Personalmente me pareció que, no obstante el trasfondo idealista del planteamiento, su viabilidad era muy aleatoria, porque los pueblos incorporan aquellos hechos históricos a su simbología cívica. En efecto, poco tiempo después, varios acontecimientos de relevancia relativa dieron al traste con el proyecto de intencionalidad amistosa y pacífica. El servicio de inteligencia del Perú detectó en un momento determinado un presunto caso de espionaje en la persona de un suboficial peruano, en servicio pasivo, quien habría sido contratado para cumplir una modestísima ocupación en la Embajada de Chile. Se decía que había estado entregando información calificada a cambio de un salario convenido. La noticia tuvo dimensiones de escándalo en la prensa local. En un breve juicio un tribunal condenó a muerte al acusado, quien al parecer no estaba bien en sus cabales, y fue fusilado porque la traición a la Patria es una de las causales para la aplicación de la pena capital en el Perú.

El episodio relatado introdujo un factor de cierta perturbación en las relaciones chileno – peruanas, porque se insinuaba además que el embajador Francisco Bulnes, político connotado en su país y descendiente de una de las figuras de la Guerra del Pacífico que ocuparon Lima, habría tenido conexiones con esa operación de espionaje. Las cosas se complicaron más todavía cuando en el norte del Perú se detectó, según las autoridades locales, otro acto de espionaje cometido por dos oficiales de la marina chilena. Concretamente, en la costa norte del país había anclado el buque chileno “Beagle”, y dos oficiales de la tripulación habían salido a la carretera panamericana para tomarse unas fotografías. Como ese lugar está cerca de una instalación militar, las autoridades peruanas consideraron que el recuerdo gráfico que los marinos chilenos habían registrado configuraba un acto de espionaje. A todo eso se agregaron dos ingredientes realmente curiosos. Se destacó, por una parte, el hecho de que uno de los oficiales era hijo del señor Sergio Onofre Jarpa, líder del Partido Nacional de Chile, al cual

pertenecía el Embajador Bulnes. Por otra parte, más de un comentario periodístico señaló, con poco elaborada malicia, que los oficiales chilenos habrían estado ejecutando actos de espionaje no sólo para su propio país sino también para el Ecuador. Los autores de ese pintoresco infundio se preguntaban: ¿qué hace un barco chileno en un puerto del norte del Perú que no sea realizar espionaje al servicio del Ecuador? Se desencadenó una corriente de opinión adversa a Chile y el asunto terminó con el retiro del embajador Bulnes, en enero de 1979, en condiciones inelegantes.

Daba la impresión de que, en términos de opinión pública, se buscaba algún contrapeso al fusilamiento de un peruano por un acto de espionaje a favor de Chile. Es que alguna gente no estaba convencida del todo de la autenticidad del presunto espionaje del suboficial peruano, sobre todo por sus características personales y su bajo rango castrense. El retiro del representante diplomático chileno tenía ribetes políticos más relevantes. Observé por la televisión su partida un tanto bochornosa. Ocurre que por una extraña coincidencia la placa diplomática del automóvil del señor Bulnes ostentaba el número 007. Cuando relataba las incidencias de la salida del embajador, la televisión mostraba insistentemente la placa de su automóvil, coincidente con la de un conocido personaje de ficción (James Bond), y añadía este comentario: “con licencia para matar”. El episodio concluyó con el retiro de los respectivos jefes de misión en Lima y Santiago, razón por la cual ambas embajadas estuvieron algún tiempo confiadas a sendos encargados de negocios ad-interim.

El desarrollo de las relaciones bilaterales ecuatoriano-peruanas transcurría con normalidad, aunque a veces con ciertas contradicciones en el discurso político. Me explico. Mientras los cancilleres de ambos países, José Ayala Lasso y José de la Puente Rabdil, dialogaban sobre la necesidad de fortalecer el clima de concordia para superar las diferencias existentes, el General Morales Bermúdez formulaba una declaración a un periodista francés en el sentido de que el Protocolo de Río había solucionado ya la cuestión limítrofe. La Cancillería peruana declaró más de una vez que las relaciones bilaterales se desenvolvían dentro de un marco amistoso y de cooperación, pero ignoraba al propio tiempo la existencia del problema territorial con el Ecuador. En diversas ocasiones los cancilleres del Ecuador habían manifestado a los del Perú su deseo de continuar con un diálogo abierto y franco para en-

contrar una solución al problema territorial a través de un entendimiento directo. Todo ello habla de la complejidad y delicadeza del tema y revela, por cierto, la confrontación de posiciones oficiales.

Poco antes del retorno al régimen democrático en el Ecuador, recibí la visita de un buen amigo mío, muy cercano a uno de los personajes integrantes del binomio victorioso en las elecciones presidenciales, quien viajó a Lima para auscultar mi opinión frente a una invitación para ocupar el cargo de canciller. Le manifesté que yo estaba cumpliendo una delicada misión, en el corto tiempo de mi estancia en Lima, y que me parecía que ese momento podía servirle mejor al país en la consecución de tal cometido. Al declinar la honrosa expectativa, le solicité poner de presente mi aprecio por haber sido incluido entre los candidatos a esa alta función.

En noviembre de 1979, iniciado ya el régimen democrático en el Ecuador, viajó a Lima el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Pareja Diezcanseco, para participar de la Reunión de Cancilleres del Pacto Andino, y mantuvo provechosas conversaciones con su homólogo peruano, Carlos García Bedoya. En tal oportunidad el Ecuador manifestó en forma clara y precisa cuál era su posición frente al diferendo fronterizo. Tales conversaciones prosiguieron en enero de 1980 con ocasión de la reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Andino en Lima.

En el curso de 1979 se produjeron dos incidentes fronterizos de relativa gravedad. El primero de ellos ocurrió al anochecer del 24 de mayo, cuando la patrullera peruana "Río Zarumilla", que navegaba en aguas limítrofes, disparó contra la nave pesquera ecuatoriana "Capitán Yagual" y falleció uno de los tripulantes ecuatorianos. Este incidente provocó una enérgica protesta por parte de nuestra Cancillería. El Gobierno del Perú dio explicaciones, que no satisficieron al Gobierno del Ecuador, y el incidente concluyó con el pago de las indemnizaciones del caso a los familiares del tripulante muerto. El segundo incidente ocurrió el 25 de octubre a consecuencia de disparos efectuados por miembros de la Guardia Republicana del Perú, que causaron la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos en el sitio El Playón, en el sector del río Calvas. La Cancillería del Ecuador convocó al Encargado de Negocios del Perú y le presentó una enérgica protesta, a la par que le solicitó realizar la investigación de los hechos y la entrega de los cadáveres. Pero hubo también dos hechos positivos que conviene registrar. Prosi-

guió la negociación sobre el proyecto binacional Puyango Tumbes, aunque sin logros concretos por la falta de acuerdo en el reparto de caudales hídricos, debido a las posiciones divergentes entre el sector diplomático y el técnico. Me correspondió presidir la delegación nacional en esa negociación, pero por la circunstancia anotada no pudimos arribar a un resultado satisfactorio. Por otra parte, dentro del marco de entendimiento entre los ejércitos de ambos países, se reunieron los jefes de estado mayor, en la ciudad de Iquitos, en julio de 1979, para dialogar sobre procedimientos de solución de pequeños problemas derivados de la vecindad.

Como habíamos señalado anteriormente, en 1979 se recordaba el centenario de la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia. La iniciativa chilena de poner de lado la celebración bélica y optar por la construcción de un futuro compartido no se concretó en la práctica y, por el contrario, las relaciones chileno-peruanas tuvieron factores de perturbación temporal. Durante ese año, el importante periódico “El Comercio” de Lima publicó diariamente una página completa con relatos históricos sobre ese conflicto bélico y, por cierto, otros medios de comunicación dedicaron también atención al tema. Se celebraron actos cívicos en diversas ciudades del país. Por mi parte, completé con creces mi cuota de asistencia a desfiles militares conmemorativos de fastos cívicos, pues los embajadores fuimos invitados con una frecuencia inusual a ese género de eventos. Los integrantes de las bandas de guerra ya nos miraban a los diplomáticos con cierto aire de familiaridad. En vista de mi función y por razones obvias siempre atendí tales invitaciones.

Se inició el año de 1980 con claros signos de progreso en el delicado proceso de distensión que habíamos instrumentado desde mediados de 1978. En la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Andino, celebrada en la ciudad boliviana de Santa Cruz, el Canciller del Ecuador formuló una declaración relativa al arreglo pacífico de los problemas existentes entre países andinos e hizo una referencia a los “irrenunciables derechos amazónicos” ecuatorianos. La delegación peruana guardó silencio. El Perú entregó un memorando, el 21 de enero, con “precisiones necesarias” sobre la declaración formulada por el Ecuador en Santa Cruz. Señala que comparte los criterios concernientes a la solución pacífica de controversias y considera que la expresión “irrenunciables derechos amazónicos ecuatorianos” solo puede entenderse dentro del marco jurídico vigente. Añade que confía

en la cooperación “en todos los órdenes de la vecindad”. Ecuador entregó a su vez un memorando de respuesta, el 31 de enero, en el cual reafirmó su posición sobre la existencia de la controversia y señaló que la integración no se podrá alcanzar a plenitud si no va aparejada de un afán sincero de resolver los problemas pendientes.

El diario oficial “El Peruano” publicó, con fecha 17 de febrero, las resoluciones del Ministerio de Agricultura por las cuales se concedían tierras a las comunidades Shaim y Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, entre el río Cenepa y la Cordillera del Cóndor.

El diario “El Comercio” de Quito publicó el 15 de marzo unas declaraciones del Canciller peruano, Arturo García, que inducirían a pensar que existiría una disposición favorable a solucionar el problema limítrofe ecuatoriano-peruano. Dos días después, al retorno de Quito, el Canciller García declaró en Lima que las relaciones con el Ecuador son normales y que en el contexto de la integración se puede dialogar, pero siempre “dentro del marco jurídico existente”.

En el mes de abril, el Gobierno invitó al Presidente Francisco Morales Bermúdez a las celebraciones del sesquicentenario de la primera Constitución Política del Ecuador, promulgada por la Convención de Riobamba el 23 de setiembre de 1830. El mandatario peruano, al agradecer la invitación recibida, manifestó que la transmitirá a su sucesor, quien se posesionaría el 28 de julio de ese mismo año.

El Presidente electo del Perú, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, en una conferencia de prensa celebrada el 19 de mayo de 1980, expresó que su gobierno seguirá “una política de cordialidad” en las relaciones con Chile y Ecuador y que “no comparte la tesis de que el Perú tiene controversias con esos países”.

El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Arturo García, comunica el 12 de junio que el Presidente Belaúnde está dispuesto a recibir con complacencia al ex-Presidente Galo Plaza Lasso y que Torre Tagle considera la venida del personaje ecuatoriano muy útil a los intereses recíprocos. Se hablaba ya de la presencia de Galo Plaza en las ceremonias de instalación del nuevo gobierno democrático del Perú, en representación del Presidente Jaime Roldós Aguilera. Importa recordar que los ex – presidentes Plaza y Belaúnde estuvieron vinculados por una amistad de muchos años. Pero antes de entrar al tema de la toma de posesión del Presidente Belaúnde, vencedor de las elecciones generales de 1980, conviene hacer memoria del proceso político que le con-

dujo a su segunda administración, ya que no pudo concluir la primera de ellas por el golpe militar de 1968.

TRANSFERENCIA DEL PODER

El 18 de junio de 1978 se realizaron las elecciones de representantes a la Asamblea Constituyente como mecanismo institucional destinado a abrir cauces a la transferencia del poder a la civilidad, mediante la elaboración de una nueva Constitución. Pero se afirma que en rigor histórico los militares, ya en febrero de 1977, con la presentación del “Plan Túpac Amaru” y su aproximación a los partidos políticos, estaban explorando las posibles vías para la transferencia política del gobierno a los civiles. Una amplia gama de partidos políticos participó de los comicios, pero los más votados fueron el Partido Aprista Peruano (APRA) y el Partido Popular Cristiano (PPC), seguidos de otros partidos o movimientos especialmente de izquierda.

Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder del APRA, fue electo Presidente de la Asamblea Constituyente. En su discurso de iniciación de funciones, el 28 de julio de 1978, manifestó que la Asamblea debía ser “el primer poder del Estado”, aunque sin cuestionar abiertamente la presencia de los militares en el gobierno. Los constituyentes se dividieron en comisiones para llevar adelante sus trabajos. En la principal de ellas, presidida por Luis Alberto Sánchez, se concentró lo más medular del debate, que comenzó en abril de 1979 hasta mediados de julio, cuando la Constitución fue concluida. Haya de la Torre no estuvo vinculado directamente al debate constitucional porque enfermó gravemente y tuvo que ser trasladado a un centro de salud en Estados Unidos. A su regreso no pudo continuar presidiendo la Constituyente, pero suscribió la nueva Constitución en su lecho de muerte.

A raíz de su elección como Presidente de la Asamblea, visité a Haya de la Torre, en su despacho. Fui el primer embajador extranjero en cumplir con ese acto de cortesía. Lo hice como un ademán político dirigido a la naciente democracia, próxima a inaugurarse. Me recibió con cordialidad; hablamos de temas generales, particularmente relacionados con la marcha de la integración regional, que le apasionaba en el contexto del ideario del APRA. Al abordar las relaciones bilaterales ecuatoriano-peruanas, evocó sus vinculaciones con tres ecuatoria-

nos destacados: José María Velasco Ibarra, Galo Plaza Lasso y Homero Viteri Lafronte. Hizo precisiones personales más cercanas respecto del embajador Viteri Lafronte, porque se habían conocido desde la época de estudiantes, cuando participaron de un congreso universitario en 1912. Haya de la Torre tenía una memoria tan aguda que casi me describió cómo iba vestido su amigo en ese congreso estudiantil. Respecto de su vinculación con el presidente Velasco Ibarra conviene recordar que nuestro primer mandatario, cuando ejercía la función de diputado y los apristas eran hostilizados por el gobierno peruano de la época, elevó su voz de protesta y varias veces habló a favor de su líder y de su pensamiento político. Por lo demás, cuando Velasco Ibarra realizó un viaje por varios países sudamericanos como presidente electo, en 1934, se entrevistó personalmente con Haya de la Torre en la ciudad de Lima. El dirigente aprista, en nuestra conversación, se interesó vivamente por el porvenir de las relaciones ecuatoriano-peruanas.

Haya de la Torre, Presidente de la Asamblea que elaboró la Carta Magna, falleció el 2 de agosto de 1979. Sus restos fueron velados en la Casa del Pueblo, en el Congreso y en la Catedral, recibiendo honores de jefe de Estado, función a la que no accedió a través de las urnas ni por la vía revolucionaria. La Constitución entró en vigor el 28 de julio de 1980, fecha del retorno de la democracia en el Perú.

Las elecciones generales se celebraron en el mes de mayo de 1980, con la participación de 15 candidaturas, reflejo de una honda fragmentación política y de una evidente crisis de representación, por la incapacidad de construir frentes políticos sólidos en función de afinidades ideológicas y programáticas. En todo caso el triunfador fue el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien antes gobernó el Perú entre 1963 y 1968, año en que fue depuesto por los militares.

El 19 de junio, poco antes de la inauguración del período democrático, la agencia de noticias ANSA difunde un despacho con declaraciones del Vicepresidente electo del Perú, Fernando Schwalb, y del próximo Canciller, Javier Arias Stella, en el sentido de que no existe problema limítrofe con el Ecuador y que el Perú respeta los tratados internacionales, entre los que figura el Protocolo de Río. Al día siguiente el Canciller Alfredo Pareja Diezcanseco se refiere a las expresiones del Vicepresidente Schwalb y reitera que existe una controversia territorial entre Ecuador y Perú. Cita al respecto las manifestaciones del Canciller Arturo García y del Presidente Morales Bermúdez, que en alguna me-

dida reconocieron la existencia del diferendo. Recoge también la conclusión de la Corte Internacional de Justicia, de 30 de mayo de 1950, que dice: “La existencia de un litigio debe ser establecida objetivamente. El mero hecho de que la existencia de un litigio sea discutida no prueba que ese litigio no existe”. El Canciller Pareja reitera la voluntad de encontrar una solución pacífica y equitativa del problema.

Por otra parte, el Canciller Alfredo Pareja entrega al Embajador del Perú en Quito, con fecha 18 de junio, un memorando en el cual Ecuador, “en defensa de sus derechos, reitera su reserva” ante el otorgamiento de tierras a las comunidades aguarunas, entre la Cordillera del Cóndor y el río Cenepa.

En declaraciones publicadas el 21 de junio en el diario oficial, el Canciller García expresa que las relaciones con el Ecuador se desarrollan con espíritu de cooperación mutua y esfuerzo conjunto para impulsar la integración subregional. Añade que en este sentido se viene dialogando positivamente sobre las múltiples materias de interés común que deben encarar dos países limítrofes y que los problemas de vecindad que puedan existir se encuentran dentro del marco jurídico que regula sus relaciones bilaterales. Señala que sus declaraciones de 15 de marzo, en Quito, fueron tergiversadas por el diario “El Comercio” y que ellas se refirieron únicamente a un pequeño tramo de frontera cuya demarcación debe ser completada de acuerdo con el Protocolo de 1942. Acota que las declaraciones formuladas por el Presidente Morales Bermúdez en Panamá se encuadran dentro del mismo contexto. Finaliza diciendo que el diálogo es la fuente más fecunda de entendimiento entre nuestros dos países. El diario “El Comercio” de Lima, en su edición del 23 de junio, respalda las declaraciones del Canciller García y expresa que las relaciones peruano-ecuatorianas se conservan en alto nivel de respeto y diálogo y que deben reafirmarse cada vez que surjan malentendidos y confusiones.

El día 27 de junio, en entrevista que me fue dado mantener con el Presidente electo, arquitecto Belaúnde Terry, me manifestó su complacencia personal por la designación de Galo Plaza para que asista a las ceremonias de transmisión del mando, en calidad de jefe de la misión especial del Ecuador. En esa misma oportunidad, el futuro Canciller, Javier Arias Stella, me dijo que el Gobierno venidero deseaba superar las “dificultades” existentes dentro del marco de la cooperación bilateral.

En conferencia de prensa realizada el 30 de junio, el Presidente electo declaró que, con ocasión de la transmisión del mando en el Perú, promoverá una Reunión de Presidentes Andinos. Puntualizó que la reunión podrá hacerse a plenitud debido a la oportuna decisión del Presidente Roldós para que lo represente Galo Plaza, un hombre “conocido, versado y muy querido en el Perú”.

El día primero de julio me recibió en audiencia el Canciller Arturo García y me manifestó, con relación a la reserva ecuatoriana por las concesiones a las comunidades aguarunas en la zona fronteriza, que no ha existido ánimo de crear un incidente con el Ecuador y que su Gobierno y el próximo quieren mantener las más amistosas relaciones con nuestro país. Puso en mis manos un “aide mémoire” relativo a dicho tema, en el cual se reiteraba que dicho otorgamiento de tierras “se ha efectuado dentro del marco jurídico que regula las relaciones entre los dos Estados”.

En conferencia de prensa realizada el mismo día primero de julio, el Presidente electo Fernando Belaúnde lamenta que el Presidente Jaime Roldós no asista a los actos de transmisión del mando y manifiesta que habría sido recibido en el Perú “con los honores que se merece y la fraternidad que profesamos por la hermana República”. Añade que Roldós ha tenido el gesto de designar al ilustre estadista de América, Galo Plaza, para que lo represente en tales actos.

El diario “El Comercio” de Quito publica, el 2 de julio, este despacho de la agencia ANSA: “El Presidente electo, Fernando Belaúnde, aseguró hoy que normalizará las relaciones diplomáticas de Perú con Chile y puntualizó que hará respetar los tratados internacionales, entre ellos el de límites con el Ecuador”. La versión que recogieron los periódicos de Lima de la misma conferencia de prensa decía: “Periodista: —¿El Departamento de Arica cómo va a quedar? ¿lo reclamarán siempre? Presidente Belaúnde: —Nosotros nos regimos por los tratados. Mi compromiso con el pueblo peruano es hacer respetar los tratados”. El 4 de julio el Canciller García manifiesta que se halla preocupado y molesto por la distorsión hecha por el periodista de ANSA. Expresa que la declaración de Belaúnde se refiere solamente a Chile y que ha dispuesto la comparecencia del representante de ANSA para que explique el motivo de esa distorsión y el propósito que persigue al hacer frecuentes alusiones al tema de las relaciones ecuatoriano-peruanas. Ante una gestión mía, realizada personalmente con el Canciller García, dispuso

que se solicitara al corresponsal de ANSA la rectificación de su alusión al Ecuador.

Durante la recepción ofrecida por el Embajador de Venezuela, el 5 de julio, con oportunidad del día nacional de su país, me encontré con el Primer Ministro y Ministro de Guerra del Perú, General Pedro Richter Prada, y le pregunté, en tono cordial por la buena amistad que habíamos cultivado, cómo iban las relaciones entre los ejércitos de nuestros dos países, fortalecidas por diálogos intermitentes entre sus representantes, según referí anteriormente. Tengo que darte una noticia inquietante, me respondió con ademán amistoso. Hace varios meses nuestro colega ecuatoriano no ha tomado contacto con nosotros. Me reveló, con preocupación, que el diálogo castrense se había suspendido en la práctica y atribuyó implícitamente la responsabilidad de ello al Ecuador. Me confesó que se percibía un “enfriamiento” en el diálogo y que ello habría producido un “inmotivado estado de alerta” en el ejército ecuatoriano. Añadió que algunos de sus colaboradores militares (los de la línea dura), en conocimiento de tal “medida ecuatoriana”, le habían consultado sobre la respuesta que debía dar el Perú, a lo que había contestado que “no se haga nada, porque sigo convencido que el único camino entre nosotros es el diálogo”. Esta mañana, reunidos los jefes de las distintas ramas de las fuerzas armadas, hemos interpretado esa actitud como una virtual ruptura del diálogo militar por parte del Ecuador. Nosotros mantenemos, sin embargo, inalterable la disposición para el diálogo, subrayó luego. Le expresé al General Richter mi profunda preocupación por sus manifestaciones y mi esperanza de que el episodio sólo constituyese un malentendido superable. Le ofrecí tomar contacto inmediato con las autoridades correspondientes del Ecuador para ponerles al tanto de la situación. Me retiré discretamente de la recepción diplomática y me dirigí a las oficinas de nuestra Embajada. Como era sábado a medio día, no esperé la presencia de ninguno de mis colaboradores y yo personalmente preparé y despaché un mensaje urgente a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, donde la información tuvo inmediato eco y fue referida a las altas autoridades del gobierno. Pocas horas después fui convocado para sendas entrevistas personales con el Presidente de la República y el Canciller del Ecuador.

En Quito fui recibido en un almuerzo íntimo por el Presidente Jaime Roldós, quien estaba acompañado de Galo Plaza y altos funcionarios vinculados con el tema Perú. Se me pidió que estuviera una ho-

ra antes en palacio para mantener una conversación previa con el Mandatario y sus acompañantes. Fue una reunión importante, pues con base en mis apreciaciones pasamos revista a la situación planteada y al futuro inmediato de las relaciones ecuatoriano-peruanas, en el marco de la transición democrática y de un proceso político y social represado por la dictadura militar. Después de los diálogos oficiales retorné inmediatamente a Lima para acompañar el desarrollo de esa situación expectante.

El 14 de julio apareció un artículo insidioso en la revista limeña “Oiga”, bajo el título de “Alerta en la frontera”, en el cual se hablaba de “aprestos bélicos” en el Ecuador y se revelaba además la cuestión de las reservas formuladas por nuestro país respecto de los asentamientos agrícolas concedidos entre los ríos Cenepa y Nangaritza. Al día siguiente le expresé al Canciller García mi preocupación y extrañeza por los términos de dicho artículo, que incluye información reservada de las cancillerías. El Ministro García me manifestó que conocía el texto sólo por referencias y me ofreció dedicar interés personal al asunto.

“El Diario de Marka”, en su edición de 15 de julio, critica las declaraciones del Vicepresidente Schwalb y dice que la cuestión territorial ha sido utilizada para fines de política interna. Señala que hay que impedir que “charlatanes y patrioterros de uno y otro lado” enturbien las relaciones ecuatoriano-peruanas.

El Canciller García me convocó a su despacho, el 17 de julio, para expresarme su contrariedad por la publicación del artículo de la revista “Oiga”. Calificó de gravísimo el asunto porque estaría involucrado en la entrega de información un funcionario de Torre Tagle. Me dijo que hablaría personalmente con el director de la revista. Le reiteré a mi vez la extrañeza del Gobierno del Ecuador por esa publicación y resalté el hecho de que su sospechosa precisión de lenguaje diplomático podría conferir fundamento a la suposición de que el artículo se originó en fuente oficial peruana.

Días antes de la asunción del mando, los embajadores de los países andinos representados en Lima hicimos una visita de cortesía al Presidente electo del Perú. El arquitecto Belaúnde, hombre de discurso florido y de abierta comunicación con sus interlocutores, nos recibió con especiales muestras de amabilidad. A cada diplomático le dedicó un halago retórico e interesantes evocaciones sobre las excelencias de cada país andino, que por cierto conocía muy bien. En mi caso fue más

específico y cercano, porque residió algún tiempo en el Ecuador y recibió particulares atenciones como exiliado político en el gobierno de Galo Plaza, quien inauguró un prestigioso período de estabilidad democrática en nuestro país, con reconocido respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ecuatorianos. Belaúnde hizo gratas memorias de Quito y recordó que dedicó un número exclusivo de su revista “El arquitecto” al patrimonio monumental y artístico que ostenta nuestra capital. Se refirió con hidalguía a la ayuda que su amigo Galo Plaza le había brindado en las difíciles horas de su forzoso ostracismo.

A propósito de su estancia en Quito nos contó que el presidente Plaza contrató sus servicios profesionales para la elaboración de varios proyectos arquitectónicos en el Ecuador. Y añadió, de buen talante, un curioso episodio anecdótico: un alto funcionario palaciego albergaba sentimientos antiperuanos —nos dijo con convicción—, pues cada vez que yo iba a entregarle un proyecto concluido me sugería volver después de quince días para recibirme el trabajo....Era un señor al que llamaban “pulga” Egüez, concluyó. La verdad es que el ingeniero Egüez (al que sus amigos cercanos le endilgaban dicho apodo) tenía una posición elevada en la administración pública y estaba cerca del Presidente. Pero conozcamos la versión de Galo Plaza, que es diferente.

El presidente Jaime Roldós tuvo el acierto de designar a Galo Plaza jefe de la misión especial del Ecuador a las ceremonias de transmisión del mando presidencial en el Perú, porque su presencia en Lima marcó la impronta de un excepcional entendimiento ecuatoriano-peruano. Dado el prestigio internacional del ex-mandatario, fue recibido con demostraciones de interés y viva simpatía. Como suele ocurrir en estos casos, tenía una agenda extenuante de compromisos. Por eso me pareció prudente reservarle un par de horas el primer día para que descansara en la suite del Hotel Bolívar, donde estuvo hospedado. Para sorpresa mía, me llamó desde su habitación a mi residencia para expresarme que él prefería mantener una charla conmigo antes que permanecer inactivo en el hotel. Para mí fue un paréntesis provechoso en la rutina de mis actividades diplomáticas, porque abordamos un nutrido elenco de temas, básicamente sobre política internacional y la realidad peruana. Para iniciar nuestro palique le referí la simpática anécdota del contrato profesional al arquitecto Belaúnde y sus peripecias en palacio. Al escucharme, Galo Plaza no pudo reprimir una sonora carcajada y me contó la verdad de los hechos. En un gesto de señorío entre dos vie-

jos amigos, fue ésa la forma más elegante y delicada de auxiliar a un exiliado importante, me dijo. Yo mismo le instruí al pulga Egüez, me confesó, que diera largas a la recepción de los trabajos de Fernando, pues se trataba de proyectos que no se ejecutaron nunca. Por otra parte, la puntualidad en la entrega estaba agotando el repertorio de proyectos imaginarios, concluyó. Recuerdo asimismo que en la noche de ese mismo día le ofrecieron una cena privada al ex-mandatario, para proponerle la presidencia honoraria de una empresa minera peruana que había invertido en el Ecuador. El brindis y la propuesta estuvieron a cargo del Primer Vicepresidente electo, Fernando Schwalb. Galo Plaza dio su asentimiento y, con donaire propio de su característica sencillez, hizo esta advertencia: “De minas, sólo sé que están bajo tierra; yo sólo sé de vacas, por mi tradición agrícola y ganadera”.

El 28 de julio, día nacional del Perú, se realizó la ceremonia de asunción del mando del Presidente Fernando Belaunde Terry, con la participación de numerosas delegaciones extranjeras. La ceremonia del saludo protocolar se desarrolló en dos momentos sucesivos: ingresaban, en primer término, las misiones especiales encabezadas por jefes de Estado en ejercicio y, a continuación, el grupo mayoritario de delegaciones, que tuvo por vocero al ex – Presidente ecuatoriano. Plaza y Belaunde intercambiaron discursos de elevado tono democrático y las relaciones entre nuestros dos países cobraron rango prioritario, con alusiones recíprocamente amistosas. El acto representó un momento relevante de las relaciones bilaterales y el honroso ejercicio de la vocería internacional por un ecuatoriano. Todo ello demostró, además, que entre los dos personajes había una relación amistosa de alta cordialidad y mutua consideración.

Cuando Galo Plaza retornó al Ecuador me escribió una carta muy expresiva, en la cual me relataba su diálogo con el Presidente Roldós. Me tomo la libertad de transcribir un párrafo de la misiva, de 18 de agosto de 1980: “Tuve la oportunidad de informar al Presidente Roldós de mi verdadera satisfacción de encontrar la Embajada en tan buenas manos. Le informé que no puedo sino dar informes positivos sobre mis impresiones en Lima, la Embajada, el buen arreglo y presentación, el papel que cumplen los Embajadores, el prestigio que usted tiene en Lima, el profundo conocimiento del medio y además que he considerado una garantía para el país el tener a un representante capaz, sereno,

bien conectado y prestigioso, cumpliendo una tarea que fácilmente puede convertirse en delicada”.

En síntesis, los diálogos entre Plaza y Belaunde ampliaron las perspectivas de buen entendimiento y cooperación entre Ecuador y Perú. En consecuencia, el grave incidente que habría de producirse en enero de 1981 entre los dos países resultaba casi inexplicable.

Pocos días después de la inauguración del régimen del presidente Belaunde ocurrió un hecho preocupante. Se había producido un tiroteo en un río fronterizo con el Ecuador, con un par de muertos como resultado de la refriega: uno de ellos portaba uniforme militar de paracaidista peruano. Como en tales casos operaba entonces una suerte de reflejo condicionado en el mundo oficial, se pensó que los causantes del desaguisado debían ser soldados ecuatorianos. Fui convocado a su despacho por el flamante Canciller Arias Stella, seguramente para presentarme una protesta diplomática, como bautismo inicial en la órbita de nuestras dificultades cíclicas. Cuando acudí a la entrevista, el Canciller estaba de buen talante, por la última información que había recibido: me dijo, casi con risueña satisfacción, que el incidente consistía en un enfrentamiento entre policías y narcotraficantes peruanos. El uniforme militar del presunto paracaidista había sido sustraído de algún cuartel. No habíamos concluido todavía nuestro diálogo cuando el doctor Arias Stella tenía que ir al aeropuerto para recibir al presidente Belaunde, quien retornaba de Arequipa. Acompáñeme al aeropuerto, estimado Embajador, y así podremos continuar nuestra conversación, me expresó el Canciller. Acepté de buen grado su inesperada invitación y, gracias a su amabilidad y condescendencia, me encontré de pronto incorporado al gabinete ministerial que esperaba la llegada del Primer Mandatario. Al margen de la heterodoxia formal, me brindaba una ocasión propicia para alternar con los ministros de estado que iban a cumplir funciones específicas en el gobierno del presidente Belaunde.

En el ámbito anecdótico quisiera consignar el dato de que la primera recepción diplomática que se ofreció en Lima al comienzo del período democrático, tras doce años de dictadura militar, tuvo lugar en la Embajada del Ecuador, el 10 de agosto de 1980, con motivo de nuestra Fiesta Nacional. Además de las principales autoridades del nuevo gobierno se hicieron presentes muchas figuras de la sociedad civil, que habían sido renuentes en la época del dominio castrense. Fue

una recepción muy numerosa y con unas características especiales, por el entusiasta reencuentro de las gentes en el marco de la institucionalidad democrática.

RELATO DE UN CONFLICTO INESPERADO

El retorno de la democracia al Perú y las públicas manifestaciones intercambiadas entre Galo Plaza y Fernando Belaunde, que he citado escuetamente, daban la impresión de que se abría espacio a una renovada época de pacífica convivencia entre ambas naciones. Esa era la percepción general en los últimos meses de 1980. Pero los hechos pronto disiparon esa visión optimista.

Las afirmaciones del general Richter Prada, mencionadas anteriormente, eran reveladoras de la intencionalidad peruana y de la prosecución de la línea dura frente al Ecuador, que tuvo expresión en el conflicto iniciado el 22 de enero de 1981. Cuando fui llamado a Quito por el Presidente Roldós sostuve que aquellas afirmaciones no representaban un peligro inminente para el Ecuador, pero que no descartaba la posibilidad de una acción peruana cuando el Gobierno del Presidente Belaunde se enfrentase a las presiones sociales y económicas derivadas del proceso crítico que vivía el país, a lo que se sumaba el influjo decisivo de las fuerzas armadas, deseosas de rescatar su prestigio institucional mellado por el desgaste del ejercicio del poder político.

El progresivo acercamiento diplomático entre Perú y Chile y el desarrollo de la situación chileno-argentina, que ofrecían tranquilidad a los estrategas peruanos, coincidieron con el anuncio hecho en el Ecuador el 11 de enero de 1981, en el sentido de que el Gobierno Nacional emitiría un comunicado oficial con motivo del XXXIX aniversario de la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro. Este anuncio prematuro causó preocupación en Torre Tagle y en el Gobierno del Perú, en general, contribuyendo a generar el pretexto para la acción armada del día 22 de enero. La movilización de las fuerzas armadas peruanas, realizada con sincronización y velocidad táctica, evidenció la deliberada planificación de las acciones. Cabe destacar aquí que en esa fecha habían accedido ya a los altos mandos castrenses, luego de la separación del general Richter Prada, elementos de la línea dura y beligerante, como demostraron serlo los generales Hoyos Rubio y Arias Grazziani,

Comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea, respectivamente, quienes lo habían presionado en julio de 1980 para que diera una respuesta drástica al Ecuador por los presuntos aprestos bélicos que, en malicioso comentario, se decía estaba realizando nuestro país. Así, el 22 de enero de 1981, con el ataque de un helicóptero peruano al puesto de Paquisha se inició el conflicto entre los dos países.

El 22 de enero, a las 11:30 de la mañana, un helicóptero militar peruano sobrevoló puestos militares ecuatorianos situados en la Cordillera del Cóndor, en la región amazónica, y una hora después tornó a sobrevolar el puesto de Paquisha y disparó contra un helicóptero del Ejército del Ecuador que se hallaba en tierra, cuyo piloto, teniente Hugo Valencia, fue gravemente herido.

Tan pronto conoció estos hechos, el Canciller encargado, Mario Alemán, entregó al Embajador del Perú en Quito, Carlos Mariátegui, una nota de enérgica protesta por dicho ataque que “contrasta, decía, con la posición del Gobierno ecuatoriano empeñado en resolver por medios pacíficos la controversia territorial existente”. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú respondió el 23 de enero a la reclamación ecuatoriana dando una arbitraria versión de los acontecimientos, según la cual el helicóptero peruano había sido atacado por tropas ecuatorianas cuando cumplía “funciones rutinarias de abastecimiento”, en misión pacífica.

El 26 de enero me convocó a su despacho el Canciller Arias Stella para entregarme una nota de protesta y explicarme su visión de los hechos. Cuando ingresé al gabinete escuché la última frase de una conversación telefónica que mantenía con el Canciller Alfonso Barrera. Javier Arias Stella le exhortaba a Alfonso Barrera a dar las disposiciones necesarias para el retiro de los efectivos ecuatorianos de la citada posición y que, de no hacerlo, se atuviera a las consecuencias. Entendí entonces que la situación había llegado a extremos de inesperada gravedad, incompatibles con anteriores declaraciones de ambos personajes en las cuales restaban importancia al incidente. Antes de poner en mis manos el documento, el Canciller aclaró que había esperado varios días para hacerlo porque deseaba contar previamente con el testimonio del piloto del helicóptero, ya que él no podía dudar de la palabra de un oficial peruano. Recibí la nota y me informé de su contenido, que atribuía al Ecuador la responsabilidad de los hechos. Le hice entonces un co-

mentario obvio. Le dije que no comprendía cómo el teniente Valencia pudo resultar herido en tierra por disparos dirigidos por tropas ecuatorianas al helicóptero peruano en vuelo. Con ademán reflexivo me planteó una hipótesis imaginativa y poco verosímil. Tengo la impresión, me dijo, de que una de las balas ecuatorianas rebotó en la parte inferior del aparato e hirió al teniente Valencia. Basaba su interpretación en el hecho de que el calibre de esa bala no correspondía a las armas que utilizaban las tropas peruanas.

Entre los días 27 y 28 de enero se produjeron reiteradas incursiones aéreas sobre Paquisha por helicópteros y aviones de caza peruanos, con bajas en ambos lados. El mismo día 28 el Canciller del Ecuador llamó a su despacho al Embajador del Perú y le entregó una nueva nota de protesta, en la cual exigía del Gobierno peruano el cese inmediato de la agresión y rechazaba cualquier maniobra tendiente a confundir a la opinión pública internacional, pretendiendo presentar al Ecuador como agresor en momentos en que las fuerzas armadas del Perú desencadenaban acciones militares, que se extendieron también a otros sectores.

En esos mismos días se realizaba en Lima un período de sesiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina). La delegación del Ecuador, presidida por el Ministro de Industrias y Comercio, Germánico Salgado, acudió a mi despacho para considerar la posibilidad de su retiro de las deliberaciones. Les hice notar que se trataba de una reunión de países andinos y que la capital peruana es simplemente la sede permanente, razón por la cual yo personalmente no encontraba motivo para el abandono de las sesiones. Se acordó entonces que uno de los delegados permaneciera hasta el final de la reunión.

En la tarde del día 28 de enero la Cancillería del Perú presentó, por su parte, una nota de protesta en la cual afirmaba que los destacamentos ecuatorianos estaban “en territorio peruano”. Ante esta aseveración y el anuncio oficial que hacía el Gobierno de Lima sobre el envío de efectivos militares para “desalojar a los soldados ecuatorianos de la Cordillera del Cóndor”, se emitió en Quito un comunicado oficial, entre cuyos términos figuraban los siguientes: “El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que el anuncio oficial del Perú sobre envío de efectivos militares con la misión de desalojar a soldados ecuatorianos constituye prueba irrefutable sobre quién es el agresor y sobre una con-

ducta que se ha hecho carne en las fuerzas armadas de ese país, encaminada a consumir hechos bélicos antes de la búsqueda de cualquier solución, que luego evita cuidadosamente”.

El Presidente Jaime Roldós decretó entonces el estado de emergencia y declaró zona de seguridad a todo el territorio nacional. El Ministerio de Defensa Nacional adoptó diversas medidas dentro de la importante esfera de su competencia y, por su parte, la Cámara de Representantes del Ecuador condenó la agresión y se solidarizó tanto con las medidas de defensa nacional como “con las gestiones diplomáticas de nuestra Cancillería, conducentes al mantenimiento de la paz”.

Dada la gravedad de las circunstancias y el peligro de invasión que enfrentaba el Ecuador, se dispuso que el Embajador ante la OEA, doctor Raúl Falconí, denunciara de inmediato la situación ante el Consejo Permanente de esa Organización. El mismo día 28 de enero, el Consejo escuchó la exposición del representante ecuatoriano y, por iniciativa de Venezuela, sugirió la constitución de una comisión investigadora para que aclare los hechos y coadyuve a su solución. El Ecuador aceptó de inmediato tal sugerencia, poniendo de relieve su adhesión a los principios de solución pacífica de controversias. Dejó constancia, al propio tiempo, de que acogía esa idea sin perjuicio de solicitar la convocatoria del Órgano de Consulta de la OEA. Perú, en cambio, aduciendo dificultades de comunicación entre Lima y su delegación en Washington, demoró la respuesta hasta el día 29 de enero, en que reaccionó negativamente.

El día 29 de enero de 1981, al cumplirse 39 años de la firma del Protocolo de Río, el Gobierno nacional expidió un comunicado sobre la controversia territorial con el Perú. El texto fue aprobado por unanimidad por la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, con base en un documento preparado por la Cancillería.

La comunidad internacional no fue indiferente a lo que estaba ocurriendo entre los dos países. El 30 de enero, a poco de iniciados los incidentes fronterizos, los Presidentes de Colombia y Venezuela ofrecieron sus buenos oficios para superar el conflicto. El Gobierno ecuatoriano aceptó sin dilaciones esa amistosa proposición, pero el régimen peruano la desechó. En esa misma fecha y ante la gravedad de los acontecimientos, Su Santidad el Papa Juan Pablo II exhortó a las partes a cesar toda acción violenta. El Gobierno nacional respondió positivamente a ese noble mensaje. Y el 31 de enero, el Rey de España, Juan Carlos

I, dirigió sendas comunicaciones a los Presidentes Roldós y Belaunde pidiéndoles realizar “cuantos esfuerzos puedan para el inmediato cese de las hostilidades”, a la par que les ofrecía la asistencia de España en lo que fuere menester. Esta oferta mediadora fue aceptada por el Ecuador y rechazada por el Perú.

El 30 de enero el Gobierno del Perú había anunciado que sus tropas habían tomado Paquisha. El Alto Mando de las Fuerzas Armadas del Ecuador, por su parte, había informado que “la situación en todas las unidades de la frontera oriental y sur” era “estable” y que no se había producido “ninguna novedad”.

Como se había convocado a una reunión de los representantes de los Países Garantes en Brasilia, se instruyó a las misiones en Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos para que se acerquen de inmediato a las respectivas Cancillerías y manifiesten que el Ecuador no tenía objeción alguna para que se reúnan “en calidad de países amigos”, con el fin de realizar gestiones conducentes al cese de la agresión y aseguren el mantenimiento de la paz, pero que “estando convocada la reunión de la OEA, Perú podría utilizar la reunión de los cuatro países para impedir o prorrogar la acción pacificadora y continuar la agresión”. En la noche del 31 de enero, los representantes de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos dirigieron desde Brasilia un “apremiante llamado” para que las partes anuncien públicamente su disposición de poner en vigencia el cese de fuego.

El día primero de febrero los cuatro países reiteraron la iniciativa sugiriendo que el anuncio sea hecho el 2 de febrero, a las 2 de la tarde, hora de Quito. La Cancillería ecuatoriana respondió que aceptaría públicamente el inmediato cese de fuego, así como la formación y envío de una comisión observadora, integrada por representantes de los cuatro países amigos, para que inspeccionen en el terreno el cumplimiento del cese de fuego. Al propio tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló y dejó constancia de que las Fuerzas Armadas ecuatorianas se hallaban en posesión de los destacamentos de Mayaycu y Machinaza y en los alrededores de Paquisha; por esta razón y porque la zona es ecuatoriana, los comunicados del Perú que hablaban de “reconquista de territorio peruano” eran inaceptables.

Como culminación de intensas gestiones se logró convenir en el cese de fuego, que fue anunciado en Quito y Lima a las 13:30 horas del

mismo día 2 de febrero. Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos expresaron su satisfacción y acordaron integrar una comisión observadora, a la cual el Gobierno del Ecuador ofreció todas las facilidades necesarias. Dicha comisión estuvo integrada por los agregados militares de los cuatro países, con residencia en Quito y Lima. El Canciller Barrera agradeció a los países amigos por el envío de la comisión observadora y dejó constancia de que ésta no podía tener otro alcance que el de comprobar el cese de fuego, sin prejuzgar ni incidir en cuestiones de fondo inherentes a la controversia territorial con el Perú, todo lo cual fue corroborado por los referidos países.

Ante la negativa del Perú de aceptar una comisión investigadora, el Ecuador solicitó la convocatoria a la Reunión de Consulta, prevista en los artículos 59 y 60 de la Carta de la OEA. La convocatoria fue aprobada por el Consejo Permanente por una mayoría de 20 votos. Hubo sólo dos abstenciones y un voto en contra, el del Perú. Aprobada la celebración de la XIX Reunión de Consulta, el Gobierno Nacional designó a la delegación que iría a Washington, integrada por altos personeros del poder público y destacados internacionalistas. La Reunión se inició el 2 de febrero, con este tema: “Cese de las operaciones militares producidas en la zona fronteriza ecuatoriano-peruana, en la Cordillera del Cóndor, que motivaron la XIX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y mantenimiento de la paz”. El Canciller Alfonso Barrera Valverde, en una intervención patriótica y de elevada idoneidad, dejó constancia del rechazo vigoroso del Ecuador a la agresión; reiteró los legítimos derechos territoriales de nuestro país y la inquebrantable decisión nacional de defenderlos; y puso énfasis en el apego tradicional del Ecuador al arreglo pacífico de las controversias internacionales.

El día 4 de febrero, la Reunión de Consulta aprobó esta Resolución:

“La XIX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones exteriores
VISTO:

El temario de esta reunión titulada ‘Cese de las Operaciones Militares producidas en la zona fronteriza ecuatoriano-peruana, en la Cordillera del Cóndor, que motivaron la XIX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y mantenimiento de la paz’.

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente, a solicitud del Ecuador, provocó con la urgencia requerida la XIX Reunión de Consulta según Resolución CP/RESS 323 (450/81) del 29 de enero de 1981.

Que el propósito fundamental de la Organización de los Estados Americanos es el afianzamiento de la paz y la seguridad del Continente, que el Consejo Permanente en la citada Resolución expresó su profunda preocupación por las circunstancias que perturban la amistad y solidaridad entre pueblos hermanos, y exhortó 'a los Gobiernos a que no realicen ningún acto que pueda agravar la presente situación'.

Que la información de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos anunciando el cese del fuego alcanzado a través de sus gestiones con los Gobiernos de Ecuador y Perú, fue ratificada por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países con las aclaraciones que estimaron pertinentes en el seno de esta reunión.

TENIENDO EN CUENTA:

La exposición hecha por el Delegado Especial del Brasil 'En nombre de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos sobre la labor que vienen realizando con la anuencia de Ecuador y Perú'.

OIDAS:

Las exposiciones de los Ministros de Relaciones Exteriores del Ecuador y del Perú sobre los hechos ocurridos en la zona fronteriza ecuatoriano-peruana.

REAFIRMAN

Los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos para afianzar la paz y la seguridad en el Continente, y la necesidad de preservar un clima permanente de entendimiento y amistad entre las Naciones Americanas.

EXPRESA:

Que la Organización de los Estados Americanos tiene la irrenunciable obligación de velar por la preservación, el mantenimiento y la consolidación de la paz en el Continente.

RESUELVE:

- 1.- Registrar con pesar que se hayan producido enfrentamientos armados entre dos Estados Miembros de la Organización, los cuales quebrantan la paz y seguridad del Continente.
- 2.- Recibir con beneplácito el anuncio de los dos Gobiernos sobre el cese del fuego en la zona de conflicto, ratificado por sus Cancilleres en el seno de esta reunión.
- 3.- Exhortar a ambos países a desmovilizar, desconcentrar sus fuerzas y desmontar los operativos militares realizados con motivo de los enfren-

tamientos, a la brevedad posible, limitándose a mantener los efectivos normales de vigilancia de fronteras.

4.- Expresar su satisfacción por el compromiso solemne que contraen ambos países en esta Reunión de Consulta, genuina representación de los pueblos y Gobiernos de América, de restablecer y consolidar la paz, absteniéndose de todo acto que pueda perturbarla y realizar todos los esfuerzos para superar las dificultades actuales.

5.- Tomar nota de que ambos países han aceptado la visita de la Comisión compuesta por representantes de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, que ya está en funcionamiento para velar por la observancia del cese de fuego y crear condiciones de paz entre los mismos, y expresar su reconocimiento por la labor que realizan los países mencionados.

6.- Reafirmar la presencia vigilante de la Organización de los Estados Americanos para mantener y fortalecer la paz y contribuir al entendimiento entre los dos países.

7.- Instruir al Consejo Permanente para que se mantenga informado de las acciones que adopten ambos Gobiernos para el cumplimiento de los altos fines aquí señalados.

Washington, 4 de febrero de 1981”.

Como se puede apreciar, la resolución no alude al Protocolo de Río ni a su garantía, pero los representantes de los cuatro países, por conducto de su vocero, el Embajador del Brasil, incorporaron al texto del acta una declaración en el sentido de que “Nuestro voto en esta Reunión de Consulta en ninguna forma afecta las responsabilidades que nuestros países han asumido y están dispuestos a continuar asumiendo en su calidad de Garantes del Protocolo Peruano-Ecuatoriano de Paz, Amistad y Límites firmado en Río de Janeiro el 29 de enero de 1942”.

Sin menoscabo de las acciones desarrolladas por la OEA, y para no omitir otra posible instancia en los esfuerzos de paz, la Cancillería del Ecuador, por medio de su Representante, informó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, acerca de la grave situación existente entre las Repúblicas de Ecuador y Perú. El Representante ecuatoriano dejó expresa constancia de que nuestro país había aceptado y apoyado todas las iniciativas de paz: los ofrecimientos de Colombia y Venezuela; las iniciativas del Santo Padre y del Rey de España; la

resolución del Consejo Permanente de la OEA para enviar una comisión investigadora; la convocatoria a la Reunión de Consulta de la OEA; y la propuesta de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos para que las partes se abstengan de recurrir al uso de la fuerza. Nuestro Representante dejó también constancia de que las Fuerzas Armadas del Ecuador se habían limitado a repeler los ataques peruanos.

Los cuatro países amigos, preocupados por la necesidad de desmilitarizar la zona de conflicto y separar a las fuerzas de los dos lados, sugirieron el 17 de febrero que el Ecuador concentre las suyas en Mayaycu Viejo y, el Perú, en Alto Comaina, sedes los dos lugares de los respectivos comandos. El 18 de febrero, la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores del Ecuador conoció tal propuesta y la aceptó por unanimidad, luego de escuchar el parecer del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Canciller de la República.

El Presidente Roldós autorizó, el 20 de febrero, el envío de un cablegrama mediante el cual se comunicó a los cuatro países amigos la aceptación ecuatoriana, “con la evidente y necesaria condición de simultaneidad de retiro y equidistancia en la misma a los dos lados”, bajo la amigable vigilancia de los observadores. En el mismo texto se dejó constancia que ello no prejuzgaba “cuestiones de fondo”, por lo cual no comprometía ni en principio línea alguna de referencia límite o de otra índole. Además, se dejó a salvo la conocida posición del Ecuador en materia territorial y respecto de la zona donde no existe siquiera el accidente geográfico citado en el Protocolo de Río. Se dijo, finalmente, que los lugares de concentración de tropas podían ser determinados en la Reunión de Jefes Militares auspiciada por los cuatro países amigos y que el Ecuador designaba para el efecto al Vicealmirante Raúl Sorroza Encalada, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Perú, por su parte, quería que el retiro sea establecido de tal manera que las fuerzas ecuatorianas pasen a la vertiente occidental de la Cordillera del Cóndor y las peruanas permanezcan en el lado oriental, lo más cerca posible de las altas cumbres de la misma Cordillera. Por ello Torre Tagle hablaba de un retiro de dos kilómetros o máximo de quince, mientras que la propuesta acogida por el Ecuador suponía una franja desmilitarizada de algo así como cuarenta kilómetros. El Perú se oponía a esta fórmula con el argumento de que ello implicaba el tener que desplazar poblaciones civiles peruanas.

El 20 de febrero ocurrió lo que se podía prever: cuatro helicópteros peruanos atacaron a las tropas ecuatorianas estacionadas en el área de Mayaycu, hecho que fue denunciado por la Cancillería a los representantes de los países amigos. Pocas horas después se produjo un nuevo ataque al puesto de Machinaza y allí desembarcaron cien soldados peruanos. El día 21 continuaron los combates. Un helicóptero peruano fue derribado y, de sus ocupantes, uno murió y 13 quedaron heridos. Este hecho enardeció los ánimos en Lima. En la misma fecha, el Gobierno del Perú emitió un comunicado en el cual decía que las fuerzas ecuatorianas continuaban “en el insano intento de afincarse” en la vertiente oriental de la Cordillera. Añadía que “Las Fuerzas Armadas tienen instrucciones precisas del Supremo Gobierno de eliminar toda infiltración que pueda detectarse en el lado peruano de la Cordillera del Cóndor. Que, de persistir, lo obligarían a considerar estos actos como hechos de guerra y a tomar la correspondiente acción en territorio ecuatoriano”.

Tan pronto como se conoció el comunicado amenazante se cursaron sendos cablegramas a los cuatro países amigos, señalando su atención “hacia la seriedad y profundidad” con que estaban comprometidos en el anuncio peruano “las más elementales relaciones interamericanas y, sobre todo, la respetabilidad” de esos mismos cuatro Estados. Se les exhortaba a actuar con la mayor diligencia frente a una amenaza que pretendía “ignorar todo el sistema jurídico en que se levanta la convivencia americana y una fórmula de paz solemnemente asumida ante los Cancilleres y Delegados de todo el continente”. Gracias a la iniciativa de los cuatro países, el 26 de febrero se iniciaron las reuniones entre jefes militares de Ecuador y Perú.

Importa señalar que a raíz del abatimiento del helicóptero peruano, antes citado, se generó una atmósfera tensa y de preocupación general en Lima. En el curso del conflicto, especialmente en los días más críticos, mantuve frecuente y cercano contacto con los Embajadores de Argentina, Brasil y Estados Unidos, para informarme de aspectos relevantes de la situación. La representación diplomática de Chile se comportó sistemáticamente elusiva, por razones políticas comprensibles. Su Encargado de Negocios se sirvió explicarme los motivos de esa conducta, poco tiempo después, al concluir sus funciones en el Perú. Con estos antecedentes, recuerdo el gesto amistoso del Embajador

Edwin Corr, de los Estados Unidos, quien al día siguiente del abatimiento del helicóptero fue a visitarme en mi residencia, con su invariable espíritu orientado a la superación del conflicto. Eran las ocho de la mañana cuando vino una de mis empleadas domésticas peruanas a darme la noticia en estos términos: “un señor que dice ser americano te busca, embajador”....Edwin me esperaba visiblemente preocupado en el salón principal de la residencia, porque creía que el incidente, sin duda grave, podía agudizarse y hasta abrir cauces a la generalización del conflicto si los soldados ecuatorianos, que habían tenido un desempeño ejemplar, caían en el señuelo de las provocaciones, ya que su estancia durante varias semanas en el entorno inhóspito de la selva, con la tensión de los combates intermitentes, podía producir presiones psicológicas comprometedoras. Conviene advertir que a raíz de la caída del helicóptero los altos mandos habrían dispuesto una operación de rastreo, por medio de helicópteros, sobre la zona del conflicto, con el inculcable propósito de provocar una reacción ecuatoriana que justificase la operación que sin duda tenían en mientes. Mantuve con Edwin Corr una extensa y muy útil conversación, que referí a las autoridades competentes de Quito. Es que nuestra Embajada conocía de la determinación y presión castrenses en el Perú para ampliar el conflicto, a lo que se habría opuesto el Presidente Belaunde. Las expresiones –que nunca se hicieron públicas– del Comandante General de la Fuerza Aérea Peruana, General Arias Grazziani, fueron terminantes al respecto. En sesión de gabinete, habría pedido “dos horas de acción” para “arrasar” a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y a los puntos estratégicos del Ecuador. Por éstas y otras consideraciones recomendé a Quito especial cautela para que nuestras fuerzas no cayeran en la trampa de las provocaciones militares peruanas, con graves secuelas para el Ecuador por la asimétrica confrontación de fuerzas en un conflicto generalizado.

El Secretario General de la Cancillería del Perú, Embajador Jorge Morelli, a quien conocí y traté en Quito como representante de su país, me llamó por teléfono en esos mismos días para preguntarme cómo nos estaban tratando a los diplomáticos ecuatorianos acreditados en Lima. Le respondí que no tenía ningún motivo de queja. Me solicitó transmitir esa percepción a la Cancillería del Ecuador. Reuní a mis colaboradores de la misión para examinar el sentido de tal indagación, pues si bien mantuve siempre con el Embajador Morelli una cordial

amistad me pareció que su pregunta conllevaba no sólo una preocupación personal sino una segunda intención. Algo ha ocurrido en Quito, que no conocemos todavía, les dije a mis colaboradores. Cuando me puse en contacto con Mario Alemán, nuestro Secretario General, a quien le referí los detalles de mi conversación con Jorge Morelli, me contó que se había producido una violación de fuero diplomático en la persona de una funcionaria de la Embajada del Perú en Quito debido a un abuso de autoridad de un policía de bajo rango.

Subió la temperatura de la atmósfera política en Lima al extremo de que se anunciaba en la prensa la realización de una manifestación popular que llegaría hasta la Embajada del Ecuador. Cuando se dijo que la encabezaría el señor Andrés Townsend Scurra, conocido líder del APRA, dudé del fundamento de tal versión, por la seriedad del personaje. De todos modos referí la información a nuestra Cancillería, con la salvedad que dejo anotada. El asunto fue puesto en conocimiento de los cuatro países amigos por la Cancillería, por razones de seguridad. Pero las cosas se dieron conforme a mi percepción. Hubo una pequeña concentración popular y las autoridades locales bloquearon los accesos a la Embajada con policías ubicados en las esquinas de esa zona. Unos pocos jóvenes rebasaron el cordón policial y al llegar frente al edificio de nuestras oficinas lanzaron cáscaras de plátanos, junto con el intencionado grito de ¡monos, monos....!, piropo que en el Perú nos dedican a todos los ecuatorianos y al cual correspondemos con otra cortesía de rango zoológico. Eso fue todo.

Los casos de emergencia no están exentos a veces de rasgos trágicos. Cuando más necesaria era la comunicación directa con la Cancillería de Quito se dañó la moderna máquina de que disponíamos para despachar mensajes cifrados. Debían enviarnos otra nueva en pocas horas. Me pareció prudente tomar medidas de precaución para el arribo de nuestro correo diplomático que portaría el dichoso aparato, porque si bien confiaba en la discreción de los funcionarios de Torre Tagle no dejaba de preocuparme el comportamiento aleatorio de origen castrense. Acudí a mi buen amigo el Embajador de España para pedirle que autorizara a su Ministro Consejero acompañarnos discretamente a recibir al funcionario que venía de Quito, porque yo necesitaba un testigo ante la potencial ocurrencia de algo inesperado. Juan Tena Ibarra no sólo que atendió mi solicitud sino que envió a su

colaborador en el automóvil de la Embajada de España. Nada anormal ocurrió en el aeropuerto, pero nunca está demás la virtud cardinal de la prudencia.

Habíamos dicho anteriormente que el 26 de febrero se iniciaron las reuniones entre jefes militares de los dos países, las cuales tuvieron lugar en las poblaciones fronterizas de Huaquillas y Aguas Verdes. Presidieron las delegaciones de Ecuador y Perú, respectivamente, los Vicealmirantes Raúl Sorroza Encalada y Jorge Du Bois Gervasi. Se escogió a Jefes de Marina porque esa arma no había intervenido en los combates y se suponía que sus representantes ostentarían ánimo más sereno y objetivo. En representación de los cuatro países amigos asistieron los señores General de División del Ejército del Brasil, Aldemar Da Costa Machado; Mayor General de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, William Masterson; General de Brigada del Ejército Argentino, Alfredo Sotera; y General de Brigada del Ejército de Chile, Manuel Barros Recabarren. Las deliberaciones, muy delicadas y complejas, habrían de durar hasta el 5 de marzo de 1981.

Las deliberaciones no concluyeron con un acuerdo de las partes sino con la emisión de sendas declaraciones unilaterales, por sus posiciones divergentes. El delegado ecuatoriano, entre otras cosas, solicitó que los cuatro países “adopten todas las medidas prácticas necesarias para precautelar el cese de fuego” y que “exciten al Perú para que cumpla, por su parte, con la separación de fuerzas del área del conflicto”. El Vicealmirante Sorroza dejó constancia de que nada de lo dicho en el documento, ni la ejecución del mismo, “prejuzgan sobre cuestiones de fondo del problema territorial existente entre los dos países y que el Ecuador, por ningún motivo, cede ninguno de sus legítimos derechos territoriales”. Reiteró al propio tiempo la vocación de paz del Ecuador y su afán de solucionar el conflicto territorial por medios pacíficos.

En todo caso el conflicto incentivó en el Perú un vigoroso impulso a la creación, consolidación y proyección de las fronteras vivas en la zona de la Cordillera del Cóndor, a la par que un sentimiento popular opuesto a las reivindicaciones amazónicas ecuatorianas. Por otra parte, estimuló un estrechamiento de los contactos con Bolivia y la normalización de las relaciones diplomáticas con Chile. Y fortaleció, por lo demás, la convicción nacional de la necesidad de la colocación de hitos para cerrar la frontera con el Ecuador. Dentro de este contexto recuer-

do la actitud del segundo vicepresidente del Perú, doctor Javier Alba Orlandini, luego de su retorno de Israel, a donde viajó, según versiones de la prensa limeña, a propósito de unas adquisiciones de aviones israelíes por parte del Ecuador. Interrogado por un periodista sobre su opinión respecto de la controversia territorial con el Ecuador, el alto funcionario expresó que sí existe un problema con nuestro país, pero que era un problema de albañilería. Esta bronca metáfora aludía obviamente a la colocación de hitos sobre la Cordillera del Cóndor. El asunto se remató cuando el embajador de Israel, invitado a una entrevista en la televisión, al ser interrogado sobre la venta de aviones al “enemigo del Perú”, respondió que “vender aviones es como vender zapatos” y que podrían comprarlos libremente en su país.

Una semana antes del trágico fallecimiento del Presidente Roldós, ocurrido el 24 de mayo de 1981, fui convocado por él para rendirle un informe verbal sobre el conflicto de Paquisha y mi percepción personal de los acontecimientos. Le proporcioné una minuciosa versión de los hechos y, a pedido mío, en determinado momento me sometí a su interrogatorio sobre varios aspectos relevantes del problema, porque Roldós, hombre de inteligencia aguda y de mirada enigmática, en los diálogos sustantivos gustaba de administrar prolongados silencios y ademanes de sagaz observación. Después de mi entrevista con el Presidente tuve otra con el Canciller Alfonso Barrera, mi buen amigo, a quien entregué después un extenso memorando sobre el asunto.

Como apostilla final en este tema tal vez convenga señalar que nuestro comportamiento se ciñó a las exigencias de la ortodoxia diplomática. Durante el conflicto valoramos como nunca la trascendencia de la palabra y del silencio, en el sentido de optar por uno de ellos según las circunstancias y en función del interés nacional. Fui objeto de constante asedio por parte de los medios de comunicación social, sobre todo en los momentos más críticos, en los cuales las arremetidas de la prensa escrita eran hostiles. Me abstuve de caer en el señuelo de la provocación y a veces de aislados denuestos, de procedencia popular. Mis contactos y gestiones los orienté exclusivamente por la vía diplomática. Dejo constancia de mi aprecio por la patriótica y abnegada cooperación que me brindaron todos los miembros de la Misión Diplomática a mi cargo durante los difíciles momentos que compartimos con motivo del conflicto fronterizo. Debo mencionar especialmente a

los Ministros Fernando Córdova Bossano y Marcelo Fernández de Córdova, así como al Consejero Leonardo Carrión. El grupo de los agregados castrenses estaba compuesto por el Comandante Hugo Unda Aguirre, de la Marina; el Coronel Waldo Santamaría, del Ejército; y el Coronel Raúl López, de la Fuerza Aérea.

ESFUERZOS DE DISTENSIÓN

El mismo día 5 de marzo, en que concluyeron las deliberaciones de los jefes militares en la frontera, se realizó en Lima la Segunda Reunión Extraordinaria de los Ministros de Energía de América Latina (OLADE), a la cual no asistió el titular de la cartera del Ecuador y a quien representé en dicho evento. Luego de la sesión inaugural hubo un saludo en palacio al Presidente Belaunde, del cual participé. Percibí que el mandatario quería hablar conmigo, al margen de la cortesía social. En efecto, en un determinado momento pudimos platicar solos mientras los ministros extranjeros dialogaban entre sí. En estos mismos momentos están firmando nuestros representantes militares el acuerdo de paz en la frontera, me comentó el Presidente. Y me reveló que un par de horas antes había recibido a un numeroso grupo de pobladores del norte del Perú, afectados por el conflicto con el Ecuador, ya que viven del intercambio comercial fronterizo. Esta gente está desesperada, añadió. Como ya se han entendido entre militares es hora de dialogar entre civiles, me expresó el Presidente: por eso deseo hacerle dos pedidos urgentes, embajador, ya que sabemos de su ascendiente en la Cancillería del Ecuador. Le contesté que yo estaba consciente de la naturaleza del problema y que pondría todo mi empeño al servicio del interés común de nuestros países. Le agradeceré gestionar la pronta reapertura de la frontera y poner de presente, al propio tiempo, la mutua conveniencia de iniciar los esfuerzos de distensión para normalizar nuestras relaciones, concluyó. A propósito del último tema señaló el Mandatario que sería deseable un diálogo urgente entre Galo Plaza y Fernando Schwalb, Embajador del Perú en Washington y Vicepresidente de su país, ya que ambos personajes son muy buenos amigos. Puntualizó, como dato complementario, que el Embajador del Ecuador en Washington, Lalo Crespo, es yerno de Galo Plaza. Le ofrecí, por cierto, tomar inmediato contacto con nuestra Cancillería y transmitirle sus iniciativas.

Pocos días después se reabrió la frontera ecuatoriano-peruana y se pusieron en marcha los pasos orientados a la distensión.

Lo curioso es que el primer día de la reapertura de la frontera ocurrió un hecho pintoresco. Algunos pobladores ecuatorianos, todavía bajo el efecto del trauma bélico, se alarmaron cuando divisaron una larga columna de vehículos que venía del lado peruano. Dieron la voz de alarma pensando que eran tanques de guerra. Se trataba de transportes de cemento destinado al Ecuador.

A comienzos de abril me llamó por teléfono el Embajador Jorge Morelli, Secretario General de Torre Tagle, para invitarme a almorzar en privado junto con Arturo García, ex – Canciller y ex – Embajador en Quito. Ambos habían estado poco antes con el Presidente Belaunde examinando la situación con el Ecuador. Te hemos invitado para conversar informalmente y decirte que tú eres el interlocutor válido para el Perú, ya que no tenemos este momento embajador en Quito, me dijo Jorge Morelli. Es que el representante peruano, por lo demás buen amigo mío, se había desgastado por el conflicto de Paquisha y estaba próximo a retornar a Lima. Me pidieron entonces la mayor colaboración posible en los esfuerzos de distensión que se proyectaban.

En esos mismos días recibí una invitación telefónica de Palacio para que le acompañara al Presidente de la República, junto con otros cuatro embajadores extranjeros, a la inauguración de un complejo pesquero en la zona de Pisco. El alcalde de esa ciudad, comunista militante, no profesaba simpatías al gobierno de turno. Pero se condujo con propiedad y organizó una sesión de cabildo abierto para recibir a sus huéspedes oficiales. La sesión tuvo lugar, pues, no dentro del recinto municipal sino al aire libre y de cara al pueblo. Me pareció que toda la población local copaba la plaza principal. Confieso que tenía la íntima curiosidad de apreciar la reacción del pueblo, en razón del reciente conflicto, cuando el Presidente Belaunde, en claro ademán político, me dio un abrazo luego de que el anunciador oficial nombraba al Embajador del Ecuador, inmediatamente después del Embajador de España, a quien le estrechó cortésmente la mano. La población aplaudió por igual a todos los embajadores. La conocida revista limeña “Caretas” glosó los aspectos relevantes de la ceremonia y, en una de las páginas centrales, donde se comenta lo más destacado del acontecer nacional bajo el título de “Mar de fondo”, dedicó una glosa ingeniosa a la invita-

ción al representante diplomático del Ecuador. Decía el comentario periodístico que, “como los ecuatorianos reclaman de Lima al norte, el Presidente Belaunde invitó al Embajador del Ecuador a Pisco, porque queda al sur...” Añadía que, hablando en serio, la invitación obedecía al hecho de que el Embajador Vasco estaba jugando un papel importante en los esfuerzos de distensión para normalizar las relaciones entre los dos países.

MUERTE DEL PRESIDENTE DEL ECUADOR

Pocas semanas después, concretamente el 24 de mayo, se produjo la trágica muerte del Presidente Jaime Roldós, en la frontera sur, después de la conclusión de una ceremonia realizada en el estadio Atahualpa de Quito para honrar la memoria de los caídos en el conflicto de Paquisha y galardonar a varios combatientes. Una vez concluido el acto patriótico, el Mandatario y su señora, junto con una pequeña comitiva, se dirigieron a la población de Zapotillo, cercana a la frontera con el Perú, para asistir a la conmemoración de los 159 años de la Batalla de Pichincha. El avión en que viajaban cayó a tierra y fallecieron todos sus ocupantes.

Era día domingo y, en consecuencia, los miembros de la Embajada en Lima empleábamos el tiempo de modo personal. Yo había ido con mi familia a ver una pieza de teatro y por esa causa ignoraba la ocurrencia del luctuoso suceso. Cuando retornamos a nuestra residencia, alrededor de las 18:30 horas, la encontramos sitiada por un abigarrado grupo de periodistas y camarógrafos de la televisión local e internacional. Para poder atenderlos adecuadamente les invité a pasar a los salones de la Embajada y, antes de entrar, me abordó un edecán de la Presidencia para comunicarme que el Presidente Belaunde vendría a visitarme después de 30 minutos. Le agradecí la cortesía y le pedí transmitirle al Presidente mi insinuación de que me concediera unos minutos adicionales para su visita. Necesitaba conocer informaciones procedentes de Quito para dialogar con los periodistas y, por cierto, con el Mandatario. Cuando llegó el Presidente Belaunde, acompañado del Canciller Arias Stella, dialogamos en el salón principal de la misión, en presencia de los periodistas. Al dirigirme las frases de circunstancia recordó su encuentro con Jaime Roldós en Santa Marta (Colombia) con



El Presidente del Perú y la señora de Belaunde y el Embajador del Ecuador y la señora de Vasco en la misa de honras, en la Catedral de Lima, por la muerte del Presidente Jaime Roldós.

oportunidad de una reciente reunión de presidentes bolivarianos. Conversamos brevemente sobre las expectativas de las relaciones ecuatoriano-peruanas y luego retornó al Palacio de Pizarro.

Después me visitó el Secretario General de la Cancillería, Embajador Jorge Morelli, en compañía del Director General de Protocolo. Una vez intercambiadas las expresiones convencionales, les pregunté si el Gobierno del Perú dispondría la realización de un acto religioso en memoria del fallecido Presidente del Ecuador. El Director de Protocolo recordó que se celebró una misa de honras en la iglesia de la Recoleta con oportunidad del fallecimiento del General De Gaulle. Sin entrar en precisiones sobre los personajes les manifesté que en nuestro caso considerábamos que el lugar indicado sería la Catedral Metropolitana, por razones políticas obvias. Jorge Morelli me respondió que referiría mi planteamiento al Presidente Belaunde y que me haría conocer su decisión al día siguiente. Así lo hizo en la mañana del lunes. Me comunicó que el Presidente había dispuesto que la misa de honras en memoria de Jaime Roldós se realizara en la Catedral el mismo día y a la misma hora que en el Ecuador, con asistencia del gabinete ministerial y del cuerpo diplomático. Este rito cristiano tuvo una solemnidad impactante, con el templo lleno en sus amplios espacios. En lugar del féretro, lucía imponente la Bandera Nacional del Ecuador en la parte superior del templo. Momento de expectación, no exento de matices emotivos, fue el que se produjo cuando el Director de Protocolo nos condujo a mi señora y a mí al lugar donde estaba la pareja presidencial, a pocos pasos de distancia, para darnos el abrazo de la paz. Una vez concluida la ceremonia religiosa, el Presidente Belaunde y su señora nos invitaron a mi señora y a mí a recibir, en la puerta principal de la Catedral, las expresiones de solidaridad de los asistentes. Todo lo que ocurría en ese magno escenario tenía una simbólica carga emocional porque todavía estaba fresco el recuerdo del reciente conflicto bélico entre Ecuador y Perú.

RECEPCIÓN POR EL DÍA NACIONAL DEL ECUADOR

Los pasos orientados a la distensión en las relaciones bilaterales iban por buen camino. Pero poco tiempo después ocurrió un hecho inesperado. Como se sabe, las fiestas nacionales de Ecuador y Perú se

celebran en fechas muy cercanas entre sí. Debido a que el conflicto de Paquisha había exacerbado la sensibilidad cívica de ambos pueblos y tomando en cuenta el reciente fallecimiento del Presidente Roldós, me pareció prudente ausentarme en esas fechas de Lima, con la anuencia de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Más todavía, la Cancillería había dispuesto que nuestras misiones diplomáticas no ofrecieran la tradicional recepción oficial ese año por el reciente luto nacional. Sin embargo, recibí inesperadamente la instrucción de que permaneciera en Lima para ofrecer la recepción del 10 de agosto, porque, a juicio de las autoridades de la Cancillería, habían evolucionado positivamente las condiciones políticas para ello. Así, pues, cursamos las invitaciones con antelación suficiente. El 28 de julio, día nacional del Perú, concurrí por la mañana al saludo del Cuerpo Diplomático al Gobierno y, por la tarde, a la sesión del Congreso Nacional. En el saludo protocolar percibí una inusual frialdad en el Presidente Belaunde. Y en la sesión solemne del Congreso ocurrió lo que era obvio: una vociferante manifestación de fervor cívico, con exclamaciones cargadas de patriotismo. A las 7 de la noche ofrecía un cóctel en su residencia el Secretario General de Torre Tagle, Embajador Jorge Morelli, para corresponder a atenciones recibidas del Cuerpo Diplomático. Cuando mi señora y yo lo saludamos a la entrada me condujo a un ambiente contiguo y me dijo que tenía que darme una noticia importante. Debido a que el Presidente de la República y el Canciller del Perú no han recibido el tradicional saludo de sus homólogos ecuatorianos por la fiesta nacional, me expresó, el presidente Belaunde ha dispuesto que ningún funcionario del gobierno asista a la recepción del 10 de agosto, en la Embajada del Ecuador. Sólo irá a saludarte el Director General de Protocolo de la Cancillería, concluyó. Estábamos, pues, ante un incidente diplomático por una omisión protocolar.

El 7 de agosto asistimos a una cena ofrecida por los embajadores del Grupo Andino al Presidente del Perú y la señora de Belaunde. El Mandatario me preguntó si yo había sido informado de su decisión relativa a la inasistencia de las autoridades peruanas a la recepción que ofreceríamos por el día nacional del Ecuador. Mi respuesta fue afirmativa, con el comentario adicional de que, como diplomático profesional que soy, entendía perfectamente la situación planteada. Con ademán amistoso, Belaunde me dijo que no me preocupara porque su re-

presentante personal, el edecán de palacio, iría el 10 de agosto al medio día a presentarme en su nombre el saludo protocolar de estilo, lo cual se cumplió rigurosamente.

En la noche del 10 de agosto llegaron puntualmente a la recepción los miembros del Cuerpo Diplomático y elementos representativos de la sociedad limeña. Contrariando la disposición oficial, aparecieron discreta y sucesivamente unos ministros de estado y varios embajadores de Torre Tagle. Jorge Morelli, con expresión de elegante complicidad, me dijo que esos personajes se le habían “escapado” y, luego, hicimos un amistoso brindis. No obstante los problemas iniciales, celebramos por todo lo alto el Día Nacional del Ecuador.

INVITACIÓN SUI GENERIS

Recibimos una invitación, todos los embajadores de los países limítrofes con el Perú, para almorzar con el Presidente Belaunde, a bordo del yate presidencial, frente a la cercana isla de San Lorenzo. Partimos rumbo a ese destino y cuando faltaba algo más de cien metros para llegar a tierra se nos dijo que, los que quisiéramos, podíamos acompañarle nadando al Presidente. Los demás, podían hacerlo en un pequeño bote. La elección del bote, obviamente, fue por consenso. Cuando arribamos a la isla, el Presidente ya nos esperaba en la playa, pues se trataba de un diestro nadador. Apenas pusimos pie en tierra, unos mozos diligentes pusieron en nuestras manos unas raquetas de tenis de playa. El Mandatario me pidió que lo acompañara en el juego y, del otro lado, se colocaron los embajadores de Brasil y Chile. Hicimos unos breves escarceos y la bola no retornaba del lado de nuestros adversarios. Mi colega brasileño, cuyo hobby preferido era el canto lírico, lucía ajeno a la competición deportiva, en tanto que el embajador chileno, erudito historiador, al parecer no había practicado tenis desde hacía mucho tiempo y compensaba sus carencias técnicas con unos lances acrobáticos, llenos de pundonor, para alcanzar la bola. Para equilibrar la partida, el embajador brasileño tomó mi lugar y yo pasé a auxiliar a mi amigo chileno, pues practico tenis desde hace varios años. Con dosis de buen humor, a ese peloteo informal la revista “Caretas” le puso pimienta política y relató que Perú y Brasil habían ganado a Chile y Ecuador.

Después de la breve permanencia en la playa volvimos a bordo. Fue un almuerzo absolutamente informal, como era obvio, en el cual la conversación se trocaba de pronto en amplia disertación presidencial sobre diversos temas de interés general. Cuando retornamos al puerto del Callao, de donde habíamos partido en horas de la mañana, Vasco Mariz, el embajador de Brasil que antes sirvió también en Ecuador, me pidió con dejo atónito que le explicara el sentido de la invitación, pues tenía muy poco tiempo en el Perú y no le encontraba mucha coherencia a lo que habíamos compartido en horas precedentes. Voy a aventurar una interpretación, le expresé en tono coloquial. Ocurre que hace no mucho tiempo un diputado de la oposición, en actitud díscola e incompatible con la dignidad de su representación, sugirió públicamente que Belaunde ya no estaba en condiciones mentales ni físicas para gobernar. Hoy el Mandatario ha refutado ese infundio con una convincente demostración de idoneidad en ambos campos, le dije a mi interlocutor, que concordó con mi apreciación. He ahí, pues, cómo la política exterior puede servir de instrumento de apoyo a la solución de entuertos en el espinoso campo de la política contingente.

VISITA A LA SELVA

Se celebró en Lima una reunión de representantes de los Estados Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, con sendas delegaciones de expertos vinculados con la materia. Al término de las deliberaciones, el Presidente Belaunde cursó una invitación a los embajadores respectivos y, en el caso del Ecuador, también al delegado embajador Teodoro Bustamante, para realizar una visita a la población de Pucallpa. Nos embarcamos en el avión presidencial y a mí me ubicaron junto al Canciller Arias Stella, cerca del Jefe de Estado.

A poco de iniciado el vuelo y cuando comentábamos temas de interés general, se me ocurrió hacer una glosa de carácter político, con base en las informaciones de primera página de la prensa limeña que teníamos a la vista. Dirigiéndome al Presidente Belaunde, le dije que el doctor Arias Stella acababa de hacerme conocer que su partido Acción Popular era una agrupación monolítica las veinticuatro horas del día, con excepción de la hora del alba. El Presidente festejó la broma de buen talante porque todos los periódicos aludían esa mañana a la con-

frontación interna entre Alba Orlandini y Manuel Ulloa, dos figuras importantes enfrentadas por posiciones de liderazgo partidario.

Cuando arribamos a Pucalpa, a orillas del río Ucayali, nos esperaba una cañonera de la Armada peruana, para un interesante recorrido fluvial. El Presidente Belaunde alternaba por cierto con todos sus invitados y se refería con entusiasmo al entorno geográfico que contemplábamos. Es que la selva, con su lujurioso entramado vegetal, deslumbra al espectador. En un determinado momento estuvimos el embajador Teodoro Bustamante y yo con el Jefe de Estado. Oteando el horizonte del caudaloso Ucayali, me dirigió esta expresión: “¿No le parece, Embajador, que ecuatorianos y peruanos deberíamos surcar juntos por las aguas de estos ríos majestuosos? Ustedes desaprovechan las ventajas de la navegación en los ríos amazónicos”. Esperemos que un día se den condiciones propicias para la superación definitiva de nuestras diferencias y para que nuestros pueblos puedan construir un futuro compartido, le respondí al Presidente.

La caravana oficial correspondía a los ademanes de salutación de los habitantes ribereños hasta que arribamos a un poblado al cual el Presidente dedicó una corta alocución mediante el uso de un megáfono. Los habitantes reclamaban, sin embargo, la presencia del Mandatario en tierra. Para atender a los requerimientos populares Belaunde decidió descender del navío, en compañía de varios de sus colaboradores más cercanos. Con el fin de cumplir su propósito, el Presidente y su séquito tenían que ascender por unos escalones precarios cavados en la orilla. Todos consiguieron, no sin dificultad, llegar a tierra, menos el Ministro de la Marina, quien dio un mal paso y empapó en lodo su impecable uniforme blanco. Cumplido ese acto político retornamos a Pucalpa para poner en práctica el programa oficial de atenciones locales.

EL CONSENSO

En su primer mensaje al Congreso Nacional, el 10 de agosto de 1981, el Presidente Osvaldo Hurtado Larrea propugnó la necesidad de promover un arreglo justo y definitivo de la controversia territorial con el Perú. Señaló la conveniencia de construir un consenso nacional sobre el tema mediante la auscultación de criterios de los sectores relevantes de la opinión pública del país. Invitó a los ecuatorianos a medi-

tar seriamente sobre “nuestra tragedia territorial” y anunció que propiciaría “un diálogo con todas las fuerzas políticas....”.

La Cancillería, con base en dicho pronunciamiento presidencial, procedió a realizar las consultas correspondientes, con la aclaración de que ello no significaba en modo alguno el abandono de anteriores posiciones jurídicas. Se organizaron consultas con representantes de partidos políticos, medios de comunicación social, prelados de la Iglesia Católica, voceros de diversos estamentos de la sociedad civil.

En ese contexto, el Mandatario realizó una visita al Brasil, a comienzos de 1982. Para su diálogo con su homólogo brasileño sobre la cuestión territorial, deseaba conocer si el Presidente del Perú ofrecería atisbos de flexibilidad respecto de su invariable posición tradicional sobre el tema. Recibí por tanto la instrucción de entrevistarme personalmente con el Presidente Belaunde, quien tuvo la gentileza de recibirme pocas horas después de mi solicitud de audiencia. La entrevista se desarrolló en un marco cortés y de mesura conceptual. Cuando le hice conocer al Mandatario la patriótica preocupación del Presidente Hurtado por establecer una nueva relación con el Perú y procurar un arreglo amistoso del diferendo, Belaunde me invitó a considerar una reflexión histórica. Contemplando un mapa que teníamos a la vista, me habló, entre otras cosas, de las pérdidas territoriales que había experimentado el Perú en el curso de su historia.

Son evidentes las diferencias existentes entre el Perú del incanato, del virreinato y del período republicano con el Perú actual, me dijo, en conclusión. Le manifesté, en respuesta, que también le invitaba, con las debidas consideraciones, a examinar las diferencias entre la superficie territorial del Ecuador actual y los términos de la Cédula de 1563, constitutiva de la Real Audiencia de Quito. En síntesis, como era previsible, se produjo la reafirmación de la tradicional e inamovible posición peruana, que le referí personalmente al Presidente Hurtado en un viaje expreso a Quito.

SENDERO LUMINOSO

En 1980, poco antes de la celebración de las elecciones generales, aparecieron perros muertos colgados en postes públicos con carteles en los que figuraban los nombres de líderes comunistas chinos. Y el 17 de

mayo, en la plaza principal de un pueblo de Ayacucho, un pequeño grupo armado quemó las urnas que debían utilizarse en los comicios del día siguiente. Sendero Luminoso inició así, con estos actos simbólicos, su “lucha armada”, que ese momento no concitó la atención pública, centrada en el proceso electoral. No faltaron voces de alerta, pero tanto el Presidente como el Ministro del Interior restaron importancia a los citados hechos y atribuyeron las acciones al abigeato. El Ministro del Interior, caballero distinguido y hombre de bien, fue nombrado poco tiempo después Embajador en la Santa Sede, donde habrá tenido oportunidad de arrepentirse por pecados de omisión.

Comenzó entonces de modo sistemático la “guerra popular del campo a la ciudad” de Sendero Luminoso, para establecer “zonas liberadas”. Sendero Luminoso se expandió gradualmente en el campo entre 1980 a 1982. Los militantes originarios procedían del campo o eran descendientes de campesinos, pero la dirigencia estaba integrada por elementos de los sectores profesionales e intelectuales; algunos de ellos incluso descendían de hacendados y por eso conocían la realidad del campo. El núcleo del liderazgo estaba en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, donde ejercía la cátedra Abimael Guzmán, su máximo dirigente, actualmente recluso en un presidio de Lima, condenado a cadena perpetua.

La situación de la población rural se complicó peligrosamente al estar ubicada entre dos fuegos: el terrorismo senderista, por una parte, y la acción de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva, a partir del asesinato del director de la filial ayacuchana del Instituto Nacional de Cultura, en diciembre de 1982. Prácticamente el poder civil se subordinó al poder militar en ese contexto y se comenzaron a aplicar doctrinas militares contrainsurgentes, que incluían “juicios sumarios” análogos a los “juicios populares” de Sendero Luminoso. Todo ello desembocó, por supuesto, en denuncias de los campesinos por violaciones de derechos humanos.

Los atentados en zonas urbanas creaban un temor generalizado. Una sola vez recibimos una amenaza directa, que por fortuna resultó sin consecuencias. En la mañana de un sábado, mi señora atendió la llamada telefónica de una persona que se identificó como militante senderista. Le dijo que habían colocado una bomba en nuestra residencia y que debíamos abandonarla de inmediato, porque su propósito no era

ocasionarnos daños personales. Ese momento jugábamos una partida de tenis, en la residencia de la misión diplomática norteamericana, los embajadores de Estados Unidos, Ecuador, Francia e Italia. Hago esta mención expresa porque las cuatro embajadas fueron amenazadas simultáneamente esa mañana por Sendero Luminoso. Cuando mi señora me informó telefónicamente de lo ocurrido me trasladé de inmediato a nuestra residencia y allí me enteré de la amenaza plural, por los elementos de la seguridad peruana que habían acudido a investigar los hechos. Para tranquilidad de todos, se trataba de lo que los militares denominan una operación de diversión. En este caso, mientras los efectivos de la seguridad acudieron a las cuatro embajadas, los atentados verdaderos ocurrieron en otros sitios de la ciudad, con lo cual desviaron la atención de las fuerzas especiales.

La acción demencial de Sendero Luminoso, que se extendió por varios lustros, fue una verdadera apología de la barbarie. Costó miles de vidas humanas y daños materiales superiores al monto de la deuda externa del Perú. El presidente Alberto Fujimori ofreció como uno de los temas de su campaña electoral la liquidación del fenómeno terrorista en el Perú y virtualmente cumplió ese objetivo en la década de los noventa.

UN INCIDENTE MAGNIFICADO

La trascendencia de un incidente fronterizo no siempre depende de sus características intrínsecas sino de la intencionalidad política de su manejo. Es lo que ocurrió con el incidente acaecido en 1983 en el sector del río Pastaza-Hito Checorta. En la mañana del sábado 22 de enero de ese año, fui citado por el Canciller encargado, Grados Bertorini, para recibir en su despacho la siguiente nota de protesta:

“Lima, 22 de enero de 1983.

Señor Embajador:

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia en relación con mi nota RE-GAB 001 del 19 del presente mes.

La investigación exhaustiva efectuada por las autoridades militares peruanas ha llegado a las conclusiones que constan en el comunicado oficial No. 2 de la Oficina de Relaciones Públicas del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, emitido el día de ayer y que se acompaña

a la presente. De los hechos debidamente verificados se desprende que una patrulla peruana de cinco hombres, de los cuales solamente dos llevaban armamento individual, fue sorprendida y atacada por fuerzas militares ecuatorianas mientras hacía tarea de limpieza en la trocha situada dentro del territorio peruano y paralela a la frontera, en el sector río Pastaza-Hito Checerta. Los cadáveres de los dos efectivos victimados fueron llevados a territorio ecuatoriano y posteriormente devueltos a las autoridades militares peruanas, correspondiendo a similar actitud del Perú en reciente ocasión.

El comunicado del Ministerio de Defensa del Ecuador y la nota del ilustrado gobierno de Vuestra Excelencia, NR1/83-GM/DGSN de 19 de enero, alteran completamente los hechos y llegan al extremo de culpar al Perú de un acto de agresión del cual, por el contrario, ha sido víctima con el agravante de haber sido muertos dos de sus defensores mientras cumplían labores rutinarias dentro de su propio territorio.

El Gobierno del Perú renueva su más enérgica protesta al Gobierno del Ecuador por la incursión armada de su territorio; por el alevé ataque a una patrulla peruana de trabajo; por la muerte de dos de sus miembros y por las falsas imputaciones que implican los documentos oficiales ecuatorianos y que constituyen otros tantos agravios que están severamente sancionados por la ley internacional.

Las circunstancias que rodean este repudiable incidente hacen pensar en que por parte del Ecuador ha habido premeditación y propósito de crear alarma internacional, coincidiendo –como ha ocurrido en anteriores ocasiones– con la cercana conmemoración de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 29 de enero de 1942.

Al Excelentísimo Señor

Miguel Antonio Vasco Vasco

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Ecuador”.

Lo que llama la atención en este caso no es sólo el tono de la comunicación sino el procedimiento empleado para su entrega. Cuando llegué a Torre Tagle me recibió personalmente el Secretario General, embajador Jorge Llosa, y fui conducido a un pequeño salón de espera junto al despacho del Canciller, para luego hacer antesala en un gran salón repleto de periodistas de los diversos medios de comunicación local e internacional. No era ciertamente un procedimiento diplomático ortodoxo. Pero eso no fue todo. Antes de mi arribo, el Presidente Belaunde había estado en el Ministerio, “donde sostuvo una sesión de trabajo, de treinta minutos, con el encargado de la Cancillería”, según

versión de prensa. Se dijo que el Mandatario había ido a supervisar los términos de la protesta diplomática. Era, sin duda, una inesperada desmesura, pues en el conflicto de Paquisha de enero de 1981 –el más grave incidente en 39 años desde la firma del Protocolo de Río– las cosas se manejaron con más discreción.

Toda la prensa le dio una dimensión desproporcionada al incidente del Pastaza. Basta decir que la conocida revista limeña “Caretas” publicó su edición No. 732, de 24 de enero, con una patética fotografía en su carátula, mediante la simbólica combinación de un fusil, un casco y las botas de un soldado; y, en gruesos caracteres, esta leyenda: “Emboscada ecuatoriana.– La anual provocación”. En páginas interiores, una extensa crónica, ilustrada con las fotografías del Presidente del Ecuador, del Canciller del Perú y del Embajador del Ecuador en Lima. En uno de los párrafos se lee, con deliberada exageración en el tiempo de mi espera para recibir la nota diplomática, lo siguiente: “Schwalb dio su visto bueno y Grados, luego de hacer esperar al embajador Miguel Vasco del Ecuador una media hora, en protocolar señal de frialdad, puso en manos del impecable diplomático las expresiones de nuestra indignación”.

Pocos meses después, el Presidente Osvaldo Hurtado, en visita que le hiciera en su despacho y ante algunas consideraciones que yo le formulara, me invitó a representarlo como su Embajador en Colombia. Me reemplazó en Lima el Embajador José Ayala Lasso.

EL CONFLICTO DEL ALTO CENEPa

El enfrentamiento bélico del Alto Cenepa, en 1995, abrió cauces al arreglo definitivo del problema territorial con el Perú, mediante un delicado y complejo proceso de negociaciones diplomáticas, que se extendió hasta 1998. Uno de los más cruentos conflictos armados hasta entonces registrados se inició con mutuas acusaciones de los dos países. Entre el 25 de enero y el 17 de febrero de 1995 se produjeron sangrientos combates en la escarpada zona de la Cordillera del Cóndor, con exitoso desempeño de las tropas ecuatorianas. La proclama de “ni un paso atrás”, del Presidente Sixto Durán Ballén, fue el referente cívico de los ecuatorianos en esa delicada emergencia nacional.

Los vicescancilleres de Ecuador y Perú, Marcelo Fernández de Córdoba y Eduardo Ponce Vivanco, respectivamente, suscribieron en

Brasilia la Declaración de Paz de Itamaraty, el 17 de febrero, que puso formalmente término al conflicto armado. En ese documento, las dos Partes convienen: 1) Aceptar complacidas el ofrecimiento de los Países Garantes para el envío de una Misión de Observadores, a fin de velar por la estricta aplicación de los compromisos asumidos; 2) Separar inmediatamente y simultáneamente, con la supervisión de los Países Garantes, todas las tropas de los dos países comprometidas en los enfrentamientos, para eliminar cualquier riesgo de reanudación de las hostilidades, con prioridad en el caso de las fuerzas que están en contacto directo, debiendo por tanto las tropas ecuatorianas concentrarse en el puesto de Coangos y las peruanas en el Puesto de Vigilancia No. 1; 3) Solicitar a la Misión de Observadores que recomiende a los Gobiernos del Ecuador y Perú establecer un área totalmente desmilitarizada, en cuya determinación se tengan debidamente en cuenta las garantías necesarias para la seguridad de las zonas vecinas de ambos países; 4) Iniciar de inmediato, como medida de fomento de confianza, una desmovilización gradual y recíproca, con la supervisión de los Países Garantes; 5) Iniciar conversaciones para encontrar una solución a los impases subsistentes, tan pronto se cumplan los puntos anteriores y se restablezca un clima de distensión y amistad entre los dos países.

El desarrollo del proceso de paz a nivel de Cancilleres se inició en enero de 1996. Galo Leoro Franco y Francisco Tudela examinaron en Lima, el 18 y 19 de enero, el cumplimiento de la citada Declaración de Paz. Ambos Cancilleres volvieron a reunirse, junto con los Representantes de los Países Garantes, los días 18 y 19 de junio en la ciudad de Buenos Aires, para continuar el proceso de definición de los procedimientos que se aplicarían durante las próximas conversaciones de Brasilia. Al término de la reunión emitieron un comunicado conjunto de prensa con los acuerdos concertados. En ese documento se dice, entre otras cosas, que “en caso de que surjan desacuerdos durante el curso de las conversaciones, los Países Garantes formularán evaluaciones, recomendaciones, sugerencias, exhortaciones y declaraciones, de acuerdo con el espíritu del Protocolo de Río de Janeiro de 1942”. Y añade que “De conformidad con la Declaración de los Países Garantes del 18 de junio de 1996 en Buenos Aires, esta cooperación y asistencia a las partes será prestada en el marco del referido Protocolo, con especial atención a lo previsto en sus artículos 7º. y 9º”. Se advierte, por supuesto,

que “la aceptación o no de las propuestas que hagan los Garantes quedará a la decisión de las Partes”.

Después se dieron varios pasos importantes en el curso de las negociaciones, concretados en sucesivas declaraciones, comunicados y acuerdos, como la presentación de una lista de “impases subsistentes” por Ecuador y Perú; la iniciación de conversaciones directas entre las Partes, con la participación de los cuatro garantes en caso de desacuerdos; y la conformación de comisiones negociadoras por ambos países.

Dada la complejidad de los temas se realizaron varias rondas de conversaciones en el transcurso de 1997. En enero de 1998 se aprobó en Río de Janeiro un cronograma de la paz y las comisiones intensificaron su actividad. Pero en el mes de agosto se presentó una situación muy delicada en la Cordillera del Cóndor entre las tropas localizadas peligrosamente a muy corta distancia entre sí. Ello incentivó la iniciación de contactos directos entre los mandatarios Mahuad y Fujimori y la instalación de una diplomacia de rango presidencial, una vez superada la tensión. Así se arribó a la firma del Acta Presidencial de Brasilia, el 26 de octubre de 1998, con la cooperación activa de los Países Garantes, que presentaron propuestas definitivas para el acuerdo entre las partes y en el último tramo asumieron virtualmente la función de árbitros. En Brasilia se suscribieron también varios acuerdos específicos, que dieron solución global y definitiva al diferendo territorial de los dos países: el Tratado de Comercio y Navegación; el Acuerdo Amplio Ecuatoriano-Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad; el Convenio de Aceleración y Profundización del Libre Comercio entre Ecuador y Perú; el Acuerdo de Constitución de la Comisión Binacional Ecuatoriano-Peruana sobre medidas de confianza mutua y seguridad; los acuerdos sobre el Canal de Zarumilla.

Como uno de los elementos constitutivos del Punto de Vista Vinculante de los Jefes de Estado de los Países Garantes del Protocolo de Río, el Gobierno del Perú suscribió un contrato de transferencia de propiedad privada de Tiwinza, a título gratuito, a favor del Gobierno del Ecuador. Se trata de un terreno de un kilómetro cuadrado de superficie, ubicado en la Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas. Según los términos de la escritura firmada ante notario público por el Embajador del Ecuador en Lima, dentro de ese terreno “el adquirente y los nacionales de éste no podrán portar ni conservar nin-

gún tipo de armas.....ni podrán tener efectivos policiales ni militares”. Por otra parte, “El adquirente podrá realizar actos conmemorativos...., los cuales deberán ser previamente coordinados con el transferente”, y los actos y las construcciones que puedan erigirse deberán enmarcarse dentro del espíritu de paz, amistad y comprensión mutuas. La aceptación de esta singular iniciativa de los garantes sólo cobra algún sentido en el marco de la simbología cívica del Ecuador y no creo que tenga algún efecto práctico.

Dieron cima al arreglo del antiguo y delicado problema territorial los presidentes Jamil Mahuad Witt y Alberto Fujimori, con sus respectivos cancilleres, José Ayala Lasso y Fernando de Trazegnies Granda, y un equipo binacional de negociadores. Cabe destacar el hecho de que el canciller Ayala Lasso, durante el proceso de negociaciones diplomáticas, realizó una intensa campaña dentro del país para mantener informados al respecto a los sectores relevantes de la sociedad civil. El arreglo final del diferendo, allende la óptica tradicional sobre el tema, privilegió el valor inestimable de la paz, para abrir un nuevo capítulo histórico que se oriente a la construcción de un futuro compartido entre Ecuador y Perú. La nueva relación ecuatoriano-peruana ya está dando frutos positivos para ambos países. Están pendientes de ejecución algunos aspectos prácticos de los acuerdos de Brasilia que atañen a los intereses del Ecuador.

LA PROBLEMÁTICA COLOMBIANA

Las relaciones internacionales adquieren especial relevancia en el ámbito de las vinculaciones entre países vecinos. Por eso mi traslado del Perú a Colombia me ofrecía expectativas profesionales interesantes. En setiembre de 1983 arribé a Bogotá y presenté mis cartas credenciales al Presidente Belisario Betancur, quien accedió al poder el año anterior. Betancur había emprendido una política de pacificación del país; a pesar de la resistencia de determinados sectores sociales y de las fuerzas armadas, abrió un diálogo con las guerrillas e inició un proceso de negociación. En el diálogo oficial que mantuvimos, en el marco de la ceremonia protocolar de estilo, abordamos brevemente temas de interés bilateral, con énfasis en la relación histórica de ambas naciones y los aspectos esenciales de la cooperación actual.

El país estaba acosado por dos fenómenos conexos que hasta ahora lo afligen: la violencia guerrillera y el narcotráfico. Bien se conoce que la violencia es un flagelo que Colombia soporta a partir del “bogotazo”, o sea de la conmoción socio-política producida por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato presidencial liberal que se presumía iba a acceder al poder en las elecciones de 1946 y que conservaba su opción para los comicios venideros. Ese trágico acontecimiento ocurrió el 9 de abril de 1948 en circunstancias en que estaba reunida la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, en el gobierno de Mariano Ospina Pérez.

Como se trata de un capítulo importante de la historia contemporánea de Colombia, tal vez convenga hacer algunas precisiones al respecto. Gaitán era un abogado radical con varios lustros de trayectoria política. A raíz de la crisis de 1931-1932, a consecuencia de la depresión mundial de la época, él creó un movimiento de protesta denominado Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (UNIR), que se plegó al liberalismo en 1935. Gaitán fue Alcalde de Bogotá y sucesivamente Ministro de Educación y Ministro del Trabajo, posiciones en las cuales conquistó prosélitos. En las elecciones presidenciales de 1946, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo los liberales presentaron dos candidatos: Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay. Gaitán recibió también un aparente apoyo de los conservadores “laureanistas” (partidarios del líder Laureano Gómez), que a la postre resultó ser una maniobra política, pues el triunfo final correspondió al candidato conservador Mariano Ospina Pérez. El presidente Ospina integró un gabinete de Unión Nacional, con participación de conservadores y liberales, que no satisfizo ni a propios ni extraños. En consecuencia, la primera fase (1946-48) de lo que se denominaría “la violencia” se inició en los departamentos de Boyacá y Santander, por la disputa de prebendas políticas.

Gaitán captó el liderazgo del Partido Liberal después de los comicios presidenciales de 1946. Desde entonces se sintonizó con el estado anímico de su pueblo y supo atraer el respaldo de las masas con base en una oratoria fogosa y eficaz. El ambiente político general se caracterizaba por crudelísimas confrontaciones entre liberales y conservadores: unos y otros contribuyeron a desestabilizar el orden público. El temperamental y extremado líder conservador Laureano Gómez llegó a advertir que su país estaba al borde de una guerra civil. La atmósfera política colombiana explotó cuando se celebraba en Bogotá la IX Conferencia Internacional Americana.

Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en una céntrica calle de la ciudad, el 9 de abril de 1948, y su muerte suscitó la ira popular, que se expresó en levantamientos espontáneos en la capital y en varias ciudades del país. La multitud asaltó y saqueó en Bogotá centros comerciales, iglesias, conventos, el periódico conservador “El Siglo”, etc., pero respetó a las embajadas extranjeras. No se han aclarado las razones del asesinato y la identificación del homicida tampoco arrojó luz sobre sus eventuales conexiones. En todo caso los estragos materiales del “bogotazo” fueron enormes.

La opinión pública nacional se había acostumbrado a convivir por varios lustros con una situación ambigua y violenta de “ni guerra, ni paz”, hasta que se percató que el fenómeno había tomado dimensiones preocupantes en términos de recrudecimiento de la violencia guerrillera, expansión de los sembradíos de coca e incremento del desplazamiento forzado de campesinos. En el escenario de los alzados en armas actuaban el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), El Ejército Popular de Liberación (EPL), grupo maoísta menos numeroso que las FARC, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a raíz de la frustración de las expectativas generadas por el Frente Nacional. El M-19 se creó como reacción al presunto fraude electoral en los comicios de 1970 y se presentaba como el brazo armado de la ANAPO, formada por el general Rojas Pini-lla en 1961. El M-19 alcanzó notoriedad internacional por dos actos audaces: la toma de la embajada dominicana, en 1980, con la retención de un grupo de embajadores como rehenes, y la sustracción de 5.000 fusiles de un arsenal del ejército, para desacreditarlo. El ELN es un grupo castrista fundado en Cuba en 1963-64 y cimentado en la doctrina del foquismo, que difundiera el Che Guevara. Las FARC, del guerrillero Manuel Marulanda (Tirofijo), se fundaron a mediados de la década de los sesenta y constituyen el grupo subversivo más poderoso. Años después se integrarían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como una fuerza contrainsurgente propiciada por el Estado.

El complejo problema se había tornado en un factor de perturbación de la institucionalidad democrática, que estaba afectando a los diversos estamentos de la sociedad colombiana. El presidente Belisario Betancur, en un intento plausible por encontrar una solución pacífica a la crisis en el marco de la ley, promulgó un decreto de amnistía, en 1984, por el cual los insurrectos podían deponer sus armas y reinsertarse en la sociedad civil. En simbólica ceremonia, centenares de palomas cruzaron por el cielo bogotano y las campanas de los templos de la ciudad tañeron con aire festivo por la paz nacional. Pero solamente el M-19 respondió positivamente al ademán pacifista de Betancur y tiempo después llegó a tener hasta legisladores en su actividad cívica. La actitud del M-19, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. En efecto, el médico Toledo Plata, segundo en la nomenclatura jerárquica del movimiento, fue asesinado en la puerta de su casa y en presencia de su esposa, porque algunos coidearios fundamentalistas lo consideraron re-

formista y no revolucionario al haberse plegado al decreto de amnistía. Este hecho brutal ocurrió el 10 de agosto de 1984, y lo recuerdo bien porque el presidente Betancur y su gabinete no pudieron estar presentes en la recepción diplomática que ofrecimos en la Embajada por el Día Nacional del Ecuador.

Cabe destacar también que, en noviembre de 1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. El contraataque ordenado por el Ministro de Guerra causó numerosos muertos, entre ellos más de la mitad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Este hecho tuvo un gran impacto nacional y la conducta oficial generó controversias.

En todo caso, los plausibles esfuerzos de paz del Presidente Betancur no alcanzaron los objetivos previstos y el país siguió acosado por guerrilleros y narcotraficantes. El gobierno de Virgilio Barco, instalado en 1986, no ofrecía expectativas optimistas para un acuerdo negociado y duradero con la guerrilla, que aparecía en actitud populista como defensora de minorías étnicas, de los campesinos y de los pobres urbanos en las ciudades industriales, buscando legitimidad a su lucha. Los procesos de paz continuaban, pues, encontrando serias dificultades. En 1987 se apreciaba claramente que los propugnadores de la violencia eran los terroristas de la droga. Un acuerdo negociado con el M-19, en 1989, abrió espacio a la esperanza de una conclusión del conflicto, pero no ocurrió así en la práctica. Barco distinguía entre la violencia de la guerrilla, que él juzgaba negociable, y la de los terroristas de la droga, que él consideraba no negociable. Las mafias representaban una amenaza para la consolidación de la institucionalidad democrática. La opinión pública abogaba por el término de la violencia y la delincuencia generalizadas. El gobierno intensificó entonces su lucha contra el incremento de los sembradíos de coca y los campos de instrucción de los paramilitares al servicio de los terroristas de la droga. La mafia de la droga respondió con el asesinato de Luis Carlos Galán, de quien se decía que sería el candidato con mejores opciones en las elecciones presidenciales de 1990, año en el cual la extrema derecha mató al candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, y a Carlos Pizarro, ex-líder del M-19. El asesinato de Galán abrió paso a la victoria de César Gaviria Trujillo, su coideario.

Algunos años después, el presidente Andrés Pastrana puso en ejecución un plan estratégico multidisciplinario para enfrentar a la vio-

lencia guerrillera y al narcotráfico. Pastrana, luego de asistir a la Asamblea General de la ONU en setiembre de 1999, se trasladó en visita oficial a Washington para presentar a su homólogo norteamericano, Bill Clinton, el denominado “Plan Colombia”, cuya implantación estaba presupuestada en 7.500 millones de dólares, financiados con el esfuerzo interno y la cooperación internacional: Colombia cubriría 4.000 millones y el resto básicamente Estados Unidos. El mandatario colombiano fue explícito y rotundo al expresar que no admitiría ningún intento de injerencia foránea en los asuntos internos de su país, pero consignó su alto aprecio por la cooperación internacional. “Ya no son tiempos de intervención, son tiempos de cooperación”, dijo Pastrana.

Se habían desplegado esfuerzos anteriores orientados a instalar la paz en el sangriento escenario de violencia fratricida que azota a nuestro vecino del norte, pero ciertamente el citado Plan aparece como el proyecto orgánico de mayor aliento planteado por un gobierno. Fue la administración de Pastrana la que, desde agosto de 1998, enrumbó los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil hacia la construcción de la paz como una prioridad nacional, incitando así a los grupos armados a involucrarse en el esquema de una salida negociada al conflicto armado, con miras a promover cambios estructurales que condujeran al mejoramiento de la vida de la población en su conjunto. El objetivo central del Plan Colombia se orienta, pues, a la consecución de una paz estable y sostenible, sobre la base de cuatro componentes: 1) recuperación económica y social; 2) proceso de negociación del conflicto armado; 3) estrategia antinarcóticos; y, 4) fortalecimiento institucional y desarrollo social. Dichos componentes convergen en el propósito esencial de prevenir las principales causas de la violencia y generar condiciones para consolidar la paz.

La negociación política del conflicto armado es, sin duda, un elemento esencial para el objetivo final del Plan Colombia de lograr la paz, generando acuerdos con los grupos armados que permitan la superación de las causas que alimentan la violencia en el país. El proceso de negociación, en esencia con las FARC, abriría cauces a la reconciliación y al diálogo. Desde esa perspectiva, el gobierno creó una zona de distensión en el área específica del territorio nacional, con una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados, para facilitar la negociación con este grupo armado. Del mismo modo, con el ELN se acordó el establecimiento de una “zona de encuentro”. Pero la visión optimista del go-

bierno no se reflejó en la realidad porque las FARC no flexibilizaron su actitud política y más bien, con un doble discurso, consolidaron posiciones en el enorme territorio que les fue entregado, al extremo de que en el dilatado proceso de negociaciones por momentos parecía que manejaban las diversas iniciativas.

La posición oficial del Ecuador frente al Plan Colombia figuró en esos momentos en la Declaración Conjunta suscrita por los presidentes Gustavo Noboa Bejarano y Andrés Pastrana, el 24 de agosto del 2000, con oportunidad de la visita del mandatario ecuatoriano a Bogotá. Dice el párrafo pertinente: “El Presidente Gustavo Noboa Bejarano renovó su decidido apoyo al proceso de paz y reconciliación nacional de Colombia y a los esfuerzos del Presidente Pastrana y del pueblo colombiano para alcanzar una paz firme y duradera, así como a los planes de desarrollo social y económico y de fortalecimiento institucional que el Gobierno colombiano está promoviendo.....Destacó que los problemas que enfrenta Colombia deben ser resueltos sobre la base del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados”. Adicionalmente condenó a quienes han desfigurado el escenario en el que se debate Colombia con el repulsivo negocio de la elaboración y tráfico ilegal de estupefacientes, “crímenes contra los cuales mi país no dejará de luchar, fiel a los compromisos internacionales que ha adquirido”. En ese contexto se han emitido opiniones favorables a la adopción de una conducta de neutralidad ecuatoriana frente al conflicto de nuestro vecino del norte. Conviene aclarar que esta posición carece de sustento jurídico, puesto que la neutralidad procede sólo en tratándose de confrontaciones entre sujetos de derecho internacional, o sea entre Estados, y no entre un Estado y un grupo rebelde.

El énfasis puesto en localizar las acciones en territorio colombiano determinó que no se tomaran en cuenta los efectos del Plan Colombia en los países vecinos. Por eso la Administración Bush estructuró la denominada Iniciativa Andina como un instrumento complementario destinado a cubrir ese vacío, mediante la provisión de recursos necesarios. Los Estados de la subregión, por su parte, han reiterado su voluntad concordante en el sentido de adoptar políticas preventivas para el combate al narcotráfico, a la luz de compromisos universales y regionales vigentes sobre la materia. El Plan Colombia irradia inexorablemente su impacto hacia los países vecinos, en especial al Ecuador, por su contigüidad con el teatro de operaciones. Es que la decisión de Pastra-



El Embajador Miguel A. Vasco presenta las cartas credenciales al Presidente de Colombia, Belisario Betancourt.
Observa la Subsecretaria de Relaciones Exteriores.

na de conceder esa enorme extensión territorial a las FARC, como zona de distensión, las ha colocado virtualmente como limítrofes con el Ecuador. Desde entonces tuve la impresión de que ese fue un paso táctico dentro de una estrategia global, para endosarle a nuestro país un papel específico en el mecanismo del yunque y el martillo para la contención de los alzados en armas en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana, tarea que le corresponde a la fuerza armada de Colombia. Desde esa perspectiva, no hay duda de que la posición oficial del Ecuador ha sido ambigua, de reacciones coyunturales y no de políticas de estado, lo cual ha determinado que esté soportando en varios aspectos el peso oneroso de un conflicto foráneo. Sin menoscabo del cuidadoso trato que requiere el normal cultivo de relaciones con Colombia y Estados Unidos, los dos mayores socios comerciales del Ecuador, nuestros gobiernos de turno debieron haber sido claros y explícitos en la fijación de las reglas de juego y la definición de las responsabilidades internacionales pertinentes de los actores del Plan Colombia, con adecuadas compensaciones, por los efectos negativos que sus acciones irradian hacia nuestro país, obligado a asumir tareas internas de elevado costo en guarda de su seguridad, como la movilización de varios miles de soldados a la zona fronteriza, la atención a una numerosa leva de desplazados y refugiados colombianos, etc.

Ante el fracaso de la estrategia de Pastrana, su sucesor, Alvaro Uribe, planteó en su plataforma electoral una nueva actitud de mano dura con los violentos y alcanzó un abrumador respaldo popular, que lo condujo al poder. Sin abdicar de la firmeza prometida, el mandatario colombiano no excluyó la vía del diálogo y la negociación, tanto que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el marco de esa estrategia, declararon el cese unilateral de hostilidades. Pero los otros grupos, especialmente las FARC, siguen en su posición inflexible. La conducta belicista del régimen de Uribe calza perfectamente con la de Bush, quien ha impuesto en el mundo y al margen de los organismos internacionales el uso discrecional de la fuerza. El Presidente Uribe continúa inexorable en su combate frontal a la violencia guerrillera y a la mafia del narcotráfico, en clara sintonía con el deseo mayoritario de su pueblo, al extremo de que se fortaleció la tendencia a su reelección en los comicios del 2006. Probablemente Uribe desea negociar con la guerrilla, pero desde una posición de fuerza. En conexión con estas acciones de gobierno, se anunció en los primeros meses del 2004

la ejecución del Plan Patriota, que tiene una motivación esencialmente belicista y es prácticamente la fase bélica del Plan Colombia. Su aplicación incrementó las acciones bélicas entre las fuerzas regulares del Estado colombiano y los elementos de las FARC en la región fronteriza con el Ecuador, al extremo de que, a comienzos del 2006, se produjeron incidentes que comprometieron la soberanía de nuestro espacio territorial y la normalidad de las relaciones bilaterales. Afortunadamente prevaleció la sensatez en el tratamiento del tema y se superaron los problemas por la vía del diálogo diplomático, en una atmósfera amistosa y de respeto mutuo. Sin embargo, por la dinámica del conflicto interno de Colombia, se repetirán los enfrentamientos entre soldados de ese país y los grupos irregulares en la zona fronteriza con el Ecuador, que esperemos no afecten en lo futuro a nuestra soberanía, con las consiguientes implicaciones de orden diplomático, pues atañe al interés recíproco de ambas naciones el mantenimiento de normales relaciones de amistad y cooperación. Conviene que ambos gobiernos, sin mengua de la naturaleza del problema colombiano, desplieguen esfuerzos convergentes para fomentar las medidas de confianza y estimular los programas de desarrollo económico y social en los sectores deprimidos del ámbito fronterizo, que son los más vulnerables al acoso del narcotráfico y la violencia guerrillera. Estas medidas de solidaridad y cooperación se han de entender naturalmente en un marco de respeto mutuo y de dignidad soberana.

UNA REUNIÓN INESPERADA

Poco tiempo después de la inauguración del gobierno del Presidente León Febres Cordero, en 1984, llegó a Bogotá el Ministro de Industrias y Comercio, economista Xavier Neira, acompañado de una nutrida delegación de exportadores madereros del Ecuador, para incentivar el acceso de sus productos al mercado colombiano. La información pertinente se había centralizado en el escritorio del Consejero Comercial de la Embajada, dependiente de aquella cartera de estado. Yo carecía de precisiones oficiales al respecto. Era un sábado de tarde y el funcionario no había conseguido ningún contacto local compatible con el rango del visitante, quien se hallaba ya en Bogotá desde hacía varias horas. Cumplí con la cortesía de visitarle al Ministro en el hotel

donde se hospedaba y durante la corta conversación que mantuvimos le hice saber que me había llegado ya la disposición oficial de mi traslado a Quito. Me solicitó que gestionara y obtuviera una audiencia con el Presidente Betancur en la mañana del día lunes, ya que era portador de un mensaje escrito del mandatario ecuatoriano. Le ofrecí desplegar los esfuerzos necesarios, a pesar de las circunstancias poco propicias, pues bien se conoce que la administración pública no funciona durante el fin de semana. Me puse en contacto telefónico con un alto funcionario de la presidencia, en las primeras horas de la noche, y le solicité transmitir mi pedido al Presidente Betancur, con las excusas correspondientes, por tratarse de un procedimiento diplomático inusual. Al día siguiente recibí la respuesta afirmativa, con la indicación de que en la mañana del lunes el mandatario colombiano abandonaría por momentos una sesión de gabinete ministerial para recibirnos. Según lo convenido, estuvimos a las nueve en punto de la mañana del lunes el Ministro y yo. Luego de un breve intercambio de frases de circunstancia y de recibir el mensaje escrito de su homólogo ecuatoriano, Betancur le dijo al Ministro Neira: el Embajador Vasco conoce de algunas de mis locuras y por eso les invito a compartir una de ellas; les invito a almorzar hoy en palacio, donde estarán presentes los pesos pesados de la política colombiana y, entre ellos, tal vez el próximo presidente de Colombia. Estaba aludiendo implícitamente al Senador Luis Carlos Galán, quien años después sería asesinado por la mafia del narcotráfico por su lucha frontal contra ese flagelo, en el curso de la campaña presidencial. Conviene recordar que en los comicios de 1982, en los cuales resultó triunfador, Betancur derrotó a sus adversarios Alfonso López Michelsen y Luis Carlos Galán.

El Ministro y yo asistimos, por cierto, al almuerzo presidencial, en el cual alternamos con varios líderes políticos; y, lo más importante de todo, el alto funcionario pudo dialogar con el primer mandatario sobre el tema que motivó su breve visita a Bogotá.

CONTADORA Y EL GRUPO DE RÍO

El Presidente Belisario Betancur fue el gestor y propulsor de una plausible iniciativa orientada a propiciar la búsqueda de una salida negociada a la grave crisis centroamericana, por falta de una adecuada

acción de la OEA, a la que realmente correspondía el problema. Centroamérica estaba asolada por una prolongada guerra fratricida. Colombia, México, Panamá y Venezuela conformaron entonces (1984) el Grupo de Contadora para articular mecanismos de mediación en la crisis. A estos países se adhirieron Argentina, Brasil, Perú y Uruguay como Grupo de Apoyo. Ecuador consignó su apoyo político a la gestión del Grupo de Contadora en pro de la paz de Centroamérica. En el caso de la OEA cabe rescatar una frase de su primer Secretario General: “La Organización es imperfecta –afirmó Alberto Lleras Camargo en los albores de la OEA– pero no porque haya invadido esferas que no le corresponden, sino porque no ha ocupado el territorio que le fue expresamente asignado”.

Los cancilleres de los citados ocho Estados, reunidos en Río de Janeiro, decidieron el 18 de diciembre de 1986 dar a sus encuentros “el carácter de un mecanismo permanente de consulta y concertación política”. Así quedó establecido el denominado “Grupo de Río”, sin funciones permanentes, sin estatutos ni agendas ni reglamentos. No obstante su informalidad, se ha convertido en el principal foro político de los Estados miembros y un interlocutor válido en el concierto internacional.

Según la Declaración del 18 de diciembre de 1986, el Grupo de Río tiene los siguientes objetivos: ampliar y sistematizar la cooperación política entre los gobiernos; examinar las cuestiones internacionales de especial interés para nuestros gobiernos y concertar posiciones comunes frente a las mismas particularmente en los foros internacionales; promover el mejor funcionamiento y la coordinación de los organismos latinoamericanos de cooperación e integración; propiciar soluciones propias a los problemas y conflictos que afectan a la región; impulsar los procesos de cooperación e integración en América Latina. Como se conoce, Ecuador forma parte del Grupo de Río desde hace algunos años.

VISITA DE PRESIDENTES BOLIVARIANOS

Entre los días 17 y 18 de diciembre de 1983, los Mandatarios Bolivarianos se reunieron en Colombia y visitaron Santa Marta, Cartagena de Indias y el Puente de Boyacá, como un homenaje de los gobiernos y pueblos de la región al Libertador Simón Bolívar, en el bicente-

nario de su natalicio. La delegación oficial del Ecuador estuvo encabezada por el Presidente Osvaldo Hurtado Larrea, quien tuvo la iniciativa, en el curso de las deliberaciones con sus homólogos, de promover un respaldo político a las gestiones del Grupo de Contadora en el marco de los esfuerzos de pacificación de Centroamérica.

Fue un encuentro positivo de los gobernantes, en el marco del ideario bolivariano, que sirvió además para tratar temas actuales de interés común. Los actos conmemorativos tuvieron una amplia difusión en los medios de comunicación social. Por la situación de inseguridad prevaleciente en el país, el transporte de los Mandatarios en helicópteros militares estuvo rodeado de especiales medidas de seguridad y precaución. El vuelo de los aparatos comprendía la ruta de escenarios históricos donde se libraron batallas de la gesta emancipadora.

En todo caso fue una experiencia interesante e ilustrativa para quienes conformábamos las delegaciones oficiales.

Conviene recordar también que, días antes, tuvo lugar en Bogotá, entre los días 7 y 8 diciembre de 1983, la Segunda Reunión de Cancilleres del Tratado de Cooperación Amazónica, con una agenda que mostraba progresos en la marcha del sistema.

TOMA DE EMBAJADAS

Cuando arribamos a Bogotá todavía estaba fresco el recuerdo de la toma de la embajada de la República Dominicana por los guerrilleros del M-19. En todo caso había un temor no disimulado entre los diplomáticos respecto a la hipotética repetición de un hecho análogo. Precisamente cuando realicé la habitual visita inicial de cortesía a los jefes de misión, la Embajadora de México me sugirió que tomara prudentes medidas de seguridad en nuestra misión diplomática. En mi primera visita al Nuncio Apostólico recordé que él estuvo entre los rehenes que iniciaron su calvario el 27 de febrero de 1980, día nacional de la República Dominicana, hasta su liberación después de 61 días de cautiverio. El Embajador de Estados Unidos, Diego Asencio, dejó un testimonio vívido de su experiencia en ese dramático episodio, en el libro titulado “Terror en la Embajada”, que escribió junto con su esposa Nancy.

El relato del Embajador Asencio, estadounidense de ascendencia española, es muy interesante e ilustrativo. Cuenta que el asalto a la em-

bajada dominicana comenzó una vez que se habían retirado de la recepción diplomática los representantes de los países del bloque soviético. El Comandante Uno (Rosenberg Pabón), quien dirigió la operación, congregó de inmediato a los rehenes y les dijo que les utilizaría para exigir el canje de 311 presos políticos, entre ellos varios altos jefes del M-19; el pago de un rescate y la publicación en el mundo entero de las acusaciones del movimiento contra el gobierno. El grupo de rehenes se componía de 16 embajadores, varios encargados de negocios, cónsules generales y esposas de funcionarios de todos los niveles, en un número superior a cincuenta. Por insinuación del propio Comandante Uno se constituyó un grupo de negociadores, integrado por el Nuncio Angelo Acerbi; el Embajador de México, Ricardo Galán Méndez; el Embajador de Venezuela, Virgilio Lovera; y el Embajador Diego Asencio, de los Estados Unidos. Las complicadas y tediosas negociaciones con las autoridades locales; las diversas reacciones de los personajes envueltos en esa tragedia humana; su angustia existencial y sus temores frente a la incertidumbre, ocupan las páginas del libro testimonial de Diego Asencio. Años después, cuando representé al Ecuador en la Organización de Estados Americanos, conocí en Washington al Embajador Asencio, quien me obsequió un ejemplar de su libro y me hizo algunas precisiones sobre el citado caso.

Cuando tuve la oportunidad de tratar a Monseñor Acerbi, no obstante su serena conducta vaticana, me dejó la impresión de que sí le había afectado psicológicamente el drama vivido en la embajada dominicana. Durante mi estancia en Bogotá él convocó una sola vez al Cuerpo Diplomático en la Nunciatura Apostólica, a pedido del representante diplomático de un país europeo. La reunión tenía por objeto considerar la reducción del tamaño de la clásica bandeja de plata que el Cuerpo Diplomático entrega a los jefes de misión que se ausentan al término de sus funciones. Eso era todo, con un dejo de anécdota insólita..... En efecto, el argumento expuesto por el autor de la iniciativa era que había subido mucho el precio de las bandejas, importadas de México o Perú, por las oscilaciones de la cotización de la plata en el mercado internacional. Este episodio confirmó mi percepción de que la generosidad es a veces inversamente proporcional a la dimensión del patrimonio.

Un día circuló la versión de que un grupo de guerrilleros se había tomado la Embajada del Ecuador en Bogotá. El rumor era la distor-

sión de un hecho cierto. En efecto, el 18 de octubre de 1983, el Consulado honorario en la ciudad de Pereira fue ocupado por un grupo de quince hombres y dos mujeres, miembros del M-19, para llamar la atención del gobierno de Colombia en su condición de amnistiados y ex – guerrilleros. Ese simbólico ademán político era un mecanismo de presión al gobierno para ir a la suscripción de un compromiso solemne que les permitiera la efectiva reincorporación a la sociedad civil, de acuerdo con la Ley de Amnistía. El representante consular, de nacionalidad colombiana, me llamó aterrado por teléfono para pedirme instrucciones, pues para él era una experiencia sin precedentes. Le recomendé conducirse con serenidad y evitar cualquier tipo de fricción o conflicto. Como se trata de compatriotas suyos, le dije, atiéndalos de modo satisfactorio.

Los guerrilleros permanecieron una semana en el local del Consulado. Hacia las diez de la noche del sábado me llamó por teléfono el cabecilla del grupo. Se identificó con un apellido que sin duda no era el suyo. Me manifestó que todos estaban profundamente agradecidos por las atenciones recibidas. No podíamos esperar otra cosa de la generosidad de los hermanos ecuatorianos, subrayó. Me dedicó alguna cálida frase de circunstancia y se despidió. Tengo la sospecha de que el Cónsul exageró mis recomendaciones y que los guerrilleros se banquetearon todos los días. Es que el Cónsul conocía mejor que yo a sus compatriotas y de lo que ellos eran capaces de hacer en circunstancias emergentes.

En conexión con este mismo tema recuerdo que un día se me invitó a una reunión del directorio de la Flota Mercante Grancolombiana, en la cual el Ecuador tenía participación. Se nos informó que había sido secuestrado uno de los gerentes, de nacionalidad colombiana, jubilado hacía pocos días. Los secuestradores se identificaron como militantes de una de las bandas de alzados en armas y pedían un millón de dólares de rescate. Cuando se me planteó el caso puse de presente mi solidaridad con el afectado, en términos humanitarios, pero expresé que no lo trasladaría a conocimiento de mi Gobierno porque el ex-funcionario ya no prestaba servicios a la empresa. Al día siguiente los peticionarios bajaron a cien mil dólares la exigencia del rescate: se trataba de delincuentes comunes que habían tomado el nombre de una de las facciones rebeldes para sus fechorías. Al señor Gutiérrez le encontró la policía, quince días después, ahorrado en

una mazmorra infame de los malandrines en un lugar céntrico de Bogotá, cuando indagaba el paradero de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hermano del Presidente de la República, quien también fue plagiado en la misma época. El ex – gerente de la Flota Mercante quedó afectado psicológicamente, como era obvio, y en una conversación telefónica que mantuvimos me dijo que se iba a Miami para someterse a un tratamiento médico.

GUAYASAMÍN EN BOGOTÁ

Oswaldo Guayasamín, el celebrado pintor ecuatoriano, me escribió a comienzos de 1984 a Bogotá, solicitándome que le auspiciara una exposición de algunas de sus obras en una galería privada. Lo hice con especial satisfacción, no sólo por la vieja amistad que nos vinculaba sino por la obvia repercusión que la muestra tendría en el marco de la difusión de los valores artísticos del Ecuador.

En la inauguración de la exposición estuvieron presentes el Presidente Betancur, elementos representativos del mundo cultural y un nutrido grupo de gentes interesadas en la obra del maestro. La muestra se componía básicamente de un importante repertorio de trípticos, algunos de gran formato, con el conocido vigor plástico de los trabajos de nuestro compatriota. La exposición alcanzó un gran éxito y mereció justos elogios de la prensa local. Aparte de la ceremonia inaugural, organizamos una discusión de mesa redonda en la Universidad de Bogotá, para que las personas interesadas en dialogar con el artista tuvieran oportunidad de hacerlo, en torno a su vida y su obra plástica. Hubo un dinámico intercambio de impresiones y Guayasamín respondió a una serie de preguntas de diversa índole. En una de sus intervenciones se refirió a la importancia de la cultura precolombina, tema en el cual ponía mucha pasión, y afirmó que mientras en América ya había florecientes civilizaciones los europeos recién estaban bajándose de los árboles. Entre los asistentes estaban varios diplomáticos. Al escuchar la afirmación provocadora del artista, la esposa del embajador de Alemania, que había servido en Quito años atrás, se puso de pie para disentir cortésmente de dicho concepto.

Oswaldo Guayasamín, en acto de cortesía personal, le pintó un soberbio retrato al Presidente Betancur. Con ese motivo nos invitaron

a un almuerzo íntimo en palacio. Estábamos a la mesa: el Presidente y la señora de Betancur; mi señora y yo; Oswaldo Guayasamín y sus hijos Pablo y Verenice; y el matrimonio colombiano dueño de la galería de pintura. Cuando vimos el retrato, que acababa de pintarlo cuando arribamos al palacio, le comenté al maestro: es estupendo, condensa los rasgos esenciales de la personalidad del Presidente, desde el joven seminarista hasta el estadista actual. La conversación en la mesa fue muy interesante y versó sobre diversos tópicos. Cabría destacar, empero, dos momentos. El Presidente reiteró la modestia de sus orígenes y el hecho de que proviene de una familia de 22 hermanos. Nos contó que cuando era niño lo único que envidiaba era a aquellos niños que en navidad recibían de sus padres unos lujosos trenes de juguete. Un día comprendí que yo era más afortunado que ellos, anotó, porque podía viajar en un tren de verdad, en mi condición de hijo de un ferroviario. En efecto, concluyó, varios muchachos nos embarcábamos en el tren que pasaba por nuestro pueblo hasta la estación siguiente, y retornábamos poco tiempo después. Guayasamín, por su parte, refirió detalles de su infancia rodeada de privaciones y remató con esta frase: “yo lloré porque no tenía zapatos hasta que ví un niño que no tenía pies”. Esta expresión está recogida, en letras de molde, en uno de los espacios de la imponente Capilla del Hombre, legado póstumo del pintor a su pueblo.

Con oportunidad de la exposición de Guayasamín ofrecimos una recepción numerosa en nuestra residencia, con asistencia de personalidades destacadas del mundo oficial, diplomático y cultural. Cito este hecho porque entre los invitados estuvo el entonces Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien días después fue bárbaramente asesinado por unos sicarios contratados por los narcotraficantes, a quienes él había combatido abiertamente. Con el bien intencionado propósito de evitar su eliminación por esos poderosos delincuentes, el presidente Betancur lo nombró embajador en un país socialista europeo, pero los malandrines trocaron el destino diplomático por el cementerio. La noche que conversamos en la embajada, Lara Bonilla lucía muy preocupado por las amenazas de los narcotraficantes y parecía presentir su desenlace fatal. Yo tuve la oportunidad de tratarlo cercanamente por las conversaciones bilaterales orientadas a combatir el flagelo del narcotráfico en nuestros países.

El 30 de abril, a medio día, alterné por última vez con el Ministro Lara Bonilla, en la recepción diplomática ofrecida por el embajador

de los Países Bajos, con motivo del día nacional de su país. Mantuvimos una breve conversación y ese momento se acercó un periodista, deseoso de confirmar su designación en el servicio exterior de Colombia. Era tal la presión psicológica a que estaba sometido que, aceptando la veracidad de su nominación, le recomendó a su interlocutor no publicar la noticia por razones de seguridad. Pocas horas después, dos jóvenes sicarios segaban la vida del Ministro, en una avenida de Bogotá. Curiosamente su sucesor en la cartera de Justicia, doctor González Parejo, estuvo a punto de correr la misma suerte, pues cuando asumió la función de Embajador en Hungría, en circunstancias análogas a las de Rodrigo Lara Bonilla, los mafiosos lo persiguieron y atentaron contra su vida, hiriéndolo gravemente.

Los capos del narcotráfico han propiciado múltiples actos de barbarie, como los citados, y han mellado la imagen de un país respetable como Colombia, al extremo de haber estigmatizado a sus compatriotas, que a veces son objeto de tratamiento inadecuado en el exterior. Recuerdo, por ejemplo, haberle escuchado a Germán Arciniegas, en una reunión social que compartimos en Bogotá, el relato del humillante trato que recibió en la aduana de Nueva York, en uno de sus tantos viajes. Nos contaba el maestro, alta figura de la intelectualidad colombiana, que al presentar su pasaporte fue conducido a un cuarto especial, donde prácticamente lo desnudaron para verificar si no transportaba droga. Puedo también referir una experiencia personal en este contexto. Cuando ejercí la función de Embajador del Ecuador en Colombia, viajé a Miami por pocos días. Presenté mi pasaporte diplomático en el escritorio de la migración y, mientras pasaban otros turistas, me hicieron esperar algunos minutos. Ante mi reclamo, vino un funcionario y me ofreció las debidas excusas con la explicación de que se habían equivocado pensando “que se trataba de un Embajador de Colombia”. Le observé que, aun aceptando esa hipótesis, su argumento era improcedente, porque estamos amparados por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), en la cual son Estados Partes Ecuador, Colombia y Estados Unidos.

DIRECCIÓN GENERAL DE SOBERANÍA

Pocos días después de la asunción del mando del Presidente León Febres Cordero recibí la comunicación oficial de mi traslado a la Cancillería, tras nueve años de permanencia en el ejercicio sucesivo de la representación diplomática del país en Uruguay, Perú y Colombia. Era un traslado normal y rutinario, pero en esas circunstancias ocurrió un episodio pintoresco. Recibí una carta personal de un funcionario amigo mío, informándome que alguien me habría intrigado en la Presidencia. Según esa versión, algún mandadero palaciego, gandul y sin mejor oficio, se habría tomado la molestia innecesaria de utilizar el ardid de que yo había concedido una entrevista al prestigioso periódico “El Tiempo”, de Bogotá, a propósito de la primera vuelta electoral en el Ecuador y que, en ella, habría volcado mi simpatía hacia la candidatura del doctor Rodrigo Borja, frente a la del ingeniero León Febres Cordero. La señora Lucy Nieto de Samper, distinguida periodista del citado diario, me hizo una extensa entrevista sobre aspectos relevantes de nuestro país, entre ellos el proceso electoral. Mis respuestas fueron, por supuesto, objetivas y sin el menor atisbo de interesada subjetividad, como corresponde en tales casos. Pero el acucioso compatriota, quien sin duda quiso abreviar mi estancia en el país vecino, ignoraba que yo esperaba precisamente el retorno a Quito.

A propósito de la primera vuelta electoral para la presidencia de la república, en 1984, vale la pena relatar un episodio inesperado. Un periodista colombiano envió desde Quito una crónica sobre el tema de

las elecciones a algún medio de comunicación social de Bogotá. La crónica, objetivamente enfocada, tenía sin embargo esta insidiosa nota aclaratoria de la redacción: “Como Ecuador es poco conocido en Colombia, informamos a nuestros lectores que se trata de un país de modelo pastuso, con petróleo e indios”. Trasladé de inmediato la información a nuestra Cancillería y remití una carta al director de la publicación, redactada con cuidadosa medida para evitar una polémica, ya que en tales casos el periodista siempre tiene la última palabra, por razones obvias. En el texto me referí a las relaciones históricas de ambos países y a sus raíces comunes, utilizando en la parte correspondiente el calificativo de “dos pueblos hermanos”. Pues bien, me reprodujeron el texto, según mi pedido, pero suprimiendo ese calificativo fraterno. Creo que huelga cualquier comentario.

Pero volvamos a mi retorno a Quito. Lo curioso del caso es que días después de la notificación oficial de mi traslado, el Subsecretario Político de la Cancillería me llamó por teléfono a pedirme que continuara un tiempo adicional en mi función porque había varios compromisos internacionales próximos en Colombia, como la importante reunión del “Grupo de los 77” y la Conferencia de Ministros de Comunicaciones de la Comunidad Andina. Es que Bogotá y Cartagena de Indias son ciudades de frecuente actividad internacional. Yo había participado ya en Colombia de otras conferencias de interés para el Ecuador. Pocos días después de mi salida de Bogotá, en diciembre de 1984, se realizó una entrevista en la frontera entre los Presidentes de Ecuador y Colombia, a la cual asistió el Consejero de la Embajada, encargado temporalmente de la jefatura de la misión diplomática.

Cuando fui a despedirme del Presidente Belisario Betancur, me recibió en la residencia presidencial, con cálida sencillez. En los breves minutos de espera hasta la aparición del Mandatario, tuve un simpático diálogo con un joven edecán, quien me mostró unos dibujos que pendían de uno de los muros del salón. El oficial, en tono de reproche a los motivos de esos cuadros, me dijo: “¿Qué le parece, Embajador, la falta de respeto de ciertos artistas hacia el señor Presidente?”. No le hice ningún comentario, para que no se sintiera incómodo, porque se trataba de unas ilustraciones al conocido libro “El señor Presidente”, del laureado escritor guatemalteco Miguel Angel Asturias. Con el doctor Betancur conversamos escuetamente sobre las relaciones ecuatoriano – colombianas y me despedí formulando votos de adhesión a sus plausi-

bles esfuerzos de pacificación de su país, acosado por la violencia guerrillera y el narcotráfico.

Al regresar al Ministerio de Relaciones Exteriores, se me confió la Dirección General de Soberanía Nacional, con competencias importantes en la estructura institucional, que tienen que ver con la soberanía territorial, aérea y marítima del Ecuador. En ese ámbito, amplio e interesante, se ventila un variado repertorio de temas de entidad y trascendencia para el país. Las labores de la Dirección General, actualmente con la denominación de Subsecretaría, se desarrollan por conducto del Departamento de Soberanía Territorial, del Departamento de Soberanía Marítima, Aérea y Espacial, y del Departamento de Desarrollo Fronterizo.

Uno de los asuntos de mayor proyección institucional para la Cancillería se produjo, por ejemplo, en setiembre de 1985, cuando el Jefe de Estado dio un paso importante en el marco de nuestro ordenamiento jurídico territorial. El Derecho Marítimo, dentro del Derecho Internacional, es una de las ramas que ha demostrado gran dinamismo en su proceso evolutivo, tratando de vincular la explotación de los recursos naturales al desarrollo y al bienestar de los pueblos. En esa línea de pensamiento y de acción el Ecuador ha hecho aportes sustantivos. Pues bien, el Presidente de la República, en proclama de 19 de setiembre de 1985, aplicó los principios del Derecho del Mar y de la ley interna a un concepto geográfico novedoso: la proyección de la soberanía ecuatoriana sobre una zona que se cuenta a partir de la isóbata de los 2.500 metros de profundidad. La declaración de soberanía en esa zona, a los efectos de la exploración y explotación de los recursos allí existentes, hace que los derechos ecuatorianos se ejerzan sobre un profundo callejón en que el Ecuador está vinculando las zonas marítimas próximas a la costa continental con las costas de la provincia de Galápagos.

Tras señalar varias consideraciones de orden científico y técnico, el Presidente de la República proclamó: “Que a más de la plataforma continental e insular correspondientes a su mar territorial de 200 millas, constituyen, igualmente, plataforma continental del Ecuador el lecho y subsuelo marinos situados entre el mar territorial ecuatoriano continental y el insular correspondiente al Archipiélago de Galápagos, hasta la distancia de 100 millas contadas desde la isóbata de los 2.500 metros de profundidad”. Conviene anotar que la plataforma continental que parte de Galápagos hacia el continente es una de las zonas más

ricas en minerales, hidrocarburos y oro, según estudios específicos de carácter científico, lo cual pone en evidencia la importancia de la proclama presidencial.

A raíz de la proclama presidencial recibí en mi despacho a los Embajadores de Alemania, Francia y Unión Soviética, así como a un alto funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, quienes fueron a solicitarme algunas precisiones al respecto. La Cancillería recibió días después sendas notas de reserva de esos gobiernos a la posición asumida por el Ecuador. En respuesta a dichas reservas se reafirmó el derecho que asiste a nuestro país para adoptar tal medida, en ejercicio de sus facultades soberanas, en virtud de títulos geográficos, históricos y jurídicos, y para salvaguardar los derechos que le corresponden.

En octubre de 1985 se realizó la visita del Canciller del Perú, Allan Wagner, por invitación del Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Edgar Terán, quien asistió a la transmisión del mando en Lima, el 28 de julio de ese mismo año. Se trataba de un hecho histórico, por cuanto era la primera visita del jefe de la diplomacia peruana, orientada a consolidar gradualmente un clima de confianza propicio al buen entendimiento y al desarrollo de las relaciones de amistad entre los dos países, en un marco de paz y de recíproca cooperación. Además de las obvias conexiones oficiales derivadas de la naturaleza de los asuntos a mi cargo, en lo personal me fue grato tomar contacto nuevamente con un amigo de larga data, pues traté a Allan Wagner durante el ejercicio de mi representación diplomática en Lima.

El crudo invierno de 1983 y los efectos de la Corriente del Niño ocasionaron desvíos de los cursos de ríos fronterizos con el Perú. Estos hechos produjeron un conflicto de intereses entre pobladores ecuatorianos y peruanos de esa zona. Cuando asumí el ejercicio de mis funciones en la Cancillería, en 1985, el asunto estaba en prudente reposo. Me pareció que lo más indicado era reactivarlo para buscarle una solución adecuada, pues considero que el tiempo conspira contra las actitudes elusivas. Organizamos un diálogo bilateral en las ciudades de Macará-La Tina y Huaquillas-La Palma, en julio de 1985, y abordamos el tema sin subterfugios, entre funcionarios ecuatorianos y peruanos encargados de su tratamiento. El Embajador Juan Garland presidía la delegación peruana y yo la de nuestro país. Las conversaciones fueron francas y cordiales. Provocamos una suerte de cabildo abierto en ambos lados de la frontera y dialogamos directamente con sus habitantes.

Nos encontramos con una visión pragmática de los pobladores, quienes afirmaban que “lo que el río da, el río quita”, allanándose al desig-nio de las fuerzas de la naturaleza. En todo caso el problema recobró actualidad y el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INHE-RI) y el Instituto Nacional de Desarrollo del Perú (INADE) tomaron las providencias técnicas del caso para solucionar los problemas deri-vados de los desvíos de los ríos Macará y Zarumilla.

Al término de las citadas conversaciones bilaterales se suscribió esta Acta: “Entre los días 15 y 17 de julio de 1985, se reunieron en las ciudades de Macará-La Tina y Huaquillas-La Palma, las delegaciones del Ecuador y Perú, presididas por los Embajadores Miguel Antonio Vasco y Juan Garland Combe, respectivamente, e integrada por repre-sentantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacio-nal-Marina-Comando Conjunto, Agricultura e Instituto Geográfico Militar, con el propósito de realizar conjuntamente un reconocimien-to aéreo y terrestre del curso del río Calvas-Macará, en el sector com-prendido entre el puente internacional y las poblaciones de ‘El Guara-po’ en el Ecuador y ‘Anchalay’ en el Perú. Posteriormente, y luego de conversaciones técnicas, las delegaciones de común acuerdo resolvie-ron realizar al día siguiente un segundo recorrido del sector.— El día 16 de julio, los Jefes de las dos delegaciones se reunieron en la ciudad de Macará con el objeto de resumir los resultados de esta primera etapa de los trabajos, habiendo advertido la necesidad de recomendar a sus res-pectivos Gobiernos la conveniencia de conformar de manera inmedia-ta un Grupo Mixto Técnico que verifique la situación del sector y pre-sente un informe integral que permita la adopción de las decisiones que atiendan a los intereses de los dos países, dentro del marco de las normas que establece el derecho internacional.— En la segunda etapa de trabajo las delegaciones visitaron la llamada isla ‘López’ o ‘Silvia’, for-mada en el lecho del río Zarumilla y observaron en el sector del canal internacional del mismo nombre los sitios denominados ‘Codos de Hualtaco’ y ‘Huaquillas’, manifestando asimismo la necesidad de que se proceda en análoga forma a la señalada para el tratamiento del río Cal-vas-Macará descrito anteriormente.— Las dos delegaciones dejan cons-tancia del marco de cordialidad en que se desarrollaron las conversa-ciones así como de la disposición de ambas partes para mantener el diálogo en el tratamiento de estos temas a través de los canales diplo-

máticos correspondientes.— Huaquillas, a 18 de julio de 1985.— F) Embajador Miguel Antonio Vasco V. y Embajador Juan Garland Combe”.

En los días 25 y 26 de noviembre de 1986 se celebró en Quito, en salones de la Cancillería, la primera reunión de la Comisión Mixta Permanente Ecuatoriano – Colombiana de Fronteras. Se aprobó el reglamento general que norme las actividades de la Comisión y se resolvió realizar una inspección de la totalidad de la línea fronteriza entre ambos países para el establecimiento de prioridades en trabajos vinculados con la reconstrucción de hitos destruidos, reparación de los deteriorados, densificación con nuevos hitos intervisibles de la línea y actualización de la cartografía de la frontera.

La Cancillería participó activamente en la creación de la Reserva Marina de Galápagos (Decreto Ejecutivo No. 1810-A, de 19 de abril de 1986), que constituye la primera institución del mundo de esa índole, sobre todo por su gran extensión. La creación fue recibida con satisfacción por varios organismos internacionales que se dedican a la conservación de la naturaleza. El Grupo Ecuatoriano de la Fundación Charles Darwin, que solía reunirse en la Cancillería bajo la presidencia del Director General de Soberanía Nacional, organizó una visita especial al archipiélago con varias personalidades del mundo oficial, entre ellos el Presidente del Congreso Nacional, para tratar de asuntos relevantes vinculados con la preservación de ese patrimonio natural de la humanidad, como culminación del seminario “Galápagos y la Fundación Charles Darwin”, celebrado en Quito el 17 de abril de 1985.

Con ayuda del Gobierno del Canadá se realizó, en 1985-86, la construcción de un centro de servicios múltiples para beneficio de la comunidad Awá, en Chical, Provincia del Carchi, cerca de la frontera. Este centro está destinado a facilitar la comercialización de los productos agrícolas de los Awá y a proporcionar alojamiento a los miembros de esa tribu. Los Awá constituyen un grupo de unas 600 personas, no asimiladas a nuestro concepto de civilización, cuyo estudio sociológico ha sido emprendido por varios investigadores.

Estos y otros asuntos fueron tratados por la Dirección General de Soberanía Nacional, integrada por un grupo de funcionarios idóneos y competentes en las diversas áreas confiadas a su cuidado.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

Cuando vino a asumir las funciones de Canciller de la República mi distinguido amigo el Embajador Rafael García Velasco, Representante Permanente del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, tuvo la gentileza de invitarme a sucederlo en esa importante representación, previa la anuencia del Presidente León Febres Cordero.

Me trasladé a Washington en marzo de 1987 y pocos días después presenté mis cartas credenciales. En audiencias sucesivas me recibieron el Secretario General y el Presidente del Consejo Permanente de la Organización. Volví a tomar contacto con el Embajador Joao Baena Soares, Secretario General, a quien había tratado personalmente en una breve visita que él hiciera a Bogotá.

Como la OEA es la organización regional más antigua del mundo estimo útil para el lector de estas líneas conocer su estructura y funcionamiento, a partir de su génesis histórica. Conviene advertir de antemano que la Carta constitutiva de la OEA se aprobó en 1948, pero que la institución proviene del Sistema Interamericano, cimentado en el ideario político de Simón Bolívar.

RASGOS INSTITUCIONALES DE LA OEA

El origen prístino de nuestro sistema regional dimana del pensamiento político del Libertador Bolívar, quien convocó desde Lima al

Congreso Anfictiónico de Panamá (1826). Bolívar dirigió, con fecha 7 de diciembre de 1824, una nota circular de invitación a los gobiernos de Colombia, México, América Central, las Provincias Unidas de Buenos Aires, Chile y Brasil, para reunirse en Panamá y conformar “una asamblea de plenipotenciarios de cada estado que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias”.

En dicho Congreso se aprobó el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua el 15 de julio de 1826. El instrumento sólo fue ratificado por Colombia (integrada por las actuales Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela), el 14 de setiembre de 1837.

Es interesante recordar también que las principales ideas debatidas en el Congreso de Panamá y en los posteriores congresos del siglo XIX figuraban ya en las “Instrucciones que han de arreglar la conducta de los Ministros Plenipotenciarios del Perú en la Gran Asamblea del Istmo de Panamá”, cursadas por el propio Bolívar el 15 de mayo de 1825. Ahí figura, por ejemplo, el principio de no intervención, piedra angular del sistema interamericano, cuando instruyó a sus enviados hacer “una enérgica y efectiva declaración igual a la del Presidente de los Estados Unidos de América..., sobre impedir cualquier designio ulterior de colonización en este Continente por las Potencias europeas, y de resistir todo principio de intervención en nuestros negocios domésticos”. O sea que si bien Bolívar apoyaba a la doctrina del Presidente Monroe, trascendía su concepción al oponerse no sólo a la potencial intervención europea sino a la intervención de cualquier procedencia, pues su aguda percepción política advertía lo que habría de ocurrir en lo futuro en las relaciones entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos.

Con posterioridad al Congreso Anfictiónico de Panamá se celebraron varios congresos de carácter político y jurídico en Lima, Montevideo, Santiago y Washington, que fueron abriendo cauces a la instauración del sistema interamericano, en 1890. Dichos congresos hicieron importantes aportes al sistema, como: el principio de no intervención, el arreglo pacífico de controversias, la inviolabilidad del territorio nacional, el arbitraje obligatorio, el asilo, la extradición, la proscripción de la conquista y el uso de la fuerza, la igualdad entre nacionales y extranjeros. La Guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú le ofreció la coyuntura propicia al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Ja-

mes Blaine, para cursar invitaciones, en 1881, a la Primera Conferencia Interamericana, pues estaba persuadido de la necesidad de reunir a los Estados del continente en torno al establecimiento de métodos para el arreglo pacífico de sus controversias y el fomento de su cooperación económica y comercial. La idea de Blaine era congregar a los Estados americanos en una conferencia en Washington, en 1882, para considerar procedimientos orientados a evitar la guerra. La fecha de la asamblea estaba señalada en el entendido de que para entonces habría concluido la Guerra del Pacífico. Pero hasta tanto se produjo el asesinato del Presidente Garfield y la sustitución del señor Blaine por otro Secretario de Estado, quien retiró las invitaciones al prolongarse el citado conflicto bélico.

Por los antecedentes expuestos, la fecha de la conferencia fue diferida pero no fue abandonado el proyecto del señor Blaine. En efecto, el Congreso de los Estados Unidos aprobó, en 1888, una resolución que autorizaba al Presidente a invitar nuevamente a los Estados americanos a una conferencia que se celebraría en la ciudad de Washington. La Primera Conferencia Internacional Americana se realizó, pues, entre octubre de 1889 y abril de 1890, bajo la presidencia de James Blaine, quien había retornado a la función de Secretario de Estado. El logro fundamental de la reunión fue la instauración de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, integrada por las naciones representadas en la conferencia, con su secretaría denominada Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, bajo la supervisión del Secretario de Estado. La Unión Internacional, organismo precursor de la OEA, se convirtió, en 1910, en la Unión de las Repúblicas Americanas y, su secretaría, en la Unión Panamericana. Importa destacar que se trató de la primera organización jurídica de la comunidad internacional, a nivel regional, pues en dimensión universal apenas apareció en el siglo XX con la Sociedad de las Naciones, primero, y luego con las Naciones Unidas, al término de las dos guerras mundiales, en el orden indicado.

Desde la conferencia de Washington, punto de partida del sistema interamericano, las naciones del continente tuvieron diez conferencias hasta el cambio de esa denominación por la actual de asamblea general, debido a una reforma de la Carta constitutiva de la OEA en 1967. La última de ellas, la Décima Conferencia Internacional Americana se celebró en Caracas, en 1954, y la Undécima, proyectada para 1960 con sede en Quito, no se realizó por inconvenientes de carácter

interno. Las diez conferencias internacionales americanas se celebraron en este orden: Washington (1890), México (1902), Río de Janeiro (1906), Buenos Aires (1910), Santiago de Chile (1923), La Habana (1928), Montevideo (1933) Lima (1938), Bogotá (1948) y Caracas (1954). De ellas emergió un nutrido elenco de resoluciones y convenciones de carácter jurídico, político, económico, social y cultural, que han conformado el denominado derecho internacional americano, que si bien se cimienta en el derecho internacional general contiene principios y normas que le son propias, como en materia de asilo, de arbitraje, de condena a la agresión.

En ese contexto fue muy importante la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz (Buenos Aires, 1936), en la cual se suscribió la Convención sobre Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz, que sienta las bases para el procedimiento consultivo en que descansa el actual sistema regional, para la adopción de fórmulas de cooperación pacifista y de solidaridad frente al peligro de agresión. A partir del mecanismo instalado en la citada Convención de Buenos Aires, la VIII Conferencia Internacional Americana de Lima (1938) mejoró y simplificó el procedimiento de consulta con las Reuniones de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores.

En aplicación de este nuevo procedimiento, se realizaron las tres primeras Reuniones de Consulta de Cancilleres con oportunidad del conflicto bélico que se desarrollaba en Europa. La Primera Reunión, celebrada en Panamá en 1939, reafirmó la declaración de solidaridad aprobada en la Conferencia de Lima de 1938 y determinó que los gobiernos americanos se consultarían mutuamente para acordar las medidas conducentes al cumplimiento de la Declaración de Panamá. En esa reunión los países americanos adoptaron, entre otras, dos resoluciones sobre la materia: “Declaración conjunta de solidaridad continental” y “Declaración general de neutralidad de las Repúblicas Americanas”. La Segunda Reunión de Consulta (La Habana, 1940) trascendió los límites de la anterior, desarrolló y fortaleció el principio y el concepto de la solidaridad frente a los atentados de procedencia extracontinental, en una declaración sobre asistencia recíproca y cooperación defensiva. En la Tercera Reunión de Consulta (Río de Janeiro, 1942) se registraron las aplicaciones concretas del principio de solidaridad continental y recomendó la ruptura de relaciones diplomáticas con los países del Eje (Alemania, Italia y Japón). Esta reunión de Río de Janeiro se

celebró en circunstancias especialmente delicadas que determinaron el ingreso de Estados Unidos en la segunda guerra mundial; instituyó la Junta Interamericana de Defensa y puso énfasis en el fortalecimiento de la solidaridad continental frente a la emergencia internacional. En ese escenario histórico se suscribió el Protocolo de Río de Janeiro, de ingrata recordación para el Ecuador, que examinamos en otra sección de este libro.

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en México, en el castillo de Chapultepec, del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, fue un hito importante en la evolución de nuestro sistema regional, pues no sólo trató temas vinculados con los problemas de la guerra y de la paz, con énfasis en la asistencia recíproca y la solidaridad americana, sino que aprobó una extensa resolución concerniente a la reorganización, consolidación y fortalecimiento de la institucionalidad interamericana. O sea que de Chapultepec emergió un renovado marco institucional. En el numeral 9 de dicha resolución “Se encarga al Consejo Directivo de la Unión Panamericana de preparar, a partir del 1 de mayo de 1945 y asesorándose de todos aquellos organismos panamericanos que estime convenientes, un anteproyecto de pacto constitutivo destinado a mejorar y fortalecer el sistema panamericano”. El Consejo Directivo de la Unión Panamericana presentó a la IX Conferencia (Bogotá, 1948) el “Pacto Constitutivo del Sistema Interamericano”, que sirvió de documento de trabajo principal para la preparación de la Carta de la Organización.

La IX Conferencia Internacional Americana se reunió en Bogotá del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948 y en ella se suscribieron cinco tratados internacionales. Los más importantes fueron la Carta constitutiva de la Organización de Estados Americanos y el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá). Estos dos instrumentos y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), constituyen la trilogía sobre la que se asienta el Sistema Interamericano. El TIAR se suscribió el 2 de setiembre de 1947, en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, celebrada en Petrópolis, ciudad vecina a Río de Janeiro. Antes de examinar los aspectos relevantes de la Carta, veamos en escueta síntesis la esencia del Pacto y del TIAR.

Las partes contratantes en el Pacto de Bogotá reconocen la obligación de resolver las controversias internacionales por los procedi-

mientos pacíficos regionales antes de llevarlas al Consejo de Seguridad de la ONU. En consecuencia, en caso de que entre dos o más Estados signatarios se suscite una controversia que, en opinión de las partes, no pueda ser resuelta por negociaciones directas a través de los medios diplomáticos usuales, las partes se comprometen a hacer uso de los procedimientos establecidos en el Tratado o de los procedimientos especiales que, a su juicio, les permitan llegar a una solución. El Pacto reconoce los siguientes medios de solución pacífica de controversias: buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. A medida que el Tratado entre en vigencia por las sucesivas ratificaciones de las partes contratantes, cesarán para ellas los efectos de los tratados, convenios y protocolos citados en su Art. 58.

En el TIAR, en síntesis, los Estados americanos acordaron: condenar formalmente la guerra; someter toda controversia a los métodos de solución pacífica; en caso de un ataque armado de un Estado contra un Estado Americano, ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Art. 51 de la Carta de la ONU; señalar los límites de la región, dentro de los cuales operan las medidas de legítima defensa, en caso de ataque armado; convocar al Órgano de Consulta si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental. La Conferencia de Plenipotenciarios para la Reforma del TIAR, celebrada en San José de Costa Rica, en julio de 1975, modificó el texto del instrumento. Sin embargo, el Protocolo de Reformas, aprobado por dicha conferencia, no ha entrado todavía en vigor, porque no cuenta con las ratificaciones de los dos tercios de los Estados signatarios. Las reformas introducidas en el instrumento son indispensables porque no hay que olvidar que el TIAR se adoptó como una respuesta de la comunidad regional a las amenazas a la seguridad continental en el marco de la guerra fría. Como el mundo ha experimentado desde entonces muy profundos cambios se considera que el tratado debe adecuarse a los nuevos tiempos.

La Carta de Bogotá regula la organización y funcionamiento de la Organización de los Estados Americanos. El texto originario ha sido objeto de reformas mediante cuatro Protocolos (Buenos Aires, 1967; Cartagena de Indias, 1985; Washington, 1992; y Managua, 1993). El

Protocolo de Buenos Aires introdujo reformas estructurales y creó nuevas instancias deliberativas. El Protocolo de Cartagena puso énfasis en la eficacia de los medios de solución pacífica de las controversias internacionales. El Protocolo de Washington incorpora normas referidas a la posibilidad de suspender al miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza e incluye a la erradicación de la pobreza crítica entre los propósitos esenciales de la OEA. En el Protocolo de Managua se crea El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), en reemplazo del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC).

Son miembros de la Organización todos los Estados que ratifiquen la Carta. Los miembros suscriptores fueron 21. Actualmente la OEA está integrada por 35 Estados miembros, pero el gobierno de Cuba carece de representación en los principales órganos del sistema, desde el año de 1962, por decisión de la VIII Reunión de Consulta de Punta del Este. Se trataba del desarrollo en el período de posguerra del sistema para la “defensa política del Continente”, frente a la “acción política del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo”, por su “naturaleza antidemocrática y por su tendencia intervencionista”, según se dijo en la IX Conferencia Interamericana de Bogotá (1948). La VIII Reunión de Consulta resolvió, entre otras cosas, “Suspender inmediatamente el comercio y tráfico de armas e implementos de guerra de cualquier índole con Cuba”.

Los propósitos esenciales de la OEA, según la Carta, son: “a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; b) promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de la no intervención; c) prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados Miembros; d) organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; e) procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; f) promover por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; g) erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio; y, h) alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros” (Artículo 2).

Los principios que norman la conducta institucional de la OEA son: “a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas; b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional; c) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí; d) La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa; e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados Americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales; f) La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos; g) Los Estados Americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos; h) La agresión a un Estado Americano constituye una agresión a todos los demás Estados Americanos; i) Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados Americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos; j) La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera; k) La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del Continente; l) Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo; m) La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana; n) La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz” (Artículo 3).

En cuanto a la estructura, diremos que la OEA realiza sus fines por medio de los siguientes órganos: a) La Asamblea General; b) La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; c) Los Consejos; d) El Comité Jurídico Interamericano; e) La Comisión Inte-

americana de Derechos Humanos; f) La Secretaría General; g) Las Conferencias Especializadas; y, h) Los Organismos Especializados.

La Asamblea General es el órgano supremo de la OEA y tiene como atribuciones principales:

- a) Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados Americanos;
- b) Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos y entidades de la Organización entre sí, y de estas actividades con las de las otras instituciones del Sistema Interamericano;
- c) Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados;
- d) Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con otras organizaciones internacionales que persigan propósitos análogos a los de la Organización de los Estados Americanos;
- e) Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas de los Estados Miembros;
- f) Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y las observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar los demás órganos y entidades, le eleve el Consejo Permanente, de conformidad con lo establecido en el párrafo f) del artículo 91, así como los informes de cualquier órgano que la propia Asamblea General requiera;
- g) Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General; y,
- h) Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario.

La Asamblea General se reúne anualmente en la sede seleccionada conforme al principio de rotación. En cada período ordinario de sesiones se determina, de acuerdo con el reglamento, la fecha y sede del siguiente período ordinario.

La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores debe celebrarse con el fin de considerar problemas de carácter urgente

y de interés común para los Estados Americanos, y para servir de órgano de consulta. Cualquier Estado miembro puede pedir que se convoque la Reunión de Consulta, en comunicación dirigida al Consejo Permanente de la Organización. Si el Canciller de un país no puede concurrir a la reunión se hace representar por un Delegado especial.

En caso de ataque armado al territorio de un Estado americano o dentro de la región de seguridad que delimita el tratado vigente, el Presidente del Consejo Permanente reunirá al Consejo sin demora para determinar la convocatoria de la Reunión de Consulta. Para asesorar al Órgano de Consulta en los problemas de colaboración militar que puedan suscitarse, se establecerá un Comité Consultivo de Defensa, integrado con las más altas autoridades militares de los Estados Americanos que participen en la Reunión de Consulta..

En la actual estructura de la OEA, ésta cuenta con dos consejos: el Consejo Permanente de la Organización y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que dependen directamente de la Asamblea General y tienen competencias específicas consignadas en la Carta.

El Consejo Permanente conoce, dentro de los límites de la Carta y de los tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier asunto que le encomiende la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Se compone de un representante por cada Estado miembro, nombrado especialmente con la categoría de embajador. Le corresponde al Consejo: ejecutar aquellas decisiones de la Asamblea General o de la Reunión de Consulta de Cancilleres cuyo cumplimiento no haya sido encomendado a ninguna otra entidad; velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General; actuar como Comisión Preparatoria de la Asamblea General, a menos que ésta lo decida en forma distinta; preparar, a petición de los Estados miembros, y con la cooperación de los órganos apropiados de la Organización, proyectos de acuerdos para promover y facilitar la colaboración de la OEA con la ONU; formular recomendaciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la Organización y la coordinación de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones; considerar los informes de los principales órganos de la OEA y presentar a la Asamblea General las observaciones y recomendaciones que estime del caso; y ejercer las demás atribuciones que le señala la Carta.

El Consejo Permanente velará por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados miembros y, con tal fin, les ayudará de una manera efectiva en la solución pacífica de sus controversias. Cualquier Parte en una controversia en la que no se encuentre en trámite ninguno de los procedimientos pacíficos previstos en la Carta, podrá recurrir al Consejo Permanente para obtener sus buenos oficios. El Consejo asistirá a las Partes y recomendará los procedimientos que considere adecuados para el arreglo pacífico de la controversia.

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tiene como finalidad promover la cooperación entre los Estados americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica, de conformidad con las normas de la Carta en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico. Se compone de un representante titular a nivel ministerial o su equivalente, por cada Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo. El CIDI celebrará, por lo menos, una reunión cada año a nivel ministerial o su equivalente; y se reunirá, además, cuando lo convoque la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Para realizar sus diversos fines, el CIDI deberá:

- a) Formular y recomendar a la Asamblea General el plan estratégico que articule las políticas, los programas y las medidas de acción en materia de cooperación para el desarrollo integral, en el marco de la política general y las prioridades definidas por la Asamblea General;
- b) Formular directrices para elaborar el programa presupuesto de cooperación técnica, así como para las demás actividades del Consejo;
- c) Promover, coordinar y responsabilizar de la ejecución de programas y proyectos de desarrollo a los órganos subsidiarios y organismos correspondientes, con base en las prioridades determinadas por los Estados miembros, en áreas tales como:
 - 1) Desarrollo económico y social, incluyendo el comercio, el turismo, la integración y el medio ambiente;
 - 2) Mejoramiento y extensión de la educación a todos los niveles y la promoción de la investigación científica y tecnológica, a

través de la cooperación técnica, así como el apoyo a las actividades del área cultural; y,

- 3) Fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos americanos, como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y la observancia de los derechos y deberes de la persona humana.

El Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional; y, estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente. Emprende los estudios y trabajos preparatorios que le encomiendan la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o los Consejos de la Organización. Puede realizar, además, a iniciativa propia, los que considere convenientes, y sugerir la celebración de conferencias jurídicas especializadas.

El Comité Jurídico, con sede en Río de Janeiro, está integrado por once juristas nacionales de los Estados miembros, elegidos por un período de cuatro años, de ternas presentadas por dichos Estados. No puede haber más de un miembro de la misma nacionalidad. La Asamblea General hace la elección mediante un régimen que tiene en cuenta la renovación parcial y procura, en lo posible, una equitativa distribución geográfica. Las vacantes producidas por causas distintas de la expiración normal de los mandatos de los miembros del Comité, se llenan por el Consejo Permanente siguiendo los mismos criterios establecidos. El Comité Jurídico Interamericano representa al conjunto de los Estados miembros de la Organización y tiene la más amplia autonomía técnica. Establece relaciones de cooperación con las universidades, institutos y otros centros docentes, así como con las comisiones y entidades nacionales e internacionales dedicadas al estudio, investigación, enseñanza o divulgación de los asuntos de interés internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compuesta de siete miembros de alta autoridad moral y reconocida versación en la materia, tiene como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. Conviene destacar en este pun-



To H.E. Miguel Antonio Vasco
and Mrs. Vasco,
With best wishes,
Barbara Bush Ag-Bush

Recepción ofrecida al Cuerpo Diplomático por el Presidente de los Estados Unidos, George Bush.

to que el sistema de derechos humanos de la OEA cuenta con la Comisión y con la Corte Interamericana, contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), suscrita en 1969.

La Comisión tiene las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
- b) Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;
- c) Preparar los estudios o informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
- d) Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
- e) Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
- f) Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad; y,
- g) Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de la Convención.

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado Parte. Para que una petición sea admitida por la

Comisión se requerirá que se hayan interpuesto o agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se compone de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en la materia. No puede haber dos jueces de la misma nacionalidad. Son elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez. La Corte tiene su sede en San José de Costa Rica.

Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Todo Estado Parte puede declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

La Corte someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos, que son definitivos e inapelables. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados Partes en la Convención.

En síntesis, cualquier persona o grupo de personas, o entidad gubernamental, puede presentar a la Comisión denuncias o quejas por violación de derechos humanos. A la Corte sólo pueden acudir los Estados Partes o la Comisión de Derechos Humanos.

La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de Estados Americanos. Ejerce las funciones que le atribuye la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General, y cumple los encargos que le encomiendan la Asamblea General, la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores y los Consejos.

El Secretario General de la Organización es elegido por la Asamblea General para un período de cinco años y no puede ser reelegido más de una vez, ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. Dirige la Secretaría General, tiene la representación legal de la misma y es responsable ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General.

El Secretario General, o su representante, puede participar con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Organización. Puede llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados Miembros.

En concordancia con la acción y la política decididas por la Asamblea General y con las resoluciones pertinentes de los Consejos, la Secretaría General promueve las relaciones económicas, sociales, jurídicas, educativas, científicas y culturales entre todos los Estados Miembros de la Organización, con especial énfasis en la cooperación para la eliminación de la pobreza crítica. En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría no pueden solicitar ni recibir instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y deben abstenerse de actuar en forma incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización. Los Estados Miembros, por su parte, se comprometen a respetar la naturaleza exclusivamente internacional de las responsabilidades del Secretario General y del personal de la Secretaría General y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones.

Las Conferencias Especializadas y los Organismos Especializados de la OEA se ocupan de asuntos técnicos especiales y de interés común para los Estados Miembros.

La Organización de los Estados Americanos goza en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, privilegios e in-

munidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos.

DESARROLLO DE LA MISIÓN EN LA OEA

Después de mi presentación formal en una sesión del Consejo Permanente, en abril de 1987, mi primera preocupación se orientó a limar asperezas con los integrantes del influyente Grupo Río, al cual el embajador García Velasco, en el calor de un debate, había calificado de “grupúsculo”. Un tinoso acercamiento a esos colegas me permitió no sólo acceder a su amistad personal sino a contar con su apoyo, incluso con su auspicio, para alcanzar varias dignidades significativas en el contexto de la OEA, como la presidencia del Consejo Económico y Social y de varias comisiones importantes.

Antes de entrar a la consideración de asuntos sustantivos recordaré un asunto prosaico, pero de apreciables dimensiones económicas para la Organización. En esa época había un aparato burocrático desfascado respecto de las necesidades institucionales. Ocurre que a raíz de la instalación de la Alianza para el Progreso, en 1961, por iniciativa del presidente John F. Kennedy, se había incrementado notablemente el número de funcionarios internacionales en la OEA, para llevar adelante los ambiciosos programas de cooperación hemisférica previstos en esa propuesta. Eliminado ese proyecto idealista por el trágico fallecimiento de su autor, permaneció intacto el cuadro burocrático, produciendo una considerable erosión presupuestaria a la OEA por la permanencia de muchos funcionarios sin ocupación concreta. Se hacían esfuerzos onerosos para solucionar esa situación anómala, con la resistencia corporativa de los afectados. Un día que íbamos a tratar el tema en el Consejo Permanente, los burócratas organizaron una manifestación con lemas reivindicatorios y cirios encendidos, pasando luego a formar una cadena humana en torno del salón de sesiones. Se proponía el aumento de las cuotas nacionales que alimentan el presupuesto para atender los requerimientos burocráticos, a lo que nos oponíamos los embajadores acreditados. Lo curioso del caso es que no faltó el discurso demagógico del embajador de un país caribeño en apoyo de las reivindicaciones salariales y de estabilidad laboral, con el aplauso entusiasta de los manifestantes. Para sorpresa mía, ese país era moroso contumaz en el

pago de cuotas y debía varias aportaciones anuales. En todo caso, la reducción gradual del personal, con la implantación de una adecuada política sobre la materia, le ha costado a la OEA un buen número de millones de dólares, pagados por cierto por los Estados miembros.

Otro episodio vinculado a la iniciación de mis funciones en la OEA, que vale la pena recordar, se refiere a la no siempre bien conocida representación de los países caribeños en el seno de la Organización. En la sesión de una de las comisiones del Consejo Permanente, un embajador sudamericano aludió en su intervención a “los pequeños estados del Caribe”. Sin ningún ánimo de polemizar sobre esta percepción de carácter político, manifesté que esa calificación me parecía incompatible con el principio de la igualdad soberana de los estados, consignado en la Carta de la OEA. En efecto, el Art. 10 dice que “Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos, y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional”. Para sorpresa mía, quien salió en defensa de la condición de “pequeños estados del Caribe” fue precisamente uno de sus representantes. Argumentó, en tono cordial, que los caribeños atraviesan una etapa histórica similar a la que tuvieron los estados latinoamericanos luego de su independencia y destacó las asimetrías actuales entre ambos grupos de países. Todo ello para ponderar la necesidad de que se privilegie la cooperación institucional hacia la región caribeña, hecho verificable en la práctica. En efecto, en el rubro de las cuotas anuales de los estados miembros, para financiar el presupuesto de la Organización, las que corresponden a los caribeños tienen a veces una dimensión simbólica en comparación con los beneficios que reciben a título de cooperación económica y técnica. Y, lo más importante, hay que valorar el peso político que han alcanzado en el marco de la OEA, pues generalmente votan en bloque para la adopción de decisiones trascendentes, donde la composición numérica juega un papel preponderante. Por esta razón, y otras que huelga señalar, siempre cultivé fluidas relaciones con mis colegas caribeños. El diplomático latinoamericano que ignore esta realidad puede tener más de una sorpresa en el desempeño de sus funciones, sobre todo en materia de votaciones.

Cuando asumí el ejercicio de mi representación había una agenda nutrida de temas importantes, entre ellos el de la consolidación de

los procesos democráticos, junto con tendencias orientadas al fortalecimiento del sistema interamericano mediante determinadas reformas estructurales o la renovación de ciertas políticas y acciones.

Importa recordar que en la década de los setenta se creó la Comisión Especial Encargada de Estudiar el Sistema Interamericano y Proponer Medidas para su Reestructuración (CEESI), que cumplió una tarea importante en el examen de los tres instrumentos que conforman el sistema regional: la Carta, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). El propósito esencial era el de actualizar el enfoque de tales instrumentos y ponerlos de cara a los nuevos tiempos. En ese contexto la Carta ha sido reformada en cuatro oportunidades, conforme lo señalamos anteriormente, y el TIAR y el Pacto de Bogotá continúan captando la atención de los Estados miembros. En el trasfondo del tema subyacen los esfuerzos encaminados a fortalecer el sistema interamericano de arreglo pacífico de controversias.

EL TEMA DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

En todo caso debo señalar que el tema de la democracia era el que concitaba la atención prioritaria de los delegados cuando asumí la representación del Ecuador en el Consejo Permanente. No hay que olvidar que se trata de un principio esencial en la escala de valores institucionales que integran el cuerpo normativo del sistema interamericano y que la OEA es la única organización internacional que le asigna un papel protagónico a la democracia representativa. En efecto, la Carta señala en su preámbulo que los Estados Miembros están “seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. Y reafirma en el literal d) del artículo 5 que “la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”. El Protocolo de Cartagena (1985) enriqueció el preámbulo de la Carta al considerar “que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, a la par que introdu-

jo un nuevo propósito esencial: “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”. Dicho Protocolo incorporó también el principio del pluralismo ideológico en observancia de un hecho sociológico-político inserto en la realidad internacional y fundado en otros principios del derecho internacional general. Dice, en efecto, el nuevo literal e) del artículo 3 de la Carta: “Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados Americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”.

Tras un sombrío período de dictaduras en la región, en las décadas de los sesenta y los setenta, se realizaron sostenidos esfuerzos orientados a la expansión y consolidación de los procesos democráticos en la década de los ochenta, que permitieron la vivencia inédita de una democracia casi unánime. Ello suscitó el entusiasmo y firme respaldo institucional de la OEA, que se expresó primero en el Protocolo de Cartagena y, luego, en varias declaraciones y resoluciones de la Asamblea General. Entre estas últimas fueron especialmente significativas las aprobadas en la XXI Asamblea de Santiago de Chile (1991): la Declaración denominada “Compromiso de Santiago con la democracia y con la renovación del Sistema Interamericano” y la Resolución 1080, que creó un mecanismo institucional de defensa de la democracia frente a la interrupción abrupta o irregular de su ejercicio. La citada Declaración, reconociendo que los profundos cambios políticos y económicos internacionales y el fin de la guerra fría abren nuevas oportunidades y responsabilidades para la acción concertada de todos los países, a través de los organismos internacionales, tanto mundiales como regionales, así como en sus relaciones bilaterales, consigna una serie de compromisos orientados hacia la defensa y promoción de la democracia representativa y la renovación del sistema interamericano, para dar adecuada respuesta a los nuevos desafíos y requerimientos en el contexto mundial y regional.

En la Resolución 1080, la Asamblea General resuelve “Instruir al Secretario General que solicite la convocación inmediata del Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional demo-

crático o de legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar una reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, todo ello dentro del plazo de 10 días.— Expresar que la reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General tenga por objeto analizar colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que se estimen apropiadas conforme a la Carta y al derecho internacional”.

El referido mecanismo de la OEA se puso en acción en los casos de Perú, Haití y Guatemala, con miras a lograr el restablecimiento del orden constitucional. Huelga advertir que el procedimiento previsto en la Resolución 1080 no configura una intervención colectiva a favor de la democracia sino que impulsa la acción de la OEA para facilitar la conciliación de los sectores relevantes de la sociedad del país afectado y alcanzar el restablecimiento de la normalidad institucional, en caso de ruptura del régimen democrático: la solución constitucional negociada solo corresponde a los actores nacionales del proceso político institucional. En el episodio político del Ecuador que culminó con la destitución del ex – presidente Abdalá Bucaram, el Secretario General de la OEA, seguramente inspirado en el espíritu de la Resolución 1080, vino a nuestro país por invitación del ex-mandatario con el propósito de promover la conciliación nacional. Fue sin duda un error del señor Gaviria, pues actuó sin autorización previa del Consejo Permanente. No percibió que se trataba de una manifestación plebiscitaria del pueblo ecuatoriano contra un régimen que había observado una conducta incompatible con la dignidad del poder y que no había respondido a las expectativas populares, por más que se discuta la legitimidad del procedimiento adoptado por el Congreso para despojarlo del mando. Por lo demás, el Secretario General carece de competencia para actuar por propia iniciativa en el caso previsto en la Resolución 1080. Es el Consejo Permanente el que debe generar las acciones correspondientes, mediante una reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o una Asamblea General Extraordinaria. Es el Secretario General, sin menoscabo de su alta jerarquía, simplemente un mandatario: los mandantes son los Estados miembros soberanamente representados en el Consejo Permanente por sus respectivos embajadores. Todo ello se

reflejó en la fallida gestión del señor Gaviria, quien no tuvo interlocutores durante su breve estancia en el Ecuador.

El XVI Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en Washington el 14 de diciembre de 1992, consideró la incorporación, en la Carta de la OEA, de nuevas normas concernientes a la posibilidad de suspender a los Gobiernos de los Estados miembros en que ocurran los hechos previstos en la Resolución 1080 y la necesidad de enfrentar la pobreza crítica en la región, una de las amenazas más graves y preocupantes que pesan sobre la democracia. El Protocolo de Washington agregó un nuevo artículo al Capítulo III de la Carta para introducir la mencionada reforma de suspensión. Según el nuevo artículo 9, “Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas...”. La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado. La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por la Asamblea General, que podrá levantarla por decisión adoptada con la aprobación de los dos tercios de los Estados miembros.

Para la inserción del tema de la pobreza crítica se reformaron varios artículos de la Carta (2, 3, 33 y 116). Se señala entre los propósitos esenciales de la OEA “Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio”. Y se añade que “la eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos”. Es que la severidad de la pobreza ha provocado en los sectores populares desaliento y cuestionamientos al liderazgo político tradicional y a los partidos políticos, por la insatisfacción de sus expectativas como corolario del incumplimiento de las promesas electorales. Se ha llegado incluso a cuestionar la legitimidad del sistema democrático en los campos económico y social, por sus limitados logros en esas áreas, dando paso a veces a evocaciones nostálgicas de regímenes autoritarios que en su hora tuvieron mejor fortuna al encarar ciertas demandas popula-



El Secretario General de la OEA, Embajador Joao Baena Soares, y el Embajador Miguel A Vasco suscriben una convención interamericana en la cual es parte el Ecuador

res. Tal conducta se nutre, por supuesto, de un sofisma ilusorio, porque la democracia a pesar de sus tropiezos es el sistema capaz de ofrecer desarrollo integral, libertad con justicia social y respeto a los derechos humanos. Convendría señalar que la pobreza crítica por sí misma no constituye amenaza para la democracia sino las causas que la generan, como la inequidad social y los vicios de la distribución del ingreso nacional, que favorecen a privilegiados grupos de poder o de presión en perjuicio del bien común, lo cual genera obvias tensiones sociales.

En el marco de los esfuerzos institucionales de apoyo a los procesos democráticos, se estableció la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), en virtud de una resolución adoptada por la Asamblea General de Asunción (1990). La Unidad desarrolla su agenda de actividades en ejecución de un programa de apoyo propuesto por el Secretario General de la OEA al Consejo Permanente, que constituye el marco conceptual para sus tareas de asesoramiento y asistencia. En el amplio espectro de sus tareas figura la instauración de un Foro para la Democracia, en la sede de la OEA; la concesión de becas para estudios sobre democracia; el establecimiento de un centro de información y documentación y varias misiones de asesoramiento, a solicitud de los Estados miembros.

Las actividades de la UPD, en los primeros años, se han desarrollado fundamentalmente en torno al monitoreo electoral, área en la cual ha adquirido valiosas experiencias y prestigio. Ha trabajado también en el apoyo a instituciones legislativas, en algunas actividades educativas y en proyectos de investigación. Desde la sede, en la Secretaría General de la OEA, ha empezado a desarrollar tareas de diálogo público sobre democracia y a organizar un servicio de información. Se han diseñado cuatro áreas programáticas para la acción de la Unidad: 1) Fortalecimiento de instituciones y procesos democráticos; 2) Fortalecimiento de procesos e instituciones electorales; 3) Estudios sobre la democracia; y, 4) Información y promoción del diálogo.

El área de fortalecimiento de instituciones y procesos democráticos, en síntesis, se encarga de prestar servicios, a pedido de los países miembros, en temas de cambio constitucional, gobernabilidad en sus diferentes aspectos, reforma y modernización del estado, reconciliación nacional, educación democrática, participación ciudadana, entre otros. En el área de fortalecimiento de procesos e instituciones electorales la Unidad propende a la consolidación de las instituciones electorales y a

dinamizar la colaboración y el intercambio técnico y de experiencias sobre procedimientos y tecnologías electorales entre los países miembros.

El área de estudios sobre la democracia se encarga de promover los estudios y la investigación aplicada en materia de fortalecimiento y defensa del sistema democrático. En cuanto a información y promoción del diálogo, la UPD recoge, procesa y suministra información oportuna y de calidad a la Organización y al Secretariado, en torno al acontecer en los Estados miembros.

Todos los esfuerzos mencionados anteriormente culminaron con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en la Asamblea General reunida en Lima en septiembre de 2001. Este instrumento consolida los diversos acuerdos aprobados sobre la materia en el marco de la OEA y los refuerza para estimular la defensa activa de la democracia representativa. La Carta se compone de cinco capítulos: I) La democracia y el sistema interamericano; II) La democracia y los derechos humanos; III) Mecanismo de fortalecimiento y defensa de la democracia; IV) La democracia y las misiones de observación electoral; y, V) La promoción de la democracia. En el capítulo tercero figura la “Cláusula democrática”, que se conecta con la Resolución 1080 y con el Protocolo de Washington, mencionados anteriormente, concernientes a la alteración o ruptura institucional del orden democrático de un Estado miembro de la OEA y la exclusión de su gobierno de la participación en los órganos del sistema.

Como se puede apreciar, la Organización de Estados Americanos es sin duda la única entidad en el mundo que otorga a la democracia representativa un papel tan relevante y, por ello, ha dedicado especiales esfuerzos para lograr su afirmación en el hemisferio. En la actualidad, la OEA aparece virtualmente como una asociación de Estados democráticos. Conviene advertir, sin embargo, que el ejercicio efectivo de la democracia representativa no configura una obligación legal o un precepto obligatorio para los Estados miembros del sistema interamericano sino una norma programática, una meta deseable y permanente. Es que la democracia plena –con contenido político y social– es el sistema que abre cauces a “la misión histórica de América de ofrecer al hombre una tierra de libertad y de ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones”, conforme lo expresa la Carta. Huelga ponderar, por cierto, la singular responsabilidad que asumen los líderes políticos que acceden al ejercicio del poder a través

de la voluntad popular libremente expresada en las urnas: su reto consiste no en ganar elecciones cíclicas sino en servir a los altos y permanentes intereses de la comunidad nacional, con transparencia ética y responsabilidad, haciendo de la democracia representativa un estilo de vida en el cual el hombre sea el centro de atención del sistema, con su dignidad y sus sueños, con sus derechos fundamentales respetados, con sus expectativas esenciales en espera de una bien entendida equidad social.

Tal vez convenga precisar, a pesar de todo lo dicho, que la OEA cumple una suerte de papel mediático y no es responsable del éxito o del fracaso de la democracia representativa al interior de los Estados miembros, porque se trata de un proceso interno construido por los respectivos pueblos, que el sistema interamericano respalda con firmeza y vela por su promoción y defensa. O sea que las peripecias y vicisitudes de la institucionalidad democrática en la región no son imputables a la OEA, sino a la conducta de los pueblos y, sobre todo, de los dirigentes políticos y de los partidos, que no siempre se comprometen con los auténticos anhelos de la sociedad sino con grupos de presión y de interés, como ocurre especialmente en los populismos, cuyo discurso mesiánico y engañoso vulnera la esperanza del ciudadano común con un elenco de promesas incumplidas.

Es del caso resaltar también que la democracia moderna, si bien procede de la matriz helénica, no es igual a ella por razones obvias. En efecto, el tratadista italiano Giovanni Sartori lo explica en estos términos: “La democracia moderna es enteramente diferente: no se basa en la participación, sino en la representación; no supone el ejercicio directo del poder, sino la delegación del poder; no es, en resumen, un sistema de autogobierno, sino un sistema de limitación y control del gobierno. En tanto que la democracia griega puede ser definida literalmente como ‘un gobierno del pueblo sobre el pueblo’, en la democracia moderna no se produce esta identidad entre los que gobiernan y los que son gobernados. Debe, por tanto, evitarse el error de creer que la ‘participación electoral’ de nuestros días puede asimilarse a la participación real del ciudadano griego; con mayor motivo, no debe creerse que los diversos mecanismos que integran lo que llamamos ‘democracia directa’ (iniciativa popular, referéndum, etc.) puede colmar el abismo que separa la democracia griega de la actual”.

En definitiva, la Organización de Estados Americanos continuará dedicando atención prioritaria a la consolidación de los procesos de

mocráticos en la región, más allá de sus ritos formales, para que sirvan a los intereses permanentes de los pueblos y atiendan a los requerimientos de formación integral de sus ciudadanos. En ese lento pero firme proceso de reformas institucionales referentes al tema de la democracia me cupo la grata oportunidad de jugar un papel activo en representación del Ecuador.

Hemos descrito en líneas precedentes el tratamiento del tema de la democracia en los últimos lustros. A título informativo conviene recordar que el sistema interamericano se ocupó del asunto en décadas pasadas, aunque sin el enfoque orgánico que se le ha dado en años recientes. Por ejemplo, poco antes del comienzo de la segunda guerra mundial, concretamente en diciembre de 1938, en la VIII Conferencia de Lima se creó un Consejo para Fomento de la Democracia Panamericana, dedicado al fomento de los movimientos democráticos en el Continente, así como a la promoción de la cooperación cultural y económica. En la misma conferencia se aprobó una resolución recomendando “que de acuerdo con sus respectivas legislaciones, los países americanos intensifiquen en sus establecimientos educacionales –primarios, secundarios, profesionales y universitarios– la enseñanza de las doctrinas democráticas, destacando los beneficios obtenidos por sus regímenes de las instituciones en ellas fundadas, en todos los órdenes de la convivencia internacional”. En las Reuniones de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, celebradas al comienzo de la segunda guerra mundial, se habla igualmente de la adhesión de las Repúblicas Americanas al “ideal democrático que prevalece en este Continente”, etc. En la “Declaración de Caracas” (Décima Conferencia, 1954), se reafirman los principios y finalidades del sistema regional, de manera que “constituyan la base de una acción firme y solidaria encaminada a alcanzar en breve plazo la realización efectiva del sistema democrático representativo, el imperio de la justicia y seguridad sociales y de la cooperación económica y cultural esenciales para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del Continente”.

EL CASO DE PANAMÁ

El domingo 7 de mayo de 1989, el pueblo de Panamá participó de una entusiasta y pacífica jornada democrática encaminada a elegir a sus nuevos gobernantes, tras un período en el cual estuvo sometido al

control militar del general Manuel Antonio Noriega. Circuló el rumor de que Noriega llegaría a propiciar un fraude electoral para lograr la victoria de los candidatos que él auspiciaba.

La Organización de Estados Americanos no fue invitada a acreditar observadores en el proceso electoral, pero concurrieron unos 250 observadores internacionales. Entre las personalidades presentes estaban dos ex presidentes de los Estados Unidos, Jimmy Carter y Gerald Ford, así como el entonces Primer Ministro de Belice, George Price. Desde el comienzo del conteo de votos, los observadores internacionales detectaron determinadas irregularidades en el proceso de votación. En el transcurso del lunes 8 de mayo, tanto la Iglesia Católica como la oposición, que habían diseñado un sistema estadístico para la recolección de datos en las mesas electorales, difundieron la información de que había triunfado la Alianza de Oposición Civilista, con un considerable margen a su favor sobre las huestes oficialistas. En la mañana del martes 9, un anuncio semioficial intentó proclamar la victoria de los candidatos de gobierno, en una atmósfera de general incredulidad y de protesta popular. Los medios de comunicación, particularmente la televisión, revelaron escenas dramáticas de la represión desatada por las Fuerzas de Defensa de Noriega una vez producida la derrota oficial en las urnas, lo cual suscitó una repulsa enérgica en la opinión pública internacional.

Un incidente captado por la televisión local arreció las críticas. El señor Guillermo Ford, candidato a la segunda vicepresidencia en la fórmula de Guillermo Endara, candidato presidencial, por la Alianza de Oposición Civilista, fue agredido por un miembro uniformado de las Fuerzas de Defensa cuando encabezaba una manifestación de sus partidarios. La imagen del rostro sangrante del político panameño impactó en el escenario internacional, al tiempo que el general Noriega resolvió que el órgano electoral declarase la nulidad de los comicios que acababa de perder.

El Representante de Venezuela ante la OEA solicitó, el miércoles 11 de mayo, una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, orientada a provocar la convocatoria a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, con carácter urgente, a la luz del artículo 60 de la Carta. Dijo entre otras cosas: “Recurrimos al buen juicio de los honorables colegas, tan informados como yo por las dramáticas escenas que han captado los medios de comunicación social, para que

calibren en toda su intensidad la grave crisis que afecta la paz social del hermano pueblo panameño, como consecuencia del desarrollo electoral, cuyas secuelas posteriores han venido, y continúan, lesionando gravemente los derechos humanos que esta Organización está en el deber de tutelar”.

La XXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA inició sus trabajos a partir del 17 de mayo de 1989, bajo la presidencia del Canciller de Colombia, para examinar la “Grave crisis panameña en su contexto internacional”, y celebró dos sesiones adicionales en julio y agosto de ese año.

En la segunda sesión plenaria se aprobó una resolución por la cual se creó una Misión integrada por los Cancilleres de Ecuador, Diego Cordovez; Mario Palencia, de Guatemala; y Sahadeo Basdeo, de Trinidad y Tobago. Se les encomendó a los cancilleres que, asistidos por el Secretario General, llevaran adelante la misión de “promover urgentemente fórmulas de avenimiento para lograr un acuerdo nacional que asegure, dentro de mecanismos democráticos y en el más breve plazo, la transferencia del poder con el pleno respeto de la voluntad soberana del pueblo panameño”. En la misma resolución se exhortó a todos los Estados a abstenerse de cualquier acción que atentase contra el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados y se acordó mantener abierta la Reunión de Consulta en tanto subsistiera la situación de crisis en Panamá. La Misión que viajó a Panamá presentó el 6 de junio su informe a la Reunión de Consulta, la cual tomó nota de lo actuado y prolongó el mandato de la Misión, a la que le solicitó que le informara nuevamente sobre el curso de los acontecimientos antes del 19 de julio, fecha de reanudación de la Reunión.

En la sesión del 19 de julio se recibió el tercer informe del Relator de la Comisión General, en el cual se dejaba constancia de que ésta consideró el informe de la Misión designada por la Reunión de Consulta, luego de su visita a Panamá. En la misma sesión se aprobó una Declaración del Presidente de la Reunión por la que pedía a dicha Misión que continuase su colaboración durante el proceso de negociación y que asistiese a las Partes en el desarrollo de ese proceso, para que asegurase, por medios democráticos, la transferencia del poder el 10. de setiembre de 1989.

En la sesión del 23 de agosto la Reunión de Consulta recibió un nuevo informe de la Misión de la OEA acerca de la cuarta y quinta vi-

sitas a Panamá. La Declaración del Presidente de la Reunión, aprobada en esa misma sesión, consignó la profunda preocupación porque los participantes del diálogo político en Panamá no hubiesen encontrado todavía una solución a la crisis de ese país y reafirmó la necesidad de que se asegurase la vigencia de los principios democráticos en el libre ejercicio de la soberanía y autodeterminación del pueblo panameño. Se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice, con la venia del Gobierno panameño, una nueva visita a Panamá para completar y actualizar la información sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Se acordó, finalmente, mantener abierta la XXI Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA.

El Secretario General, Baena Soares, resume así la situación planteada: “Los Cancilleres habían condenado enérgicamente los abusos de Noriega en el proceso electoral y, también en la Resolución I, habían advertido que la crisis panameña se agravaba rápidamente y podría poner en peligro la paz y seguridad internacionales. No faltaron las exhortaciones públicas y privadas al gobierno y al propio general para que restablecieran los derechos que ellos habían vulnerado seriamente. Varios países retiraron a sus Embajadores, interrumpieron el comercio y adoptaron otras medidas. El rechazo de la comunidad interamericana fue claro. Todo ello no fue suficiente para que los que detentaban el poder enmendaran el rumbo, y los acontecimientos siguieron desarrollándose, a partir del 24 de agosto, con una especie de impulso fatal”.

El día 3 de octubre, unos 200 miembros de las Fuerzas de Defensa atacaron su propio cuartel general, donde se encontraba Noriega, en el centro de la capital. Al fracasar el intento fueron ejecutados varios de sus cabecillas. Esa acción destruyó el mito de la cohesión castrense, pero el hombre fuerte no fue removido del poder.

En la madrugada del 20 de diciembre de 1989, efectivos militares de los Estados Unidos invadieron a Panamá. Ese mismo día, Guillermo Endara Galimany prestó juramento como Presidente de la República. El general Noriega, refugiado en la Nunciatura Apostólica, se entregó a las tropas americanas y fue trasladado a Miami, donde cumple actualmente una sentencia por delito de narcotráfico, después de haber prestado estimables servicios a la CIA. El Consejo Permanente de la OEA, en sesión de 22 de diciembre, resolvió: “Deplorar profundamente la intervención militar en Panamá”.

EL CASO DE HAITÍ

El padre Jean-Bertrand Aristide, presidente de Haití, fue en su momento uno de los beneficiarios de la acción de la comunidad interamericana en defensa de la democracia. En efecto, la OEA colaboró con Aristide desde la instalación de su gobierno y le ofreció todo su apoyo político cuando los militares lo derrocaron la primera vez. En realidad ese respaldo institucional se hizo presente aun antes de su acceso al poder, pues apenas tres semanas después de las elecciones del 16 de diciembre de 1990, en que resultó victorioso, hubo un intento de golpe de estado. Un grupo de hombres armados intentó derrocar a la Presidenta Ertha Pascal Trouillot, bajo el liderazgo de Roger Lafontant, ex – Ministro del Interior y Defensa del dictador Duvalier. Los sublevados capturaron a la Presidenta el 7 de enero de 1991, en su residencia particular, y la condujeron al Palacio presidencial, donde la obligaron a anunciar por televisión la renuncia a su cargo. Poco después, Lafontant anunciaba ante los medios de comunicación que asumía el poder como presidente provisional “para traer paz al país tras las elecciones fraudulentas del 16 de diciembre”.

La asonada mereció el repudio de la comunidad internacional. El Consejo Permanente de la OEA se reunió inmediatamente y aprobó la resolución titulada “Respaldo al proceso democrático de Haití”, en la cual condenó el intento de ruptura del orden constitucional, respaldó al gobierno provisional de Pascal-Trouillot y al proceso democrático en marcha. La intentona fue dominada y un mes después tuvo lugar la toma de posesión de Aristide. Me fue grato representar al Presidente Rodrigo Borja en las ceremonias de inauguración del mandato de su homólogo haitiano.

Conviene recordar que Aristide triunfó ampliamente en las elecciones presidenciales de 1990 y que la inauguración de su mandato constituyó un delirio colectivo del pueblo, que celebraba su naciente democracia como una vivencia exótica y novedosa. Era la primera vez que los haitianos experimentaban un proceso de esas características. Por eso aclamaban a su líder, un pequeño sacerdote salesiano henchido de carisma, como si se tratase de un personaje tocado por la gracia de los milagros. La reacción popular era, pues, explicable en un país que no había conocido la institucionalidad democrática sino una sucesión de pronunciamientos militares y un siniestro régimen autocrático

transmitido de padre a hijo (Papa Doc y Baby Doc). Francois Duvalier accedió al poder en 1957 y en 1964 se proclamó presidente vitalicio mediante un referendo truculento en el cual los votos afirmativos superaban el ciento por ciento del electorado. En 1971, poco antes de su muerte, designó a su hijo Jean Claude para sucederle en la jefatura de Estado, también como presidente vitalicio, continuando así un modelo político de tropelías y desmesuras con violaciones aberrantes de los derechos humanos.

El presidente Aristide, el día de su posesión, destituyó a la cúpula militar y pocos meses después la reacción castrense lo echó del poder. Las instancias institucionales de la OEA entraron en acción para reinstalarlo en la presidencia, aunque sin éxito, porque la Carta de la OEA no contaba con mecanismos coercitivos expeditos. Estados Unidos propició el traslado del tema al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se calificó a Haití de amenaza a la paz y la seguridad internacionales, abriendo cauces a la intervención foránea para el retorno de Aristide en 1994.

Pero veamos cómo actuó la OEA en respaldo del mandatario haitiano. Atendiendo al mandato que le confiriera la Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la resolución MRE-/RES. 2/91, el Secretario General, embajador Joao Baena Soares, mantuvo activa comunicación con instituciones políticas democráticamente constituidas y otros sectores de Haití, para promover un diálogo que condujera al restablecimiento del orden institucional democrático y al retorno del Presidente Aristide a sus funciones constitucionales. El Secretario General apoyó las medidas para fortalecer la aplicación de las recomendaciones de la Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores; mantuvo la exigencia del respeto a la integridad y seguridad personales de los haitianos; y estimuló la provisión y coordinación de ayuda humanitaria. De todas estas acciones nos mantuvo informados a los miembros del Consejo Permanente.

Con la cooperación del doctor Augusto Ramírez Ocampo, de Colombia, a quien había designado su Representante Personal, el Secretario General dedicó esfuerzos orientados a facilitar las negociaciones entre los haitianos para encontrar una solución política, dentro de las normas de la Constitución de Haití, a la crisis que afectaba al país. Esas acciones condujeron a la firma, con el auspicio de la OEA, del Protocolo de Washington, el 23 de febrero de 1992, entre el Presidente

Aristide y parlamentarios haitianos, así como de un Protocolo de Entendimiento entre el Presidente Aristide y el Primer Ministro designado René Théodore, instrumentos a partir de los cuales habría sido posible arribar a un desenlace positivo de la situación. Pero las cláusulas incorporadas en el Protocolo no fueron puestas en práctica. En agosto el Secretario General visitó Haití, junto con varios representantes de los Estados miembros de la OEA y de organismos internacionales, para hacer nuevos contactos con sectores de ese país y facilitar el diálogo político entre ellos, con miras al restablecimiento de la institucionalidad democrática. Al término de varias reuniones mantenidas en Washington con representantes del Presidente Aristide, Baena Soares reveló el 4 de setiembre que los haitianos no lograron una convergencia que se expresase en resultados concretos, pero en todo caso quedó abierto un canal de comunicación.

Como resultado de las citadas conversaciones, el 16 de setiembre partió a Haití el primer grupo de integrantes de la misión civil de la OEA, integrado por ciudadanos de varios Estados miembros, para procurar disminuir el nivel de la violencia y coordinar la recepción y distribución de ayuda humanitaria.

El 13 de diciembre de 1992, la Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores sesionó en la sede de la OEA y aprobó la Resolución MRE/RES 4/920, sobre “Reanudación de la Democracia en Haití”, en la cual instó a los Estados miembros de la OEA y de la ONU a adoptar, con urgencia, las disposiciones internas que permitieran la plena aplicación de las medidas acordadas. En tal oportunidad se dio un mandato al Secretario General para que extremase acciones dentro de la Carta en procura de una solución pacífica de la crisis haitiana y para que, en contacto con el Secretario General de la ONU, explorase la posibilidad y conveniencia de llevar la situación haitiana al conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lograr la aplicación universal del embargo comercial recomendado por la OEA. En cumplimiento del mandato emanado de dicha Resolución, Baena Soares se reunió el 21 de diciembre con el Secretario General de las Naciones Unidas para coordinar esfuerzos adicionales orientados a facilitar el diálogo político entre las partes en conflicto. Anteriormente tomó contacto con su Enviado Especial para Haití, doctor Dante Caputo, quien aceptó asumir también la representación del Secretario General de la OEA. Mientras se armonizaban acciones entre la OEA y

la ONU, el gobierno de facto de Haití había decidido llamar a elecciones para renovar parte del parlamento haitiano, acción que el Consejo Permanente de la OEA rechazó al ser informado del particular por Baena Soares.

En todo caso, la tarea de la OEA en el período transcurrido desde el golpe de estado en Haití había ayudado a establecer en forma gradual condiciones que permitieran a los haitianos encontrar una salida negociada a la crisis y acceder, una vez restablecido el orden institucional, al apoyo internacional para su frágil economía.

Después de su regreso a la presidencia, Aristide ejerció el poder y fue ungido con la reelección. Pero con el transcurso del tiempo había caído en las tentaciones de un populismo amorfo, caracterizado por el predominio de antivalores en una atmósfera de corrupción galopante. Aun países como Estados Unidos, Francia y Canadá, que le habían brindado significativa cooperación para el buen gobierno, le retiraron su apoyo y coadyuvaron para su exilio en el 2004.

Ante la incoherencia entre las frondosas ofertas electorales y su habitual incumplimiento, el pueblo haitiano expresó en las calles su general repulsa. Aristide dejó un país entrampado en la miseria y el caos. El tiranuelo con rango vitalicio, Baby Doc, divulgó su deseo de volver a Haití, desde su dorado exilio en Francia. He ahí un cuadro patético generado por quienes no han sabido manejar los instrumentos de la democracia, en función del bien común.

EL CASO DEL PERÚ

El Presidente Alberto Fujimori, electo en comicios democráticos en 1990, dio un autogolpe el 5 de abril de 1992, disolvió el Congreso e intervino los poderes del Estado peruano. Según Valentín Paniagua Corazao, “El 5 de abril de 1992 se instauró formalmente en el Perú un militarismo corporativo que asocia a las Fuerzas Armadas, a los empresarios, en general, y, de modo especial, a las empresas propietarias de los medios de comunicación y a las empresas de investigación y mercados ya que privilegia el uso de unos y otros para facilitar la manipulación de la opinión pública”. Para los analistas políticos, el golpe de Estado fue el punto de partida de un proceso de copamiento de las instituciones y de progresivo resquebrajamiento del sistema democrático en el Perú.

Con arreglo al procedimiento previsto en la resolución 1080 (XXI-0/91) de la Asamblea General, el Consejo Permanente de la Organización, mediante resolución CP/RES.579(897/92) del 6 de abril de 1992, convocó una Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores sobre el Perú, en la sede de la OEA. Por mandato de la Reunión, el Secretario General acompañó al Canciller de Uruguay, doctor Héctor Gros Espiell, Presidente de la Reunión ad-hoc, junto con otros Cancilleres por él designados, con el fin de iniciar en el Perú gestiones tendientes a facilitar el compromiso entre las partes para el restablecimiento del orden institucional democrático. Después de la celebración de la Reunión ad-hoc, el Consejo Permanente fue informado sobre el resultado de esa misión. En otra oportunidad, el Consejo escuchó la exposición del Secretario General en torno a las decisiones adoptadas por el Gobierno del Perú respecto al proceso electoral a celebrarse en ese país y la participación de la misión de observación electoral de la OEA en tal evento.

El Consejo Permanente resolvió dejar a discreción del Secretario General, en consulta con el Presidente de la Reunión, la determinación del momento en que debería hacerse presente en el Perú la Misión de observación y asistencia electoral. En una sesión ulterior, el Secretario General informó que había enviado a Lima una misión de observación electoral y asistencia al Jurado Nacional de Elecciones, y formuló un llamado a los Estados miembros y Observadores permanentes en el sentido de que contribuyeran con recursos de personal, material y financiero.

En respuesta a las decisiones de los representantes de los Estados Americanos, el Presidente Fujimori solicitó ser recibido por la sesión de la Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, que tuvo lugar en las Bahamas el 18 de mayo. En esa ocasión, se comprometió ante el pueblo peruano y ante los Estados Americanos a convocar de inmediato elecciones de un Congreso Constituyente para instaurar de nuevo el ejercicio de la democracia en su país. Manifestó también que requeriría la presencia de una misión de observación electoral de la OEA en el proceso de elecciones del Congreso Constituyente.

Vale la pena reproducir este párrafo del discurso de Fujimori, pronunciado ante la Reunión ad hoc de Cancilleres: “Mi presencia aquí es, supongo, una sorpresa para todos ustedes. Pido disculpas a esta ilustre Asamblea por ello y dejo sentado que no ha sido mi intención alte-

rar su desenvolvimiento normal. Pero en vista de la trascendental importancia que ella tiene para el Perú, he querido utilizar este elevado foro de manera inédita en toda la historia de la OEA para ofrecer con mi presencia la garantía del sólido compromiso que ha adquirido mi Gobierno con el pueblo peruano y con el Hemisferio, respecto de un retorno a la institucionalidad de mi país”. Acto seguido relató lo ocurrido en los doce años anteriores, durante los cuales la violencia y el terror habían producido 22.000 muertos y más de 20.000 millones de dólares en daños materiales. Manifestó que el pueblo peruano tenía fe en la democracia y por eso había expresado su repulsa al terrorismo en 1990. Agregó que las medidas adoptadas el 5 de abril se orientaban a superar una catástrofe social y política de gran envergadura. Concluyó su intervención invitando a la Organización de Estados Americanos “a que participe con nosotros en este proceso a fin de supervisar el tránsito a la plena democracia reclamado por el pueblo del Perú. Por eso, también solicitamos el asesoramiento internacional en materia electoral, la asistencia técnica de la OEA y la presencia, en todos los actos, de observadores de esta Organización”.

El 30 de mayo, el Canciller Héctor Gros Espiell y el Secretario General visitaron nuevamente al Perú, para promover el diálogo nacional. Coincidiendo con esa visita, el Gobierno del Perú convocó a elecciones para un Congreso Constituyente el 22 de noviembre.

Tras observar con la mayor atención la evolución de la situación política en el Perú, se decidió establecer oportunamente la misión de observación electoral solicitada por el Gobierno peruano, en el convencimiento de que la consulta popular constituiría, en tanto expresara fielmente la voluntad del pueblo peruano, el presupuesto ineludible para la restauración de la legitimidad constitucional.

El 14 de diciembre se realizó una nueva Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, en la sede de la OEA, a la cual rindió detallado informe el Secretario General sobre la observación electoral de la OEA en el Perú, practicada por 228 observadores, entre quienes figuraban como invitados especiales distinguidas personalidades del hemisferio. La observación electoral fue amplia y objetiva y pudo verificar que el proceso se realizó en forma regular. Los Ministros de Relaciones Exteriores declararon que con la instalación del Congreso Constituyente Democrático –realizada el 30 de diciembre– quedaría clausurada la Reunión ad-hoc. Reafirmaron, al propio tiempo, la disposición

de seguir prestando, en el marco de la OEA y a tono con la evolución de la situación en el Perú, su cooperación para el afianzamiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos. Solicitaron, finalmente, al Gobierno del Perú, mantener informados a los Estados miembros de la marcha evolutiva del proceso de restablecimiento democrático.

El Presidente Fujimori, como se sabe, gobernó el Perú hasta el año 2000, y al intentar alcanzar su segunda reelección se vio envuelto en un tinglado escandaloso que le alejó del poder y le obligó a refugiarse en el Japón.

DERECHOS HUMANOS

Uno de los mejores logros de la OEA es el sistema interamericano de derechos humanos, organizado con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1975) y que cuenta con la Comisión y la Corte para su aplicación, conforme vimos anteriormente. En ese ámbito no sólo se conoce del cumplimiento de los compromisos contraídos en la materia por los Estados miembros sino que surgen iniciativas para negociar instrumentos conexos con el tema de los derechos humanos. Tal fue el caso de la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas.

Dicho instrumento surgió en respuesta a las crueles y censurables experiencias que se dieron en el sombrío período dictatorial latinoamericano, sobre todo en los países del cono sur, y por el hecho de que subsiste esa violación de los derechos humanos. Por la delicadeza del asunto, la negociación del texto tomó largo tiempo. El 30 de julio de 1991, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos reintegró un Grupo de Trabajo para que continúe con el estudio del proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El Grupo quedó integrado por las misiones permanentes de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se me confirió la distinción de ser elegido Presidente del Grupo de Trabajo, que venía de laborar desde agosto de 1990, con base en el proyecto de Convención preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comen-

tarios y observaciones presentados por los Gobiernos de los Estados miembros. Bajo mi presidencia, el Grupo alcanzó a aprobar, en primera lectura, los 27 artículos del proyecto, antes de la celebración de la Asamblea General de 1992, y así se le informó a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Dada la naturaleza y complejidad del tema, se amplió el mandato conferido al Consejo Permanente hasta que se arribe a la aprobación definitiva del texto. La Convención fue adoptada en la Asamblea General de Belem do Pará, en junio de 1994.

Se considera que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad y una afrenta a la conciencia del Hemisferio, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Carta de la OEA. La definición de este grave delito figura en el artículo 2 del instrumento: “Para los efectos de la presente Convención, se considerará desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Conviene anotar también que la desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de la extradición. La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado celebrado entre los Estados Partes sobre esta materia.

Por lo que atañe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debo decir que acudí a ella un par de veces en 1987 para desvirtuar las acusaciones planteadas en su seno por una presunta violación de derechos humanos en el Ecuador. Se presentó un caso específico en la persona del señor Masaquiza, miembro de una comunidad indígena de la provincia de Tungurahua. Concretamente, dos jóvenes que habían penetrado una noche en esa comunidad, al parecer para cometer hurto, fueron muertos por la acción represiva de los indígenas. Cuando se hicieron presentes las autoridades respectivas para identificar a los autores de los homicidios se produjo una reacción colectiva al estilo de Fuenteovejuna: todos a una respondían que nadie sabía nada de lo ocurrido. Entiendo que el señor Masaquiza ejercía un cierto liderazgo en la comunidad y por esa causa se lo aprehendió y se lo condujo a la cárcel

en la ciudad de Ambato. Esta actitud de las autoridades locales fue considerada violatoria de los derechos humanos del detenido por unas personas que militan en este tipo de causas. Lo curioso es que no fueron ecuatorianos los que llevaron la denuncia a la Comisión sino unos docentes de universidades estadounidenses porque, según la normativa que regula su funcionamiento, cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental debidamente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado Parte. Una de las profesoras universitarias había tenido la prolijidad de viajar hasta Ambato para entrevistarse con el señor Masaquiza y obtener información de primera mano, según me reveló personalmente. El hecho es que el Gobierno del Ecuador, hasta que concluí mi función en Washington, no figuró en el informe anual de la Comisión, donde constan aquellos gobiernos que han violado derechos humanos. Hay que aclarar, sin embargo, que para esa calificación no bastan las prácticas de abusos de autoridad por funcionarios subalternos sino la instalación de una política gubernativa violatoria de aquellos derechos.

A propósito de los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conviene tener en cuenta que, a pesar de no existir una instancia internacional superior a la soberanía de los Estados, éstos se someten, en razón de la materia, a una tarea de control por los organismos internacionales competentes como resultado de los compromisos libremente asumidos en tal sentido.

CENTENARIO DE JUAN MONTALVO

Con oportunidad del centenario del fallecimiento del ilustre escritor ecuatoriano Juan Montalvo, gestioné la celebración de una sesión especial de homenaje del Consejo Permanente de la OEA. En mi calidad de Embajador del Ecuador pronuncié un discurso alusivo a la fecha y el Consejo aprobó una expresiva resolución conmemorativa.

Estas fueron mis palabras de homenaje a Montalvo:

“Juan Montalvo, el más alto exponente de las letras ecuatorianas y una de las figuras cumbres de la cultura de Hispanoamérica, fue un artífice de la palabra escrita, dueño y señor de la lengua de Castilla por estos

pagos de América, emparentado en abolengo espiritual con Bello, Sarmiento, Martí, Darío y Rodó. Acuña las palabras con los más finos resplandores para dar cabal expresión a su pensamiento humanístico, vertido en los más diversos géneros; pero las burilaba también con agudas aristas de diamantes idiomáticos, cuando quería herir a la tiranía o a la injusticia, a los déspotas o a los arbitrarios, siempre en defensa de la libertad, de la independencia, de la justicia, de los derechos fundamentales del hombre o de las instituciones republicanas, que fueron el norte en su lucha sin tregua. Era tanta la pasión que ponía en su combate al despotismo —desde su perspectiva de artista, pensador y político— que la grandeza y la esencia de su ejercicio literario están especialmente en la polémica: en estilo inigualado, su diatriba lacerante cobró rango estético.

Su producción literaria se expresa en el ensayo, la novela, el drama, el periodismo, la poesía. Pero es el primer género citado donde la obra de Montalvo alcanza su mayor relieve y trascendencia, tanto que se lo considera el fundador del ensayo moderno en lengua castellana. Sus obras más conocidas: 'El Cosmopolita', 'Siete Tratados', 'Las Catilinarias', 'Capítulos que se le olvidaron a Cervantes', 'El Espectador' y 'El Regenerador'. Características predominantes en todas ellas: una extraordinaria erudición clásica y primor lingüístico muchas veces arcaizante, de pura cepa española y americana.

Creador singular en el campo de las letras, Montalvo fue al mismo tiempo un virulento combatiente político liberal, no en la acción directa sino en la más temible de su acerada pluma, en respuesta necesaria a la convulsionada vida política y social de su época. Su actitud de lucha le condujo a históricas confrontaciones, fundamentalmente con García Moreno, tirano ilustre, y el general Ignacio de Veintemilla, con los consiguientes destierros y la secuela de dolorosas privaciones lejos de la patria, factores que exacerbaron su creación intelectual. Montalvo estuvo tan comprometido en la oposición al despotismo político que al conocer la noticia del asesinato de García Moreno, ocurrido en el Palacio Nacional el 6 de agosto de 1875, legó a la historia su conocida exclamación: 'Mía es la gloria. Mi pluma lo mató'. La respuesta vitriólica del combativo escritor a la persecución de Veintemilla se concretó en 'Las Catilinarias', obra de título ciceroniano y de tono polémico devastador, que pone al descubierto, a través de su país, una parte de la realidad hispanoamericana de su tiempo y fustiga los excesos y vicios del poder. Es extensa la nómina de altos exponentes de la cultura de América y España que han hecho estudios específicos o han emitido juicios de valor sobre Montalvo y su producción literaria. Uno de sus primeros exége-

tas fue el eminente uruguayo José Enrique Rodó, quien ya en 1907 preparaba uno de sus insuperables ensayos y en 1913 publicaba 'El Mirador de Próspero'. Para Rodó, Montalvo es ante todo un escritor americano, integrante de la galería selecta de 'ciudadanos de la intelectualidad americana', que ningún país puede considerarlos como exclusivamente suyos.

En su purismo idiomático, deliberadamente barroco, Montalvo buscó aproximarse a los maestros españoles de la Edad de Oro, especialmente al inmortal Manco de Lepanto en los 'Capítulos que se le olvidaron a Cervantes', afortunada imitación de una obra inimitable. Pero se diría que el insigne prosador y hablista ecuatoriano se identificó más con el Quijote que con Cervantes. Por eso el recuerdo y la presencia de Montalvo no tendrán ocaso en la geografía espiritual que cultive la lengua y la filosofía del Quijote.

Juan Montalvo nació en Ambato en 1832, casi al mismo tiempo que la República del Ecuador como Estado independiente, y falleció en París en enero de 1889".

La resolución que aprobó el Consejo Permanente de la OEA dice así:

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

CONSIDERANDO:

Que el 17 de enero de 1989 se conmemora el primer centenario de la muerte de Don Juan Montalvo, eminente escritor ecuatoriano y uno de los más preclaros pensadores y defensores americanos de las libertades ciudadanas y las instituciones democráticas;

Que Don Juan Montalvo fue un fervoroso continuador del ideal del Libertador Simón Bolívar y dedicó su vida y sus obras a la conquista en América de la verdadera independencia de los pueblos, a la implantación de regímenes auténticamente democráticos y a propugnar la unidad latinoamericana;

Que Don Juan Montalvo como prosista refinado y polemista insigne ocupa un lugar prominente en las letras continentales, y su pensamiento orientador inspira a quienes luchan por la paz, la justicia y una solidaridad genuinamente americana;

Que es deber del Consejo Permanente honrar y enaltecer la memoria de los americanos ilustres, exaltando su obra y reconociendo la vigencia de los principios que defendieron;

RESUELVE:

1. Rendir homenaje de admiración y reconocimiento a Don Juan Montalvo, ilustre repúblico y gloria de las letras ecuatorianas y americanas.
2. Asociarse a las celebraciones que el Gobierno del Ecuador le tributa en el primer centenario de su muerte.

QUINTO CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

Con oportunidad de la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América: Encuentro de dos Mundos, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizó el 12 de Octubre de 1992 una sesión especial de homenaje a la fecha. Se me confirió el honor de ser el representante electo para pronunciar el discurso de orden.

Estas fueron mis palabras en esa solemne ocasión:

“Es altamente significativa la ceremonia que nos congrega hoy para conmemorar el Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, hecho histórico que cambió la concepción planetaria y el rumbo de la humanidad. En efecto, ‘el mundo entero se hizo nuevo por obra de América’, en sugestiva frase de Germán Arciniegas.

Una de las características fundamentales del hombre de todos los tiempos ha sido su vocación natural por la aventura del conocimiento. Ha sido constante, por tanto, su indagación de la esencia de las cosas; la búsqueda de explicación a los arcanos del espacio y del tiempo; la exploración del mundo exterior y del universo impalpable; la indagación de sus propias potencias espirituales, en el afán nunca alcanzado de conocerse a sí mismo.

En ese dilatado itinerario que se inicia en los albores de la civilización, el Siglo XV muestra a Europa sacudida por percepciones intuitivas, que venían de tiempo atrás, sobre la forma de la tierra y el contexto global del universo. Para la teoría geocéntrica, el eje del universo era nuestro planeta; para la teoría heliocéntrica, ese rol le correspondía al sol.

En ese marco de contradicciones y de afirmaciones dogmáticas inflexi-

bles, apareció la figura singular de Cristóbal Colón con su convicción de la redondez de la tierra y la certeza de que podía ‘llegar a las Indias por el occidente, atravesando el mar tenebroso’. Sus mentores intelectuales fueron Tolomeo y Plinio, entre otros; pero en él ejerció gran influencia el sabio florentino Toscanelli, ‘profeta de la revolución geográfica’, a juicio de Paolo Emilio Taviani, destacado historiador italiano. Toscanelli le entregó una carta geográfica demostrativa de que Asia está más cerca de Europa de lo que suponía Colón, junto con una exhortación a navegar del levante al poniente para descubrir nuevas rutas.

Con tales antecedentes, recogidos en versión escueta, Colón emprendió su azaroso periplo por las cortes de España y Portugal, logrando vencer la incredulidad y el desinterés de sus interlocutores iniciales, en torno a un proyecto osado y quimérico para sus contemporáneos, solo con la tenacidad de un idealista obsesivo. Por eso Gregorio Marañón prefiere calificar a Colón, no de navegante, sino de poeta profundo, de aquellos que ‘han hecho su poesía con la materia estremecida de su propia existencia y de sus sueños’. Y en esa misma línea de pensamiento, Marañón, al comentar el acuerdo entre los monarcas españoles y Colón para el inicio de la gran empresa, afirma con perspicacia: ‘Este día, en que los reyes de la tierra creyeron en él, fue el día del milagro y no el del descubrimiento. Porque es mucho más difícil que los reyes crean a un poeta, que el que un poeta descubra un nuevo mundo’.

Una vez concluidos los aprestos y acuerdos que la historia recoge y todos recordamos, Colón arribó a costas americanas, que él creía asiáticas, en el contexto de su cosmografía fantástica. Murió convencido de haber llegado a las tierras del Gran Khan, Catay y Cipango: después de haber visitado las Lacayas, las Antillas, Venezuela y la costa occidental del mar Caribe, se aferró siempre a la idea de haber tocado tierras de China y Japón. La vida del gran Almirante genovés estuvo nimbada por el misterio, el esplendor y la tragedia. Conoció los honores y la gloria, pero murió pobre y abandonado en Valladolid. El continente que él había descubierto no lleva su nombre, sino el de una figura menor en el índice onomástico de los protagonistas de la hazaña.

Francisco López de Gomara, en la dedicatoria a Carlos V de su ‘Historia General de las Indias’ (1552), consigna una de las apreciaciones globales más evocadas sobre el trascendente hecho histórico que hoy nos convoca: ‘La mayor cosa después de la creación del mundo sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias, y así, las llaman Nuevo Mundo. Y no tanto le dicen nuevo por ser nuevamente hallado, cuanto por ser grandísimo, y casi tan grande como el viejo, que contiene a Europa, Africa y Asia. También se puede llamar

nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas de las del nuestro....Empero, los hombres son como nosotros....Nunca nación alguna extendió tanto como la española sus costumbres, su lenguaje y armas ni camino tan lejos por mar y tierra....?

En todo caso, correspondió a España la gloria de haber auspiciado una empresa que dilató el horizonte de la geografía y dio un golpe de timón al rumbo de la historia. De modo singular Isabel la Católica, su soberana, quien respaldó la locura visionaria de Colón, tiene grabado su nombre en la estela del tiempo.

En la misma época, osados navegantes de Portugal emprendieron la aventura de dar 'nuevos mundos al mundo', pusieron proa hacia las Indias Occidentales y vieron coronados sus esfuerzos con la incorporación de Brasil al dominio lusitano.

España hace cinco siglos estaba concluyendo la heroica tarea de su unificación nacional con la toma de Granada y la expulsión de los moros, que habían ocupado su territorio durante ocho centurias. Cometió la equivocación histórica de expulsar a los judíos por motivos religiosos. Su densa pluralidad cultural, procedente de las vertientes cristiana, judía y musulmana echó raíces en América, donde estaban en plenitud antiguas culturas aborígenes, como la azteca, la maya o la inca, con sus propias excelencias y peculiaridades que sorprendieron al mundo científico europeo y concitan hasta ahora un renovado interés. Los aztecas y los incas habían alcanzado un estimable grado de conocimientos astronómicos. El testimonio arquitectónico de aztecas y mayas nos habla de su grandeza. La organización social y formas de gobierno de los incas son todavía objeto de estudio. El repertorio de una fina y variada alfarería encontrada en nuestros países; los tejidos que fabricaban; el calendario con que medían el tiempo; sus trabajos en oro, platino, cobre y bronce, son signos evidentes de un desarrollo cultural americano.

En una conmemoración como ésta creo que importa fundamentalmente rescatar el valor y los frutos del diálogo cinco veces centenario de nuestras culturas. Se mezclaron ciertamente pueblos y culturas que dieron origen a su vez a pueblos y culturas con fisonomías propias. En tal contexto, el idioma ha jugado un papel vinculante esencial: por eso, en las evocaciones históricas, junto a la cruz, a la espada y a los esquemas político-administrativos, hay que ubicar la gramática de Nebrija, que apareció en la misma época.

En este punto reproduciré las opiniones de dos figuras destacadas de la intelectualidad española e hispanoamericana. Federico de Onís, en un discurso pronunciado en Nueva York el 12 de Octubre de 1920, dijo: 'La lengua es la sangre espiritual de una raza....Una cultura propia, trans-

mitida por una tradición ininterrumpida y fijada en una lengua, ha sido un lazo de unión mucho más fuerte y esencial que todas las diferencias, al parecer tan hondas, de la sangre’.

El laureado poeta chileno, Pablo Neruda, al hacer un elogio del legado cultural español, tuvo afirmaciones como éstas: ‘Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos....salimos perdiendo...salimos ganando.... se llevaron el oro y nos dejaron el oro....se lo llevaron todo y nos dejaron todo....nos dejaron las palabras’. Bien sabemos que, con oportunidad de las celebraciones del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, se ha producido un amplio debate en nuestro continente, sobre todo en centros académicos y en ámbitos de opinión general, en torno al sentido y connotaciones de tal acontecimiento. Se han vertido opiniones doctas y muy respetables en sentidos contrapuestos, ya que se trata de un proceso histórico que tiene luces perdurables y sombras tenebrosas. En el marco de una realidad contemporánea caracterizada por tan profundos y radicales cambios en el escenario mundial, que nos plantean desafíos inaplazables e incitaciones con respuestas urgentes, acaso la actitud más adecuada sea la de un juicio ponderado y sereno. Más aún, creo que no debemos tomar partido entre el ditirambo o la diatriba, entre la adhesión calurosa o el rechazo tajante. La retórica exaltada debe dar paso a la reflexión y a la asunción de un compromiso solidario para la construcción de un futuro compartido.

Es menester llevar a buen término acciones concretas y prácticas, que privilegien, por ejemplo, soluciones a los acuciantes problemas de los sectores indígenas en nuestro hemisferio. En esa línea de pensamiento, conviene destacar la reciente iniciativa de los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica de crear un Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, mediante la conjunción de esfuerzos de los Estados interesados y de la cooperación internacional. Al dar ese paso, declararon en la Primera Cumbre Iberoamericana de Guadalajara: ‘Reconocemos la inmensa contribución de los pueblos indígenas al desarrollo y la pluralidad de nuestras sociedades y reiteramos nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como nuestra obligación de respetar sus derechos y su identidad cultural’.

Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la II Cumbre Iberoamericana (Madrid, julio de 1992), asistieron a la firma del convenio constitutivo del Fondo Indígena, que tendrá por objetivo general apoyar los procesos de autodesarrollo de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América Latina y del Caribe, reconociendo la inte-

gridad de sus territorios, sus derechos fundamentales y sus características socio-culturales.

El Quinto Centenario encuentra a América con una paradoja evidente: en ella se sitúan la primera potencia del mundo y un conjunto de países de diverso grado de desarrollo. En algunos de ellos, acosados por los rigores de una crisis general, escasean de modo preocupante el alfabeto y el pan. Todos los Estados del continente integran la organización regional más antigua del mundo, en un ejemplo histórico sin paralelo de ordenamiento jurídico de la sociedad internacional, con principios, propósitos y objetivos bien definidos, entre los cuales la democracia, los derechos humanos, el respeto al derecho de gentes, la igualdad soberana, la solución pacífica de controversias, la no intervención en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados, y otros tantos, norman su conducta externa.

El reto planteado a cada uno de nuestros Estados y a la organización regional en su conjunto radica en la necesidad de armonizar estrechamente los esfuerzos encaminados a mejorar la opción de progreso para todos. La misión histórica de América 'es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones', según la Carta constitutiva de la OEA. Propender al estricto y fiel cumplimiento de esa misión histórica es el mejor homenaje que podemos ofrecer a la celebración del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos".

VISITAS PRESIDENCIALES

Varios Jefes de Estado visitaron oficialmente a la Organización de Estados Americanos y fueron recibidos, según la tradición, en el seno del Consejo Permanente, en el curso de una sesión especial. Recuerdo, por ejemplo, que el Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, ya en las postrimerías de su gestión, en 1987, visitó al Consejo Permanente y pronunció un discurso con una visión panorámica de las relaciones interamericanas. El Presidente de la República Argentina, Carlos Saúl Menem; el Presidente del Brasil, Fernando Collor de Mello; el Presidente de Chile, Patricio Aylwin; el Presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, entre otros, igualmente realizaron sendas visitas en el período inicial de sus gestiones gubernativas y pronunciaron discursos de corte americanista.

La presencia del Rey de España, Juan Carlos I, tuvo ciertas peculiaridades en materia de seguridad, porque a los embajadores, de modo inusual, nos sometieron al paso previo por uno de los detectores que ahora están de moda a raíz del atentado del 11 de Setiembre en Nueva York y Washington. Esa práctica existía en la Casa Blanca, pero no en la OEA. Cuando ingresamos al salón e íbamos a ubicarnos en nuestros respectivos lugares, el Embajador de Venezuela me comentó, un tanto molesto, sobre las medidas de seguridad adoptadas en esa oportunidad. ¿Quién le va a matar al Rey de España, que tan buenos servicios le ha prestado a la democracia de su país?, me dijo. Me parece que le han informado al Rey que entre los embajadores hay un Vasco, le respondí en son de broma, con lo cual mi colega recobró su buen ánimo.

BORJA EN LA ASAMBLEA DE LA ONU

A raíz de la tensión producida en las relaciones ecuatoriano-peruanas, en 1991, por la instalación por parte del Perú del destacamento denominado Pachacútec, en una zona que tanto Ecuador como Perú consideraban suya a la luz de las interpretaciones que daban al laudo del árbitro brasileño Capitán de Mar y Guerra Braz Dias de Aguiar, el presidente Rodrigo Borja estimó oportuno hacer una propuesta a nuestro vecino del sur en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Perú había violado unilateralmente un statu quo que se había mantenido por el lapso de quince años al establecer dicho destacamento, en 1987, según advirtieron nuestras Fuerzas Armadas, las mismas que comunicaron a la Cancillería, en enero de 1991, que habían podido confirmar este hecho. Las Fuerzas Armadas decidieron establecer un puesto de vigilancia cerca del citado destacamento y todo ello contribuyó a generar un clima tenso entre los dos países. Los contactos diplomáticos y la acción de los dos cancilleres culminaron con la aprobación de un Acuerdo de Distensión. A pesar de eso, se produjeron unos desarrollos conexos que no contribuyeron a bajar la tensión.

Según manifiesta el canciller Diego Cordovez, “Tal como estaban las cosas en septiembre de 1991, debíamos naturalmente descartar un enfrentamiento armado que, en tales circunstancias, habría sido la única forma de obtener el desplazamiento del destacamento Pachacútec. El presidente Borja decidió entonces que ese era el momento propicio

y oportuno para hacer una nueva invitación al Perú a buscar un arreglo del problema territorial en su conjunto, mediante un método de solución pacífica. Escogió, además, el método que de acuerdo con todos los tratadistas de derecho internacional demuestra, más que ningún otro, la buena fe de quien lo propone, y sugirió que el árbitro que recibiera el encargo fuera el Sumo Pontífice” (“Nuestra Propuesta Inconclusa”, pag. 38).

El presidente del Ecuador, en la sesión de 30 de setiembre de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pronunció un discurso en el cual señaló a la atención de la comunidad internacional la existencia del problema territorial ecuatoriano-peruano. Dijo que este problema conspira contra la seguridad, la paz y la integración regionales y ha producido a lo largo del tiempo tensiones potencialmente peligrosas. Resaltó que desde que asumió la presidencia se empeñó en forjar un clima de distensión y cordialidad con el Perú, que nos permitiera encontrar una solución pacífica a la controversia.

En la parte sustantiva de su intervención, el presidente Borja consignó estos planteamientos:

“Con la autoridad moral que me dan estos antecedentes, con la invariable adhesión de mi país a los principios de la Carta de las Naciones Unidas respecto del arreglo de las controversias internacionales por vías pacíficas, el repudio de las conquistas territoriales hechas por la fuerza y el desconocimiento de la victoria militar como fuente de derecho, invito al Perú, desde la más alta y prestigiosa tribuna que tiene la humanidad, a solucionar pacíficamente nuestro largo problema y nuestra larga controversia territorial por medio del arbitraje del Papa Juan Pablo II.

El arbitraje es uno de los medios pacíficos de solución de las controversias reconocido por el derecho internacional. Demostró su eficacia en la solución del diferendo entre Argentina y Chile, hace no mucho tiempo, con relación a la cuestión de Beagle. El pueblo ecuatoriano y el pueblo peruano, profundamente cristianos, lo acatarían con respeto.

Propongo al Perú vivir en paz y trabajar juntos a favor del desarrollo, la justicia social y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos.

Le convoco a disminuir nuestros gastos militares, a dirigir lo mejor de nuestros esfuerzos, nuestras energías y nuestros recursos financieros hacia las tareas productivas.

Le insto a iniciar una era de paz, de comprensión, de confianza mutua entre nuestros dos países para que, libres del temor de los horrores de la guerra, podamos avanzar juntos por la senda del progreso.

Exhorto al jefe Estado del Perú, y a los jefes de Estado de todos los países sudamericanos, a que declaremos solemnemente zona de paz a nuestra región, desarrollemos en ella un concepto de seguridad democrática que responda al desarrollo económico y humano, que renunciemos al uso y a la amenaza de la fuerza para dirimir nuestros conflictos, que hagamos de las fronteras lugares de encuentro y amistad. Digamos no al armamentismo y no a la nuclearización de Sudamérica.

Esto lo propongo en nombre del derecho, de la justicia y de la paz, que son otros tantos valores de la convivencia civilizada de los hombres”.

El Canciller del Perú, Carlos Torres y Torres Lara, intervino al día siguiente en el mismo foro para expresar que su país no aceptaba la propuesta del Presidente Borja por considerar que el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 es un instrumento jurídico plenamente aplicable, lo que convierte en improcedente la intervención de Su Santidad Juan Pablo II. Y el Presidente del Perú, Alberto Fujimori, dirigió una comunicación al Presidente Borja, con fecha 24 de noviembre, para informarle que presentaría una contrapropuesta “integral” sobre el tema. Ambos mandatarios establecieron un proceso de diálogo a raíz de la reunión presidencial andina, en el mes de diciembre, y de ahí surgió la invitación para la visita de estado que realizara al Ecuador el Presidente Fujimori entre los días 9 y 11 de enero de 1992.

A título meramente informativo, consigno el dato de que en la histórica exposición que hiciera el Presidente Borja en la Asamblea General de la ONU, le acompañamos los tres embajadores acreditados en Estados Unidos: ante la Casa Blanca, ante la Organización de las Naciones Unidas y ante la Organización de los Estados Americanos, Jaime Moncayo, José Ayala Lasso y Miguel A. Vasco, en el orden indicado.

POR LOS CONSEJOS DE LA OEA

Además de las tareas habituales en el Consejo Permanente de la Organización, con una agenda de temas generalmente interesantes, fue una experiencia enriquecedora la incursión en el marco del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) y de sus comisiones.

El CIES, establecido en 1945, pasó a ser uno de los órganos permanentes de la OEA por disposición de la Carta, suscrita en 1948. Este Consejo depende directamente de la Asamblea General y está integrado por un representante permanente de la más alta jerarquía de cada Estado miembro, designado expresamente por su Gobierno respectivo.

El Consejo Económico y Social tiene como finalidad, según el Art. 94 de la Carta, promover la cooperación entre los países americanos, con el objeto de lograr su desarrollo económico y social acelerado.

El Consejo celebra una reunión anual a nivel ministerial y puede, además, realizar reuniones extraordinarias. El CIES tiene dos comisiones: la Comisión Ejecutiva Permanente (CEPCIES) y la Comisión Especial de Consulta y Negociación (CECON).

La CEPCIES, creada originalmente como el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP) en 1963, y reestructurada como CEPCIES, está integrada por un titular designado por cada Estado miembro elegido por el propio Consejo.

La CECON fue creada en febrero de 1970 y tiene la función de servir de instrumento de consulta y negociación entre los Estados Unidos y los demás Estados miembros.

Fui honrado con la elección de Presidente del Consejo Económico y Social para el período de octubre de 1988 a octubre de 1989, así como de Presidente de la CEPCIES, de 1987 a 1988, y Presidente de la CECON de octubre de 1990 a noviembre de 1992. Conviene advertir que en el Protocolo de Managua, aprobado en 1993, se fusionaron el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para dar paso al actual Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), inserto en el Capítulo XIII de la Carta de la OEA. Este cambio estructural revela el propósito de poner énfasis institucional en el ámbito socioeconómico de la Organización, ya que los aspectos políticos y jurídicos han marcado de modo preferente la marcha del sistema. Concretamente, esta reforma de la Carta tiende a incluir el concepto de desarrollo integral como factor que contribuye a la paz, a la armonía social y al fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como a la eliminación de la pobreza extrema como objetivo básico del desarrollo.

Consignemos, finalmente, breves datos sobre la creación de la Comisión Especial de Peajes del Canal de Panamá, en el marco del Consejo Permanente de la OEA, por iniciativa del Ecuador, principal

usuario del Canal en la costa del Pacífico sudamericano por el volumen de sus exportaciones. No hay que olvidar que por el Canal transitan múltiples artículos de distinto orden y género. En el caso de los países de la costa oeste de América del Sur, los recursos naturales constituyen parte importante de sus exportaciones. Por el Canal transitan igualmente productos con alto valor agregado, que reciben el mismo trato que los productos primarios. Lo anterior resulta un evidente subsidio al comercio de bienes con alto valor agregado y un castigo a la exportación de productos primarios, con el agravante que estos últimos tienen mayor implicancia en las respectivas economías nacionales que los primeros.

La importancia del Canal, especialmente para países latinoamericanos con ubicación geográfica en el Pacífico Sur, nos llevó en el pasado a presentar los puntos de vista de nuestros gobiernos respecto a los incrementos registrados en los peajes del Canal, en todos los foros competentes de la OEA: la CECON (Comisión Especial de Consulta y Negociación); el CIES (Consejo Interamericano Económico y Social) y la Asamblea General. Desafortunadamente no tuvimos un éxito concreto en tales presentaciones. Convencidos de que en la OEA debe existir un mecanismo apropiado para la protección de los intereses de los usuarios, solicitamos a la Asamblea General establecer una Comisión Especial sobre los peajes del Canal de Panamá.

La Asamblea General de 1989, acató por consenso ese pedido, mediante su resolución 969 (XIX-0 /89), y encomendó al Consejo Permanente la conformación de esa Comisión. La idea era crear, con carácter permanente, una Comisión Especial al más alto nivel jerárquico de la Organización, que identificase un mecanismo diferente al de las audiencias públicas, a través del cual los países latinoamericanos y del Caribe usuarios del Canal pudieran expresar, en forma oportuna, sus puntos de vista ante nuevas alzas en los peajes. El Consejo, en diciembre de 1989, integró la Comisión con la participación de Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se me confirió la distinción de ser elegido su Presidente.

La Comisión tuvo el encargo, en primer lugar, de sugerir mecanismos apropiados para llevar a cabo sus propósitos. La tarea de la Comisión se orientó especialmente a la modalidad de un mecanismo para tener voz en el proceso de las decisiones sobre modificaciones de

costos del Canal; la revisión de los elementos que configuran dichos costos; elementos relativos a la operación del Canal; y, modalidades de aplicación de aumentos imprescindibles de los peajes. En acatamiento de ese mandato, hubo consenso en la Comisión para el establecimiento de un vínculo institucional con la Comisión del Canal de Panamá y, en ese sentido, aquélla elevó sus sugerencias a la Asamblea General.

La Asamblea General, mediante Resolución 1031 (XX-0/90), reiteró el irrestricto apoyo al cumplimiento de los Tratados del Canal y agradeció la cooperación de las autoridades pertinentes de los Estados Unidos y de Panamá, por la decisión de establecer un comité de operaciones para revisar las políticas sobre peajes. De esa manera, la Asamblea General dispuso que un representante de la Comisión Especial sobre Peajes del Canal de Panamá actuase como coordinador entre los gobiernos de los Estados miembros de la OEA y la Comisión del Canal. Asimismo, se me designó, en mi carácter de Presidente de la Comisión, como coordinador durante el primer período anual.

Hasta aquí los antecedentes de la Comisión establecida por la Asamblea General con el concurso de las autoridades de los dos países directamente involucrados en la administración del Canal de Panamá. Actualmente, como se sabe, la administración corresponde a las autoridades panameñas. En todo caso vale la pena aclarar que el espíritu que animó al desarrollo de las gestiones descritas se cimentó en la consideración de que el Canal de Panamá no debe tomarse como un recurso nacional sino como un servicio a la comunidad internacional.

PROGRAMAS DE DESMINADO

En atención a que existe, según cálculos aproximados, alrededor de un millón de minas antipersonales no desactivadas en todo el territorio de las Américas, particularmente en sus áreas rurales, y de que los programas de desminado en América Central constituyen una prioridad inaplazable, el Consejo Permanente abocó conocimiento del tema, en 1992, y lo elevó a consideración de la Asamblea General de ese año. Es que los campos minados representan una constante amenaza para la seguridad ciudadana de los países de la región y es menester desminar esos campos para rescatarlos como fuente de trabajo y producción para el desarrollo socioeconómico de los pueblos afectados.

Teniendo presentes esas consideraciones y otras conexas, se pensó en solicitar el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa para articular acciones orientadas a llevar a buen término ese proyecto. Mediaba además la circunstancia de que los países centroamericanos afectados por campos minados pidieron a la OEA su colaboración para implantar programas de desminado en sus territorios.

La Secretaría General, en coordinación con su Unidad para la Promoción de la Democracia y la asistencia técnica de la Junta Interamericana de Defensa, realizaron gestiones conducentes a obtener el aporte de varios Estados miembros. En efecto, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos y Uruguay, a la par que países observadores como Alemania, España, Francia, Holanda, Japón, Suecia y otros, ofrecieron su contingente para la ejecución de programas de desminado en Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Posteriormente se incorporó también a esta obra humanitaria la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, países afectados también por esta amenaza letal. Varias Asambleas Generales han hecho seguimiento del tema y han solicitado a los Estados miembros, a los Observadores y a la comunidad internacional en general apoyo financiero para proseguir sin solución de continuidad esta importante obra humanitaria y de seguridad ciudadana.

En conexión con este tema vale la pena señalar que la Organización de las Naciones Unidas ha dedicado especial atención a la lucha contra las minas terrestres, desde la década de los ochenta, porque las decenas de millones de tales artefactos sembrados en más de 70 países del mundo han causado anualmente más de 30 mil muertes o mutilaciones en sectores indefensos de la sociedad civil, como niños, mujeres y ancianos. Ello no obstante, continúan diseminándose esos “asesinos silenciosos” en zonas de conflicto militar. La Asamblea General de la ONU ha planteado, a partir de 1993, una moratoria en la exportación de minas antipersonales. Y, en 1997, los representantes de 120 Estados, reunidos en Ottawa (Canadá), suscribieron la Convención sobre la prohibición del uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de las minas terrestres antipersonales y sobre su destrucción, que constituye el primer acuerdo multilateral de desarme que proscribe el empleo de dicha arma.

FORTALECIMIENTO DE LA OEA

El XVIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en San Salvador del 14 al 19 de noviembre de 1988, aprobó 57 resoluciones, como es usual en ese tipo de reuniones con una amplia agenda de temas a ser considerados. En una de esas resoluciones convocó a una sesión de trabajo de los Ministros de Relaciones Exteriores acerca del papel que le corresponde a la OEA, para lo cual encomendó al Consejo Permanente que emprendiera las tareas preparatorias de dicha reunión, inclusive el análisis de los temas que integrarían la agenda para la acción de la OEA, y le presente un informe con recomendaciones. La reunión de trabajo se realizaría con anterioridad al siguiente período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

La XIX Asamblea General, con estos antecedentes, instruyó al Consejo Permanente para que elabore un Programa de Acción sobre las bases acordadas en la resolución “Fortalecimiento de la OEA”, aprobada por la Reunión de Trabajo de los Ministros de Relaciones Exteriores, tomando en cuenta las observaciones que formulen los gobiernos a la documentación que fue presentada a la citada Reunión de Trabajo. Asimismo, solicitó al Consejo que presente a la Asamblea General en su vigésimo período ordinario de sesiones un informe sobre el Programa de Acción para el Fortalecimiento de la OEA.

El 25 de agosto de 1989, los compañeros representantes en el Consejo Permanente me honraron con la elección de Presidente del Grupo de Trabajo que elaboró los temas sometidos a consideración de la Reunión de Cancilleres. Fue un ejercicio laborioso y muy interesante, pues la preparación de cada tema integrante del Plan de Acción fue confiada a sendas delegaciones latinoamericanas que se ofrecieron a compartir un plan concertado de tareas específicas. Yo diría que, en alguna medida, este esfuerzo comunitario tiene conexión especialmente con las ulteriores reformas institucionales que se instrumentaron en materia de promoción y defensa de la democracia representativa.

El Grupo de Trabajo, en sesión celebrada el 14 de setiembre, aprobó su Plan de Trabajo y la distribución de los diez temas del modo siguiente:

1. Fortalecimiento de la OEA como foro político e instrumento para el entendimiento y la cooperación interamericanos, sobre la

base del libre ejercicio de la diplomacia multilateral (Embajador Miguel A. Vasco, de Ecuador).

2. Derechos Humanos (Embajador Antonio de Icaza, de México).
3. Control del Abuso de Drogas (Sra. Xenia A. Wilkinson, de Estados Unidos).
4. Financiamiento para el desarrollo y la deuda externa (Embajador Edilberto Moreno, de Venezuela).
5. Comercio (Embajador Javier Illanes, de Chile).
6. Integración y desarrollo del Derecho Interamericano (Embajador Didier Opertti, del Uruguay).
7. Cooperación técnica (Embajador León Paredes Lardizábal, de Honduras).
8. Tráfico clandestino de armas y sus consecuencias para la paz y la seguridad del Hemisferio (Embajador Leopoldo Villar Borda, de Colombia).
9. Cumbre Presidencial de Jefes de Estado y de Gobierno (Embajador Guillermo Villalobos Arce, de Costa Rica).
10. Reglamentación de la obligación de los Estados Miembros de hacer efectivo el pago de sus cuotas (Embajador Joseph Edsel Edmunds, de Santa Lucía).

Conviene recordar, por otra parte, que en la citada Asamblea de San Salvador se registró uno de los hechos relevantes en la historia de la Organización: fue la entrada en vigor de las reformas del “Protocolo de Cartagena de Indias”, suscrito en 1985. En palabras del Secretario General, Baena Soares, “El Protocolo actualiza y moderniza los medios de que dispone la Organización para alcanzar sus objetivos, agilizando los procedimientos para el arreglo pacífico de controversias; amplía la capacidad de incorporación universal de los Estados Americanos en su organismo regional; incorpora a los propósitos fundamentales de la Organización el de ‘Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención’; consagra el respeto al pluralismo de sistemas políticos, económicos y sociales; finalmente, revitaliza el potencial de participación del Consejo Permanente en procura de la paz y confiere nuevas responsabilidades y atribuciones al Secretario General en temas relacionados con la paz, la seguridad y el desarrollo”. La Asamblea General aprobó igualmente en tal oportunidad el “Protocolo de San Salvador”, o sea el Protocolo adicional a la

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

DATOS COMPLEMENTARIOS

Habíamos señalado que el fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia constituyen la prioridad esencial para los países del hemisferio y que la Organización había dedicado reiterados esfuerzos en ese sentido. Conviene destacar también que el ejercicio pleno de los derechos humanos es condición necesaria para una sociedad pluralista y participativa, así como para la vigencia de la democracia representativa, razón por la cual es menester fortalecer y perfeccionar más todavía el sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos.

En conexión con estos temas, las reformas de la Carta de la OEA se han orientado a incorporar el concepto de desarrollo integral como factor coadyuvante de la paz, la armonía social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, a la par que la eliminación de la pobreza crítica como fin primordial del desarrollo y antecedente para la instauración del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), todo ello con miras a modernizar los propósitos de la OEA. En ese contexto, el XX Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, que tuvo lugar en México, sobre cooperación interamericana para el desarrollo, fijó el marco general de política y prioridades en la materia y asumió el compromiso de impulsar una cooperación solidaria y eficiente como objetivo fundamental de la OEA. Se ha recomendado también, en ese marco conceptual, la adopción de medidas conducentes a reforzar las actividades cooperativas a favor del desarrollo sostenible, con arreglo a los compromisos asumidos en la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992.

El terrorismo ha merecido la constante preocupación y rechazo de la OEA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó una resolución sobre “El terrorismo con fines políticos o ideológicos como fuente de violación de los derechos humanos”, que generó la negociación y aprobación, en 1971, de la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia in-

ternacional. Como culminación de esfuerzos institucionales sobre la materia, la Asamblea General celebrada en Barbados aprobó, el 3 de junio del 2002, la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

La OEA ha dedicado especial atención en los últimos lustros a su propósito de intensificar la cooperación entre los Estados miembros para enfrentar el problema de las drogas en sus diversas etapas y modalidades. Ante la creciente gravedad de este flagelo en el hemisferio, la Organización de Estados Americanos realizó una conferencia especializada en Brasil (1986), que aprobó el Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro contra el consumo, la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con principios y objetivos bien definidos. Allí se tomó la decisión de crear la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que es el órgano a través del cual opera la OEA.

Los actuales esfuerzos de la CICAD se orientan básicamente a estimular la cooperación regional con miras a reducir la demanda de drogas ilícitas y a mejorar la capacidad de los gobiernos para actuar con eficacia contra los grupos criminales. La CICAD es partidaria de combatir simultáneamente todas las instancias de ese complejo transnacional de operaciones ilícitas que se mueve en torno al tráfico de drogas, que va desde la producción, elaboración, transporte, distribución y comercialización hasta el lavado de dinero. Vale la pena destacar que una de sus prioridades es la educación preventiva y que, en ese contexto, aprobó en 1990 el “Programa Interamericano de Quito: la Educación Preventiva Integral contra el uso indebido de drogas”. Actualmente funciona el Sistema Interamericano de Documentación e Información sobre Drogas, que presta buenos servicios en el contexto antes descrito.

La OEA mantiene su decisión de combatir todas las formas de corrupción pública y privada; apoya la cooperación y el intercambio de experiencias para propiciar la modernización del Estado, la transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento de los mecanismos internos de investigación y sanción de los actos de corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas en 1996, es el cuerpo normativo que regula la lucha regional contra este flagelo generalizado.

La Organización estimula los esfuerzos tendientes a desarrollar la cooperación hemisférica a favor de la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, a la luz de los com-

promisos derivados de la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992. Ha dedicado atención también a la actualización del Programa Interamericano para la Conservación del Medio Ambiente.

Motivo de preocupación especial constituye el tratamiento de los temas de la agenda de la seguridad continental, su compromiso de coadyuvar al desarme general y completo bajo control internacional y su apoyo al fortalecimiento de las medidas de confianza entre los países del hemisferio. En los últimos tiempos se despliegan esfuerzos orientados a actualizar el marco conceptual de la seguridad hemisférica. Se postula trascender de la clásica “seguridad defensiva” a la “seguridad cooperativa”, con contenidos multidisciplinarios, frente a los nuevos desafíos como el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, la violencia urbana, el crimen internacional organizado y la pobreza extrema. En todo caso la seguridad hemisférica tiene como base fundamental el respeto a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

En conexión con la marcha del sistema interamericano y de los esfuerzos orientados a su fortalecimiento institucional, así como al estímulo de la cooperación entre los estados del hemisferio, conviene señalar, finalmente, que actualmente funciona una instancia especial, de elevado rango jerárquico. Se trata de la Cumbre de las Américas, integrada por los Jefes de Estado y de Gobierno del continente. La Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en diciembre de 1994, reafirmó el papel de la OEA en el fortalecimiento de los valores democráticos e institucionales, y estableció nuevas responsabilidades y prioridades de la Organización. En ella se planteó el Acuerdo para la creación de un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).

La Segunda Cumbre de las Américas se reunió en Santiago de Chile, en abril de 1998, para continuar el diálogo y reforzar la cooperación entre los países del continente. Según el informe pertinente, si en Miami la OEA recibió una docena de mandatos, este número se triplicó en Santiago. Fue un gran voto de confianza en la Organización y un reconocimiento a su capacidad de modernizarse y adaptarse conforme al “Espíritu de Miami” y a la nueva agenda de trabajo hemisférica. La OEA incorporó a sus actividades los mandatos de Santiago y creó la Oficina de Seguimiento de Cumbres en la Secretaría General para acompañar el desarrollo de sus planes de acción.

En la Tercera Cumbre de las Américas, realizada en Québec (Canadá) en el 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la labor de la OEA en el cumplimiento de los mandatos de Miami y Santiago de Chile. En Québec se adoptaron 18 mandatos encaminados básicamente a avanzar hacia la consolidación democrática en las Américas y el fortalecimiento de los derechos y libertades fundamentales, los sistemas judiciales, el estado de derecho y la seguridad hemisférica, la lucha contra las drogas, la corrupción y el terrorismo. En lo institucional, se designó a la OEA como Secretaría del Proceso de Cumbres y se reconoció la importancia de la participación de la sociedad civil en la consolidación de la democracia.

Al término de mi misión en la Organización de Estados Americanos se realizó la ceremonia ritual de despedida en una sesión especial del Consejo Permanente. Se acostumbra que intervenga un vocero por cada grupo de países. En representación del Grupo de Río intervino el embajador uruguayo Didier Operti, con su conocida elocuencia y una generosidad consecuente con la especial amistad personal que nos vincula. Cuando le tocó el turno al representante de los Estados Unidos de América, embajador Luigi Einaudi, otro de mis distinguidos amigos, comenzó manifestando que lo hacía en nombre de 52 Estados, con el característico y mesurado humor americano. No pronunció un discurso, como lo hacemos los latinoamericanos, sino que nos contó la siguiente anécdota. Un día que estaba ojeando un libro en mi escritorio, nos dijo, me visitó el Secretario de Estado Adjunto y me preguntó sobre el tema de mi lectura. Se trata del “Diccionario de Derecho Internacional” de autoría de mi colega y amigo Miguel Vasco, embajador del Ecuador, le respondió. Ya era hora de que no sólo pontifiques ante los latinoamericanos sino que aprendas algo de ellos, le observó el alto funcionario. Con Luigi nos volvimos a encontrar cuando vino a Quito, en su función de Secretario Adjunto de la OEA, con motivo de la XX-XIV Asamblea General, celebrada en el año 2004, así como con Didier Operti, a la sazón Canciller del Uruguay.

Cuando concluí el ejercicio de la representación del Ecuador en el seno de la Organización de Estados Americanos, su Secretario General, Embajador Joao Baena Soares, tuvo la gentileza de invitarme a asumir la representación de la OEA en Brasil, a partir del mes de enero de 1993. Fue una experiencia gratificante el desempeño de esa función, por el lapso de tres años. Por coincidencia, en 1995 se pro-

dujo el conflicto del Alto Cenepa con el Perú. Mantuve contacto permanente con nuestra Embajada en Brasilia para estar informado del curso de los acontecimientos y de las negociaciones de paz, compartiendo así con mis compatriotas la común preocupación por el destino de nuestro país.

EPÍLOGO

La presentación pública de este libro, dedicado a Teresa, mi esposa inolvidable, debió contar con su presencia, truncada por su reciente deceso prematuro. Cuando ocurrió en enero de 2005 este infortunio devastador, acudió a mi memoria esta afirmación constante en la autobiografía razonada del escritor español Savater: “Amo la vida pero detesto sus leyes, sobre todo ésa, la de la muerte: me parece inicua tiranía”.

Mujer de fino talento y exquisita sensibilidad, Teresa me acompañó con ejemplar discreción y eficacia en el quehacer diplomático, desde mi primera misión en el exterior. Se dedicó siempre con ahínco, diligencia y generoso desprendimiento a las obras de bien social, en favor de los menesterosos, especialmente de la niñez desamparada. Fue muy apreciada, por ejemplo, su labor como Presidenta de la Asociación de Damas Diplomáticas en el Perú, donde desarrolló una labor infatigable en beneficio de los niños ubicados en sectores marginales de Lima. Igualmente en Washington, como Presidenta honoraria de la Asociación de Damas Ecuatorianas (ADEW) propició actividades destinadas a recolectar fondos para los niños pobres del Ecuador. Desde que nos afincamos definitivamente en Quito representó a ADEW, con igual convicción y entusiasmo, en el desarrollo de esas mismas tareas de ayuda social.

En años recientes fue asimismo valiosa y apreciada su participación en las labores de ayuda humanitaria de la Asociación de Damas

Diplomáticas de la Organización Social de Naciones Unidas y Organismos Internacionales en el Ecuador. En todos los círculos que frecuentó, dentro y fuera del país, estuvo rodeada siempre de afecto y respeto. Paz en su tumba. Vive en nuestro recuerdo.

APÉNDICE

A continuación reproducimos los textos de algunos de los artículos periodísticos publicados en el diario “El Comercio” por el autor, sobre temas internacionales vinculados con la materia de este libro.

EL PAPEL DE LOS GARANTES

La figura jurídica de la garantía de un tratado es infrecuente en derecho internacional. La explicación en el caso del Protocolo de Río de Janeiro podría encontrarse, por una parte, en la mediación ejercida por Argentina, Brasil y Estados Unidos (luego Chile) en el conflicto de 1941 y, por otra, en el marco histórico que propició la firma de ese instrumento, en condiciones que son de dominio público.

Los cancilleres de los cuatro países garantes suscribieron el Protocolo el 29 de enero de 1942, junto con los de Ecuador y Perú, y asumieron unas facultades que emanan del propio instrumento, conducentes a su ejecución hasta la demarcación definitiva de la frontera.

Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos han actuado siempre, por tanto, desde su perspectiva de garantes del Protocolo de Río. Tanto es así que, en diciembre de 1960, a raíz de la proclamación unilateral de la nulidad del Protocolo por el presidente Velasco Ibarra, los garantes respondieron a la Cancillería del Ecuador reafirmando su vali-

dez. Asimismo en 1981, en el conflicto de Paquisha, cuando el problema se llevó a la XIX Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA y el Ecuador insistió en calificar de “amigos” y no de garantes a los cuatro países, éstos dejaron constancia expresa en el acta final de esa reunión interamericana en el sentido de que habían participado en las deliberaciones sin menoscabo de su calidad de “garantes” y en acatamiento de sus obligaciones derivadas del Protocolo. Y en 1995, con motivo del enfrentamiento armado del Alto Cenepa, su participación ha sido muy importante y activa en las negociaciones que culminaron con el acuerdo de paz de Brasilia (26-10-98). Importa destacar, de paso, que en 1981 y en 1995 la valiosa gestión de los garantes impidió la ampliación del conflicto, buscada por el militarismo peruano, y que su acción ha sido siempre útil en casos emergentes.

Como se sabe, este último proceso de paz, que partió de la Declaración de Itamaraty (17-02-95), merced al expreso reconocimiento de la vigencia del Protocolo de Río por el presidente Sixto Durán Ballén, ha sido extenso y complejo. En él han participado los garantes virtualmente como mediadores. Pero su papel fue decisivo cuando el tema de la fijación en el terreno de la frontera terrestre común presentó obstáculos insalvables en el diálogo directo de las partes, incluso en los reiterados contactos personales de los presidentes Mahuad y Fujimori, quienes optaron por poner en manos de sus homólogos garantes la solución del problema. Ellos respondieron, empero, que su propuesta debía tener el carácter de vinculante y contar con la aprobación previa de los congresos de ambos países. Esta figura atípica y sui géneris fue aceptada por los parlamentos en una actitud histórica que privilegió los inestimables beneficios de la paz sobre los formalismos académicos. La propuesta de los presidentes de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos no fue, en rigor jurídico formal, un arbitraje, pues éste tiene características definidas en derecho internacional. La decisión de los garantes ha concitado reacciones contrapuestas en Ecuador y Perú. Pero su acción, en respaldo al resuelto liderazgo de los presidentes Mahuad y Fujimori, ha abierto cauces a una paz definitiva entre los dos países, que tienen ahora el compromiso de asociar sus esfuerzos en el marco de los acuerdos aprobados.

(1 de Diciembre de 1998)

UNIDAD NACIONAL

Considerando el tema con perspectiva histórica se arriba a la conclusión de que la controversia territorial con el Perú ha sido para el pueblo ecuatoriano el aglutinante cívico por excelencia y su mejor convocatoria a la unidad nacional, por encima de banderías políticas, de conflicto de intereses entre grupos de presión o de discrepancias de cualquier género. Esa controversia ha sido, al propio tiempo, fuente de tensiones intermitentes con el vecino del sur y obstáculo permanente para las expectativas de desarrollo de nuestro país, por el desvío de valiosos recursos hacia demandas coyunturales.

Es por ello que la reciente conclusión del proceso de paz (hecho trascendente e irreversible) inauguró en buena hora una nueva etapa histórica en el contexto de las relaciones ecuatoriano-peruanas. Como colofón de ese acontecimiento era dable esperar, al menos desde una óptica idealista, la militancia unívoca de esfuerzos orientados a la construcción de la paz, ya que ella no es una enteleguía o un fin en sí misma, sino que demanda, para el goce de sus frutos, el quehacer colectivo disciplinado y tenaz. Procedía entonces la actitud concertada de una clara unidad nacional, que potencie la decisión de edificar el futuro sin las ataduras del pasado, con vocación de sacrificio y grandeza al servicio del bien común.

Pero en los últimos tiempos hemos visto más bien el desfogue de prejuicios vernáculos y animosidades subalternas, impulsados por un regionalismo insano, que ofrece la aparente visión de un país invertebrado y sin mística nacional, todo ello en el marco de una crisis económica atroz, que agobia a nuestro pueblo con rigor preocupante, generando en buena medida el extravío de postulados y valores sustantivos, como que la axiología de la sociedad ecuatoriana hubiera perdido su rumbo.

Instaladas ya las bases formales de una paz estable y permanente con el Perú, mediante acuerdos de cooperación bilateral, corresponde ahora consolidarla con ahinco y diligencia, con sostenida voluntad política. El Gobierno nacional, liberado de la rémora histórica del potencial conflicto externo, está abocado ahora a la ingente tarea de resolver los delicados y urgentes problemas de la agenda interna, que no sólo atañen a la coyuntura económica y financiera sino a la ejecución de reformas estructurales de la institucionalidad democrática, orientadas

a una necesaria modernización del Estado que conlleve la deseada equidad social, para mejorar la calidad de vida de la población. Pero ello demanda una dinámica unidad nacional, cimentada en la concertación de consensos básicos, que no signifique sólo ademán cívico de respuesta a circunstancias emergentes sino expresión de compromiso solidario de todos los ecuatorianos en la forja de su destino, bajo la conducción del poder político.

(6 de julio de 1999).

LA DEMOCRACIA Y LA POBREZA

La democracia juega un papel esencial en la escala de valores institucionales del cuerpo normativo del sistema interamericano. Por ello la Carta de la OEA proclama, entre otros conceptos, que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. Importa recordar que la consolidación de los procesos democráticos en la década de los ochenta ha permitido la vivencia inédita de una democracia casi unánime en nuestro hemisferio.

La Organización de Estados Americanos, con miras a defender la estabilidad del Estado de derecho, acordó en años recientes unas normas dirigidas a ese propósito. En Santiago de Chile (1991), la Asamblea General aprobó una Declaración en que consigna una serie de compromisos de los Estados miembros en torno a la defensa y promoción de la democracia representativa, así como la Resolución 1080, que contempla una acción de la OEA en caso de interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional o del legítimo ejercicio del poder. En 1992, una reforma de la Carta dispone que un Estado miembro de la Organización cuyo Gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del derecho de participación en los principales órganos del sistema. Dicha reforma expresa asimismo que “la eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos”. Ecuador tuvo, por cierto, activa participación en estos desarrollos.

Al margen de la aplicación práctica de la normativa citada, importa rescatar su claro mensaje: hay que defender a todo trance la permanencia del sistema democrático, por razones obvias, y concentrar es-

fuerzos en el combate eficiente a la pobreza crítica, expresión dramática de la inequidad social. Es que la pobreza no es solo carencia de bienes materiales, sino su injusta distribución; y, en términos globales “un proceso de represión del acceso a ventajas sociales relevantes”. Hay una perversa manipulación política de la pobreza en función electoral.

La angustia de la pobreza ha suscitado en los sectores populares un rechazo al liderazgo político tradicional y a los partidos políticos, por la insatisfacción de sus expectativas y el incumplimiento de las promesas electorales. Se ha llegado incluso a cuestionar la legitimidad del sistema democrático en los campos económico y social, por sus limitados logros en esas áreas, con evocaciones nostálgicas de regímenes autoritarios.

En el escenario de la grave crisis nacional se ha insinuado en penumbra la silueta del espectro golpista. El Ecuador debe fortalecer y modernizar su institucionalidad democrática, para que se forje una ciudadanía participativa y consciente de la plenitud de sus derechos y deberes, con un proyecto nacional de largo plazo que mejore la calidad de vida de los ecuatorianos. No olvidemos que “la democracia es el peor de los sistemas, a excepción de todos los demás” (Winston Churchill).

(24 de agosto de 1999).

EL NARCOTRÁFICO

La lucha contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por sus siniestros y preocupantes efectos en todos los estratos de la sociedad, configura uno de los problemas prioritarios del mundo actual. Es que ese tráfico ilícito amenaza a la salud y la vida de las personas, a la par que su acción corruptora y violenta pone en riesgo el funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Conviene advertir, empero, que no se trata de un fenómeno reciente. Ya en 1909 se celebró en Shangai (China) la primera conferencia internacional sobre la materia, por iniciativa de los Estados Unidos de América, en tanto que el primer acuerdo internacional se plasmó en la Convención del Opio, adoptada en La Haya en 1912. Lo que ocurre es que en años recientes este flagelo ha alcanzado una dimensión planetaria, al extremo de que no hay país que pueda considerarse a salvo de sus dañosas implicaciones.

Las características del problema, su gravedad y trascendencia, demandan una intensa cooperación internacional para combatirlo. Son insuficientes los esfuerzos individuales de los países afectados. Las estrategias de combate al narcotráfico contemplan medidas de carácter internacional e interno. Los países de nuestro continente tienen tres ámbitos de acción interconectados: el universal (ONU), el regional (OEA) y el nacional. La Organización de las Naciones Unidas creó en 1946 la Comisión de Estupefacientes. Su fiscalización internacional se ha desarrollado mediante una serie de tratados que se consolidaron en la Convención Unica de Estupefacientes, actualizada en la Convención de 1988.

Ante la creciente gravedad del problema a nivel regional, la Organización de Estados Americanos celebró una conferencia especializada en Brasil, en 1986, que aprobó el Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro contra el consumo, la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con principios y objetivos bien definidos. Allí se tomó la decisión de crear la Comisión Interamericana para el Control de Drogas (CICAD), que es el órgano a través del cual opera la OEA.

Los esfuerzos de la CICAD se orientan básicamente a estimular la cooperación regional con miras a reducir la demanda de drogas y a mejorar la capacidad de los gobiernos para actuar contra los grupos criminales.

La CICAD es partidaria de combatir simultáneamente todas las instancias de ese complejo internacional de operaciones ilícitas que se mueve en torno al tráfico de drogas, que va desde la producción, elaboración, distribución y comercialización hasta el lavado de dinero. Su campo de acción es muy amplio. Vale la pena destacar, sin embargo, que una de sus prioridades es la educación preventiva y que, en ese contexto, aprobó en 1990 el "Programa Interamericano de Educación Preventiva Integral contra el uso indebido de drogas".

Algunos gobiernos han incorporado ya a sus legislaciones la normativa aprobada en el marco de la CICAD, en su propósito de armonizar esfuerzos para enfrentar con mayor eficacia al narcotráfico.

(30 de octubre de 1999).

LA CORRUPCIÓN

La corrupción es un fenómeno sociológico que ha tenido una dilatada trayectoria en el espacio y en el tiempo. Su dimensión es planetaria y su origen se remonta a los confines de la memoria histórica. Su práctica proviene del quebrantamiento de valores éticos que sustentan la conducta del conglomerado social. Siempre se han desplegado esfuerzos, por cierto, para combatirla y sancionarla: tipificada jurídicamente, se la contempla en códigos y leyes.

La corrupción se presenta como un fenómeno global que afecta tanto a los países industriales como a los de menor desarrollo, aunque sus efectos negativos son más dañosos en estos últimos por su vulnerabilidad socio-económica, que se expresa en evidentes desigualdades estructurales. Incluso se ha afirmado, con visión maniqueísta, que este flagelo social es propio de los países en vías de desarrollo, lo cual es inexacto e inaceptable.

En años recientes, no sé si por las tentaciones de la sociedad de consumo, la corrupción en el ámbito administrativo, en el manejo de la cosa pública y en el ejercicio del poder, ha alcanzado niveles preocupantes: la creciente consecución de ventajas indebidas por quienes asumen responsabilidades de servicio público conspira contra la buena marcha de las instituciones y los legítimos intereses de los pueblos. Por éstas y otras consideraciones, el tema es objeto de atención en los foros internacionales.

En dicho contexto, la Organización de Estados Americanos ha dedicado atención al problema y lo ha incluido en los esfuerzos institucionales que se despliegan en el hemisferio con miras a la modernización del Estado, al mejoramiento de la gestión pública y a la consolidación de los procesos democráticos. La Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas, 29 de marzo de 1996) tiende a promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar este flagelo, así como facilitar y regular la cooperación entre los Estados para asegurar la eficacia de las medidas y acciones respectivas. Ecuador es parte en este instrumento multilateral. Importa destacar que los esfuerzos de la OEA armonizan con las propuestas de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la región, las cuales postulan que “la democracia efectiva requiere que la corrupción sea combatida de manera integral”, ya que es

un factor de distorsión del sistema económico que socava la legitimidad de las instituciones.

Ecuador ha figurado últimamente en un deprimente elenco de países corruptos a nivel mundial. Es que la corrupción se ha tornado sistemática y se ha convertido en un mero dato de la realidad, que desafía a quienes desean introducir cambios al servicio de la sociedad. La Comisión de Combate a la Corrupción cumple una tarea plausible, pero es indispensable la aplicación de sanciones severas por las instancias competentes del poder público para eliminar la impunidad. Caso contrario seguirán indemnes los atracadores de alto coturno. Urge rescatar los valores éticos venidos a menos y volver por los fueros de la ley y de la dignidad.

(12 de septiembre de 1999).

LA CAMPANA DE LA PAZ

El 14 de septiembre de 1999 se realizó una ceremonia sobria y significativa en el templo de silueta nipona que alberga la “campana de la paz”, en un parque quiteño. Asistieron personalidades del mundo diplomático y local. La campana, fundida en Japón con monedas procedentes de numerosos Estados miembros de la ONU, proviene de la iniciativa de un romántico idealista nipón que quiso transmitir un mensaje de paz y fraternidad al orbe, desde un país que participó de la barbarie bélica y padeció el horrendo holocausto nuclear en dos ciudades cuyas martirizadas al concluir la Segunda Guerra Mundial. El sincrónico campaneó en Quito, Nueva York (sede de la ONU) y otras doce capitales del mundo emitió una señal planetaria en pro de la paz y del entendimiento de los pueblos. La trascendencia del tema invita a rescatar la simbología de dicho acto, que se repite anualmente con idéntico ritual.

Como se sabe, desde que la comunidad internacional se organizó jurídicamente en el siglo XX (mediante la Sociedad de las Naciones, primero, y la Organización de las Naciones Unidas, después), la paz y la seguridad internacionales han sido columnas de sustentación del sistema universal. La ONU ha puesto especial énfasis en los procesos de consolidación de la paz, a partir de la consideración de que ello es posible solo mediante el impulso del desarrollo económico y social de los pueblos. O sea la paz como signo de desarrollo.

Los Estados americanos, por su parte, se comprometen a aunar esfuerzos “para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad”. Ecuador, miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, contempla en su Constitución esas mismas normas de derecho internacional.

El reciente acuerdo de paz con el Perú, que puso término al viejo litigio territorial entre los dos países, inaugura una etapa inédita en la vida nacional, con nuevas expectativas y responsabilidades. Pero como la paz no es una entelequia difusa sino un proceso dinámico, que demanda metas claras y concretas para poder acceder a sus excelencias y beneficios, procede la convergencia de esfuerzos de la sociedad ecuatoriana, bajo el signo de la unidad nacional, en torno a un proyecto socioeconómico que trasciende las veleidades de la política contingente y los intereses de los grupos de presión. Debe ser un proyecto con objetivos de corto, mediano y largo plazos, que contemple desde los problemas coyunturales hasta las reformas estructurales de la institucionalidad democrática, con miras a lograr la estabilidad política y económica que el país requiere para mejorar la calidad de vida de la población, en el marco de una deseable equidad social.

Para ello urge cimentar la concordia en el conglomerado social ecuatoriano, ya que no se debe olvidar que “la paz hace crecer las cosas pequeñas; la discordia destruye las grandes”.

Esperamos que el tañido simbólico de la campana japonesa sea un augurio de paz interna y externa para el Ecuador, cuando ya se columbra un nuevo milenio.

(7 de Octubre de 1999).

EL REDENTOR DE CASPICARA

La revisión casual de un fino catálogo, que reproduce gráficamente el repertorio de la Exposición de Arte Colonial Quiteño presentada en Washington en 1968, me trajo a la memoria la reciente sustracción del “Señor Resucitado” de Caspicara del Museo Colonial de Quito.

Como bien se conoce, el indígena Manuel Chili (Caspicara) fue sin duda la figura cumbre de esa pléyade de imagineros que dio nom-

bradía a la Escuela Quiteña, de reconocido prestigio en el período hispánico y de valor emblemático hasta nuestros días. Caspicara, con magistral oficio, esculpió imágenes de madera policromada que se caracterizaron por su perfección anatómica y una rica expresión. Fue caudalosa su producción de imaginería religiosa, que luce sus galas en templos, monasterios y museos. Son inconfundibles sus delicados “nacimientos quiteños”, sus cristos, sus vírgenes, sus ángeles, con brillante encarnado que semeja fina porcelana. A guisa de ejemplos citaremos “La Sábana Santa”, una Piedad labrada en tamaño natural, que data de 1794 y se encuentra en la Catedral Metropolitana. En la iglesia de San Francisco se puede admirar un soberbio Crucifijo (1790), acaso una de sus obras mejor logradas, que representa un Cristo muerto, de serena y celestial belleza. El contrapunto de esta obra estaría tal vez en el “Señor Resucitado” que es un excelso canto a la vida. Se trata de una imagen de talla menor, con esbeltez apolínea y donaire vital. Una réplica grande de esta joya escultórica reposa en el Carmen Bajo de Quito.

Caspicara podría compartir su liderazgo artístico con Legarda, el admirado creador de la Virgen de Quito, que se distingue por la singularidad de su diseño, entre místico y profano, pues despliega el cautivante ademán de una elegante danzarina oriental. Ambos fueron aventajados cultores del primor.

La pieza hurtada del Museo Colonial integró la citada exposición, que la organizamos en el Departamento Cultural de la Cancillería, con el patrocinio del Smithsonian Institute de Washington y la colaboración de nuestra Embajada en esa ciudad. Recuerdo que fue una tarea ímproba por la resistencia inicial de ciertas entidades eclesiásticas al envío de la imaginería religiosa, las mismas que apelaron a los buenos oficios del Nuncio Apostólico. El ilustre prelado invocó el *Modus Vivendi* entre el Ecuador y la Santa Sede para respaldar tal actitud. En todo caso, una vez superados los obstáculos preliminares, Filoteo Samaniego pudo viajar a Washington con la exposición. La muestra alcanzó tanto éxito que permaneció en los Estados Unidos un lapso superior al previsto. El afán oficial de éste y otros casos análogos no ha sido otro que el de difundir en el exterior los valores ecuatorianos que justifican el galardón de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Sería deseable que las autoridades competentes perseverasen en su empeño por descubrir el hurto execrable, para que el Redentor de Caspicara vuelva a deslumbrarnos con su mensaje estético.

(7 de Diciembre de 1999)

DERECHOS HUMANOS

La protección internacional de los derechos humanos ha tenido una dilatada trayectoria en el espacio y en el tiempo. Surgió en Inglaterra cuando la Carta Magna (1215) colocó al Rey bajo el Parlamento y determinó que ciertos derechos individuales se pusieran al amparo de la ley. La evolución institucional situó a los derechos humanos en el marco constitucional, porque aparecía insuficiente el amparo de la ley: por eso las constituciones iberoamericanas del siglo XIX los incorporaron a sus textos.

Si bien los derechos humanos son cobijados por el Derecho Internacional desde mediados del siglo XIX, fue realmente la Carta de la ONU (1945) la que abrió cauces a su protección planetaria, que se expresa en la “Declaración Universal de Derechos Humanos” y sus pactos complementarios. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas vela por su observancia.

El sistema interamericano tiene también a nivel regional sus propios instrumentos y mecanismos: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Ante la Comisión acuden las personas y, ante la Corte, los Estados partes en la Convención.

Con estos breves antecedentes importa destacar la relevancia del Seminario sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, realizado en la Cancillería de Quito del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 1999, con el auspicio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Los participantes del seminario reconocieron básicamente la importancia del desarrollo y fortalecimiento de las capacidades nacionales de promoción y protección de los derechos humanos y la conveniencia de desarrollar planes nacionales de acción en esta materia, razón para emprender esta tarea inaplazable. Destacaron también el valor de la educación y la necesidad de impulsar un marco de cooperación en la región.

El Plan Nacional del Ecuador, vigente desde el 24 de junio de 1998, ha merecido elogios por su concepción y estructura, fruto de una labor colectiva entre el Estado y la sociedad civil. El instrumento ecuatoriano contiene disposiciones sobre los derechos civiles y políticos; los derechos económicos, sociales y culturales; los derechos colectivos; la política internacional; la participación ciudadana; el marco institucional y un plan operativo de acción.

Ecuador ha dedicado atención al tema de los derechos humanos. El primer Alto Comisionado de las Naciones Unidas fue un compatriota, el embajador José Ayala Lasso. El país tiene sendos representantes en organismos universales y regionales. Esperemos, sin embargo, que el poder político trascienda lo meramente formal y se oriente a instalar equilibrios sociales que brinden al pueblo una vida digna y justa, con respeto irrestricto a sus derechos y libertades fundamentales.

(29 de Diciembre de 1999).

POLÍTICA CULTURAL

Este es un tema recurrente en foros internacionales de carácter regional o universal y, por cierto, en los programas y proyectos nacionales de acción gubernativa. Hay, por tanto, un enfoque nacional e internacional de la política cultural. Importa recordar que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) como la Declaración Americana de Derechos del Hombre (OEA, 1948) reconocen el derecho de toda persona a acceder a los beneficios de la cultura.

La ONU desarrolla sus actividades en este campo a través de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). La OEA tenía hasta hace poco tiempo un órgano específico para esta materia, el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En virtud de una reforma estructural, las actividades culturales entran en la órbita del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, de reciente creación. Conviene señalar que la OEA instituyó, desde 1969, el Programa Regional de Desarrollo Cultural, con los objetivos siguientes: a) procurar que las manifestaciones culturales de cada país se expresen libremente; b) contribuir a que los bienes de la cultura se difundan de la manera más amplia; c) colaborar a la preservación del patrimonio cultural; d) contribuir al proceso de adaptación de las nuevas generaciones a los cambios culturales que im-

plica el desarrollo económico, científico y tecnológico; y, e) procurar una comunicación interamericana más efectiva. Este programa ha tenido un seguimiento evolutivo y en su contexto han merecido tratamiento importante las políticas culturales de los Estados miembros.

Se habla actualmente de un “constitucionalismo cultural” en la medida en que los países de la región han ido incorporando a sus respectivos textos constitucionales disposiciones inherentes al desarrollo cultural de sus pueblos.

En el Ecuador, importa que el poder político, enfrentado a la introducción inaplazable de reformas estructurales en diversos ámbitos del quehacer nacional, ponga énfasis en las cosas de la cultura, con objetivos de corto, mediano y largo plazos. Es que en el mundo contemporáneo se ha ampliado la riqueza conceptual de la cultura y su disfrute no se restringe ya a cenáculos elitistas, sino que se orienta a su democratización. Lo que es más, la institucionalidad democrática tiene en la cultura y la educación su soporte más firme y duradero. Desde esa perspectiva hay que promover la expansión de la ciudadanía participativa, con rango cualitativo, capaz de asumir el ejercicio pleno de sus derechos y deberes cívicos. La política cultural puede, entre otras cosas, abrir espacios a la cultura política, tan necesaria en el Ecuador para mejorar la índole del liderazgo y la idoneidad en la emisión del voto.

(28 de Enero del 2000).

AMENAZA TERRORISTA

El terrorismo es una forma violenta de lucha política que procura la destrucción del orden establecido o la intimidación a los adversarios y a la población en general, mediante la implantación de un ambiente de temor e inseguridad. Este fenómeno de violencia política ha alcanzado en lustros recientes un grado demencial de acoso a la sociedad: entraña una siniestra apología de la barbarie. La impronta de su irracionalidad se ha desplegado por todas las latitudes del planeta. Estudios especializados del tema revelan, por ejemplo, que en 1955 ocurrieron actos terroristas en 51 países de diversas áreas geográficas.

La respuesta de la sociedad internacional a este flagelo ha consistido en incentivar conductas y acuerdos de cooperación para combatirlo, a nivel regional y universal. El Grupo de los 7 (países industria-

les), por ejemplo, realizó en Canadá, en 1995, una conferencia antiterrorista de rango ministerial, en asocio con Rusia. Los participantes asumieron una serie de compromisos orientados a neutralizar las acciones terroristas mediante medidas cooperativas: una de ellas consistía en estimular a todas las naciones a que adhiriesen, hasta el año 2000, a los tratados y convenciones internacionales sobre la materia.

Los Estados Unidos de América tienen una política bien definida para reducir la amenaza mundial del terrorismo, que se cimienta en tres normas esenciales: a) no hacer tratos con los terroristas; b) tipificar a los terroristas como delincuentes y aplicarles todo el rigor de la ley; y, c) ejercer presión sobre los Estados que patrocinan a los terroristas, imponiéndoles sanciones económicas, políticas y diplomáticas. En esa línea de conducta, numerosos países le han prestado colaboración jurídica y policial.

El tema del terrorismo figura en las agendas de la ONU y de la OEA. En 1971 se suscribió una convención interamericana sobre la materia, que es el referente primordial en el marco de la Organización de Estados Americanos. En el nuevo contexto hemisférico, la Cumbre de las Américas dedicó también atención especial al problema. Ecuador ha participado de los esfuerzos generales en este delicado asunto.

Los atentados cometidos por el terrorismo internacional conforman un repertorio letal espeluznante. Entre los terroristas transnacionales que han alcanzado notoriedad figuran los que actúan en nombre del Islam: ellos han amenazado con desencadenar una serie de acciones contra las misiones diplomáticas de los Estados Unidos en el mundo, lo cual motivó el cierre temporal de la Embajada americana en Quito, así como del Consulado en Guayaquil. Ambas representaciones han vuelto a funcionar normalmente. Dicho episodio introdujo un factor negativo en el cuadro crítico del país.

Hagamos votos porque la imagen espectral del terrorismo no perturbe nunca la paz del Ecuador.

(14 de Enero del 2000).

LA DEMOCRACIA EN LA OEA

Los ecuatorianos contemplamos perplejos, en la noche del 21 de enero, el desarrollo de un exotismo prosaico en el Palacio de Carondelet, que pudo haber destrozado el frágil proceso democrático del país.

La comunidad internacional rechazó las acciones desestabilizadoras y la democracia amenazada concitó adhesiones de mandatarios de países amigos o de grupos de países, como la Unión Europea, el MERCOSUR o la OEA.

Como se sabe, la Organización de Estados Americanos (OEA) es el principal foro político para el diálogo, la concertación y la toma de decisiones de los Estados de la región. Su acción se dirige básicamente a fortalecer la paz y la seguridad, consolidar la democracia y promover los derechos humanos, a la luz de la Carta constitutiva. La Organización ha priorizado, en años recientes, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de los Estados miembros. Para potenciar la consolidación de los procesos democráticos instaurados en la década de los ochenta, tras un sombrío período dictatorial en la región, la Asamblea General aprobó la Resolución 1080 (Santiago de Chile, 1991), que contempla una acción de la OEA en caso de interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional o del legítimo ejercicio del poder. Esta medida se complementó con una reforma de la Carta (Washington, 1992) por la cual un Estado cuyo Gobierno democrático sea derrocado por la fuerza podría ser suspendido del derecho de participación en los principales órganos del sistema, y añade que la eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa. El amplio repertorio de esta temática figura también en la agenda de la Cumbre de las Américas, en que intervienen los Jefes de Estado y de Gobierno.

Con estos antecedentes, el Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión extraordinaria el 21 de enero y “condenó el intento de golpe de estado que atentó contra el orden democrático legítimamente constituido en el Ecuador”. En vista del desenlace de los acontecimientos del día siguiente, el Consejo realizó otra sesión extraordinaria el 26 de enero, en la cual el Representante del Ecuador rindió un informe detallado de los sucesos. El Consejo Permanente reiteró entonces su rechazo a cualquier acción dirigida a quebrantar el orden democrático; respaldó al presidente Noboa en sus esfuerzos por restablecer la estabilidad institucional y preservar el estado de derecho e instó a las instituciones financieras internacionales a cooperar en la puesta en práctica de un plan económico que contribuya al desarrollo integral y estabilidad del país.

Una vez superada la asonada por vía constitucional, le queda al Gobierno la tarea de afianzar su legitimidad jurídica y de ir al encuentro de su legitimidad social, mediante una política económica eficiente y la atención a las apremiantes demandas ciudadanas derivadas de una crisis sin paralelo en la historia nacional.

(14 de Febrero del 2000).

FONDO BINACIONAL PARA LA PAZ

Como se sabe, a raíz del conflicto armado del Alto Cenepa, de enero de 1995, Ecuador y Perú iniciaron un delicado y complejo proceso de negociaciones diplomáticas, con la asistencia de los cuatro países garantes, que comenzó con la suscripción de la Declaración de Paz de Itamaraty (17-02-95) y culminó con la firma del Acta Presidencial de Brasilia, el 26 de octubre de 1998. En tal oportunidad se suscribieron también varios acuerdos específicos, que dieron solución global y definitiva al diferendo territorial de los dos países: el Tratado de Comercio y Navegación; el Acuerdo Amplio Ecuatoriano – Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad; el Convenio de Aceleración y Profundización del Libre Comercio entre Ecuador y Perú; el Acuerdo de Constitución de la Comisión Binacional Ecuatoriano-Peruana sobre medidas de confianza mutua y seguridad; los acuerdos sobre el Canal de Zarumilla.

Suelen emitirse comentarios, cargados de intención indagadora, sobre el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, que alcanzaría el monto de 3.500 millones de dólares, destinados a financiar determinados proyectos y actividades incluidos en el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, que a su vez forma parte del citado Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza. Como existe la distorsionada percepción de que esos recursos llegarían a corto plazo, acaso resulte útil hacer ciertas precisiones sobre el tema.

El Fondo tendrá una duración de diez años y este plazo podrá extenderse por común acuerdo de los dos gobiernos. Se constituirá con aportes de recursos provenientes de los gobiernos del Ecuador y del Perú, de los países amigos, de instituciones multilaterales, de organizaciones no gubernamentales y de otras organizaciones privadas. Para el manejo del Fondo se contemplan programas de aceptación y coloca-

ción de recursos. El marco institucional cuenta con una asamblea, un directorio y una secretaría ejecutiva.

Las contribuciones al Fondo se han dificultado por varias razones: la crisis económica de nuestro país; el entorno político electoral en el Perú; los desastres naturales en diversas regiones del planeta, que han demandado la urgente cooperación internacional. Esperemos que las cosas mejoren en lo futuro.

Un conocido apotegma político advierte que en la vida de relación entre Estados no hay amigos sino intereses. Por eso tenemos que privilegiar el esfuerzo interno de los ecuatorianos para el logro de los objetivos nacionales. Pero dada la magnitud de los programas y proyectos bilaterales, a la par que los incentivos ofrecidos en el curso de la negociación diplomática, hay que combinar el esfuerzo interno con la cooperación foránea, porque en último término a la comunidad internacional también le interesa que un escenario de conflictos intermitentes se convierta en un espacio de paz y fraternidad. La consolidación de una paz estable y permanente beneficia a todos.

(30 de Marzo del 2000).

PANAMERICANISMO

El 14 de abril se conmemora la instauración del sistema interamericano, en la Primera Conferencia Internacional Americana de Washington (1890). Se afirma por ello que la OEA es la entidad regional más antigua del mundo: es que el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional, a nivel universal, es fenómeno del siglo XX, con la Sociedad de las Naciones (1919), al término de la primera guerra mundial, y la ONU (1945), después de la segunda conflagración mundial.

Pero en rigor histórico, el origen prístino de nuestro sistema regional proviene del pensamiento político de Bolívar, quien convocó desde Lima al Congreso Anfictiónico de Panamá (1826). El Libertador no alcanzó a ver fraguado su proyecto político, pero sus iniciativas de solidaridad y cooperación fueron recogidas por varios congresos hispanoamericanos, celebrados en el siglo XIX.

La Primera Conferencia Internacional Americana se reunió por iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, originalmente motivada por la Guerra del Pacífico, entre Bolivia, Chile y Perú. La inesperada

prolongación de este conflicto y el asesinato del presidente Garfield aplazaron la conferencia de 1882 a 1889-90. En esta conferencia, en que Ecuador estuvo representado, se creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, como organismo antecesor de la OEA, con una Oficina Comercial como secretaría, que luego se transformaría en la Unión Panamericana.

El itinerario de un panamericanismo activo discurrió a través de ocho conferencias, en diversas capitales, hasta que la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá (1948) aprobó la Carta constitutiva de la OEA. La X Conferencia se celebró en Caracas, en 1954, y fue la última de la serie, puesto que la Undécima Conferencia, programada para Quito (1960) no se realizó, por razones de orden interno. El gracejo criollo forjó la ocurrencia de que esta fallida conferencia ha sido el mejor alcalde de Quito, porque su preparación demandó la construcción de importantes obras públicas que hasta ahora enaltecen el ornato de la ciudad.

La Organización de Estados Americanos tiene entre sus objetivos esenciales el garantizar la paz y la seguridad continentales; promover y consolidar la democracia representativa, respetando el principio de no intervención; asegurar el arreglo pacífico de controversias internacionales entre sus miembros; promover, por medio de la acción cooperativa, el desarrollo integral; promover la observancia de los derechos humanos. Ha incorporado a su agenda temas impuestos por la realidad actual, como el combate al narcotráfico, medio ambiente, integración, etc. En años recientes ha privilegiado el tema de la consolidación de los procesos democráticos, vinculándolos con la eliminación de la pobreza crítica, ya que la inequidad social y la miseria vulneran la estabilidad del estado de derecho.

Recordemos también que el ex-presidente Galo Plaza Lasso fue Secretario General de la OEA de 1968 a 1975, enalteciendo el prestigio del Ecuador y de la organización regional.

(17 de Abril de 2000)

ACADEMIA DIPLOMÁTICA

La Academia Diplomática “Antonio J. Quevedo” se fundó en 1987 y forma parte de la Cancillería como órgano de capacitación de los funcionarios del Servicio Exterior y de preparación de los aspiran-

tes a la carrera diplomática. El nombre de la entidad, como se sabe, corresponde a un ecuatoriano eminente que sirvió al país desde varias posiciones relevantes.

Las actividades de la Academia se desarrollan en un marco institucional altamente calificado. La docencia cuenta con representantes idóneos de diversos sectores del quehacer nacional. Para llevar adelante sus proyectos y programas y respaldarlos con actos de colaboración institucional ha concertado sendos acuerdos de cooperación con varias universidades, con la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y con otras academias diplomáticas.

Los cursantes ingresan a la Academia por concurso público, que tiene un carácter selectivo en función de la preparación de los interesados. La amplia gama de materias tiende a dotarle al futuro diplomático de un bagaje intelectual que le permita manejar con idoneidad las relaciones internacionales, teniendo por norte el bien común y el progreso del país. Se le inculca una mística de servicio público y un compromiso con la defensa de los altos intereses nacionales, en un marco de dignidad y altiva pertenencia a la sociedad ecuatoriana. En un mundo globalizado e interdependiente, caracterizado por la pluralidad y complejidad creciente de la agenda internacional, la preparación profesional del diplomático moderno es cada vez más exigente y necesaria. Importa, en consecuencia, la calidad de su formación especializada y no el repertorio de sus conexiones personales o políticas, que deberían proscribirse del servicio exterior.

Por amable invitación del actual director, embajador Emilio Izquierdo, dicté últimamente un seminario sobre la organización y funcionamiento del Sistema Interamericano. Me encontré con un grupo homogéneo de jóvenes que tienen fe en el futuro del país, en el Ecuador profundo y proyectado hacia el horizonte, allende la crisis que padece por obra de una perversa tramoya montada por las falencias del poder político, los intereses de grupos de presión y la cleptomanía bancaria, con un elenco digno de los antihéroes de la picaresca. Los cursantes están conscientes, por cierto, del papel que le corresponde al servicio exterior en la ingente tarea colectiva de restauración nacional.

Me enteré, con sorpresa, que la Academia carece de recursos indispensables para atender sus requerimientos básicos, desde que los conspicuos funcionarios del Ministerio de Finanzas decidieron supri-

mir la partida presupuestaria, amparándose en el manido argumento de la relación costo-beneficio. Estimo que esa fue una actitud sofista y prejuiciada, pues en este caso no hay lugar a cuantificación aritmética sino a precisión conceptual. Esperemos que se enmiende este desaguisado, por razones que huelga ponderar.

(9 de Mayo de 2000).

LA EXTRADICIÓN

Como es de dominio público, en tiempos recientes se ha producido el éxodo de una leva de corruptos, básicamente vinculados con el sector bancario, contando con la actitud permisiva de las autoridades de control; hubo incluso desplantes extravagantes como el embarco con acompañamiento equino. Este fenómeno se ha tornado relevante en el marco de un drama angustioso de millares de perjudicados, de diversos estamentos de la sociedad ecuatoriana, que han exhibido su tragedia ante los medios de comunicación social, solicitando al propio tiempo la extradición de los autores de un atraco sin precedentes en la historia nacional. Con este motivo está presente en el debate público la institución de la extradición, a la que nos referiremos de modo escueto.

Se trata de uno de los instrumentos de cooperación jurídica entre los Estados en el campo legal. La extradición es el acto por el cual un Estado, a requerimiento expreso de otro Estado, le hace entrega de un individuo, sujeto a proceso o condena por la comisión de un delito común en territorio del requirente. Es aplicable sólo por convención o tratado vigente entre el Estado requirente y el requerido, así como por reciprocidad internacional, aunque esta última se concreta finalmente en un acuerdo de concesión entre ambos países, o sea en un tratado bilateral. En tales instrumentos se hacen constar los delitos que pueden causar la extradición de sus agentes. Las infracciones deben revestir cierta importancia y gravedad, razón por la cual se prescinde de las meras contravenciones. Se exceptúan, igualmente, los delitos de carácter político. Numerosos Estados, entre ellos el Ecuador, se oponen a la extradición de sus nacionales.

Se consideran condiciones básicas para la concesión de la extradición: a) que la infracción se haya cometido dentro de la jurisdicción

territorial del Estado requirente; b) que sea infracción punible en ambos Estados y contemplada expresamente en el respectivo tratado; y, c) que el acusado no esté sometido a juicio, por la misma causa, en el Estado requerido, porque en tal caso se vulneraría el principio jurídico del “non bis in idem” (no dos veces por lo mismo).

En la práctica internacional se observa a veces que los Estados, para eludir los engorrosos requisitos del procedimiento de extradición, optan por la expulsión o deportación del individuo.

Ecuador es parte en los siguientes instrumentos multilaterales: Acuerdo sobre extradición, suscrito en Caracas en 1911; Convención sobre extradición, suscrita en Montevideo en 1933 (OEA); y Convención interamericana sobre extradición, suscrita en Caracas en 1981 (OEA). Tiene convenios bilaterales con varios países de América y Europa. Con Estados Unidos rige la Convención de extradición (1872) y el Tratado complementario de extradición (1939). Este último amplía la lista de delitos contemplados en la Convención de 1872 y en el artículo 1 dice: “16º.— Fraude o abuso de confianza por un depositario, banquero, agente, comisionado, síndico.....o por alguien que ocupe cualquier posición fiduciaria, cuando la suma de dinero o el valor de los bienes malversados exceda de doscientos dólares, o su equivalente en moneda ecuatoriana”.

(28 de Mayo de 2000)

NOTAS SOBRE LA EXTRADICIÓN

A raíz de un reciente comentario sobre el instituto jurídico de la extradición, varios lectores interesados en el tema me han sugerido una ampliación, dado que los estrechos límites de una crónica periodística no siempre permiten captar todos los elementos relevantes de una materia tan importante y compleja. Faltaba, por ejemplo, una referencia histórica, de la cual me ocuparé sucintamente.

El origen de la extradición es muy antiguo y se remonta a épocas anteriores al Cristianismo. Entre los numerosos casos históricos figura, por ejemplo, el acuerdo concertado en Egipto entre el faraón Ramsés II (siglo XIII a. d. C.) y el príncipe Cheta para la entrega recíproca de delincuentes.

Igualmente, en tiempos de la Grecia clásica y de Roma se practicaba la extradición de los infractores de las leyes penales. Los reyes de

Castilla y Portugal formalizaron un acuerdo, en el siglo XIV, para proceder a la mutua entrega de algunos caballeros sentenciados a muerte.

En la Europa de los siglos XVIII y XIX se perseguía y extraditaba a los delincuentes políticos, hasta que las ideas reformistas de la Revolución Francesa crearon un clima propicio a la exclusión de los delitos políticos, restringiendo la extradición solo a los delitos comunes.

En nuestro sistema interamericano el itinerario de este procedimiento jurídico es también extenso. Fue contemplado ya en el Tratado de Liga y Confederación Perpetua del Congreso de Panamá (1826). La Primera Conferencia Internacional Americana (Washington, 1890) adoptó una resolución recomendando a los gobiernos adherir al Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo (1888) y celebrar sendos tratados especiales de extradición con el gobierno de los Estados Unidos.

La II Conferencia Interamericana (México, 1902) aprobó un tratado de extradición y protección contra el anarquismo, refiriéndose a un problema que tenía vigencia en la época.

En la VI Conferencia Interamericana de La Habana (1928) se adoptó el Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante, que dedica su título tercero a la extradición y establece normas para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales. Entre sus disposiciones figuran: la de que los Estados no están obligados a entregar a sus nacionales, pero sí a juzgarlos; es necesario que el hecho que motive la extradición tenga carácter de delito en la legislación del Estado requirente y en la del requerido; están excluidos los delitos políticos y conexos. Se suscribieron, asimismo, sendas convenciones sobre la materia en la VII Conferencia Interamericana de Montevideo (1933) y en Caracas (1911 y 1981).

El somero tratamiento de este tema se originó en la reciente diáspora delictiva de una leva de corruptos que, luego de cometer el mayor atraco en la memoria histórica del país, se puso a buen recaudo para disfrutar en el exterior de los dineros mal habidos.

Sería deseable que las autoridades competentes, en obligada respuesta al clamor nacional, agotasen con ahinco y diligencia los medios jurídicos necesarios (entre ellos la extradición) para poner término a la cínica impunidad y sancionar a los responsables.

(10 de Agosto de 2000)

MINAS ANTIPERSONALES

La Organización de las Naciones Unidas ha dedicado especial atención a la lucha contra las minas terrestres, desde la década de los ochenta, porque las decenas de millones de tales artefactos sembrados en más de 70 países del mundo han causado anualmente más de 30 mil muertes o mutilaciones en sectores indefensos de la sociedad civil, como niños, mujeres y ancianos. Ello no obstante, continúan diseminándose esos “asesinos silenciosos” en zonas de conflicto militar.

Es un tema de interés permanente pero que salió a relucir de manera especial en los últimos años. Inclusive fue una de las preocupaciones involucradas en las conversaciones y en el acuerdo de paz entre el Ecuador y el Perú. En otras regiones las preocupaciones han sido iguales o mayores, tomando en cuenta los graves estragos que causan estos artefactos, los riesgos que implica la limpieza y aun su alto costo. Todo ello ha determinado que este asunto merezca cada vez mayor atención internacional por parte de los gobiernos y de los organismos de derechos humanos.

La Asamblea General de la ONU ha planteado, a partir de 1993, una moratoria en la exportación de minas. Los Estados partes en la Convención sobre Armas Inhumanas, adoptada en 1980 bajo el patrocinio de la ONU, aprobaron en 1996 mayores restricciones al uso de esta arma letal. Y en 1997, los representantes de 120 Estados, reunidos en Ottawa (Canadá), suscribieron la Convención sobre la prohibición del uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de las minas terrestres antipersonales y sobre su destrucción, que constituye el primer acuerdo multilateral de desarme que proscribe en empleo de dicha arma.

El plenario de la Conferencia Diplomática de Oslo, celebrada en setiembre de 1997, adoptó por unanimidad el texto de la citada Convención, con la recomendación de que su ejecución debería estar aparejada con políticas de respeto irrestricto a los acuerdos de desarme, los pactos de no agresión y el arreglo pacífico de controversias internacionales.

A raíz de los enfrentamientos armados de Paquisha (1981) y del Alto Cenepa (1995), entre efectivos militares de Ecuador y Perú, se colocaron minas antipersonales en sectores fronterizos por parte de ambos ejércitos, a la luz del principio de legítima defensa, con las consecuencias que resulta obvio suponer. Como se sabe, la última conflagra-

ción abrió cauces a un intenso y prolongado proceso de negociaciones diplomáticas y militares, con la cooperación de los cuatro países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, que condujo en octubre de 1998 a la suscripción de la paz definitiva entre las dos naciones y la inauguración de una nueva relación bilateral, propicia a la construcción de un futuro compartido.

Con tales antecedentes, surge entre las tareas prioritarias la de acelerar la remoción de las minas antipersonales, ya que ahora carecen de sentido y constituyen más bien una potencial amenaza para los habitantes afincados en esas zonas fronterizas. Se han preparado técnicos en la ejecución de esa riesgosa operación, con asesoramiento de expertos americanos y canadienses, para llevar a buen término ese inaplazable cometido. Según recientes declaraciones de un alto jefe militar ecuatoriano, actualmente laboran en dos frentes los batallones Santiago y Cenepa, que cuentan con equipos procedentes de Estados Unidos, Canadá y España para la remoción de esos artefactos mortíferos. Hay que impulsar, por otra parte, los programas y proyectos de desarrollo fronterizo contemplados en los acuerdos de paz, para elevar el nivel de vida de los sectores periféricos, en el contexto de las prioridades nacionales.

(3 de Octubre de 2000).

DERECHO DEL MAR

El nuevo derecho del mar es uno de los logros jurídicos relevantes de la sociedad internacional contemporánea, que revolucionó el tradicional derecho de gentes en varios aspectos sustantivos. En efecto, la vigente Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Jamaica, 1982) codificó las normas consuetudinarias reconocidas hasta entonces e incorporó varias figuras jurídicas de reciente elaboración.

La evolución histórica del tema comprende tres etapas claramente diferenciadas: la que procede de siglos anteriores y concluye en 1945; la que abarca las dos conferencias de Ginebra (1958 y 1960); y la que culmina con la III Conferencia sobre el Derecho del Mar y la suscripción de la citada Convención de Jamaica.

La primera etapa, en que prevalecieron los intereses de la navegación internacional, distinguió dos espacios marítimos: el mar territorial,

con soberanía del Estado ribereño, y el alta mar o mar libre. El mar territorial tuvo desde antiguo una connotación militar y de seguridad, confirmada en el siglo XVIII por el clásico aforismo del holandés Bynkershoek y del italiano Galliani, quien calculó la extensión de ese espacio marítimo en 3 millas, por el alcance de un cañón de la época.

En septiembre de 1945, las dos proclamas del presidente Truman de los Estados Unidos, sobre plataforma continental y actividades pesqueras, abrieron cauces a la tesis de la ampliación de la jurisdicción nacional a 200 millas marinas.

Se flexibilizó así la clásica noción de las 3 millas de mar territorial y cobró impulso una nueva corriente de pensamiento sobre la índole de los espacios marítimos, que pasó a considerarlos no sólo como vías de comunicación internacional sino fuentes de recursos naturales, con una fuerte carga de contenido económico. Cambió incluso la noción de la horizontalidad de las aguas para incorporar el concepto de la pertenencia del lecho del mar y subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas, allende el mar territorial.

Con base en estos antecedentes nació la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima, suscrita el 18 de agosto de 1952 por Ecuador, Chile y Perú. Colombia se incorporó al grupo en 1979. Las partes contratantes proclamaron como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña sus costas hasta una distancia de 200 millas marinas, desde las referidas costas, sin menoscabo de las limitaciones establecidas por el Derecho Internacional, a favor del paso inocente de las naves de todas las naciones.

La gravitación de la Declaración de Santiago (con el apoyo latinoamericano y de los países en vías de desarrollo) fue muy importante en las dos conferencias de Ginebra, en que se aprobaron varios instrumentos, así como en la elaboración de la citada Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Importa recordar además que el Ecuador jugó un papel relevante como adalid de los países “territorialistas”, cuyas posiciones maximalistas fueron útiles al conjunto de la negociación. Chile y Colombia firmaron la Convención, que contempla un mar territorial de 12 millas en el marco de una zona económica exclusiva de 200 millas. Ecuador y Perú suscribieron solo el acta final de la Conferencia, pero no la Convención, por lo cual no son partes en este instrumento universal vigente desde 1994. Nuestro país ten-

drá que revisar tarde o temprano esta posición y armonizar su legislación interna con la normativa internacional.

(7 de Noviembre de 2000).

LOS DESAFÍOS DE LA PAZ

El mantenimiento de la paz y la seguridad son objetivos prioritarios de la sociedad internacional jurídicamente organizada. No hay que olvidar, empero, que este es un hecho que se produce en el siglo XX: con la Sociedad de las Naciones, al término de la primera guerra mundial, y la ONU, al concluir la segunda conflagración universal. Es que en siglos anteriores la guerra llegó a constituir un medio de realización del derecho y un instrumento lícito de arreglo de los conflictos internacionales. La doctrina clásica justificaba el uso de la fuerza en las relaciones internacionales: San Agustín y Santo Tomás, por ejemplo, sentaron las bases doctrinarias de la denominada “guerra justa”. El Pacto de la Sociedad de las Naciones (1919) fue el primer acuerdo multilateral que limitó el llamado derecho de la guerra de los Estados.

Pero fue la Carta de la ONU (1945) la que perfeccionó el sistema al disponer que “los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. En ese contexto, la normativa de la ONU dispone que todos los Estados deben arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.

El Ecuador, en 1998, apostó a la opción de la paz definitiva con el Perú, como culminación de un complejo proceso de negociaciones diplomáticas realizadas con el concurso de los cuatro garantes, a raíz del conflicto del Alto Cenepa (1995). Es que una paz estable y permanente surgía como un factor impostergable para la construcción del futuro de nuestro país, libre de tensiones cíclicas y orientado a su desarrollo integral.

La suscripción del Acta Presidencial de Brasilia y de varios acuerdos específicos sobre temas de interés común abrió cauces a un dinámico proceso de acciones bilaterales al servicio del progreso y buen entendimiento de ambos pueblos.

La nueva relación ecuatoriano-peruana marcha con buenos auspicios y tiende a la convergencia de esfuerzos sustentadores de un porvenir compartido, en aspectos de interés recíproco, tales como la integración, el comercio, el turismo, el intercambio cultural, el fomento de las medidas de confianza, etc.

Pero la instalación de la paz no se agota en esta relación bilateral trascendente y valiosa. Se trata ahora de fortalecer la institucionalidad democrática del Ecuador y de afianzar los mecanismos estructurales que posibiliten la promoción de un desarrollo equilibrado y armónico de todas las regiones del país, con base en una mística de unidad nacional y en el rescate de nuestros valores permanentes, ensombrecidos por los rigores de la crisis actual. La paz representa, por tanto, un reto histórico que demanda la adecuada y unívoca respuesta de todos los ecuatorianos, en torno de un proyecto nacional serio, responsable y solidario.

Oteando el horizonte nacional parecería que el país no estaba preparado para asumir las responsabilidades emergentes de la paz, como si el único aglutinante cívico hubiera sido el conflicto cíclico con el Perú. El actual debate político ofrece la equívoca impresión de un país con particularismos desintegradores y acaso con atisbos de implosión de la unidad nacional.

Esperemos que prospere la toma de conciencia individual y colectiva en el sentido de que debemos superar gallardamente los desafíos de la paz, en el marco de una gobernabilidad eficiente y de una unidad nacional vigorosa.

(2 de Enero de 2001)

COMISIÓN DEL PACÍFICO SUR

La vorágine de acontecimientos vinculados con la profunda crisis que afecta a la sociedad ecuatoriana obstó el adecuado registro de la elección de nuestro país como sede estable de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), que desde su fundación había tenido carácter rotativo. El presidente Gustavo Noboa, en su reciente mensaje a la nación, señaló este hecho como un éxito destacable de nuestra diplomacia.

Importa recordar que dicha entidad se constituyó en agosto de 1952 con el nombre de “Comisión Permanente de la Conferencia sobre

Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur”, cuando los presidentes de Chile, Gabriel González Videla; del Ecuador, Galo Plaza Lasso; y, del Perú, José Luis Bustamante y Rivero, suscribieron la “Declaración de Santiago sobre Zona Marítima”, que abrió cauces a la consolidación del nuevo derecho del mar. La actual denominación de la Comisión se adoptó en el estatuto de la Secretaría General suscrito el 30 de mayo de 1967 en la ciudad de Quito.

Bien se conoce que la suscripción de la Declaración de Santiago se produjo en circunstancias en que ganaba espacio en el escenario internacional la tendencia orientada a ampliar la anchura del mar territorial y a proteger los recursos naturales de los países ribereños.

La determinación de la extensión del mar territorial era facultad privativa del Estado ribereño, pero la costumbre internacional la había fijado en 3 millas marinas. Según la declaración, “los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas”.

Entre las razones que sustentan tal decisión está la de que los gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico, de donde nace su deber de cuidar de la conservación y protección de sus recursos naturales.

La declaración tripartita, a la que adhirió Colombia en 1979, jugó un papel muy importante en las conferencias de las Naciones Unidas sobre esta materia, que culminaron con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Jamaica, 1982), que está en vigencia como norma universal. La instauración de la CPPS respondió a la necesidad de los Estados miembros de contar con un organismo que coordinara en la región la política mínima contemplada en la Declaración de Santiago. El funcionamiento de la entidad está a cargo de la Secretaría General, asesorada por la Comisión Jurídica, la Comisión Coordinadora de las Investigaciones Científicas y la Comisión Económica.

Los objetivos de la CPPS pueden sintetizarse así: el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos vivos marinos; la investigación relativa a la interacción océano-atmósfera, sus variables y efec-

tos socioeconómicos; la investigación de los recursos no vivos y su explotación; el afianzamiento y desarrollo progresivo del Derecho del Mar; la política de promoción de los intereses económicos de los países miembros de la CPPS y de éstos con los demás Estados de la Cuenca del Pacífico.

La sede permanente de la CPPS está en la ciudad de Guayaquil.
(29 de Enero de 2001).

CORTE PENAL INTERNACIONAL

La suscripción del Estatuto constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI) fue uno de los últimos actos trascendentes del presidente Clinton en materia de política exterior estadounidense. Se trata de una decisión política significativa en el contexto internacional dada la posición que había mantenido sobre el tema el gobierno de los Estados Unidos. Revisemos someramente los antecedentes del caso para poder apreciarlo con objetividad.

La instauración de la Corte ha sido uno de los propósitos alentados por la comunidad internacional, porque en el siglo XX millones de seres humanos han sido víctimas de atrocidades que estremecen la conciencia de la humanidad y que no deben quedar sin castigo.

En la década de los cincuenta, las Naciones Unidas encomendaron a la Comisión de Derecho Internacional la elaboración de un proyecto de Estatuto para el establecimiento de la Corte, con base en la experiencia del Tribunal de Núremberg, que juzgó a los criminales nazis al término de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las confrontaciones de las grandes potencias, en el marco de la “guerra fría”, obstaron la ejecución del proyecto, que solo se viabilizó a raíz de la caída del muro de Berlín (1989).

La Asamblea General de la ONU estableció en 1995 el Comité Preparatorio para discutir el Proyecto de Estatuto y dos años después convocó a la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios, que se reunió en Roma en 1998. En ella hubo, por cierto, posiciones divergentes, que iban desde las actitudes de apoyo del llamado “grupo afín” (más de 60 países, incluido el Ecuador) hasta las posiciones obstruccionistas de las grandes potencias. Las discrepancias se centraban básicamente en la exigencia de los miembros permanentes del Consejo de Se-

guridad para ser partícipes de la iniciación de un procedimiento judicial. El Estatuto se aprobó el 17 de julio de 1998 y estuvo abierto a la firma de todos los Estados hasta el 31 de diciembre del año 2000. La Corte será, según su texto, el máximo órgano judicial, con alcance planetario, para juzgar a las personas que cometan los más graves delitos de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, evitando así la impunidad de sus autores.

La competencia de la Corte abarcará los delitos de genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y crímenes de agresión. Conviene advertir que la Corte será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales y no reemplazará a los tribunales nacionales. Su sede estará en La Haya (Países Bajos, donde funciona el Tribunal Penal Internacional para la ex – Yugoslavia, que conoce de los crímenes cometidos en ese país.

La decisión del presidente Clinton recibió elogios de los defensores de los derechos humanos, pero frontales cuestionamientos de varios legisladores y ex secretarios de Estado de tendencia republicana. El senador Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, calificó la decisión de “indignante e inexplicable”. El gesto político de Clinton revela un deseo de consignar la impronta de su administración en esta importante materia y de allanar el camino a su sucesor. Pero las reacciones iniciales de elementos vinculados con la nueva administración adelantan señales de que la improbable aprobación del instrumento por el Congreso, para su ulterior ratificación, podría convertir aquel valioso ademán político en mero saludo a la bandera.

(5 de Marzo de 2001)

LA OEA Y EL DESMINADO

El 19 de marzo se realizó en la Cancillería la suscripción de un acuerdo por el cual la Organización de Estados Americanos coopera con el Gobierno del Ecuador, con la suma de 4,6 millones de dólares, para la remoción de las minas colocadas en la frontera ecuatoriano-peruana a raíz del conflicto del Alto Cenepa (1995). La contribución de la OEA se enmarca en su respaldo institucional a las acciones que tienen que ver con la paz y la seguridad internacionales. El embajador Luigi Einaudi, secretario general adjunto de la OEA, y el canciller Heinz

Moeller intercambiaron discursos de circunstancia en los que se confirió rango relevante al proceso de paz entre Ecuador y Perú.

Vale la pena parar mientes en la índole de dicho convenio. Importa recordar, por ejemplo, que las Naciones Unidas se preocuparon, a nivel universal, de la lucha contra las minas terrestres, desde la década de los ochenta, porque la siembra en el mundo de millones de estos “asesinos silenciosos” ha causado anualmente millares de muertes o mutilaciones en sectores vulnerables de la sociedad civil, como niños, mujeres y ancianos. Por ello la Asamblea General de la ONU planteó, desde 1993, una moratoria en la exportación de minas; y, en 1997, los representantes de 120 Estados congregados en Ottawa (Canadá), firmaron la Convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de las minas terrestres antipersonales y su destrucción, que es el primer acuerdo multilateral de desarme que prohíbe el empleo de esa arma. El plenario de la Conferencia Diplomática de Oslo (setiembre de 1997), adoptó por unanimidad el texto de dicho instrumento.

En el ámbito regional, la OEA ha dedicado también atención al tema y ha alcanzado alguna experiencia a través de la cooperación brindada por la Junta Interamericana de Defensa a países de Centroamérica que padecieron hace poco los rigores de la barbarie bélica.

En nuestro caso, como se sabe, a raíz de las confrontaciones armadas de Paquisha (1981) y del Alto Cenepa (1995) se implantaron, por ambos ejércitos, minas antipersonales en sectores fronterizos, en aplicación del principio de legítima defensa, con los efectos que huelga señalar. Una vez concertada la paz definitiva se ha instaurado una nueva relación bilateral de cooperación y buena vecindad, con proyectos y programas que abren perspectivas alentadoras y mutuamente beneficiosas. En ese contexto, la desactivación de ese cerco amenazante y peligroso se ha tornado prioritaria para las poblaciones fronterizas. Pero es tan delicada y compleja la operación, agravada por las características físicas de una geografía intrincada, que los riesgosos trabajos demandarán de 8 a 10 años, con un costo muy oneroso. La contribución de la OEA servirá para impulsar las tareas iniciadas ya desde febrero del año pasado, con los auspicios de Estados Unidos, Canadá, España y otros países de la Comunidad Europea.

No me cabe duda de que en la génesis del convenio que acaba de suscribirse deben haber obrado iniciativas del embajador Einaudi,

prestigioso diplomático estadounidense comprometido con acciones pacificadoras en diversas latitudes del mundo, quien representó a su país entre los cuatro garantes del Protocolo de Río hasta la culminación del proceso de paz entre Ecuador y Perú, en 1998. Hombre de cátedra y de libros, aprovechó la coyuntura para pronunciar sendas conferencias en la Cancillería y en la Universidad Central.

En lo personal, me fue grato dialogar con quien fuera mi colega en el Consejo Permanente de la OEA, donde bregamos por buenas causas, como la defensa de la democracia y de los derechos humanos.

(27 de Marzo de 2001)

DEFENSA DE GALÁPAGOS

Como se sabe, los españoles arribaron por vez primera al archipiélago de Galápagos en marzo de 1535, de modo casual y en el marco de una angustiada peripecia propia de la navegación de la época, cuando fray Tomás de Berlanga, obispo de Castilla del Oro (Panamá), venía a cumplir en el Perú una misión encomendada por el Emperador Carlos V. El monarca confió al sabio dominico la tarea de informarle sobre los descubrimientos hechos en su nombre y de zanjar las diferencias entre los gobernadores Pizarro y Almagro, que a la postre tuvieron un desenlace trágico.

En su viaje de Panamá al Perú, la frágil embarcación, arrastrada por las corrientes marinas, dio con las Islas Encantadas, cuyas especies zoológicas prehistóricas y un paisaje de singular exotismo agotaron la capacidad de asombro del Obispo, quien refirió al Emperador sus impresiones de este periplo mágico.

Las islas permanecieron olvidadas alrededor de tres siglos y se convirtieron en refugio intermitente de corsarios y filibusteros rapaces que aterrorizaban a las poblaciones de la costa del Pacífico. Solo a partir del siglo XIX el archipiélago se tornó conocido internacionalmente por su fauna y flora, que concitaron la atención mundial de los hombres de ciencia. De éstos el más famoso fue el naturalista inglés Charles Darwin, quien elaboró allí sus célebres teorías sobre la evolución y el origen de las especies. El doctor Teodoro Wolf realizó importantes trabajos por disposición del Gobierno del Ecuador.

El Gobierno ecuatoriano tomó posesión oficial del archipiélago de Galápagos el 12 de febrero de 1832, con base en la iniciativa del ge-

neral José de Villamil, prócer de la independencia de Guayaquil, quien elaboró proyectos específicos de colonización y explotación de recursos naturales.

Numerosas expediciones extranjeras e innumerables publicaciones en diversos idiomas dan testimonio del interés científico universal por las Galápagos. No han faltado, por cierto, enfoques geopolíticos de las grandes potencias, que han revelado intereses de otro carácter sobre las islas.

En los tiempos actuales, la Fundación Charles Darwin trabaja desde 1964 exclusivamente para las Galápagos, bajo contrato con el Gobierno del Ecuador, para asegurar la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, mediante la investigación científica y acciones complementarias. Ha suministrado asesoría técnica al Servicio del Parque Nacional Galápagos y a las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales de nuestro país.

El 8 de setiembre de 1978 la UNESCO declaró Patrimonio Natural de la Humanidad al archipiélago de Galápagos, que alcanzó además el reconocimiento internacional de “Reserva de la Biosfera” en 1984. Por éstas y otras consideraciones este hermoso jirón de la patria es no solo un laboratorio científico sino preciada gema turística nacional y referente obligado del turismo mundial.

Las recientes informaciones sobre el brutal sacrificio de lobos marinos y otros sucesos conexos causaron un impacto negativo para el Ecuador en la opinión pública internacional, atenta siempre a la adecuada conservación del patrimonio natural. Las autoridades competentes están llamadas a evitar que estos hechos bochornosos queden en la impunidad, aplicando todo el rigor de la ley.

(11 de septiembre de 2001)

LA GUERRA DEL SIGLO XXI

El mundo contempló atónito, el 11 de septiembre, el atentado terrorista en Nueva York y Washington, que por su espectacularidad y barbarie no solo hirió la sensibilidad de la comunidad internacional sino la racionalidad y la dignidad de la persona humana. La solidaridad planetaria se hizo presente de inmediato hacia el pueblo y el Gobierno

de los Estados Unidos, que por vez primera experimentaron en su territorio una catástrofe de esas dimensiones y características.

El presidente George W. Bush, con justa indignación y emoción desbordada, proclamó que se iniciaba la primera guerra del siglo XXI y prometió el ejercicio de una represalia rigurosa a los autores e inspiradores de este atentado apocalíptico. El Secretario de Defensa, por su parte, hizo esta declaración contundente: “Nuestra respuesta no se limitará solo a objetivos dispersos, sino que se extenderá a los símbolos y estados que albergan terroristas”.

Creo que vale la pena parar mientes en la actitud de la Administración Bush, más allá de su reacción inmediata. Importa recordar que desde hace varias décadas los intereses de los Estados Unidos han estado en la mira del terrorismo internacional, que ha atacado en diversas latitudes del mundo a misiones diplomáticas norteamericanas y entidades vinculadas con la gran potencia.

La política americana antiterrorista, en tales casos, se ha regido por tres normas generales: 1) no hacer tratos con terroristas ni someterse a sus chantajes; 2) considerarlos como delincuentes, perseguirlos con energía y hacer valer el imperio de la ley; y, 3) presionar en lo posible a los Estados que patrocinan a los terroristas, imponiéndoles sanciones económicas, diplomáticas y políticas. El gobierno de Bill Clinton incrementó el empleo de la extradición como instrumento antiterrorista.

Ahora el presidente Bush anuncia su determinación de emplear la fuerza armada en una guerra no convencional y contra un enemigo sin faz ni bandera, que opera desde las sombras y manipula el factor sorpresa para sus incursiones atroces. Conviene advertir que la prohibición general de recurrir al uso de la fuerza en las relaciones internacionales como medio de solución de conflictos es uno de los avances sustantivos del derecho internacional contemporáneo, ya que antaño la guerra era permitida como atributo de la soberanía de los Estados, a partir de la doctrina de la “guerra justa” de San Agustín y Santo Tomás. La ONU, perfeccionando el limitado sistema de la Sociedad de las Naciones, proscribió el recurso de la fuerza, con excepción de los casos previstos en la Carta y, por cierto, del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de agresión por un Estado.

En síntesis, si está vigente un orden jurídico universal que se expresa institucionalmente en la ONU, lo deseable sería que las medidas colectivas se adoptasen en el ámbito de la organización universal. Se

habla incluso de una acción colectiva enmarcada en el sistema interamericano, a través de la OEA o del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) a pesar de que no aparece muy clara su adaptación a las circunstancias actuales. Hay que recordar en todo caso que el tema del terrorismo ha figurado, desde hace varios lustros, en las agendas de la ONU y de la OEA.

A la luz de las someras consideraciones precedentes, hay que alentar la esperanza de un tratamiento sereno y objetivo del tema, para preservar la paz y la seguridad internacionales, evitar una escalada impredecible de violencia y abrir espacio a la revisión de los grandes temas de nuestro tiempo.

(26 de septiembre de 2001)

VARIACIONES SOBRE EL TERRORISMO

El mundo está inmerso en la eclosión de un fenómeno de posguerra fría que ha irradiado pánico y desconfianza en dimensión planetaria, sobre todo por los efectos psicológicos del bioterrorismo que actúa por doquier. La intensificación del flagelo terrorista se pronosticó hace algún tiempo cuando declinaban los rigores de la bipolaridad (Estados Unidos – Unión Soviética) y se vislumbraba la implosión de esta última potencia.

En el período de la “guerra fría” (1947-1990) los paradigmas de cooperación y de conflicto funcionaban claramente en un sistema de relaciones internacionales orientadas por los ejes Este-Oeste y Norte-Sur, en virtud de criterios ideológicos o estructurales, respectivamente. Pero a raíz de la caída del muro de Berlín y la instalación de la unipolaridad, con Estados Unidos como potencia hegemónica, se anunciaba la emergencia de un mundo difuso y acosado por problemas tales como el narcotráfico, el fundamentalismo religioso, las viejas disputas territoriales, las levas de refugiados, las cuestiones ambientales, etc.

El terrorismo internacional no es, por cierto, de reciente data, pero nunca antes había alcanzado las características de espectacularidad y barbarie como en los atentados del 11 de septiembre, que destruyeron las Torres Gemelas de Nueva York y parte del Pentágono en Washington. Los intereses norteamericanos habían sufrido ya el embate del terrorismo en diversas latitudes del planeta hacía varios lustros. Y la

respuesta de Washington se cimentó en una política firme e invariable, aunque sin el recurso a la fuerza.

El demencial ataque a suelo estadounidense, en actitud de desafío a la comunidad internacional, abre un capítulo inédito. A la luz de la ortodoxia jurídica, que se conecta con un orden internacional, habría sido deseable que la respuesta se produjera en el marco universal de las Naciones Unidas. La represalia al ataque terrorista se ha dado, sin embargo, unilateralmente por los Estados Unidos, con el respaldo de varios países integrados en una coalición político-militar. La gran potencia ha obrado por fuera de la ONU y su actitud se pudiera explicar por las carencias del actual sistema de seguridad colectiva, alejado del espíritu de su creación en la Carta de la ONU. Pero las adhesiones institucionales de la ONU, la OEA y la Unión Europea rescatan en alguna medida el valor del multilateralismo.

Seas cual fuere el desenlace de las acciones bélicas en Afganistán, Estado protector de los terroristas, la ONU tendrá que afinar los mecanismos jurídicos necesarios para la lucha global contra el terrorismo internacional. Importa recordar que hay varias convenciones sobre manifestaciones específicas del terrorismo (navegación aérea y marítima, secuestros, etc.) pero no un instrumento integral sobre la materia. La Comisión de Derecho Internacional de la ONU considera desde 1999 un proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, que acaso podría cubrir ese vacío.

Los líderes del terrorismo debieran estar incursos en la responsabilidad penal internacional, ya que hasta ahora el Derecho Internacional solo ha involucrado en la comisión de ilícitos a personas en ejercicio de funciones oficiales, como ocurrió con los criminales de guerra después de la segunda conflagración mundial. En todo caso estimo propicia la coyuntura para que los grandes centros de poder instauren un nuevo orden internacional, con cambios sustantivos que abran cauces a un mundo mejor, más humano y justo.

(8 de Noviembre de 2001)

ESCORZO DE LA MIGRACIÓN

La migración es un fenómeno social que se remonta a las edades primigenias de la especie humana, cuando el hombre se veía compeli-

do a desplazarse, en ejercicio de un forzoso nomadismo, en procura de los medios necesarios para su subsistencia.

Con el decurso del tiempo los movimientos migratorios se produjeron al impulso de diversas causas de origen político, religioso, económico, etc. Los pueblos de la antigüedad experimentaron flujos migratorios y tendencias hacia la concentración urbana en ciudades como Roma y Alejandría, que en su época se dice que superaban el millón de habitantes. El medioevo, con las fracturas y dispersiones de las unidades políticas, representó más bien un retroceso en ésta como en otras materias.

La edad moderna y sobre todo la contemporánea han impulsado las diversas modalidades de la migración, en dimensión interna, continental o intercontinental. La primera aventura interoceánica se produjo, como se sabe, en los siglos XV y XVI, en el asombroso período de los descubrimientos geográficos, con españoles y portugueses como pioneros del periplo europeo hacia tierras americanas. En el siglo XX las dos guerras mundiales generaron una enorme masa de desplazados y de refugiados, que concitaron la atención de la comunidad internacional, ya que se trataba de millones de personas desarraigadas de sus países de origen.

La Sociedad de las Naciones, primero, y la Organización de las Naciones Unidas, después, han desplegado esfuerzos encaminados a propiciar la protección de los refugiados.

América ha sido la gran receptora de migraciones procedentes de diversas latitudes, a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Estados Unidos ha constituido el destino por excelencia del inmigrante universal. Varios países de Sudamérica, especialmente Brasil y el núcleo del cono sur, captaron corrientes migratorias procedentes básicamente de Europa y Asia. Ecuador no instrumentó una política estatal para atraer un segmento significativo de ese flujo migratorio foráneo.

El ecuatoriano no se había caracterizado por integrar levas de emigrantes en procura de nuevos horizontes de bienestar. Pero en años recientes hemos forjado una sociedad expulsora ante el fracaso del poder político, que no ha podido atender los requerimientos populares mediante la ejecución de una agenda social sustentada en un manejo económico eficiente y una institucionalidad democrática comprometida con el bien común y no con los intereses de los grupos de presión.

Por otra parte, una corrupción generalizada alcanzó su sombría apoteosis en el mayor atraco bancario de la historia republicana, empobreciendo a todos los estamentos de la población.

Con estos antecedentes, centenares de miles de compatriotas han provocado una diáspora nacional de elevado costo humano, que se expresa no solo en la angustia del desarraigo sino en la fractura de numerosos hogares, con secuelas de diverso orden. En todo caso, el trabajo esforzado de los ecuatorianos en el exterior produce hasta ahora un ingreso de divisas sólo superado por el petróleo. Esta situación no dejará por cierto de sufrir el impacto negativo que afecta a la comunidad internacional por el bárbaro atentado terrorista del 11 de septiembre.

Loa próximos gobernantes tienen el reto de crear las condiciones necesarias para el retorno de los ecuatorianos que quieran luchar por el progreso de su país sin necesidad de este forzoso extrañamiento.

(14 de Diciembre de 2001)

SOBRE EL TERRORISMO

La imagen espectral de los bárbaros atentados terroristas del 11 de septiembre, en Nueva Cork y Washington, ha reactivado con inusitadas intensidad la consideración del tema en los foros internacionales de carácter universal y regional. No hay que olvidar que el terrorismo de Estado, por ejemplo, tiene una trayectoria histórica de varios siglos y que el terrorismo por rechazo a lo establecido o por reivindicaciones de diversa índole tampoco es muy reciente. Importa conocer, grosso modo, el tratamiento de este preocupante fenómeno en el marco de la ONU y de la OEA.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó una resolución sobre “El terrorismo con fines políticos o ideológicos como fuente de violación de los derechos humanos”, que generó la negociación y aprobación, en 1971, de la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional. Posteriormente, y por mandato de la Asamblea General de la OEA, se realizaron estudios orientados a encontrar directrices generales que permitieran llegar a acuerdos para la preparación de un proyecto de convención sobre terrorismo en general, dada la complejidad de la materia.

La Asamblea General de la ONU, preocupada por la proliferación de actos terroristas, estableció en 1972 un Comité Especial sobre Terrorismo Internacional, encargado de examinar las causas subyacentes del problema y recomendar los medios de lucha pertinentes. En 1994 la Asamblea General aprobó una declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, cuya práctica considera criminal e injustificable. En el marco jurídico-político de la ONU se han aprobado varios tratados internacionales sobre aspectos específicos del terrorismo, tales como: infracciones cometidas a bordo de las aeronaves (1963); apoderamiento ilícito de aeronaves (1970); delitos contra personas internacionalmente protegidas (1973); actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (1971); protección física de los materiales nucleares (1980); actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (1988); represión de la financiación del terrorismo (1999).

Frente a los atentados del 11 de septiembre se produjo la respuesta unilateral de los Estados Unidos, respaldada luego por una poderosa coalición político-militar de países comprometidos en la lucha contra este flagelo mundial. La ONU y la OEA tomaron también acciones institucionales de apoyo, ya que las cartas constitutivas de ambas organizaciones internacionales contienen normas categóricas en torno al derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, y a la utilización de mecanismos destinados a enfrentar la agresión.

Las resoluciones de la ONU y de la OEA coinciden en considerar al terrorismo como un fenómeno de carácter universal que debe ser combatido con firmeza por los Estados miembros, sobre la base de una efectiva cooperación regional e internacional.

(8 de Febrero de 2002)

EL CONFLICTO DEL MEDIO ORIENTE

El cruento conflicto árabe-israelí es un tema recurrente en la agenda internacional desde la creación del Estado de Israel por resolución de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 29 de noviembre de 1947, con el voto favorable del Ecuador. Dicha resolución se adoptó en el marco del impacto emocional generado en la comunidad internacional por la barbarie del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial y se basó, en buena medida, en la denominada “Declaración Balfour (1917). En este documento el Gobierno británico, encargado del

mandato de Palestina por decisión de la Liga de las Naciones, manifestó que veía con agrado “el establecimiento de un hogar nacional en Palestina para el pueblo judío....entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina”.

El Reino Unido solicitó una reunión de la Asamblea General de la ONU, en abril de 1947, para “estudiar la cuestión de Palestina” y nombrar un Comité Especial que se ocupara de tan delicado tema, ya que las disputas en el mandato se incrementaban. Con base en los informes de ese Comité, la Asamblea General aprobó, tras enconados debates, la propuesta de división de Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe, con un régimen internacional para Jerusalén.

Se había señalado el 15 de mayo de 1948 para el retiro de la potencia colonial, pero la víspera el Consejo Nacional Judío proclamó la fundación del Estado de Israel. Al día siguiente las tropas árabes cruzaron las fronteras de Palestina y se instaló una violencia alimentada por el rechazo a la legitimidad de la existencia del Estado de Israel. Las confrontaciones alcanzaron tal intensidad que la ONU designó un mediador de alto nivel, el Conde Folke Bernadotte, de Suecia, quien rindió el tributo de su vida en el ejercicio de su misión, pues fue asesinado en Jerusalén el 17 de septiembre de 1948. Después vendrían los sacrificios de Sadat y Rabin.

Las victorias bélicas de Israel frente a los Estados árabes, especialmente en 1956 y 1967, le permitieron triplicar su extensión territorial originaria. Y no obstante la devolución de la península de Sinaí a Egipto, conserva todavía apreciables espacios territoriales, que son parte de la controversia, pues ésta se refiere a la devolución de los territorios ocupados, a la situación de los refugiados palestinos y al estatuto de Jerusalén. Los presidentes Carter y Clinton, de los Estados Unidos, interpusieron sus buenos oficios en los años 1978 y 2000, respectivamente, para tratar de conciliar los intereses de las partes en conflicto. Fueron importantes los acuerdos de Camp David.

La situación se ha tornado últimamente tan compleja, con una escalada de violencia irracional que ha suscitado acciones diplomáticas de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y del presidente George W. Bush, encaminadas a estimular la búsqueda de soluciones negociadas y a proscribir el uso de la fuerza. Acaba de producirse en estos días un nuevo e importante paso en esa misma dirección, pues

se ha planteado la conveniencia de convocar a una conferencia de paz para el Medio Oriente, con el apoyo de la comunidad internacional, que alienta los esfuerzos de tal naturaleza. Suiza estaría dispuesta a ser sede de esa cumbre diplomática. Esperemos que estos desarrollos permitan a palestinos e israelitas alcanzar una paz estable y mutuamente provechosa.

(7 de Mayo de 2002).

EL TRAUMA DE LA SEGURIDAD

No hay duda de que los bárbaros atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, en Nueva Cork y Washington, alteraron la cosmovisión de la comunidad internacional y, especialmente de los Estados Unidos, en materia de seguridad.

La organización jurídica de la sociedad internacional se expresa en las Naciones Unidas y éstas se cimientan en tres principios básicos: paz, seguridad y desarrollo, que a su vez contemplan una serie de elementos reguladores de la amistosa convivencia de los Estados. En efecto, la Carta de la ONU concede rango prioritario al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y, desde esa perspectiva, proscribe el uso de la fuerza en la solución de controversias, que han de someterse a los medios de arreglo pacífico previstos en el derecho de gentes. Importa advertir que este marco institucional se refiere a incidentes que ocurrieren en las relaciones entre Estados. Y en este ámbito la ONU ha desplegado, entre éxitos y fracasos, una intensa labor.

Pero lo ocurrido en torno a los atentados terroristas tiene otras características. La ONU ha propiciado, desde hace varios lustros, la concertación de tratados multilaterales sobre aspectos específicos de este flagelo, pero no ha logrado hasta ahora una convención universal sobre el terrorismo. Tampoco hay una definición jurídica de tal delito con ese mismo alcance. Seguramente por esta razón, o porque las grandes potencias han optado en ciertas circunstancias por actuar al margen de las Naciones Unidas, los Estados Unidos dieron una respuesta unilateral en Afganistán, con el apoyo de una coalición estatal sin precedentes. El mundo tiene una visión gráfica de estos desarrollos, con la figura enigmática de Bin Laden encabezando el imaginario del “eje del mal”.

El hecho cierto es que el espectro del terrorismo ha generado una sensación de inseguridad en el mundo y, con ella, la adopción de conductas que restringen normas convencionales hasta ahora observadas. Un viaje aéreo a Estados Unidos o Europa tiene sus bemoles. A las explicables medidas cautelares que demanda el narcotráfico ahora se añade el comprensible temor al terrorismo. Un viaje interno en los Estados Unidos, por ejemplo, es peor que el internacional, porque los controles son de tal naturaleza que ya han merecido reparos de la propia prensa norteamericana. Como a un aprendiz de terrorista se le detectó calzado con explosivos, ahora todos los pasajeros deben someterse también a esa rigurosa inspección. Y un pasaporte diplomático no se diferencia de un pasaporte ordinario, con lo cual la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (ONU, 1961) se ha convertido casi en una curiosidad arqueológica.

Lo anecdótico tal vez no tenga relevancia, pero sí preocupa el hecho de que puede desarrollarse un sistema de restricciones que vulnere el ejercicio de determinados derechos y libertades individuales. Lo que importa es fortalecer por todos los medios la cooperación internacional en la lucha común y compartida contra el terrorismo, artero violador de derechos humanos.

Los grandes centros de poder, al cimentar sus mecanismos de seguridad con la asignación de cuantiosos recursos, no deberían atenuar su compromiso con la cooperación para el desarrollo de nuestros países, ya que es un factor complementario de ese mismo propósito y un estímulo a la consolidación de nuestros procesos democráticos.

(5 de Junio de 2002)

ESTADOS UNIDOS Y LA CORTE PENAL

La decisión del presidente George W. Bush de no ratificar el Estatuto constitutivo de la Corte Penal Internacional y, en consecuencia, mantener a los Estados Unidos por fuera de este importante tribunal de justicia penal, representa una preocupante noticia para la comunidad internacional, ya que la ausencia de la superpotencia mundial debilita la eficacia de la Corte. Entre los argumentos que se han enunciado para respaldar tal actitud figura el de que pudiera producirse eventualmente una manipulación política en la Corte, en perjuicio básicamente

te de elementos militares norteamericanos, percepción no compartida por voceros de la Unión Europea.

Importa señalar que uno de los últimos actos relevantes de la Administración Clinton, en materia de política exterior, fue la firma del referido instrumento multilateral, que mereció elogios de los defensores de los derechos humanos en diversas latitudes del planeta. Pero fue también objeto de cuestionamientos por parte de varios legisladores y ex secretarios de Estado de tendencia republicana, al extremo de que la decisión fue calificada de “indignante e inexplicable” por el senador Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Esta última posición abría espacio al pesimismo y presagiaba en alguna medida lo que acaba de ocurrir. Ha poco tiempo la Administración Bush protagonizó asimismo un comportamiento negativo frente al Protocolo de Kyoto, tema de interés universal en la agenda del medio ambiente. Como se recordará, el Estatuto aprobado en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios (Roma, 17 de julio de 1998), representa la culminación de unos esfuerzos iniciados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la década los cincuenta, a partir de la experiencia del Tribunal de Nüremberg, que juzgó a los criminales nazis al término de la segunda conflagración mundial.

Las confrontaciones de las grandes potencias en el marco de la bipolaridad dilataron la concreción del proyecto de creación de la Corte, que ya es una laudable realidad. La CPI, al tenor de su Estatuto, tiene competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Hay que aclarar, sin embargo, que es un órgano complementario de las jurisdicciones penales nacionales, con las cuales comparte el propósito de evitar que los autores de tales crímenes se refugien en la impunidad. La competencia de la Corte Penal Internacional comprende los siguientes crímenes: delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y el delito de agresión. Se entiende por genocidio los actos perpetrados con la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, que se caracterizan taxativamente en el Estatuto. Se consideran crímenes de lesa humanidad los actos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. El Estatuto los ejemplifica: el asesinato, la esclavitud, la tortura, el apartheid, etc. La extensa lista de crímenes de guerra se refiere a graves infracciones de las Convenciones de

Ginebra de 1949 contra las personas o bienes protegidos por esos instrumentos multilaterales, que conforman el derecho internacional.

(6 de Julio de 2002)

OBSERVADORES ELECTORALES

La Organización de Estados Americanos enviará al Ecuador una misión de observadores a las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en el marco de su apoyo institucional a la consolidación de los procesos democráticos en la región. Importa recordar que esta práctica de la OEA, con la anuencia de los países interesados, se origina en la creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia. Esta entidad se estableció en la Asamblea General de Asunción (1990), celebrada con motivo del centenario del Sistema Interamericano, fundado en la Primera Conferencia Internacional Americana de Washington (1890), como concreción del pensamiento político del Libertador Bolívar.

La Unidad para la Promoción de la Democracia ofrece asesoramiento a los Estados miembros de la OEA que lo soliciten, en materias de su competencia, y entre los temas de su cooperación figura la acreditación de observadores electorales. Todo ello, naturalmente, como expresión del valor prioritario que la OEA asigna a la democracia representativa en el continente. Bien se conoce que el ejercicio democrático ha sido errático en nuestra región y que la OEA centró su atención en el tema en la década de los ochenta y comienzos de los noventa, una vez superado el sombrío período de regímenes de facto que afectó a la mayoría de Estados miembros, cuya memoria se vincula en varios casos a horrendas violaciones de derechos humanos que hasta ahora se investigan.

Los observadores de la OEA han actuado anteriormente en varios países latinoamericanos, entre ellos el Ecuador. Su presencia en los comicios de octubre, junto con representantes de otros organismos internacionales, coadyuvará a garantizar la pulcritud de procedimientos en la justa electoral, de modo que se cumpla la voluntad general de los ciudadanos. Esa labor se conectará en cierta medida con los esfuerzos que, en buena hora, está desplegando la sociedad civil ecuatoriana a través de varios movimientos, como el denominado “Participación Ciudadana”, que no sólo intervendrán en el acto formal

de las elecciones sino que, además de formular propuestas de interés general, harán cuidadoso seguimiento del comportamiento de los candidatos frente a sus promesas electorales. Este género de intervención en el desarrollo del proceso electoral marca una impronta ética que traduce el propósito de un necesario control social en defensa de las expectativas populares.

Conviene señalar que los observadores foráneos, como los de la OEA, cumplen un interesante papel de carácter formal. Pero no olvidemos que la construcción y consolidación de la institucionalidad democrática atañen a la responsabilidad de cada pueblo. Por eso todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos el deber intransferible de fortalecer nuestro régimen democrático, mediante una participación activa, para poder exigir de los ungidos con el voto popular un claro compromiso con el bien común, por sobre los privilegios de los grupos de interés o de presión. Ahí radica la importancia esencial de la emisión de un voto cimentado en la reflexión y no en la emoción coyuntural.

(19 de Septiembre de 2002)

EL USO DE LA FUERZA

El mundo contempla con preocupación las señales reveladoras de una potencial involución del derecho internacional y de un debilitamiento de la Organización de las Naciones Unidas, a raíz del agravamiento de la crisis del Medio Oriente y de la actitud de la Administración Bush frente a Irak.

Uno de los avances doctrinarios del derecho internacional contemporáneo ha sido el rechazo al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. En efecto, todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado para arreglar sus conflictos, ya que ello constituye una violación del derecho de gentes y de la Carta de la ONU. Esto no afecta, por cierto, el alcance de las disposiciones de la Carta referentes a los casos en que es legítimo el uso de la fuerza.

Por otro lado, ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de ningún otro, sea cual fuere el motivo invocado para ello. A to-

do Estado le asiste el derecho inalienable de elegir sus sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia foránea alguna. Esta normativa no afecta, por supuesto, las disposiciones de la Carta relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

La Organización de las Naciones Unidas, expresión institucional del orden jurídico de la comunidad internacional, fue establecida con la finalidad esencial de mantener la paz y la seguridad internacionales, razón por la cual se le asignaron competencias que le permiten intervenir en representación del interés colectivo en conflictos que puedan poner en peligro esos valores supremos.

A la luz del documento “La estrategia para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, que el presidente George W. Bush presentó últimamente, retornaríamos al obsoleto y pretendido “derecho de intervención” y a los paradigmas de una diplomacia armada. En lugar de una “diplomacia preventiva” de conflictos, instrumentada en la ONU, presenciaríamos los desarrollos de “ataques preventivos” en defensa de la paz.

La posición del mandatario estadounidense, que propicia un ataque armado a Irak aun sin la anuencia de las Naciones Unidas, ha suscitado resistencias internas y externas. El ex presidente Clinton, varios congresistas demócratas y voceros de opinión pública se han pronunciado por una conducta de prudente moderación en el tema. El senador Robert Byrd recordó además que la década de los ochenta, cuando Estados Unidos respaldó a Irak en su guerra contra Irán, la Administración Reagan entregó a Bagdad cepas de agentes patógenos potencialmente letales, que ahora preocupan a la seguridad americana. Y los países europeos aliados de los Estados Unidos, con excepción del Reino Unido de Gran Bretaña, han procurado poner distancias a la guerra inevitable y han propugnado una solución política en el marco del Consejo de Seguridad, único organismo competente para autorizar el empleo de la fuerza armada según la Carta de la ONU, una vez agotados los esfuerzos pacificadores.

En su más reciente mensaje dirigido a la Nación, el presidente Bush reiteró su pedido de apoyo interno a su propuesta de intervención militar, generando reacciones de diversa naturaleza en el escenario internacional. Esperemos que el retorno de los inspectores de armas de la ONU a Irak abra cauces a una salida pacífica de la crisis, mediante las

acciones pertinentes del Consejo de Seguridad, para garantizar así un orden mundial cimentado en el derecho y no en el recurso unilateral de la fuerza.

(9 de Octubre de 2002)

LA PAZ EN VILO

El fenómeno de la guerra ha estado presente desde antiguo en el itinerario histórico de la peripecia humana y apenas a partir de la adopción de la Carta de la ONU, en 1945, es ilícito el uso de la fuerza en las relaciones internacionales para el arreglo de controversias entre Estados, como culminación de un largo proceso evolutivo en el campo doctrinario. El propio Derecho Internacional solía reconocer el derecho de un Estado a recurrir al recurso de la guerra como atributo de la soberanía, cuando habían fracasado los demás medios para alcanzar una reparación por ofensas alegadas. Como dato histórico vale la pena señalar que los tratadistas clásicos ponían énfasis en la figura de la “guerra justa” para la solución de conflictos internacionales.

La transformación de tales conceptos en el derecho de gentes determinó que los tratadistas modernos los abandonaran a principios del siglo XX y los asimilaran en cierta medida a la actual legítima defensa en caso de ataque armado. La Sociedad de las Naciones, creada al término de la primera guerra mundial por iniciativa del presidente Wilson, de los Estados Unidos, instituyó una prohibición parcial del uso de la fuerza. Pero fue la ONU, como queda dicho, la que realmente estableció en plenitud la nueva doctrina dentro de su propósito esencial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Y es el Consejo de Seguridad el órgano que legitima y autoriza el uso de la fuerza armada “en servicio del interés común”, según la Carta.

Con estos antecedentes, registrados escuetamente, se generó una explícita preocupación en la opinión pública internacional y en los círculos oficiales pertinentes por la proclama recurrente que hiciera hace varias semanas el presidente George W. Bush en el sentido de que emprendería una acción militar contra Irak, con o sin el asentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El mandatario alcanzó el respaldo del Congreso para llevar adelante su proyecto así como la adhesión frontal de Gran Bretaña. Sin embargo, en acatamiento de la

normativa internacional, se llevó al seno del Consejo de Seguridad el tema del desarme de Irak, con énfasis en el desmantelamiento de los arsenales bélicos de destrucción masiva.

Las confrontaciones internas entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se superaron mediante la aprobación, por consenso, de la Resolución 1441. Dicha resolución, elaborada con base en un texto estadounidense, concede a Irak una última oportunidad para desarmarse, con la advertencia de que su inobservancia le acarrearía “serias consecuencias”. El documento dispone que no habrá un recurso automático a la fuerza en caso de incumplimiento y que, de producirse una “violación flagrante” por Irak, ella sería examinada por el propio Consejo, a la luz del informe de los inspectores de la ONU, que ya están camino a Bagdad, previo asentimiento de su Gobierno. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, exhortó a los líderes iraquíes a acatar la resolución del organismo mundial “por el bien del pueblo, y por el bien de la seguridad y el orden mundial”. Al propio tiempo destacó la actitud positiva del presidente Bush al plantear el problema en el marco de las Naciones Unidas, como corresponde al tenor de la Carta.

El desenlace final dependería ahora de la actitud de Hussein frente a la aplicación de la resolución de la ONU. Los medios de comunicación informan que en Estados Unidos se hacen aprestos bélicos ante un potencial conflicto. Esperemos que en la conducta de los actores políticos gravite la sabia advertencia de Benjamín Franklin de que “nunca hubo una buena guerra ni una mala paz”.

(20 de Noviembre de 2002)

FANTASMAS DEL PLAN COLOMBIA

En uno de sus primeros pronunciamientos coyunturales, el Presidente electo del Ecuador abordó el tema de la situación en la frontera norte y específicamente del Plan Colombia, asunto trascendente y de entidad para la actual política exterior del país. Explicable preocupación la del coronel Gutiérrez por un problema que demanda delicado y prudente manejo de los tiempos, contenidos y procedimientos, ya que atañe a la jurisdicción interna de Colombia pero genera efectos negativos que irradian hacia nuestro país.

El denominado Plan Colombia, como se sabe, se orienta a la consecución de una paz estable y sostenible, con base en varios compo-

nentes que incluyen estrategias antinarcóticos, solución del conflicto armado, fortalecimiento institucional y desarrollo social. Cuando en 1999 el presidente Pastrana le presentó en Washington el Plan a su homólogo el presidente Clinton, para obtener el apoyo de su gobierno, caracterizó la índole y alcance de su proyecto al señalar que apreciaba la cooperación internacional pero que no admitiría injerencia foránea en los internos de Colombia, pues “ya no son tiempos de intervención, son tiempos de cooperación”.

Andrés Pastrana, en su afán de dar término a la violencia guerrillera, concedió 42.000 kilómetros cuadrados a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), como zona de distensión y para facilitar el proceso de negociación, en un sector cercano a la frontera con el Ecuador. El efecto práctico fue contraproducente, porque los alzados en armas no sólo que no flexibilizaron su actitud sino que consolidaron sus posiciones.

El presidente Álvaro Uribe planteó en su plataforma electoral una nueva actitud de mano dura con los violentos, incluida la acción de un millón de informantes, y alcanzó un abrumador apoyo popular, que lo condujo al poder. Sin abdicar de la firmeza prometida, el mandatario colombiano no ha excluido la vía de la negociación diplomática y ha considerado la mediación de las Naciones Unidas como una de las alternativas posibles. La estrategia gubernativa habría comenzado a dar frutos, pues uno de los grupos armados ha declarado el cese unilateral de hostilidades. Se trata de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización contrainsurgente dispuesta a negociar su reinserción en la sociedad civil como movimiento político. Este hecho recuerda en alguna medida lo ocurrido con el M-19, única facción armada que se acogió al decreto de amnistía promulgado en 1984 por el gobierno de Belisario Betancur, lo cual le permitió participar de las actividades normales de la política nacional, dentro del marco democrático. Un extremista inconforme segó la vida del líder Toledo Plata el 10 de agosto de ese mismo año.

Las FARC, en cambio, continúan en su posición inflexible, radicalizada con ocasión de la reciente visita a Bogotá del Secretario de Estado de los Estados Unidos para reiterar el apoyo de su gobierno a la lucha frontal de Álvaro Uribe contra el narcotráfico y la guerrilla, ubicada ahora en el ámbito del terrorismo. La propuesta mediadora del Presidente electo, que ya tomó contacto personal con su homólogo colombiano, debería formar parte de una fórmula integral de política de

Estado, que contemple un adecuado y prudente manejo de las importantes relaciones con Colombia y Estados Unidos, actores del citado Plan, y una clara definición de los intereses prioritarios del Ecuador. Procede, por cierto, el amistoso respaldo al proceso de paz en Colombia, conforme a la normativa internacional, pero por fuera del conflicto interno. Huelga señalar que la mediación opera entre sujetos de derecho internacional.

(10 de Diciembre de 2002)

EL ESPECTRO NUCLEAR

Al caso todavía no resuelto de Irak, que tiene la paz en vilo, se agrega ahora la decisión de Corea del Norte de retirarse del Tratado de no proliferación de armas nucleares (TNP) para ahondar la preocupación de la comunidad internacional, sacudida en años recientes por tensiones intermitentes. El TNP se suscribió en 1968 bajo la égida de las Naciones Unidas y en el marco del siempre anhelado desarme general, que tiene carácter prioritario en el campo nuclear. El TNP entró en vigor en 1970 por un lapso de 25 años, pero en 1996 las partes contratantes acordaron su vigencia por tiempo indefinido.

En dicho tratado se contemplan dos clases de Estados Partes: los que tienen armas atómicas o han fabricado o hecho explotar ingenios nucleares, que integran el llamado Club Atómico, y los demás Estados, que en la práctica no tendrían acceso a ese privilegiado grupo de grandes potencias. Los poseedores de armas atómicas asumen el compromiso de no traspasarlas a nadie ni directa ni indirectamente y a no alentar, inducir o ayudar a otros para que las fabriquen o adquieran. Los Estados no poseedores se obligan, a su vez, a no recibir en forma alguna armas nucleares, a no fabricarlas y a no solicitar ni recibir ayuda para su fabricación.

El TNP reconoce, por cierto, el derecho inalienable de todos los Estados a desarrollar la investigación y las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, así como a la asistencia recíproca en ese campo. Un sistema de salvaguardias para verificar el empleo pacífico de la energía nuclear corre a cargo del Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena. Un año antes de la suscripción del TNP, los Estados latinoamericanos resolvieron constituir en zona desnuclearizada a nuestra región, mediante el denominado Tratado de Tlatelolco. Según

el Tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina, que ahora abarca también a los Estados del Caribe, las partes contratantes se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidas a su jurisdicción.

Para apreciar objetivamente la trascendencia y entidad del tema nuclear basta recordar el conocido hecho de que el destino de la segunda guerra mundial se decidió por la utilización de la bomba atómica de Estados Unidos en Japón. Una vez concluida la más dramática y sangrienta confrontación bélica de la historia, se creó la Organización de las Naciones Unidas para velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como para impulsar la cooperación entre las naciones. Pero la filosofía y la praxis de la organización universal soportaron por décadas los embates y sobresaltos de la “guerra fría”, cuando el orden mundial se expresaba en el sistema de la bipolaridad instalado por Estados Unidos y la Unión Soviética en el reparto de zonas de influencia. La confrontación de las grandes potencias solo pudo ser frenada por el “equilibrio del terror” cimentado en los arsenales atómicos, que impedían un conflicto de dimensión apocalíptica. El pensador francés Raymond Aron definió magistralmente la situación cuando dijo: “guerra imposible, paz improbable”. La caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos como potencia hegemónica.

Parece que no es deseable la hipótesis del retorno de Corea del Norte al TNP, después de utilizar su actitud como instrumento de negociación política. Esperemos que la gestión de la misión de la ONU en Irak aleje el fantasma de una guerra inminente.

(21 de Enero de 2003)

INMUNIDAD DIPLOMÁTICA

En los primeros días de diciembre último, como es de dominio público, la ciudadanía ecuatoriana conoció con perplejidad la noticia del homicidio cometido por un agente diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Quito, en la persona del joven Pablo Jaramillo, luego de la colisión de su vehículo con el taxi que ocupaba nuestro compatriota. La entrega del funcionario a la misión diplomática norteamericana por parte de las autoridades nacionales suscitó reacciones

y comentarios de diversa índole, en un tema que tiene particularidades de orden jurídico que conviene conocer. Por ello puede ser útil volver sobre el asunto, para hacer algunas precisiones dirigidas sobre todo a quienes no conocen de cerca este tipo de problemas.

La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, suscrita en 1961 bajo la égida de las Naciones Unidas y de la cual son partes contratantes Ecuador y Estados Unidos, contempla determinados privilegios e inmunidades diplomáticos para contribuir al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social. Tales inmunidades y privilegios se conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas, en calidad de representantes de los estados. La doctrina clásica (ya superada) confería fundamento a esas concesiones mediante la ficción jurídica de la extraterritorialidad, que consideraba a las sedes de las misiones diplomáticas como prolongación del territorio del Estado acreditante en el espacio territorial del Estado receptor, con las competencias correspondientes.

Según la citada Convención, la persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad (art. 29). El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor (art. 31). El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción de sus agentes diplomáticos. La renuncia ha de ser siempre expresa... (art. 32). La filosofía de este sistema no se orienta, por cierto, a refrendar la impunidad en caso de la comisión de un ilícito por el agente diplomático, pues la inmunidad de que goza no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante, o sea de la acción de los tribunales competentes de su país de origen.

Desde esta perspectiva se explica la actuación de las autoridades ecuatorianas, que no disponían de otra alternativa que no fuera la renuncia de inmunidad por parte del gobierno norteamericano, lo cual obviamente no se ha producido. Según información difundida por los medios de comunicación, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) ha planteado una acción civil (indemnizaciones) ante un tribunal de Virginia, y espera proceder en el campo penal.

Entiendo que este asunto figuró en el nutrido espectro de temas de la visita presidencial a Washington, para que la justicia americana instaure el debido proceso, a la luz de la normativa de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Nuestra Cancillería hará sin duda el seguimiento del caso.

(15 de Febrero de 2003)

LA DEMOCRACIA Y LA CRISIS

Una crisis generalizada en varios países de la región, con turbulencias en el ámbito político-económico y la corrupción enraizada al amparo de la impunidad, plantea interrogantes sobre el destino de nuestros procesos democráticos. Es que el poder político no ha podido consolidar estructuras institucionales que le permitan satisfacer la justa demanda social de los pueblos y, por el contrario, se percibe más bien una sombría expansión de la pobreza colectiva frente a una sospechosa opulencia de grupos elitistas de interés o de presión. Junto con la preocupación general, hay a veces hasta evocaciones nostálgicas de modelos autoritarios como solución sofista de la crisis, que cuestionan la viabilidad de la democracia en cuanto instrumento eficiente de atención a las expectativas populares. Pero esta época felizmente no es propicia para tales devaneos, no sólo porque carecen de sustento real, sino porque ahora rigen en el ámbito interamericano unos mecanismos de defensa y promoción de la democracia representativa, que cumplen un papel disuasivo ante el aventurerismo político.

La Organización de los Estados Americanos ha tenido en su agenda, desde hace varios lustros, a la democracia entre sus objetivos prioritarios, junto a la paz y la seguridad, a los derechos humanos y el desarrollo integral, etc. En la década de los ochenta y comienzo de los noventa, la OEA puso especial énfasis en la afirmación de los procesos democráticos en el hemisferio, tras el tenebroso período dictatorial que padeció la mayoría de sus Estados miembros. Es del caso recordar, por ejemplo, la Resolución 1080 aprobada por la Asamblea General de Santiago de Chile (1991) y la reforma de la Carta (Washington, 1992), que norman la conducta de la comunidad continental en casos de potencial alteración del orden democrático en un Estado miembro. Últimamente la Carta Democrática de Lima (septiembre del 2001) afianza esa

línea de pensamiento y contempla medidas específicas para el eventual infractor, que incluyen la suspensión temporal de ese Estado en el ejercicio de su derecho de participación en la OEA. Entre los esfuerzos orientados a fortalecer el estado de derecho en la región, la OEA creó en 1990 la Unidad para la Promoción de la Democracia, que ofrece asesoramiento y organiza el envío de misiones de observadores a los países que lo solicitan para confirmar la transparencia de sus procesos electorales. Este último recurso lo han utilizado varios gobiernos, entre ellos el del Ecuador. En conexión con las acciones citadas cabe señalar también que en marzo del 2001 se estableció el Foro Parlamentario de las Américas, que tiene, entre sus objetivos, el contribuir al fortalecimiento del papel del Poder Legislativo en la democracia y en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como estimular el proceso de integración como uno de los instrumentos más adecuados para el desarrollo sostenible y armónico de los países del hemisferio.

Si bien los mecanismos referidos conforman una estructura de salvaguardias formales, conviene advertir que la construcción y perfeccionamiento de la institucionalidad democrática corresponde a cada pueblo. De ahí que en nuestro caso seguimos enfrentados al reto de consolidar una democracia como una acción gubernativa que vaya al encuentro del interés común para viabilizar la deseada equidad social. Hay que darle mejores y reales contenidos a nuestra democracia.

(1 de Marzo de 2002)

LA MUJER EN EL MUNDO

Uno de los fenómenos relevantes de la dinámica social contemporánea es el que se refiere a los progresivos avances registrados en el ámbito de la condición jurídica de la mujer y su valiosa participación en los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos, particularmente en la sociedad occidental. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un referente histórico de la conquista del voto femenino como punto de partida para la consolidación de sus derechos políticos. No hay que olvidar que en el marco de las nacientes democracias el ejercicio del sufragio era un privilegio reservado a las elites nacionales, con exclusiones discriminatorias por motivos culturales de raza, de sexo, de religión o de fortuna de las personas. La mujer estaba, por cierto, marginada de ese derecho democrático esencial.

Las legislaciones nacionales fueron incorporando gradualmente a su normativa interna las conquistas jurídicas orientadas a mejorar la condición de la mujer. Pero conviene señalar que el tema ha ocupado también la atención de los foros internacionales de carácter universal y regional. En efecto, la ONU creó en 1946 la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer como una de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social, con el mandato de preparar recomendaciones e informes para dicho Consejo sobre la promoción de los derechos de la mujer en las esferas política, económica, civil, social y educativa.

Cuando se suscribió la Carta de las Naciones Unidas, en 1945, la mujer gozaba de derechos políticos sólo en la mitad de los países soberanos del mundo. La Comisión ha tomado medidas para promover la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la mujer. En el campo educativo, ha respaldado los programas de la UNESCO para impulsar el acceso de la mujer a la educación, sobre todo en los países en vías de desarrollo. En la esfera de derechos económicos, la Comisión ha privilegiado la cuestión de salario igual por trabajo igual. Es amplio el acervo de temas tratados por este órgano de la ONU.

En el ámbito regional, la condición jurídica de la mujer ha constituido importante tema de estudio y acción del sistema interamericano. Ya en la V Conferencia Internacional Americana (Santiago, 1923) se aprobó la resolución titulada “Derechos de la Mujer”, como un paso precursor del examen de la situación de la mujer ante la constitución y las leyes nacionales de los Estados miembros. Y la VI Conferencia (La Habana, 1928) instituyó la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que ha realizado hasta ahora una labor dinámica y provechosa. La CIM se ha preocupado básicamente de formular estrategias que permitan conceptuar el papel del hombre y de la mujer, con valor igualitario, en la nueva estructura social. Ha luchado por una mayor participación femenina en la vida pública, instando a los gobiernos a asegurar a la mujer el derecho de votar y ser elegida, así como a ocupar o ejercer funciones públicas, nacionales o internacionales, por nominación. Han sido valiosos los análisis de la CIM sobre la problemática de la mujer americana para identificar las áreas de su participación en el desarrollo de los pueblos.

Tanto la ONU como la OEA han propiciado la adopción de instrumentos específicos sobre la materia y las reuniones internacionales

de mujeres para llevar adelante sus proyectos. Todavía hay que batallar frente a resabios culturales o institucionales que obstan el pleno reconocimiento a los derechos de la mujer.

(11 de Marzo de 2003)

DOBLAN LAS CAMPANAS

La guerra promovida por el presidente George W. Bush contra Irak suscita toda suerte de comentarios e interpretaciones sobre sus motivaciones y objetivos concretos, así como sus potenciales efectos para la comunidad internacional. No cabe duda de que están en juego principios y normas internacionales, pero fundamentalmente desmesurados intereses que nutren a la política de poder. Como se sabe, en Estados Unidos hay dos tendencias claramente diferenciadas que orientan su política exterior: la de los idealistas (que evocan la figura paradigmática del presidente W. Wilson) y la de los realistas. Estos últimos conceptúan la política internacional en términos de poder y sobre la moral en asuntos de Estado. En el trasfondo del escenario bélico está el desarme de Irak y por cierto unos ingredientes geopolíticos que incluyen el dominio del petróleo y la consolidación hegemónica de la gran potencia, en su rol de gendarme universal.

El conflicto afecta, en primer término, a la credibilidad institucional de la Organización de las Naciones Unidas, expresión jurídica de la comunidad internacional. Igualmente al principio que proscribe el uso de la fuerza para la solución de controversias internacionales, significativa conquista ésta del moderno derecho de gentes que recoge la Carta de la ONU. Recordemos que la ONU fue creada en 1945, al término de la segunda guerra mundial, con el propósito esencial de mantener la paz y la seguridad internacionales y promover la cooperación entre los Estados miembros. O sea que el orden mundial, en términos jurídico-políticos, pasa por el sistema de las Naciones Unidas. La importancia de la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales se aprecia a partir de la consideración de que antaño, antes de la instalación de la ONU, la guerra era lícita como instrumento político de los Estados.

Incitado por el impacto emocional de los bárbaros atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 (punto de inflexión en la amplia trayectoria de invulnerabilidad de Estados Unidos), el presidente Bush

anunció su determinación de atacar a Irak, con o sin autorización de la ONU, por considerar a Saddam Hussein una amenaza para la seguridad de su país. Después flexibilizó su posición y llevó el asunto al Consejo de Seguridad, único órgano facultado para legitimar el uso excepcional de la fuerza, con miras a obtener el apoyo político necesario para su proyecto coercitivo. Pero su propósito se frustró por la oposición de Francia, Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y de otros miembros como Chile y México. La resolución 1441 del Consejo, de 8 de noviembre de 2002, le concedió a Irak una última oportunidad para cumplir sus obligaciones en materia de desarme.

El presidente George W. Bush desatendió el clamor universal por la paz y la opinión mayoritaria del Consejo de Seguridad para ampliar el plazo de las investigaciones de los inspectores de la ONU y tomó la decisión unilateral de iniciar la guerra, con el apoyo de Inglaterra y España. Esto ha producido fisuras en la Comunidad Europea y en la OTAN. Preocupa, asimismo, el orden internacional de posguerra. Hay quienes doblan las campanas por el destino de la ONU, en un gesto de pesimismo que no comparto.

(28 de Marzo de 2003)

LA GUERRA Y LA PAZ

Tal vez sorprenderá conocer que apenas a mediados del siglo XX se acordó formalmente, a nivel universal, proscribir la guerra como instrumento político de solución de conflictos entre Estados.

En efecto, la Carta de la ONU (1945) declara en su preámbulo que los pueblos están resueltos “a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles”, y dispone que los miembros de la Organización arreglen sus controversias internacionales por medios pacíficos y se abstengan de recurrir a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Estos han sido sin duda avances formales del moderno derecho internacional. No hay que olvidar, en efecto, que el derecho de un Estado a apelar a la guerra como medida extrema de autodefensa, cuando habían fracasado los demás medios para alcanzar una reparación

por ofensas alegadas, fue reconocido por el propio derecho de gentes. Con ese derecho a hacer uso de la fuerza se desarrollaron unas normas que regulaban la conducta de los beligerantes y las limitaciones de los Estados en la lucha armada: eran las “leyes de la guerra”. Es que la ecuación guerra-paz ha gravitado desde antiguo en la historia humana. Los clásicos ponían énfasis en el concepto de “guerra justa” (San Agustín y Santo Tomás, entre otros), en el sentido de que ella vengaba injurias u obligaba a restituir lo que fuera indebidamente tomado. La evolución de ese concepto en el derecho internacional determinó que en cierto modo se asimilara en nuestros días la guerra justa a la legítima defensa frente a una agresión armada.

La fundación de la Sociedad de las Naciones, por iniciativa del presidente W. Wilson de los Estados Unidos, al término de la primera guerra mundial, y la de la ONU, después de la segunda conflagración universal, han constituido logros históricos sin precedentes, porque por vez primera la comunidad internacional se organizó jurídicamente para mantener la paz y la seguridad internacionales y promover el progreso social en libertad. La repulsa planetaria a la confrontación bélica en Irak se explica porque toda guerra entraña una apología de la barbarie y porque en este caso implica un preocupante debilitamiento de la institucionalidad jurídica. La decisión unilateral de iniciar la guerra por la inobservancia del régimen tiránico de Saddam Hussein de varias resoluciones del Consejo de Seguridad, en materia de desarme, ignoró el hecho de que la ONU no es una organización supranacional y que por esa causa es limitada su capacidad coercitiva. Es que se trata de una asociación de Estados soberanos que no admiten una instancia superior a su soberanía, por lo cual sus decisiones responden a acuerdos de los Estados miembros. Por eso la responsabilidad de lo ocurrido no atañe a la ONU como entidad sino a las potencias que no lograron armonizar sus posiciones para evitar el quebrantamiento de la paz.

Como ya se habla de las diversas secuelas de la victoria bélica, es de desear que ésta se maneje con una ponderación que evite mayores fracturas y enconos en la sociedad internacional. A la ONU le correspondería por cierto un rol importante en ese contexto y en la construcción del orden mundial de posguerra, con las necesarias reformas estructurales del sistema invocadas desde hace varios años.

(14 de abril de 2003)

DIPLOMACIA PREVENTIVA

Después de conocer por los medios de comunicación lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, con claras señales de involución del derecho internacional, podría interpretarse como un atisbo de ingenuidad o de información insuficiente el citar el tema de la “diplomacia preventiva”, sobre todo desde la perspectiva de los belicistas que respaldan la legitimidad de la política de poder o de fuerza y que ahora hablan de una “guerra preventiva”. Pero como se han planteado cuestionamientos a la acción de la ONU respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, podría resultar útil indagar algo sobre las preocupaciones de la organización mundial sobre la materia.

Bien se conoce que antes de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales era un recurso lícito para la solución de controversias. Después de la segunda guerra mundial, que le costó a la humanidad más de 50 millones de muertos y daños materiales de desmesurada cuantificación, la Carta de la ONU consignó la prohibición general del uso de la fuerza como concreción de un avance relevante del contemporáneo derecho de gentes. Es que la guerra ha constituido una tradición instalada en la noche de los tiempos. Basta recordar que hace más de 2.400 años, Tucídides, el famoso historiador griego, sostenía que “la paz es un armisticio en una guerra que nunca terminó”. En esa línea de pensamiento, los adoradores del poder han cimentado sus convicciones en la doctrina de Hobbes, que asignaba a la violencia el rango de atributo natural del hombre, y en la de Maquiavelo, para quien “la fuerza es justa cuando es necesaria”, todo ello en nombre de la razón de Estado. La tendencia contemporánea de la política realista se nutre de estos conceptos.

Por eso la importancia de los esfuerzos de la ONU a favor de la paz, que se han desarrollado entre éxitos y fracasos. En la década de los noventa, por ejemplo, se convirtió en tarea emblemática la llamada diplomacia preventiva, que el entonces secretario general, Boutros Gali, planteó en su “Agenda para la Paz” como respuesta a los potenciales conflictos emergentes luego de la “guerra fría”. La calificó como “la más deseable y la más eficaz utilización de la diplomacia para reducir las tensiones antes que acaben en conflicto, o, si estalla un conflicto, para actuar sutilmente para contenerlo y acometer sus causas profundas”. Es

un deseo de renovación de las funciones de la ONU en ese campo, que le permita al Consejo de Seguridad y al propio Secretario General aplicar esa metodología negociadora. La Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) se ha distinguido como la más creativa en los empeños por impedir el incremento de las tensiones y conflictos, mediante el empleo de la diplomacia preventiva, cuyo eje radica en el diálogo y la persuasión con las partes involucradas.

Después de la esperada victoria militar de la coalición en Irak gravitan preocupantes incógnitas sobre el futuro orden internacional, incluso porque podrían repetirse acciones coercitivas análogas. Se sostiene que la seguridad internacional estaría bien servida a cargo de la superpotencia hegemónica global, según se desprende de manifestaciones públicas del propio presidente Bush. Pero sería deseable que el orden mundial se cimentase en la estructura jurídica de la ONU, cuyos mecanismos de solución pacífica deberían afinarse y consolidarse.

(1 de Mayo de 2003)

EL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELI

La caudalosa y constante información transmitida por los medios de comunicación sobre la situación en el Medio Oriente destaca últimamente una jugada pacífica en el ajedrez diplomático de la zona, por iniciativa de los Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y Rusia. Se trata de la denominada “Hoja de ruta”, que contempla medidas concretas para una solución negociada del viejo problema entre Israel y Palestina. El plan comprende tres etapas: el cese de atentados terroristas palestinos contra intereses israelíes; el retiro de los israelíes de los territorios autónomos palestinos; y la creación del Estado palestino hasta el 2005. El vocero de este plan de paz es el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, quien inició el 10 de mayo una gira por Egipto, Jordania, Arabia Saudita, varios países europeos y las partes en el conflicto. Powell estima que, luego de la victoria militar de la coalición en Irak, están dadas las condiciones para un arreglo diplomático de dicho problema, que está en el núcleo de las relaciones entre las potencias occidentales y el mundo árabe. En conexión con el tema y la víspera del viaje del Secretario de Estado, el presidente Bush propuso la creación de una zona de libre comercio entre Estados Unidos y los paí-

ses de la región, que entrarían en “un ciclo de nuevas oportunidades”.

Las reacciones iniciales de las partes involucradas no han tenido la tónica esperada por los autores del plan de paz. Es que se trata, como se sabe, de una cuestión en extremo compleja y delicada, que envuelve principios e intereses de diversa índole, junto con sentimientos nacionales y religiosos de antigua raigambre.

Se afirma que el Estado judío se ha constituido en tres fechas históricas: cuando Saúl fue elegido Rey de Israel (1020 antes de Cristo); luego de las victoriosas guerras de los macabeos (163 antes de Cristo); y, en mayo de 1948, por resolución de las Naciones Unidas. Después de siglos de dispersión por el mundo, por la “diáspora”, el pueblo judío puso en marcha su expectativa soberana mediante la conformación del movimiento sionista (1896), que propugnaba la instalación de un hogar nacional en Palestina. Esta aspiración, planteada por el líder Chaim Wizmann al gobierno británico poco antes de la primera guerra mundial, alcanzó el respaldo de la Declaración Balfour (1917), según la cual la corona británica “ve con agrado el establecimiento de un hogar nacional en Palestina para el pueblo judío....entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina”.

Por iniciativa de Gran Bretaña, la ONU creó, en abril de 1947, un Comité Especial para “estudiar la cuestión de Palestina” y resolvió el 29 de noviembre, por voto mayoritario y con oposición árabe, la partición de ese mandato británico en dos Estados, uno judío y otro palestino, con un régimen internacional para Jerusalén. Se había fijado el 15 de mayo de 1948 para el retiro de la potencia colonial, pero la víspera se proclamó la fundación del Estado de Israel por el Consejo Nacional Judío. Desde el día siguiente instalaron una escalada de violencia las tropas árabes que atravesaron las fronteras de Palestina, desconociendo la legitimidad de existencia del Estado de Israel. El mediador enviado por las Naciones Unidas, conde Folke Bernadotte, de Suecia, fue asesinado en una calle de Jerusalén, en setiembre de 1948. Desde entonces las confrontaciones armadas y los actos terroristas han tenido un curso intermitente. Aunque parece no haber espacio para el optimismo, vale hacer un voto por la paz y el buen término de esta nueva iniciativa.

(15 de Mayo de 2003)

EL CONSENSO DEL CUZCO

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes del Grupo de Río se reunieron en la ciudad de Cuzco, los días 23 y 24 de mayo, en cumplimiento de la XVII Cumbre de dicho mecanismo permanente de consulta y concertación política. Como se sabe, el Grupo se creó en Río de Janeiro en 1986, con base en el Grupo de Contadora, conformado dos años antes para coadyuvar en la solución de la grave crisis centroamericana de la época. Con el transcurso del tiempo y dada su influyente gravitación política, el Grupo amplió gradualmente el número de sus miembros con países de Latinoamérica y del Caribe. Es uno de los actores más calificados en el escenario internacional y mantiene relaciones de cooperación con otros bloques o estados de diversas zonas geográficas.

El Consenso del Cuzco, emitido al término de la Cumbre, es una agenda estratégica para la acción del Grupo de Río frente a los problemas de la región y su comportamiento concertado en el sistema internacional. Asigna carácter prioritario a la lucha contra la pobreza en la agenda social. Reitera sus esfuerzos por la promoción y fomento de la paz hemisférica y por el fortalecimiento de un sistema multilateral basado en el Derecho Internacional y en la carta de la ONU. Renueva su condena al terrorismo, al narcotráfico y a los delitos conexos. Reafirma su compromiso con la defensa y consolidación de la democracia mediante la construcción de sistemas políticos más eficientes. El Grupo pone énfasis en la revalorización de la variable del desarrollo y promoción de un sistema de comercio internacional libre y equitativo.

El Presidente del Ecuador presentó una iniciativa orientada a promover en la Cumbre una acción mediadora de la ONU en el conflicto colombiano. Como se recordará, el coronel Gutiérrez enunció reiteradamente su propósito de actuar como mediador en el delicado problema interno de Colombia, suscitando cuestionamientos de diverso orden en la opinión pública nacional, pues ese bien intencionado impulso pacifista resultaba inviable por aspectos técnicos de la mediación, de sus características y requisitos. Bien se recuerda que el presidente Pastrana, cuando puso a consideración de su homólogo Bill Clinton el Plan Colombia, solicitándole su asociación a los esfuerzos de combate a la violencia guerrillera y al narcotráfico, hizo la salvedad de que Colombia no admitiría injerencias foráneas en asuntos inherentes

a su jurisdicción interna. Estos son tiempos de cooperación, no de intervención, puntualizó el Mandatario. Apeló, pues, a la cooperación internacional para la solución de ese cruento problema. Y como parte de su estrategia tomó la inexplicable decisión de entregar 42.000 kilómetros cuadrados de territorio a las FARC como zona de distensión.

El destino de la mediación de las Naciones Unidas aparece incierto porque no se trata sólo de encontrar una solución a la violencia guerrillera. Es que los alzados en armas, en perverso maridaje con los narcotraficantes, han instalado un gigantesco negocio ilícito, con desmesurados intereses de oferta y demanda de drogas que no parecen sensibles a los esfuerzos de paz.

(30 de Mayo de 2003)

LA ASAMBLEA DE SANTIAGO

La XXXIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Santiago de Chile entre el 8 y el 10 de junio, clausuró su período ordinario de sesiones con la emisión de una declaración contentiva de varios asuntos de actualidad. En la agenda de esas reuniones suelen figurar temas tradicionales, de tratamiento intermitente, y otros inscritos en función de la dinámica internacional. Entre los de larga data y al propio tiempo de vigencia actual consta el de la consolidación de la democracia representativa en la región.

No hay que olvidar que en las dos últimas décadas, tras un período generalizado de regímenes autoritarios, nuestro continente experimentó el proceso de democratización más amplio de su historia. Por eso la OEA ha dedicado sostenidos esfuerzos conducentes a la afirmación de los procesos democráticos que siguieron a aquella sombría época, cuyas secuelas en algunos casos todavía promueven el debate nacional. Y fue precisamente en la capital chilena donde una Asamblea General de la OEA aprobó, en 1991, el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano y la Resolución 1080, para enfrentar casos de potencial alteración del orden democrático en un Estado miembro, mediante un adecuado mecanismo institucional.

Un año antes, la Asamblea conmemorativa del centenario del Sistema Interamericano (Asunción, 1990) creó la Unidad para la Pro-

moción de la Democracia, que brinda asesoramiento y envía misiones de observadores a los países que lo soliciten para garantizar la transparencia de sus procesos electorales. Y la Carta Democrática Interamericana (11 de septiembre de 2001), que condensa los principios, objetivos y mecanismos sobre la materia, señala medidas específicas para el eventual infractor de la estabilidad institucional, como la suspensión temporal de ese Estado en el ejercicio de su derecho de participación en la OEA.

En esta ocasión la atención de la Asamblea se ha centrado en un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Américas, dado que la gobernabilidad democrática requiere la participación responsable de todos los actores de la sociedad en la construcción de consensos necesarios para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y es que varios países, entre ellos el nuestro, han enfrentado serios problemas en este campo, sobre todo por la situación de pobreza extrema y la exclusión social en el marco de la difícil coyuntura económica de los últimos años. Los acuerdos tomados en esta materia apuntan a la construcción de instituciones democráticas sólidas, que faciliten la transparencia y el buen gobierno.

El nutrido elenco de temas tratados abarca, entre otros, la defensa y promoción de los derechos humanos; la lucha contra la corrupción; el combate al narcotráfico y al terrorismo; la cooperación en el ámbito político, económico, social y cultural; el combate a la pobreza y la promoción de la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Importa destacar el hecho de que la ciudad de Quito será sede de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y lo será por vez primera porque en 1960 declinó la sede de la XI Conferencia Interamericana, para la cual fue electa en la Conferencia de Caracas (1954). El ingenio criollo acuñó entonces la broma de que la Undécima Conferencia había sido el mejor Alcalde de Quito, por las importantes obras públicas que se construyeron para la fallida reunión.

(16 de Junio de 2003)

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

El Acuerdo de Integración Subregional Andino, denominado oficialmente Acuerdo de Cartagena, fue suscrito inicialmente por los

representantes de: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, el 26 de mayo de 1969, en la ciudad de Bogotá. Venezuela adhirió al instrumento el 13 de febrero de 1973. Chile, en cambio, se retiró del Grupo Andino el 30 de octubre de 1976. El propósito esencial de las partes contratantes era el de profundizar y dinamizar, a nivel subregional, el proceso de integración iniciado por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).

El Protocolo de Trujillo, Perú, de marzo de 1996, suscrito por los presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo Presidencial, creó la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y estableció el Sistema Andino de Integración, a la par que dispuso una nueva codificación del Acuerdo. Este instrumento tiene, entre otros objetivos, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros. Para alcanzar tales objetivos, el Acuerdo contempla varios mecanismos y medidas puntuales.

Este esquema de integración ha sido cuestionado por algunos sectores de opinión desde una perspectiva economicista y arancelaria, por las dificultades de diverso orden registradas en la marcha del proceso. Pero la integración trasciende esa visión restrictiva porque entraña una cosmovisión más amplia: constituye una formulación política con contenido económico, social y cultural, que apunta al desarrollo integral. Por eso se afirma que si es malo estar dentro de la integración es peor permanecer fuera de ella. Es que además de constituir una de las alternativas conducentes al desarrollo permite potenciar la capacidad de negociación de sus miembros en el escenario internacional, ya que en el bilateralismo los países más pequeños están en situación de desventaja respecto de los más desarrollados, por las asimetrías estructurales. Huelga ponderar, por tanto, la conveniencia de fortalecer a la Comunidad Andina para el complicado proceso de negociaciones del ALCA y tender puentes de cooperación con el MERCOSUR.

El 28 de junio concluyó la XIV reunión del Consejo Presidencial Andino con la firma de la Declaración de Quirama, en Colombia, y la asunción de la Presidencia pro-témpore del bloque subregional

por Ecuador. La Declaración contiene importantes acuerdos de carácter político, económico, social y cultural, para armonizar conductas ante los retos que enfrentan los miembros de la CAN, como la lucha contra la pobreza, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, la afirmación de la institucionalidad democrática, etc. Importa destacar el trato prioritario que se le ha conferido al Plan Integrado de Desarrollo Social, como complemento de los planes nacionales que sobre la materia ejecute cada país, en el marco del tema social y cultural.

Ecuador asume sus funciones y responsabilidades en circunstancias en que la CAN aparece un tanto debilitada por los incumplimientos de la normativa institucional. Por eso le corresponde acometer la tarea de reforzar la cohesión institucional del sistema y la articulación de esfuerzos orientados a la ejecución del amplio espectro de temas de su competencia.

(1 de Julio de 2003)

ECUADOR Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Hay motivos de preocupación en la comunidad internacional por determinadas conductas de la Administración Bush, que se distancian del orden mundial cimentado en el multilateralismo de las Naciones Unidas, el en cual se reconoce la igualdad soberana de los Estados como premisa para acometer las tareas comunes de la paz y la seguridad internacionales y la cooperación entre los países del orbe. Hace algún tiempo se desvinculó, por ejemplo, del Protocolo de Kyoto, instrumento de importancia relevante para la protección del medio ambiente a nivel planetario.

Actualmente postula y practica la política de la “guerra preventiva” en reemplazo de la “diplomacia preventiva”, que fue la tendencia emblemática de la década de los noventa en la ONU a raíz de su planteamiento por el secretario general Boutros Gali, en la conocida “Agenda para la Paz”, como respuesta a los conflictos que aparecían al término de la guerra fría.

Otro tema de preocupación general es la decisión del presidente George W. Bush de no ratificar el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y de demandar inmunidad para sus nacionales res-

pecto de la normativa de ese tratado universal. Vale la pena recordar que la Asamblea General de la ONU, en la década de los cincuenta, proyectó instituir dicha Corte, con base en las experiencias de los tribunales de Nüremberg y Tokio que juzgaron a los criminales de la segunda guerra mundial. La confrontación de las grandes potencias en el período de la guerra fría dilató la ejecución del proyecto y sólo se concretó en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Roma (julio de 1998), como uno de los logros significativos de la sociedad internacional contemporánea. La suscripción del instrumento multilateral fue el último acto trascendente del gobierno demócrata de Clinton (diciembre de 2000), con el beneplácito de los defensores de los derechos humanos en el mundo y la reprobación de varios ex secretarios de Estado y legisladores republicanos. La Corte, con sede en La Haya, juzgará los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto (delitos de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión). Su competencia es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales y propende a evitar que la impunidad proteja a los autores de esos graves ilícitos.

En el supuesto de que ese alto tribunal podría ser manipulado políticamente (percepción no compartida por la Unión Europea), Estados Unidos está desplegando una campaña orientada a obtener la exención de la jurisdicción de la Corte para sus nacionales, mediante la suscripción de acuerdos bilaterales con Estados partes en el Estatuto de la Corte. Invoca para ello el artículo 98 del Estatuto con un argumento que no parece muy claro, pues esa norma sólo se refiere a la competencia exclusiva de la Corte para dar paso a una solicitud de entrega del delincuente por el Estado requerido. Ante la negativa de varios Estados a suscribir tales acuerdos, Estados Unidos ha sancionado a 35 de ellos, entre los cuales figuran los países andinos como Ecuador y Colombia, de cuya colaboración necesita para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, temas prioritarios de la política exterior norteamericana. Esta contradicción demuestra que no hay una agenda clara para Latinoamérica. Ecuador ha obrado bien al no suscribir tal acuerdo, pues no cabe semejante excepción en un tratado universal, que para nosotros es ley de la República.

(25 de Julio de 2003)

EL ASILO POLÍTICO

El asilo ha sido practicado desde la antigüedad como instrumento de protección de las personas en peligro. Se ha fraguado en las experiencias orientadas a impedir los efectos de la persecución arbitraria generada en ciertos Estados. El asilo religioso, al cual se acogían los delinquentes comunes en los templos de la antigüedad y de la Edad Media, dio paso al asilo diplomático cuando en el siglo XV aparecieron las primeras embajadas permanentes y los estados nacionales. En tiempos modernos y en períodos de convulsión interna de un Estado se suele conceder asilo a personas perseguidas por motivos o delitos políticos. Los países latinoamericanos han conferido rango jurídico relevante al asilo diplomático o político. Los países europeos y Estados Unidos, en cambio, no reconocen la doctrina del asilo como parte del Derecho Internacional.

En el marco del sistema interamericano hay cuatro convenciones que norman las relaciones en la materia: la Convención sobre Asilo (La Habana, 1928); la Convención sobre Asilo Político (Montevideo, 1933); la Convención sobre Asilo Diplomático y la Convención sobre Asilo Territorial (Caracas, 1954). La protección del asilo sólo ampara a los delinquentes políticos, no a los comunes, y en casos de urgencia, o sea cuando el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades o se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política. La Convención de Montevideo introdujo la figura de que la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado asilante, incorporada también en la Convención de Caracas. La República Dominicana, al suscribir este último instrumento, formuló la reserva de que “no acepta....la calificación unilateral de la urgencia por el Estado asilante”. Añade que no le son aplicables, por tanto, las disposiciones relativas “a las controversias que puedan surgir entre el Estado territorial y el Estado asilante, y que se refieren concretamente a la falta de seriedad o a la inexistencia de una verdadera acción persecutoria contra el asilado por parte de las autoridades locales”.

El tema se ha tornado motivo de debate o preocupación nacional a raíz de la solicitud de asilo planteada por el ex presidente Gustavo Noboa a la Embajada de la República Dominicana en Quito, con base en su confrontación política con el ex presidente León Febres Corde-

ro y su grupo de legisladores socialcristianos. Hasta este momento el doctor Noboa es huésped de esa misión diplomática en tanto su Cancillería no formalice la eventual concesión del asilo. Para ello la Cancillería dominicana debe examinar el informe que le rinda su Embajada en Quito, que a su vez ha de tomar en cuenta las informaciones que el Gobierno del Ecuador le ofrezca para formar su criterio respecto a la naturaleza del delito o la existencia de delitos comunes conexos, todo lo cual no impedirá la exigencia de la concesión del salvoconducto.

De producirse el pedido formal, al Gobierno del Ecuador sólo le corresponderá expedir el salvoconducto, como parte que es en la Convención de Caracas. Aparentemente no están dadas las condiciones objetivas contempladas en dicho instrumento para el asilo, que vulnera la imagen del país en el exterior por ofrecer la presunción de inseguridad jurídica, pero que se explica por el carácter humanitario de la doctrina. Prevalece la impresión de que el doctor Noboa debería permanecer en el Ecuador para defender las acciones de su gobierno.

(11 de Agosto de 2003)

CONSULES Y MIGRANTES

La función consular tiene un origen antiguo, con matices diferenciales en su trayectoria histórica. A título ilustrativo cabe recordar que en Roma, por ejemplo, cónsul era un magistrado que detentaba la suprema autoridad por el lapso de un año. En el período medieval, era un magistrado que ejercía funciones judiciales y administrativas. Es conocido el capítulo de la historia francesa en el cual Napoleón Bonaparte derrocó al Directorio e instauró el Consulado (1799), siendo primer cónsul antes de coronarse emperador.

En todo caso, la institución consular fue anterior a la diplomática y por varios siglos se vinculó a la actividad comercial y a la protección de los intereses del Estado y de sus nacionales en el exterior. La primera codificación, a nivel regional, se produjo en la VI Conferencia Internacional Americana (La Habana, 1928), donde se aprobó una convención sobre la materia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones consulares, celebrada en Viena en abril de 1963, adoptó la convención universal que está en vigor y se ocupa de los aspectos jurídicos de las relaciones consulares regidas por el Derecho Interna-

cional. Ecuador es parte en ambas convenciones y cuenta, por cierto, con dispositivos específicos en su legislación interna.

Diríamos, en síntesis, que el Cónsul es un agente oficial que un Estado acredita ante otro, con el fin de proteger en el Estado receptor sus intereses y los de sus nacionales; fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas y culturales; extender pasaportes y documentos de viaje, a los nacionales, y visados a los extranjeros; practicar actuaciones notariales y de registro civil; prestar asistencia a los nacionales, sean personas naturales o jurídicas, etc. Vale la pena señalar que los funcionarios consulares son de carrera u honorarios.

Una plutocracia corrupta y voraz generó el mayor atraco financiero de la historia del país y empobreció al pueblo ecuatoriano al extremo de provocar una diáspora nacional sin precedentes. La emigración masiva de compatriotas hacia Estados Unidos y países de Europa, acosados por las urgencias de la vida, constituye un fenómeno social que apunta a la búsqueda de horizontes propicios al bienestar, pero que origina también no pocos dramas humanos lacerantes.

Esta situación plantea una nueva relación entre los consulados y las colectividades ecuatorianas en el exterior, sobre todo porque los problemas de los nacionales se han acrecentado en términos cuantitativos y demandan atención por personal especializado, que existe en nuestro servicio exterior pero que ahora resulta insuficiente.

El envío de funcionarios amparados por la cuota política no siempre contribuye a solucionar tales problemas, por su inexperiencia y a veces por su impreparación. Es que la función consular, compleja por la naturaleza de sus asuntos, se ha tornado más dificultosa por el súbito aumento de la demanda de sus servicios y la variedad de casos que se presentan.

Esperemos que la Cancillería supere con idoneidad la actual emergencia, con personal y recursos adecuados. Ha creado una Subsecretaría de Asuntos Migratorios y una serie de mecanismos orientados a tornar más llevadero el forzoso extrañamiento de nuestros compatriotas. A las instancias del poder político les corresponde generar condiciones propicias al retorno de los ecuatorianos y al disfrute de una vida digna en el solar patrio.

(30 de Agosto de 2003)

SEGURIDAD CONTINENTAL

La sociedad internacional jurídicamente organizada tiene entre sus propósitos esenciales mantener la paz y la seguridad internacionales, en los ámbitos universal y regional. Los mecanismos de protección de los Estados frente al uso agresivo de la fuerza en las relaciones internacionales se han generado tradicionalmente por acuerdos entre aquéllos o por el sistema de las alianzas defensivas. Sólo en el siglo XX apareció el sistema de la seguridad colectiva en el Pacto de la Sociedad de las Naciones (1919) y en la Carta de la ONU (1945), al término de las dos guerras mundiales, en el orden citado. Según este último sistema son las organizaciones internacionales y no los Estados, en sus relaciones autónomas, las que velan por la paz y la seguridad. A pesar del espíritu positivo que inspiró su creación, la seguridad colectiva no ha funcionado eficazmente en el marco de la ONU por el obstruccionismo del veto en el Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes ejercen un voto privilegiado.

El itinerario histórico de la seguridad colectiva en el Sistema Interamericano tiene una trayectoria que se remonta al siglo XIX. Se puede afirmar que el primer antecedente, después del Congreso de Panamá de 1826, se dio en la Primera Conferencia Interamericana (Washington, 1890), cuando se acordó proscribir el “derecho de conquista”, para luego avanzar en varias conferencias hacia el principio de solidaridad y el principio de consulta, que son las bases del sistema actual.

Como concreción de estos esfuerzos institucionales se celebraron tres reuniones de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Panamá, La Habana y Río de Janeiro), al comienzo de la segunda guerra mundial, para articular acciones frente a los peligros del totalitarismo nazi-fascista. Con base en estos prolegómenos se institucionalizó el sistema de seguridad colectiva en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobado en la Conferencia interamericana para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente (1947), que se cimienta en la solidaridad frente a la agresión. Según el artículo 3 del TIAR: “....un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos....”.

El TIAR se adoptó, pues, como una respuesta de la comunidad regional a las amenazas a la seguridad en el marco de la “guerra fría”.

Pero el mundo ha experimentado desde entonces muy profundos cambios y por ello se considera que dicho instrumento debe adecuarse a los nuevos tiempos, que plantean desafíos diferentes. Por eso la III Cumbre de las Américas acordó la convocatoria a una Conferencia Especial sobre Seguridad, que se realizó en México a finales de octubre, para examinar y actualizar la estructura general de la seguridad hemisférica, de cara a las nuevas amenazas y prioridades.

Ahora se postula trascender de la clásica “seguridad defensiva” a la “seguridad cooperativa”, que es más dinámica y amplia. Y se señala al terrorismo, al narcotráfico, a la corrupción y al crimen internacional organizado como fenómenos emergentes que amenazan a la sociedad contemporánea, junto con la pobreza extrema y la violencia urbana. Por lo demás, la noción de seguridad se ha enriquecido con más amplios contenidos de carácter económico y social, que demandan adecuadas respuestas.

La Conferencia Especial de México arroja un balance positivo en el elenco de acuerdos adoptados, que fortalecen al multilateralismo como instrumento regulador de la seguridad continental.

(7 de Noviembre de 2003)

DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre se cumplen 55 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en París a finales de 1948. Es una fecha que debe permanecer en la memoria colectiva porque concierne a un tema relativo a la defensa de la dignidad de la persona humana y de sus derechos y libertades fundamentales. Más todavía, es un referente esencial de la marcha de los procesos democráticos porque, como bien se sabe, la promoción y la protección de los derechos humanos tienen un marco propicio en el Estado de Derecho.

La trayectoria histórica de los derechos humanos partió de la vigencia de la Carta Magna en Inglaterra (1215), que colocó al Rey bajo la órbita del Parlamento y dispuso que determinados derechos individuales se sometían al amparo de la ley. Esta protección legal fue confirmada por el “Bill of rights” (1689). Con el paso del tiempo los derechos humanos se acogieron a la protección constitucional, pues aparecía insuficiente la que les ofrecía la ley. Los derechos y libertades fun-

damentales proclamados por la Revolución Francesa y la Constitución norteamericana, a finales del siglo XVIII, se incorporaron a las constituciones iberoamericanas como culminación del proceso emancipador del siglo XIX.

Los derechos humanos comenzaron a ponerse al amparo del Derecho Internacional desde mediados del siglo XIX. Pero fue la Carta de las Naciones Unidas la que inició realmente el proceso de su protección planetaria al disponer que la ONU promueva “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos” sin hacer distinción de naturaleza alguna. Se estableció, en 1946, la Comisión respectiva, que redactó la Declaración Universal aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948.

La Declaración contiene en 30 artículos una lista de derechos esenciales, tales como: el derecho a la vida, a la libertad, a una nacionalidad, a la seguridad personal, a la protección de la ley, a la presunción de inocencia, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de reunión, a la seguridad social, al trabajo, a la educación, etc. Se discutió sobre el valor jurídico obligatorio del instrumento, ya que era una suerte de código de conducta sin carácter contractual. Por eso se procedió a la adopción de dos instrumentos de rango vinculante. En efecto, en 1966 se abrieron a la firma de los Estados el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como culminación de doce años de esfuerzos que permitieron convertir en normas imperativas los principios idealistas de la Declaración Universal de la ONU. Conviene señalar que los derechos humanos no provienen de un sistema jurídico ni son otorgados por el Estado sino que son inherentes a la naturaleza del hombre. El ordenamiento jurídico lo que hace es tutelar y garantizar su respeto y ejercicio.

La ONU tiene un Comité que recibe los informes de los Estados sobre los derechos humanos y vela por su observancia. La Unión Europea y el Sistema Interamericano cuentan con estructuras semejantes consistentes en una Convención, una Corte y una Comisión, que regulan la actividad institucional en esta materia.

La acción de las Naciones Unidas ha universalizado el tema de los derechos humanos, convirtiéndole en uno de los objetivos prioritarios de la comunidad internacional.

(9 de Diciembre de 2003)

EL ÁTOMO Y LA PAZ

Los filósofos griegos, en sus sabias reflexiones, encontraron explicaciones para todas las cosas y tuvieron ya una noción de la existencia del átomo. Demócrito de Abdera (460-370 antes de Cristo) desarrolló una interpretación mecanicista del universo y afirmaba que lo lleno y lo vacío son los elementos de todas las cosas: lo lleno se divide en átomos materiales e infinitos cuya combinación produce todos los seres y, el alma, no es sino un compuesto de átomos más sutiles. Se ha dicho por ello que los filósofos de Jonia han servido de heraldos a la ciencia moderna.

Desde la perspectiva de que toda materia es energía, según la ecuación de Einstein, y que la energía es una parte integrante de la comprensión de la vida en el universo, en el siglo XX los científicos acometieron la tarea de incursionar en la compleja realidad de la estructura atómica y así llegaron al dominio de la energía nuclear, que representa uno de los prodigios de la ciencia y la tecnología de nuestro tiempo. Durante la segunda guerra mundial las potencias en conflicto desplegaron sendos esfuerzos orientados a producir la bomba atómica para inclinar la victoria a su favor, por el poder devastador del artefacto. Estados Unidos alcanzó su objetivo y descargó el arma letal en Hiroshima y Nagasaki, imponiendo la rendición del Japón.

La horrenda capacidad destructiva de las bombas nucleares generó una ola de temor planetario. La ONU creó, en 1946, la Comisión de Energía Atómica y después la Comisión de Desarme. El presidente Eisenhower presentó a la Asamblea General de la ONU su plan de “átomos para la paz”, que propugnaba el uso pacífico de la energía nuclear. Pero el hecho cierto es que la Organización de las Naciones Unidas pudo soportar los sobresaltos de la “guerra fría”, en el marco de un orden mundial cimentado en la bipolaridad de Estados Unidos y la Unión Soviética, merced a la sombría lógica del “equilibrio del terror”; o sea que los arsenales atómicos, con su amenaza letal, frenaron la ocurrencia de un conflicto apocalíptico y consolidaron una paz armada.

Conviene recordar que las tensiones de la “guerra fría” alcanzaron su clímax en el episodio de octubre de 1962 con la introducción de misiles soviéticos, con cargas nucleares, en Cuba. Se habló de una inminente guerra atómica, afortunadamente superada por el acuerdo Kennedy-Kruschev, que inició un período de distensión entre las dos po-

tencias. La crisis de los misiles tuvo impacto en el ámbito latinoamericano y ahí se originó la iniciativa de una zona libre de armas nucleares centro y sudamericana, que se expresó en la “Declaración sobre la Desnuclearización de la América Latina”, suscrita por los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México (29 de abril de 1963), acogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después de prolongadas negociaciones se adoptó el Tratado de Tlatelolco, en 1967, para la proscripción de armas nucleares en la región.

El Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares, suscrito en Moscú el 5 de agosto de 1963 por Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, está abierto a la adhesión de todos los Estados y registrado en la ONU. El tema ha recobrado actualidad por la situación en el Medio Oriente y la conducta de Corea del Norte. La comunidad internacional espera un manejo prudente y sensato de los problemas con soluciones basadas en la institucionalidad y el derecho, para manipular el uso pacífico de la energía nuclear.

(6 de Enero de 2004)

ASAMBLEA GENERAL DE QUITO

Como es de conocimiento público, Quito será sede de la XXIV Asamblea General de los Estados Americanos, del 6 al 9 de junio próximo, por resolución de la anterior Asamblea General celebrada en Santiago de Chile. Se trata de un evento importante en el marco del sistema interamericano, que cobra mayor trascendencia en el caso del Ecuador porque ésta será la primera vez que nuestro país asumirá el papel de anfitrión. Es que la Undécima Conferencia Interamericana (denominación anterior), que debió realizarse en nuestra capital en 1960, se frustró porque en un escenario histórico distinto del actual la opinión pública nacional ejerció presión para incorporar en la agenda el tema del problema territorial con el Perú, ajeno a la competencia de la OEA.

Según la dinámica de nuestro sistema regional, las asambleas se han caracterizado por marcar hitos en el itinerario del desarrollo progresivo del derecho internacional americano, así como por la concertación de compromisos contractuales en temas de interés común. La institución del asilo, por ejemplo, que en Latinoamérica tiene rango jurí-

dico relevante, a diferencia de su carácter humanitario en Estados Unidos y Europa, se perfeccionó en el curso de tres conferencias interamericanas, en las cuales se suscribieron sendas convenciones sobre la materia: la Convención sobre Asilo (La Habana, 1928); la Convención sobre Asilo Político (Montevideo, 1933); la Convención sobre Asilo Diplomático (Caracas, 1954).

Lo mismo se puede decir del tema de la democracia representativa, que es uno de los objetivos cardinales de la OEA. La Organización ha desplegado intensos esfuerzos orientados a consolidar los procesos democráticos que surgieron en la década de los ochenta, después del tenebroso período dictatorial generalizado en la región. La Asamblea General de Asunción (1990) creó la Unidad para la Promoción de la Democracia. En Chile (1991) se adoptaron el “Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano” y la Resolución 1080, de cara a los eventuales casos de alteración del Estado de derecho. La Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima el 11 de septiembre de 2001, codifica la normativa sobre la materia y contempla la suspensión temporal de la representación en la OEA del Estado infractor de la estabilidad institucional.

La Asamblea General de Quito tendrá por tema central, propuesto por el Gobierno del Ecuador, el de la “Cooperación hemisférica en el combate a la corrupción: sus implicaciones frente al desarrollo social”. Bien se conoce que el fenómeno de la corrupción, de dilatada trayectoria en el espacio y en el tiempo, tiene dimensión planetaria y estigmatiza la institucionalidad democrática tanto en los países industriales como en los menos desarrollados, que son los que sufren los peores efectos por su vulnerabilidad socio-económica, derivada de las desigualdades estructurales y la inequidad en el acceso a las expectativas del desarrollo integral. Está en vigor la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas en 1996, pero conviene afinar los mecanismos de cooperación continental para acometer una lucha integral y concertada contra este oneroso flagelo en los ámbitos interno y externo de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

(5 de Febrero de 2004)

EL CASO DE HAITÍ

La Organización de Estados Americanos ha dedicado en años recientes sostenidos esfuerzos orientados a respaldar la consolidación de los procesos democráticos en el continente. En su momento, el padre Jean-Bertrand Aristide, presidente de Haití, fue uno de los beneficiarios de la acción de la comunidad interamericana en defensa de la democracia. En efecto, la OEA colaboró con Aristide desde la instalación de su gobierno y le ofreció todo su apoyo político cuando los militares lo derrocaron la primera vez.

Conviene recordar que Aristide triunfó ampliamente en las elecciones de 1990 y que la inauguración de su mandato constituyó un delirio colectivo del pueblo que celebraba su naciente democracia como una vivencia exótica y novedosa. Era la primera vez que los haitianos experimentaban un proceso de esas características. Por eso aclamaban a su líder, un pequeño sacerdote salesiano henchido de carisma como si se tratase de un personaje tocado por la gracia de los milagros. La reacción popular era, pues, explicable en un país que no había conocido la institucionalidad democrática sino una sucesión de pronunciamientos militares y un siniestro régimen autocrático transmitido de padre a hijo (“Papa Doc y Baby Doc”). François Duvalier accedió al poder en 1957 y en 1964 se proclamó presidente vitalicio mediante un referendo truculento en el cual los votos afirmativos superaban con creces al número de sufragantes. En 1971, poco antes de su muerte, designó a su hijo Jean Claude para sucederle en la jefatura del Estado, también como presidente vitalicio, continuando así un modelo político de tropelías y desmesuras con violaciones aberrantes de los derechos humanos.

El presidente Aristide, el día de su posesión, destituyó a la cúpula militar y pocos meses después la reacción castrense lo echó del poder. Las instancias institucionales de la OEA entraron en acción para reinstalarlo en la presidencia, aunque sin éxito, porque la Carta de la OEA no contaba con mecanismos coercitivos. Estados Unidos propició el traslado del tema al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se calificó a Haití de amenaza a la paz y la seguridad internacionales, abriendo cauces a la intervención internacional y al retorno de Aristide en 1994.

Después de su retorno, Aristide ejerció el poder y fue ungido con la reelección. Todo lo demás se revela en los medios de comunicación en estos días. Aristide había caído en las tentaciones de un populismo amorfo, caracterizado por el predominio de antivalores en una atmósfera de corrupción galopante. Aun países como Estados Unidos, Francia y Canadá, que le habían brindado significativa cooperación para el buen gobierno, le retiraron su apoyo y coadyuvieron para su actual exilio.

Ante la incoherencia entre las frondosas ofertas electorales y su cínico incumplimiento, el pueblo expresó en las calles su general repulsa. Aristide deja un país entrampado en la miseria y el caos. Varios militares golpistas son cuestionados por sus vinculaciones con violaciones de derechos humanos.

El tiranuelo con rango vitalicio divulga su deseo de retornar a Haití, desde su dorado exilio en Francia. He ahí un cuadro patético generado por quienes no han sabido manejar los civilizados instrumentos de la democracia, que se construye por cada pueblo a partir de la formación de una ciudadanía responsable, cimentada en una educación de calidad.

(9 de Marzo de 2004)

AMENAZA TERRORISTA

Parecería que la sociedad contemporánea, inmersa en un tiempo signado por la violencia, se habría acostumbrado a convivir con el fenómeno espectral del terrorismo, reaccionando con enérgica repulsa sólo cuando ocurren casos como los del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York y Washington, o los del 11 de marzo en Madrid, actos de asombrosa irracionalidad. La virulencia atroz de sus métodos y prácticas entraña una verdadera exaltación de la barbarie.

Desde el punto de vista cronológico se trata de un flagelo de larga data, pues apareció hace varios siglos sobre todo como manifestación de terrorismo de Estado. Pero cobró mayor intensidad en el período de la “guerra fría”, entre 1948 y 1990, a raíz de la creación del Estado de Israel y la reacción de los países árabes frente a este hecho histórico. Conviene recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas, con base en los informes de un comité especial, aprobó en 1947 la división del mandato británico de Palestina en dos Estados: un judío y un palestino, con un régimen internacional para Jerusalén. Se fijó el 15

de mayo de 1948 para el retiro de la potencia colonial, pero el Consejo Nacional Judío proclamó la víspera la fundación del Estado de Israel. Inmediatamente las tropas árabes cruzaron las fronteras de Palestina y comenzó una escalada de confrontaciones bélicas fundadas en el rechazo a la legitimidad del nuevo Estado. Como dato anecdótico cabe señalar que en uno de los primeros combates de las tropas egipcias con las israelíes fue tomado prisionero el entonces capitán Gamal Abdel Nasser, futuro gobernante de su país y creador del movimiento de países no alineados.

Dada la gravedad del fenómeno terrorista, ha sido objeto de atención intermitente por parte de la ONU, que ha tomado medidas de carácter político y jurídico. La Asamblea General tomó iniciativa especialmente en la Convención contra la toma de rehenes (1979) y la Convención Internacional sobre la Represión de las Explosiones Terroristas (1997). En el ámbito político, la Asamblea General adoptó en 1994 la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, en la cual exhortaba a la comunidad internacional a realizar esfuerzos orientados en tal sentido. La ONU y sus organismos especializados han adoptado diez instrumentos jurídicos sobre la materia, referidos a manifestaciones específicas (seguridad de la navegación aérea y marítima, protección de los materiales nucleares, etc.), pero no existe todavía una convención integral a nivel universal. Y en el ámbito del Sistema Interamericano se logró hace poco tiempo aprobar una convención de lucha contra el terrorismo.

No se equivocaron quienes vaticinaron que, al término de la guerra fría, se recrudecerían los actos del terrorismo internacional por motivaciones de carácter político, religioso, étnico, etc. Este ilícito internacional está presente en todas las latitudes del planeta.

Hace pocos días, soldados israelíes mataron al jeque Ahmed Yassin, líder del grupo radical Hamas, abriendo cauces a una renovada ola de violencia. Y se ha anunciado que el próximo objetivo en una lista de eliminación selectiva sería Yasser Arafat. Los árabes, por su parte, se aprestan a ejecutar acciones de reciprocidad, en las cuales incluirían a Ariel Sharon. Esperemos que estos desplantes demenciales no se concreten en la realidad.

El endurecimiento de la política de Sharon, a la luz de la doctrina de seguridad de Bush frente al terrorismo, ha complicado el cuadro

político del Medio Oriente. Quizá la mediación de otras potencias abra espacio a la opción del diálogo y la negociación entre las partes en conflicto.

(31 de Marzo de 2004)

VARIACIONES SOBRE LA OEA

A medida que se aproxima la fecha de celebración de la XXXIV Asamblea General de la OEA se acrecienta el interés público por conocer detalles sobre la estructura y funcionamiento de la organización regional, así como la naturaleza de la reunión venidera, en junio del año en curso. La Asamblea General se realizará con participación de 34 cancilleres de los 35 Estados miembros. Es que si bien el Estado cubano es miembro de la OEA, su Gobierno no tiene representación desde 1962, a raíz de la resolución de exclusión de su participación en el sistema interamericano, adoptada por la VIII Reunión de Consulta de Punta del Este.

La fuente prístina de la creación de la Organización de Estados Americanos procede de la concepción visionaria del Libertador Bolívar, cuyo ideal americanista se plasmó en el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, suscrito en el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826).

Si bien sólo Colombia ratificó el tratado, la idea de constituir una Unión de Repúblicas Americanas fue un paso sin precedentes, que generó un singular sistema de cooperación interestatal. Se afirma por ello que la OEA es la organización regional más antigua del mundo, aunque en rigor histórico debería aludirse más bien al Sistema Interamericano, pues la OEA como tal se estableció en 1948, en la IX Conferencia Interamericana de Bogotá. La organización jurídica de la comunidad internacional, a escala universal, apareció en el siglo XX: primero con la Sociedad de las Naciones (1919), al término de la primera guerra mundial, y luego con la ONU, al concluir la segunda conflagración mundial.

Las naciones del continente celebraron en Washington la Primera Conferencia Internacional Americana (1889-1890) y tuvieron diez reuniones hasta el cambio de esa denominación por la actual de Asamblea General, debido a una reforma de la Carta constitutiva en 1967 (Protocolo de Buenos Aires). La XI Conferencia debió realizar-

se en Quito, en 1960, pero factores de orden interno impidieron su concreción. Ahora nuestra ciudad, “Capital Iberoamericana de la Cultura 2004”, será también digna sede de la XXXIV Asamblea General de la OEA.

La Asamblea, órgano supremo del Sistema Interamericano, desarrollará una amplia agenda con temas de carácter político, jurídico, económico, social y cultural. Una Comisión Nacional Asesora se ocupa actualmente de coadyuvar a la participación ecuatoriana en el importante certamen. Un acto relevante será el diálogo que habrán de mantener con los cancilleres los representantes de la sociedad civil, en el marco de una nueva modalidad instaurada últimamente por la OEA.

En la Asamblea de Quito se elegirá al nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos, ya que el señor Gaviria concluye su mandato. Desde hace varios meses se especulaba en torno a los candidatos a la sucesión, pero todo parece indicar que el asunto está prácticamente resuelto. Según informaciones oficiales el ex presidente de Costa Rica, señor Miguel Angel Rodríguez, cuenta ya con 32 de los 34 votos que serán emitidos, entre ellos el del Ecuador. Esta elección aparece muy oportuna por el hecho de que será la primera vez que un candidato de Centroamérica acceda a esa honrosa dignidad.

Esperemos que la Asamblea General de Quito contribuya a cimentar la evolución institucional de la OEA y abra cauces a mejores logros en el futuro.

(4 de Mayo de 2004)

CHILE, BOLIVIA Y LA OEA

La consideración del tema relativo al problema marítimo de Bolivia, en el marco de la XXXIV Asamblea General de la OEA, próxima a celebrarse en Quito, ha provocado en esta ocasión estridencias anticipadas e inusuales en los medios de comunicación y en ciertos sectores de opinión. La mediterraneidad actual de Bolivia fue una de las consecuencias de la Guerra del Pacífico, librada entre ese país, Perú y Chile a partir de 1879. Ese conflicto fratricida, mirado a la luz de las relaciones continentales, se vinculó en alguna medida con la convocatoria a la Primera Conferencia Internacional Americana, que habría de celebrarse en Washington en 1890.

La Guerra del Pacífico le ofreció la coyuntura propicia al Secretario de Estado de los Estados Unidos, James G. Blaine, para cursar invitaciones, en 1881, a la primera conferencia interamericana, pues estaba persuadido de la necesidad de reunir a los Estados del continente en torno al establecimiento de métodos para el arreglo pacífico de sus controversias y el fomento de su cooperación económica y comercial. La idea de Blaine era congregar a los Estados americanos en Washington en 1882. La fecha de la Asamblea estaba señalada en el entendido de que para entonces habría concluido la Guerra del Pacífico. Pero entre tanto se produjo el asesinato del presidente Garfield y la sustitución de Blaine por otro Secretario de Estado, quien retiró las invitaciones al prolongarse el conflicto.

La Asamblea General de la OEA, celebrada en La Paz en 1979, admitió por vez primera la inscripción del reclamo boliviano en la agenda de la OEA. La resolución allí adoptada y las subsiguientes consignaron el interés hemisférico en la solución del problema sobre bases que consulten recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes involucradas. El “Informe sobre el problema marítimo de Bolivia” figura en el temario de la Asamblea de Quito y su inscripción generó posiciones contrapuestas de ambos países.

En efecto, la Cancillería boliviana expidió un comunicado indicando que “reitera su compromiso de continuar buscando, por medio pacíficos, la recuperación de un acceso soberano y útil al Océano Pacífico”. La delegación de Chile dejó constancia de su desacuerdo con la inclusión de este asunto y reiteró que es un tema estrictamente bilateral, resuelto por un tratado vigente. “No son la OEA, ni ningún otro foro, país u organismo, competentes para conocer esta materia”, sostiene Chile.

Los ecos del tema en ciertos medios informativos y comentarios dispersos han dejado la impresión de que la cuestión podría agitar los debates en el seno de la Asamblea próxima. Visto el asunto sin desmesuras hay para concluir que se lo considerará, por cierto, pero sin alterar la dimensión y las características que ha tenido hasta ahora. Ingredientes jurídicos y simbología cívica dificultan los acuerdos.

Importa señalar, por lo demás, que los resultados, buenos o malos, de una Asamblea no son atribuibles al país sede, porque emanan de los acuerdos políticos de los Estados participantes. Claro que, en

nuestro caso, las autoridades pertinentes desplegarán los esfuerzos necesarios para que la Asamblea de Quito se vea coronada con el mejor de los éxitos.

(26 de Mayo de 2004)

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA

Por vez primera en la historia de la Organización de los Estados Americanos, un ciudadano de Centroamérica fue electo Secretario General, en el curso de la XXXIV Asamblea General, celebrada en Quito del 6 al 8 de junio. Se trata del doctor Miguel Angel Rodríguez, ex presidente de Costa Rica, país que por su trayectoria institucional constituye uno de los mejores referentes de la democracia latinoamericana. Hasta ahora esa alta dignidad ha estado en manos de personalidades sudamericanas. En efecto, el primer Secretario General, electo en la IX Conferencia de Bogotá (1948), fue el estadista colombiano Alberto Lleras Camargo, quien ejerció sus funciones de 1948 hasta 1954. Le sucedió Carlos Dávila, de Chile, hasta 1955. José Mora, de Uruguay, desempeñó el cargo de 1956 a 1968. El ex presidente del Ecuador, Galo Plaza Lasso, fue Secretario General de 1968 a 1975. En las dos décadas siguientes ocuparon el cargo dos diplomáticos: Alejandro Orfila, de Argentina (1975-1984), y Joao Baena Soares, de Brasil (1984-1994). El ex presidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, entrega la posta a Miguel Ángel Rodríguez al término de dos períodos consecutivos de su mandato como funcionario internacional.

Según la Carta de la OEA, la Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización. Bajo la dirección del Secretario General, cumple los encargos que le encomiendan la Asamblea General, la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores y los Consejos, a la luz de la acción y la política decididas por estos órganos del sistema.

El Secretario General, elegido para un período de cinco años, no puede ser reelegido más de una vez. Dirige la Secretaría General, es representante legal de la misma y responsable ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de ese importante órgano. Puede participar con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Organización. En el cumplimiento de sus deberes,

el Secretario General y el personal bajo su dependencia no solicitan ni reciben instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización y deben abstenerse de actuar en forma alguna incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables sólo ante la Organización. Rige, por tanto, el compromiso correlativo de los Estados miembros de respetar la naturaleza exclusivamente internacional de las responsabilidades de los integrantes de la Secretaría General.

Entre las atribuciones de mayor entidad del Secretario General figura la de que puede llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del continente o el desarrollo de los Estados miembros, todo ello por cierto de conformidad con las disposiciones de la Carta.

El nuevo Secretario General asume sus funciones en circunstancias en que se ciernen desafíos de diversa naturaleza y rango en el escenario internacional, que demandan concertadas acciones y renovados enfoques políticos por parte de los Estados miembros, cuyos mandatos habrá de ejecutar con vigoroso ímpetu institucional. Le esperan temas tan delicados como el de la consolidación de los procesos democráticos, el combate a la corrupción, la defensa de los derechos humanos, la cooperación para la eliminación de la pobreza crítica.

(8 de Junio de 2004)

ACADEMIA DIPLOMÁTICA

Son de conocimiento público los bochornosos episodios protagonizados recientemente por varios agentes diplomáticos provenientes de la cuota política del Gobierno actual. Designados con base en una arbitraria discrecionalidad o una empatía inadmisible, cuando no por servicios prestados en el proceso electoral, esas personas pusieron al descubierto su impreparación para el ejercicio de una función tan delicada como la diplomática, opacando seriamente la imagen nacional. Es que las falencias de la representación en el exterior no afectan sólo a quien la desempeña sino al país, cuyos mejores valores aquél debería ostentar. Esto no significa, en modo alguno, que los deméritos procedan del sector político, pues el Servicio Exterior Ecuatoriano se ha en-

riquecido cualitativamente con la presencia de varias personalidades prestigiosas que han actuado en sus filas por nominación política.

La reflexión que fluye de las consideraciones precedentes invoca la necesidad de perseverar en la preparación cada vez más exigente de los cuadros profesionales del Servicio Exterior y que el aporte de la cuota política, reducida en sus dimensiones, pase también por el cumplimiento de unos requisitos de idoneidad compatibles con la naturaleza de la función.

En buena hora la Cancillería se halla empeñada en desarrollar un Programa de Reforma y Actualización de la Academia Diplomática del Ecuador. Junto con la renovación del enfoque y de las metas de su organización y funcionamiento, se instalaría en fecha próxima en una sede física condigna de su importancia institucional, ya que sus instalaciones actuales son precarias y poco funcionales. Los cursos han tenido hasta ahora un buen nivel académico, pero el citado programa introduce unas modificaciones que apuntan a la excelencia, de manera que los jóvenes diplomáticos estén a la altura de los nuevos tiempos, henchidos de desafíos de creciente complejidad. Se contempla un imaginativo sistema de módulos y de mecanismos pedagógicos para la formación de los cursantes, con ejercicios teóricos y prácticos vinculados con la negociación internacional.

Bien se conoce que la dinámica de la problemática contemporánea demanda del diplomático una capacitación profesional consistente y plural, por la variedad de temas insertos en la agenda internacional, tanto multilateral como bilateral. Por otra parte, ha evolucionado la modalidad de las relaciones internacionales desde que los jefes de Estado y de Gobierno toman contactos cada vez más frecuentes entre sí, con o sin agenda específica, y los medios de comunicación son cada vez más sofisticados y dinámicos, lo cual plantea la necesidad de agentes diplomáticos preparados adecuadamente para actuar en ese escenario. Lo que es más, en una sociedad internacional caracterizada por una innegable estructura de poder, los países pequeños requieren representantes idóneos para la defensa decorosa y eficiente de sus respectivos intereses, desde una perspectiva imbuida de alta mística nacional.

(29 de Junio de 2004)

LOS BARCOS Y EL DERECHO DEL MAR

La polémica sobre el presunto hundimiento de barcos ecuatorianos por guardacostas estadounidenses, en aguas territoriales de nuestro país, ha suscitado pronunciamientos de diversa índole. Como se trata de un tema que tiene que ver con el nuevo derecho del mar, estimo oportuno, sobre todo para quienes no están familiarizados con esta materia, trazar un escueto esbozo de la normativa reguladora de las relaciones vinculantes entre los miembros de la comunidad internacional en ese orden jurídico.

El vigente derecho del mar proviene de una gran tarea de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional marítimo, que se emprendió hace varias décadas y se concretó en importantes instrumentos de valor universal.

Hasta la convocatoria de la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1958), el derecho internacional marítimo se cimentaba en bases consuetudinarias, que favorecían los intereses de las grandes potencias. El tema más controvertido fue siempre el de la determinación de la anchura del mar territorial, por el conflicto de intereses con las potencias marítimas, a las que convenía un mar territorial de tres millas. La fijación de la extensión de ese espacio marítimo fue tradicionalmente facultad privativa del Estado ribereño, pero la costumbre internacional consagró las tres millas como norma general.

Las tres Conferencias de la ONU sobre el Derecho del Mar (1958, 1960, 1973 a 1982) introdujeron profundos cambios en la materia, en el marco de un largo e intenso proceso de negociaciones, hasta culminar con la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el 10 de diciembre de 1982, en Montego Bay (Jamaica).

La Convención fue el resultado de una dilatada y compleja conciliación de dos posiciones contrapuestas: la sustentada por las potencias marítimas e industriales, que apuntaban a la máxima restricción de los derechos de los Estados ribereños, y la defendida por los países menos desarrollados, que postulaban la consolidación de los derechos de los Estados ribereños en los espacios marítimos y oceánicos adyacentes, dando paso a la tesis de las 200 millas (12 millas de mar terri-

torial y una zona adyacente de 188 millas marinas, donde el Estado ribereño ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción para los efectos de exploración y explotación de los recursos localizados en las aguas, el lecho y el subsuelo). En la Convención el espacio de 188 millas se denomina Zona Económica Exclusiva, a partir de la cual se extiende el alta mar.

La Convención de Jamaica es, pues, el instrumento fundamental del nuevo derecho del mar y tiene valor universal. Ni Ecuador ni Estados Unidos son Estados partes en la Convención. Ecuador se rige por la disposición del artículo 633 del Código Civil, que contempla un mar territorial de 200 millas, pero tendrá que adherir a la Convención, para no aislarse en la comunidad de naciones, más todavía si se considera que nuestro país jugó un papel muy destacado en las citadas conferencias de la ONU, liderando el grupo de Estados “territorialistas”. Lo que importa conocer es que todos los Estados tienen la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado ribereño y la plenitud de los atributos de su jurisdicción. No hay Estado que, a la luz del Derecho Internacional, pueda arrogarse el rol de gendarme universal. Los barcos se someten a la ley del Estado cuyo pabellón enarbolan.

(24 de Julio de 2004)

REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad es uno de los órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene la responsabilidad primordial de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. De acuerdo con la Carta, los Estados Miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo, que tienen carácter obligatorio. Cuando se fundó la ONU (1945), con 51 Estados Miembros, el Consejo de Seguridad se componía de 5 miembros permanentes y 6 no permanentes. En 1963 el número se amplió a 15 y ahora se proclama la necesidad de adecuarlo a la realidad actual, pues son 192 los Estados Miembros de la organización mundial.

Desde hace varios lustros se habla de la conveniencia de introducir reformas en el sistema de las Naciones Unidas. En el caso que nos ocupa, la Asamblea General, mediante resolución de diciembre de 1993, constituyó el “Grupo de Trabajo de composición abierta sobre la

cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del aumento del número de sus miembros y otros asuntos relativos al Consejo de Seguridad”, que desde entonces delibera intensamente en el marco de sus competencias. Naturalmente, por razones obvias, hubo oposición a esta corriente de pensamiento por parte de los cinco miembros permanentes, que ejercen el voto privilegiado del veto. Pero la tendencia de reformas cuenta con el aval de la Declaración del Milenio, adoptada en setiembre de 2000 por los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la ONU; del Movimiento de los Países No Alineados; y de las Reuniones Cumbres del Grupo de Río.

El Grupo de Trabajo ha centrado sus debates en torno a los siguientes seis temas: 1) Número total de miembros de un Consejo de Seguridad ampliado; 2) Cuestión de la representación regional; 3) Criterios para la incorporación como miembro; 4) Relaciones entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad; 5) Rendición de cuentas; y, 6) La utilización del veto. Nuestra Cancillería organizó en días pasados una reunión informativa sobre la marcha de este proceso.

La sustancia de la reforma del Consejo radica fundamentalmente en la composición numérica y la búsqueda de mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio de sus competencias. Pero el origen prístino del tema deriva de la concentración de poder que implica el ejercicio del veto, privilegio que la Carta reconoce implícitamente a los cinco miembros permanentes: China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, que fueron las potencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial. Para el tratamiento de las cuestiones de procedimiento, tienen igual valor los votos de todos los miembros del Consejo, pero en “todas las demás cuestiones”, o sea en las importantes, lo que cuenta es la unanimidad de los cinco miembros permanentes: basta el voto negativo de uno de ellos (veto) para invalidar el acuerdo afirmativo de los demás.

El proyecto de reforma contempla un incremento de los miembros de ambas categorías y se han propuesto varias alternativas. Se discute si a los nuevos miembros permanentes se les concedería también el privilegio del veto, que se lo considera anacrónico, discriminatorio y, por cierto, contrario a la igualdad soberana de los Estados. Se habla en este caso de una elección de carácter regional, para mejorar la representatividad (los candidatos son Alemania, Japón, Brasil e India). Sea de

ello lo que fuere, el hecho cierto es que la comunidad internacional constituye una estructura de poder, a pesar del desarrollo progresivo del derecho internacional.

Nos parece que conviene una reforma estructural del sistema de las Naciones Unidas, que equilibre y mejore las relaciones del Consejo de Seguridad con la Asamblea General; que enriquezca los contenidos del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; que estimule a los instrumentos y mecanismos orientados al desarrollo integral de los pueblos; que fortalezca el multilateralismo; que abra cauces a una mundialización positiva para todos los habitantes del planeta, con equidad en la distribución de costos y beneficios.

(4 de Noviembre de 2004)

ARREGLO DE CONTROVERSIAS

La obligación de arreglo pacífico de controversias es uno de los logros sustantivos del derecho internacional contemporáneo, como culminación de un proceso iniciado hace algo de más de un siglo.

En efecto, la Carta de la ONU dispone en su art. 2 que “los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia”, a la vez que, “en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.

Igualmente la importante Resolución 2625, aprobada por la Asamblea General en octubre de 1970 con motivo de los 25 años de vida institucional, desarrolla el mismo enfoque conceptual en apoyo del arreglo pacífico de las controversias internacionales, que se basará en la igualdad soberana de los estados y se hará conforme al principio de libre elección de los medios. Importa señalar asimismo que la carta de la Organización de Estados Americanos contempla en su capítulo V disposiciones atinentes a esta materia.

La trayectoria histórica de este tema relevante se inició con las convenciones de La Haya de 1899 y 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales; lo recogió también el Pacto de la Sociedad

de las Naciones, al término de la Primera Guerra Mundial; y fue incorporado al acta general para el arreglo pacífico de las diferencias internacionales de 26 de septiembre de 1928, conectada con el Pacto Briand-Kellog o tratado general de renuncia a la guerra, suscrito en París en agosto de 1928. Sin embargo, la obligación de carácter general para los estados solo se consagró en la Carta de las Naciones Unidas, en 1945.

Los medios de solución pacífica de controversias internacionales son de dos clases: los diplomáticos o políticos y los jurídicos. Los medios diplomáticos o políticos son: la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Son medios jurídicos: el arbitraje y la solución judicial.

La negociación directa entre las partes es el procedimiento más común y dinámico pues suele conducir generalmente a un entendimiento rápido y estable. Se estima oportuno acudir a otras instancias solamente cuando se ha agotado la vía diplomática.

El arbitraje tiende a la solución de las cuestiones entre estados por jueces de su elección y sobre la base del respeto del derecho. En la solución judicial interviene un órgano internacional permanente de justicia.

No hay que olvidar, pues, que antes de la fundación de la ONU el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales era un recurso lícito de los estados, como atributo de su soberanía, para el arreglo de sus controversias, y que la guerra era una tradición instalada en la memoria histórica de los pueblos.

La ONU ha privilegiado el valor de la paz y la seguridad internacionales, en su Carta constitutiva y en su acción práctica. En la década de los noventa, el entonces secretario general Boutros-Gali, planteó la conveniencia de instrumentar una “diplomacia preventiva” para detener los potenciales conflictos y no solo intervenir cuando ellos se producen.

Esta iniciativa emblemática fue desatendida unilateralmente por la administración Bush en el caso de Iraq, que tomó sus propias decisiones al margen de las aprobadas por el Consejo de Seguridad. Estados Unidos practica actualmente la doctrina de la “guerra preventiva”.

(16 de Abril de 2005)

ECUADOR Y LA OEA

Por resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos e invitación del Gobierno del Ecuador nos visita una misión especial de dicho organismo continental para tomar conocimiento directo de los aspectos relevantes de la crisis política que concluyó con el derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez Borbúa. El informe que presente el Secretario General interino le permitirá al Consejo Permanente realizar una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, adoptar decisiones dirigidas “a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, que es una de las prioridades de la OEA.

El interés de la organización regional en el tema deriva del valor relevante que ella asigna en su actual agenda a la democracia representativa y a la promoción y defensa de los derechos humanos, desde que superó la sombría etapa de las dictaduras para convertirse en una asociación de estados democráticos que soberanamente salen por los fueros del Estado de Derecho. La Carta Democrática Interamericana (2001) es el instrumento que garantiza la política institucional de la OEA y regula las relaciones de los estados miembros en este ámbito.

Como se han vertido opiniones sobre un presunto reconocimiento del Gobierno del presidente Alfredo Palacio por la OEA puede ser útil una precisión sobre la materia. En el caso del Ecuador no procede el reconocimiento foráneo porque se trata de la sucesión constitucional en la persona del Vicepresidente, por acción espontánea y soberana del pueblo de Quito, secundada por otras ciudades del país y formalizada por el Congreso Nacional mediante la declaratoria de abandono del cargo, a la luz del artículo 167, numeral 6, de la Carta Magna. Por lo demás, en rigor jurídico, no existe la figura del reconocimiento colectivo sino individual, ya que se trata de un acto soberano unilateral por el cual un Estado puede o no reconocer a un gobierno como representante del Estado respectivo.

Importa recordar que en el derecho de gentes, al menos desde el punto de vista académico, hay dos doctrinas en materia de reconocimiento de gobiernos, cuando se produce la ruptura del Estado de Derecho: la doctrina Tobar y la doctrina Estrada. El canciller del Ecuador, Dr. Carlos R. Tobar, emitió una declaración, en 1907, por la cual propugnaba el “no reconocimiento de los gobiernos de hecho surgidos de

revoluciones contra la Constitución”, hasta que demuestren poseer el apoyo de sus pueblos. El canciller de México, Genaro Estrada, cuestionó en 1930 la doctrina del reconocimiento de gobiernos, porque a su juicio daría paso a intervenciones foráneas, y se limitó a mantener o retirar sus agentes diplomáticos en caso de un cambio político emergente, en una suerte de reconocimiento tácito. Es ésta la práctica más usual en la comunidad internacional.

En la reciente sesión pública del Consejo Permanente de la OEA se puso énfasis en la evaluación del abandono del cargo presidencial hecha por el Congreso Nacional para elaborar la apreciación colectiva de la situación. Esa posición aparecía asumida fuera de contexto, porque la quiebra del Estado de Derecho surgió realmente el 8 de diciembre último con la intervención en el Poder Judicial, que abrió cauces a la alteración de la institucionalidad democrática. Esa delicada coyuntura ameritaba ya la atención de la OEA.

(2 de Mayo de 2005)

PROBLEMA PALESTINO-ISRAELÍ

Bien se conoce que el problema palestino-israelí está en el núcleo de las relaciones entre las potencias occidentales y el mundo árabe, desde que el pueblo judío, tras siglos de dispersión por el planeta a la luz de su histórica diáspora, concretó en realidad su expectativa de un hogar nacional en Palestina por la acción del movimiento sionista, fundado en 1896. Importa recordar que el líder Chaim Wizmann planteó esa aspiración al gobierno inglés poco antes de la Primera Guerra Mundial, logrando su respaldo a través de la conocida Declaración Balfour (1917).

Gran Bretaña, que a la sazón administraba el mandato de Palestina conferido por la Sociedad de las Naciones, propuso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en abril de 1947, establecer un Comité Especial “para estudiar la cuestión de Palestina”. Allí se resolvió, en noviembre de ese mismo año, por voto mayoritario y con oposición árabe, la partición de aquel territorio en dos estados, uno judío y otro palestino, con un régimen internacional para Jerusalén. Ecuador respaldó con su voto la decisión de la Asamblea General de la ONU. Se había anunciado el retiro de la potencia colonial con fecha 15 de mayo de

1948, pero la víspera se proclamó la creación oficial del Estado de Israel por el Consejo Nacional Judío. Al día siguiente las tropas árabes cruzaron las fronteras de Palestina e iniciaron una escalada de violencia que perdura hasta nuestros días, como expresión de desconocimiento de la legitimidad de la existencia del naciente Estado.

El clima de violenta confrontación desembocó en varios conflictos bélicos, que abrieron cauces a la expansión territorial de Israel. La Guerra de los Seis Días (1967), por ejemplo, dejó bajo administración israelita la Franja de Gaza y la Margen Occidental. Actualmente se despliegan esfuerzos encaminados a crear condiciones para una convivencia pacífica con la Autoridad Palestina bajo el nuevo liderazgo de Mahmud Abbas, en el marco de un dilatado proceso político de negociaciones intermitentes. Para ello Israel está impulsando su Plan de Desconexión, que fue respaldado por Egipto, Jordania y la Autoridad Palestina en la reunión cumbre de febrero del 2005. Dicho Plan podría contribuir a la reanudación de las conversaciones de paz contempladas en la Hoja de Ruta, patrocinada por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas.

La evacuación prevista de los territorios ocupados por los colonos israelíes, que se está ejecutando gradualmente, no ha dejado de suscitar problemas de resistencia interna, pero se espera que el desarrollo de los acontecimientos conduzca a resultados positivos, en función de la cuidadosa planificación que se ha diseñado con miras a dejar atrás más de un siglo de violencia y terrorismo.

La comunidad internacional sigue con interés y preocupación la marcha de este proceso, porque no hay que olvidar que el problema palestino-israelí ha sido sin duda uno de los más complejos y sensibles en el curso del siglo XX, con incidencia en la paz mundial. Sería deseable, por tanto, que se consolidasen estos esfuerzos pacificadores, que por lo demás contemplan la creación del Estado de Palestina, en cumplimiento de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

(29 de Julio de 2005)

APUNTES SOBRE LA DIPLOMACIA

Los miembros de la comunidad internacional se vinculan entre sí a través de las relaciones diplomáticas y de las relaciones consulares,

siendo estas últimas las más antiguas en perspectiva histórica, ya que se establecieron como medio de protección del comercio. Ambas figuraron entre las materias seleccionadas por la ONU para su codificación y desarrollo progresivo, hasta culminar con la suscripción de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas (Viena, 1961) y la Convención de Viena sobre relaciones consulares (1963).

El proceso de desarrollo de la diplomacia ha sido extenso y lento. Conviene recordar que la mayoría de pueblos antiguos y medievales acreditaban y recibían embajadores, aunque de modo ocasional o intermitente, pues las misiones permanentes sólo surgieron en el siglo XV y el servicio diplomático, con especificación de categorías y como parte del servicio público, apenas se implantó en el siglo XIX, a raíz de la celebración del Congreso de Viena de 1815, tras el colapso napoleónico. En apretada síntesis diríamos que hay dos grandes períodos en la diplomacia: el de las misiones temporales (hasta el siglo XIV) y el de las misiones permanentes, que se inició en el siglo XV, con las que acreditaron la Santa Sede y las repúblicas italianas del renacimiento (Venecia, Florencia, Génova). La diplomacia moderna nació, pues, en Italia.

La citada Convención de Viena, en términos globales, regula las siguientes cuestiones: las relaciones diplomáticas en general; los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y de sus miembros, incluidas sus familias; el comportamiento de la misión y de sus integrantes; la terminación de funciones de los agentes diplomáticos, y la aplicación de dicho instrumento multilateral. La Convención parte de la premisa de que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre estados y el envío de misiones permanentes se realiza por consentimiento mutuo entre ellos.

Según el art. 4 de la Convención, el Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor ha obtenido el asentimiento de ese Estado, el cual no está obligado a expresar los motivos de su negativa a otorgarlo, si se presentare ese caso. La práctica diplomática determina —ya que no existe norma escrita al respecto— que si no hay una respuesta positiva en el lapso de 30 días, por parte del Estado receptor, su silencio ha de interpretarse como una negativa tácita. De ello se concluye que resultan inconvenientes los anuncios prematuros en esta materia, sin la conclusión de dicho procedimiento. El Estado acreditante puede nombrar libremente al personal de la misión y notificarlo al respectivo

Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en el caso de los agregados militares, navales o aéreos, el Estado receptor podrá exigir que se le sometan de antemano sus nombres, para su aprobación.

Con el propósito de facilitar y garantizar el ejercicio de sus funciones, la Convención reconoce varios privilegios e inmunidades a las misiones y a los agentes diplomáticos, tales como la utilización de símbolos nacionales, la inviolabilidad de la integridad personal, de los locales y archivos, exención de impuestos, etc. En ese contexto se destacan dos elementos relevantes: la inviolabilidad y la inmunidad de jurisdicción, en el marco de un sistema equilibrado de derechos del Estado receptor y del Estado acreditante, que tienen obviamente sus límites.

La diplomacia contemporánea es multidisciplinaria y demanda de sus agentes una adecuada formación profesional, que trasciende los compromisos de la política contingente.

(12 de Septiembre de 2005)